CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

Sesión del Pleno

celebrada el lunes, 9 de noviembre de 2002

ORDEN DEL DÍA:

Previo

— Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del Excelentísimo señor Senador don Carles Enric Florensa i Tomàs. (Número de expediente 500/000278).

Primero

Actas:

— Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 19, 20 y 21 de noviembre de 2002.

Segundo

— Elección de Secretario Cuarto de la Cámara. (Número de expediente 520/000001).

Tercero

— Declaración institucional sobre Guinea Ecuatorial con motivo de la visita del Relator especial para la Libertad de Expresión y Opinión. (Número de expediente 630/000025).

Cuarto

Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Propositiones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

— De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 94, de fecha 7 de diciembre de 2002). (Número de expediente S. 621/000094). (Número de expediente C. D. 121/000109).

— De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 95, de fecha 10 de diciembre de 2002). (Número de expediente S. 621/000095). (Número de expediente C. D. 121/000112).

El debate continúa en el Diario de Sesiones número 114, del martes, 10 de diciembre de 2002.

SUMARIO

	Página	Página
<i>Se abre la sesión a las once horas y cinco minutos.</i>		
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del Excelentísimo señor Senador don Carles Enric Florensa i Tomàs	6831	De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social
<i>El señor Florensa i Tomàs promete acatar la Constitución.</i>		6832
ACTAS	6831	<i>El señor Contín Pellicer, Vicepresidente Primero de la Comisión de Presupuestos, presenta el dictamen en relación con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.</i>
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 19, 20 y 21 de noviembre de 2002	6831	<i>El señor Murria Climent, Vicepresidente Primero de la Comisión de Economía, Comercio y Turismo, presenta el dictamen en relación con el proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.</i>
<i>Se aprueban las actas.</i>		<i>El señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero) presenta, en nombre del Gobierno, ambos proyectos de ley.</i>
Elección de Secretario Cuarto de la Cámara ...	6831	<i>Se inicia el debate de las propuestas de veto.</i>
<i>Queda elegido Secretario Cuarto del Senado don Carles Enric Florensa i Tomàs.</i>		<i>El señor Bru Parra defiende las propuestas de veto del Grupo Socialista a ambos proyectos de ley. El señor Caneda Morales consume un turno en contra. A continuación toma la palabra el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). El señor Bru Parra vuelve a intervenir en virtud del artículo 87. Asimismo lo hace el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). De la misma manera, el señor Caneda Morales interviene de nuevo en virtud del artículo 87.</i>
Declaración institucional sobre Guinea Ecuatorial con motivo de la visita del Relator especial para la Libertad de Expresión y Opinión	6831	<i>Se suspende la sesión a las catorce horas y cinco minutos.</i>
<i>El señor Presidente da lectura a la declaración institucional, que se aprueba por unanimidad.</i>		<i>Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.</i>
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS	6832	<i>La señora Aroz Ibáñez defiende las propuestas de veto del Grupo Entesa Catalana de Progrés a ambos proyectos de ley. El señor Albistur Marin defiende la propuesta de veto del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. El señor Quintana González y la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defienden sus propuestas de veto a ambos proyectos de ley. El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende sus propuestas de veto a ambos proyectos de ley, presentadas también originariamente por el señor Cabrero Palomares, del mismo grupo parlamentario. El señor Caneda Morales consume un turno en contra. Nuevamente</i>
De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003	6832	

interviene el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Quintana González, por el Grupo Mixto. Le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). Continuando con el turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; el señor Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bru Parra, por el Grupo Socialista, y Caneda Morales, por el Grupo Popular.

Se procede a votar.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Socialista al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, por 77 votos a favor y 140 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Socialista al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por 76 votos a favor, 139 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Entesa Catalana de Progrés al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, por 77 votos a favor, 139 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Entesa Catalana de Progrés al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por 77 y 140 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, por 77 votos a favor, y 140 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señor Quintana González, al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, por 77 votos a favor y 140 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señora De Boneta y Piedra, al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, por 77 votos a favor y 139 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señor Quintana González, al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por 77 votos a favor y 140 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señora De Boneta y Piedra, al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por 78 votos a favor y 139 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, por 77 votos a favor y 140 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por 77 votos a favor y 140 en contra.

Comienza el debate del articulado.

Título I, artículos 1 a 12. Anexos I y II.

El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 202 a 209 y da por defendidas las números 3 y 4, presentadas por el señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario. El señor Aleu i Jornet defiende las enmiendas números 874, 875 y 928 a 930, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 1690 a 1695, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Mesa Ciriza defiende las enmiendas números 1263 y 1313 a 1315, del Grupo Socialista. El señor Azuara Carod consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Mesa Ciriza, por el Grupo Socialista, y Azuara Carod, por el Grupo Popular.

Título II. Capítulo I. Artículos 13 y 14. Anexos IV, V y VI.

El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, da por defendida la enmienda número 5, originariamente presentada por el señor Quintana González. El señor Barahona Hortelano consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.

Título II. Capítulos II y III. Artículos 15 a 17 y 18.

No han sido objeto de enmiendas.

Título III. Artículos 19 a 35.

El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 210 a 227 y da por defendidas las números 6 a 34, del señor Quintana González, y 654, de la señora De Boneta y Piedra, del mismo grupo parlamentario. El señor Aurrekoetxea Bergara defiende las enmiendas números 740 a 743, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Se dan por defendidas las enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés números 876 a 882, así la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 1186, del Grupo Popular. El señor Cambra i Sánchez defiende la enmienda número 1670, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Arjona Santana defiende las enmiendas del Grupo Socialista números 1264 a 1270, así como la vuelta al

texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 1186, del Grupo Popular. La señora Primo Albert consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y Arjona Santana, por el Grupo Socialista, así como la señora Primo Albert, por el Grupo Popular. El señor Aleu i Jornet y la señora Primo Albert intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.

Título IV. Artículos 36 a 45. Título VIII. Artículos 81 y 82. Sección 07. Clases Pasivas.

El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 228 a 232 y da por defendidas las números 35 a 38 y 42, del señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario. Se dan por defendidas las enmiendas números 883 a 888, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 1673 a 1675, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Romero Calero defiende las enmiendas números 1271 a 1276, del Grupo Socialista. La señora Primo Albert da por defendida la enmienda número 1201, del Grupo Popular. Las señoras Primo Albert y Do Campo Piñeiro consumen un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.

Título V. Artículos 46 a 56. Anexo III. Sección 06. Deuda Pública.

El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 233 a 235. Se dan por defendidas las enmiendas números 889 y 890, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Mesa Ciriza defiende las enmiendas números 1277 y 1278, del Grupo Socialista. El señor Soto García consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.

Título VI. Artículos 57 a 63.

El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 236 y 237. Se da por defendida la enmienda número 891, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cambra i Sánchez defiende la enmienda número 1676, del Grupo Socialista. El señor Sánchez Sánchez-Seco consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.

Título VII. Artículos 64 a 80. Sección 32. Entes Territoriales. Sección 33. Fondos de Compensación Interterritorial.

El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 238 a 247 y 627 a 631 y da por defendidas las números 39 a 41, del señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario. Se dan por defendidas las enmiendas números 892 a 906 y 1176 a 1178, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números

1677 a 1681 y 1744 a 1746, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Hurtado García defiende las enmiendas números 1279 a 1294 y 1658 a 1662, del Grupo Socialista. Los señores Gil-Ortega Rincón y Sánchez Cuadrado consumen un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.

Disposiciones Adicionales primera a vigesimasexta.

El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 248, 249, 251 a 182 y 288 y da por defendidas las números 43 y 44, del señor Quintana González, y 655 a 658, de la señora De Boneta y Piedra, del mismo grupo parlamentario. El señor Aurrekoetxea Bergara defiende las enmiendas números 744 y 745, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Se dan por defendidas las enmiendas números 909 a 927 y 932, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 1682 a 1688, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor González Príncipe defiende las enmiendas números 1295 a 1311, del Grupo Socialista. El señor Vallines Díaz defiende las enmiendas números 1202 a 1206, del Grupo Popular, al tiempo que consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.

Disposiciones transitorias primera a sexta.

El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 250 y 183 a 287. El señor Mesa Ciriza da por defendida la enmienda número 1312, del Grupo Socialista. El señor Vallines Díaz consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.

Propuesta de introducción de una disposición final nueva.

El señor Cambra i Sánchez defiende la enmienda número 1689, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Vallines Díaz consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.

Anexos VII y VIII.

El señor Mesa Ciriza defiende las enmiendas números 1316 y 1317, del Grupo Socialista. El señor Vallines Díaz consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.

Anexo IX.

El señor Cambra i Sánchez defiende la enmienda número 1696, el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Vallines Díaz consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.

Se suspende la sesión a las veintitrés horas y treinta y cinco minutos.

Se abre la sesión a las once horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

— JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR SENADOR DON CARLES ENRIC FLORENÇA I TOMÀS (500/000278).

El señor PRESIDENTE: Asunto previo al orden del día. Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución del Excelentísimo señor don Carles Enric Florença i Tomàs. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor FLORENÇA I TOMÀS: Sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Carles Enric Florença i Tomàs ha adquirido la condición plena de senador. *(Aplausos.)*

ACTAS:

— LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2002.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día.

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 19, 20 y 21 de noviembre.

¿Alguna observación? ¿Se pueden aprobar por asentimiento? *(Asentimiento.)*

Quedan aprobadas.

— ELECCIÓN DE SECRETARIO CUARTO DE LA CÁMARA (520/000001).

El señor PRESIDENTE: Elección para cubrir el cargo de secretario cuarto de la Cámara.

Como consecuencia del fallecimiento del senador excelentísimo señor don Jaume Cardona i Vila ha quedado vacante el cargo de secretario cuarto de la Mesa. Para cubrir dicha vacante el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado la candidatura del excelentísimo señor don Carles Enric Florença i Tomàs. El artículo 6 del Reglamento del Senado prevé que la votación para la elección de este cargo se realizará por papeletas. En ellas se procederá a escribir un solo nombre. De la forma reglamentariamente establecida se llamará a los senadores a votación mediante el procedimiento reglado de la elección por papeleta nominal.

De forma previa se ha sorteado el nombre del senador por el que ha de empezar la votación, que ha correspondido al señor Arias Cañete.

Para realizar ordenadamente la votación ruego a sus señorías que se acerquen a votar por la parte izquierda de la tribuna de oradores, faciliten su nombre a los letrados, depositen su papeleta en la urna, y salgan por la parte derecha de la tribuna.

Comienza la votación.

(Por la señora secretaria primera, Martín Mendizábal; el señor secretario segundo, Caneda Morales, y la señora secretaria tercera, Nóvoa Carcacia, se procede al llamamiento de las señoras y los señores senadores a partir del citado.)

Terminado el llamamiento, dijo

El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar el recuento, pueden abrir las puertas, por favor, ya que existen bastantes senadores fuera del hemiciclo. *(Pausa.)*

Ruego a los señores senadores que se han incorporado al hemiciclo pasen a votar, dando su nombre a los letrados. *(Pausa.)*

¿Queda algún senador por votar? *(Pausa.)*

Vamos a proceder al escrutinio de las papeletas.

Terminado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Efectuado el escrutinio, el resultado es el siguiente: a favor de don Carles Enric Florença i Tomàs 131 votos; votos en blanco, ninguno; votos nulos, ninguno.

En consecuencia, queda elegido secretario cuarto del Senado el excelentísimo señor don Carles Enric Florença i Tomàs, a quien ruego pase a ocupar su puesto en la Mesa. *(Fuertes y prolongados aplausos.)*

Muchas gracias. En nombre de la Cámara felicito a don Carles Enric Florença i Tomàs.

— DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE GUINEA ECUATORIAL CON MOTIVO DE LA VISITA DEL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN (630/000025).

El señor PRESIDENTE: Antes de entrar en el punto segundo del orden del día, la Presidencia propone al Pleno una declaración institucional sobre Guinea Ecuatorial.

Con motivo de la visita a Guinea Ecuatorial del relator especial para la libertad de expresión y opinión enviado por el Secretario General de las Naciones Unidas, el Senado de España manifiesta su apoyo a dicha iniciativa, que resulta especialmente adecuada en el tiempo por coincidir con la campaña electoral previa a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 15 de diciembre.

Asimismo, reitera su solicitud al Gobierno de Guinea Ecuatorial para una pronta liberación del Secretario General del CPDS, don Plácido Micó, e insta al relator especial a que se interese por las circunstancias en que se encuentran los condenados en el juicio celebrado en Malabo la pasada primavera.

El Senado considera que la próxima consulta electoral supone una oportunidad para el futuro democrático de Guinea Ecuatorial, que sería desaprovechada si no se desarrolla con un mínimo nivel de respeto de los derechos humanos.

¿Procede aprobar esta declaración institucional por asentimiento? (*Asentimiento.*)

Queda aprobada. Muchas gracias. (*Aplausos.*)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2003 (S. 621/000094) (C. D.121/000109).

— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (S. 621/000095) (C. D. 121/000112).

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003 y de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

La tramitación establece la presentación del dictamen, en primer lugar, del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003, que será realizada por el señor Contín, quien tiene la palabra.

El señor CONTÍN PELLICER: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, tengo el honor de presentar, en nombre de la Comisión de Presupuestos, el dictamen correspondiente al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

Dicho proyecto de ley tuvo entrada en la Cámara y fue publicado el día 19 de noviembre de 2002 y trasladado, de conformidad con el artículo 104 del Reglamento, a la Comisión de Presupuestos. El plazo de presentación de enmiendas quedó fijado hasta el 25 de noviembre.

Se presentaron seis propuestas de veto: del Grupo Parlamentario Socialista; del senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto; de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, también del Grupo Parlamentario Mixto; de la senadora De Boneta y Piedra, también del Grupo Parlamentario Mixto; del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Asimismo, se formularon a los distintos títulos, artículos y secciones 1.746 enmiendas.

El día 28 de noviembre la ponencia designada, integrada por los senadores don Francisco Xabier Albistur Marin, don Ramón Aleu i Jornet, don Segundo Bru Parra, don Damián Caneda Morales, don Sixte Cambra i Sánchez, don Manuel Cámara Fernández, don Fidel Mesa Ciriza, doña Claudina Morales Rodríguez y don Pedro Soto García, emitió su informe, incorporando al texto remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas 1181 a 1262, excepto las números 1201 a 1206, del Grupo Parlamentario Popular, así como algunas correcciones de tipo técnico.

El día 3 de diciembre se reunió la Comisión y dictaminó el citado proyecto de ley, introduciendo dos modificaciones a los artículos 20 y 33.

El dictamen se ha publicado con fecha 7 de diciembre.

En el Pleno se debatirán las enmiendas mantenidas y los votos particulares presentados.

Finalmente, quiero agradecer a los servicios de la Cámara y, particularmente, a los letrados de la Comisión, Moreno Ara y Cuenca Peña, su asistencia en la compleja tramitación de este proyecto de ley.

Esto es todo cuanto tengo el honor de informar a esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Presentación del dictamen del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el representante de la Comisión, senador Murria.

El señor MURRIA CLIMENT: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, buenos días.

Tengo el honor de presentar, en nombre de la Comisión de Economía, Comercio y Turismo, el dictamen correspondiente al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

El proyecto de ley, que fue remitido por el Congreso de los Diputados el día 19 de noviembre del año 2002, fue trasladado —conforme al Reglamento— a la Comisión de Economía, Comercio y Turismo.

El plazo de presentación de enmiendas se cerró el 25 de noviembre de este año, y se presentaron 570 enmiendas y cinco vetos.

La Comisión se reunió para designar la ponencia encargada de informar el proyecto de ley el pasado 21 de noviembre. La ponencia, a quien quiero personalmente agradecer la labor realizada, se reunió el día 28 de noviembre y emitió un informe incorporando modificaciones al texto remitido. El informe de la ponencia fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 4 de diciembre de 2002.

La Comisión, asimismo, se reunió para dictaminar el proyecto de ley el pasado 4 de diciembre, incorporando modificaciones al texto remitido por el Congreso de los Diputados. El dictamen fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 9 de diciembre del presente año.

Asimismo, quiero agradecer a los servicios de la Cámara y, particularmente, al letrado de la Comisión, su asistencia en la tramitación del presente proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, es un honor volver un año más a esta Cámara a presentar y defender el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Con estos presupuestos queremos añadir un año más de crecimiento a uno de los períodos más largos de prosperidad de la España democrática. El equilibrio presupuestario, la bajada de los impuestos y un sobresaliente esfuerzo inversor son los tres instrumentos de estos presupuestos para situar a la economía española en la mejor posición para beneficiarse de la próxima recuperación de los mercados mundiales.

Un año más, los presupuestos para el año 2003 respetan el equilibrio presupuestario. La estabilidad de las cuentas públicas es el principal instrumento de una política económica que está consiguiendo para España un crecimiento superior a la media europea, incluso en este momento de dificultades de la economía internacional.

Gracias a la consolidación presupuestaria de los años pasados, la economía española puede afrontar también situaciones inesperadas, como la derivada del accidente del «Prestige» y ayudar a los damnificados. Estos días, los pescadores gallegos comenzarán a recibir las primeras ayudas económicas a cargo de los presupuestos del Estado.

Los Presupuestos Generales del Estado están para responder a las necesidades de la sociedad y, cuando están equilibrados, tienen la flexibilidad necesaria para salir al paso de situaciones imprevistas, como la catástrofe ecológica y económica que están sufriendo los ciudadanos de Galicia. Galicia cuenta con la solidaridad de toda España, y esta solidaridad se expresa también en las decisiones, en los contenidos y en los enfoques de los presupuestos del Estado.

España está cumpliendo con creces sus compromisos europeos de estabilidad presupuestaria. Por eso, ahora estamos cargados de argumentos para reclamar la contribución de los fondos europeos, de todos los fondos europeos, en la recuperación de las costas gallegas y cantábricas.

Señorías, en un difícil contexto económico internacional, la economía española está siendo capaz de mantener tasas de crecimiento que se encuentran entre las más altas del mundo desarrollado. Nuestro país, en concreto, cerrará el año 2002 con un crecimiento económico que se situará ligeramente por encima del dos por ciento; y esto significa, ni más ni menos, que estamos creciendo más de un punto porcentual por encima del promedio comunitario, lo que nos permite asentar e incluso acelerar el proceso de convergencia real con los países de nuestro entorno.

Pero es que, además, el crecimiento económico español sigue siendo intensivo en empleo. La última Encuesta de Población Activa referente al tercer trimestre de este año 2002, nos muestra cómo en los últimos doce meses se han creado en nuestro país 285.000 nuevos empleos. Esto im-

plica un ritmo de creación de puestos de trabajo del 1,8 por ciento, cifra impresionante para una economía como la española, a la que siempre se le achacaba su incapacidad para crear empleo con cifras de crecimiento económico inferiores al tres por ciento. Y lo que es aún más importante, el empleo que se crea en nuestro país es cada vez de mayor calidad, y que está beneficiando especialmente a los colectivos que tradicionalmente han tenido más dificultades para integrarse en el mercado de trabajo. Permítanme respaldar esta afirmación con dos cifras bastante elocuentes. La primera se refiere a la tasa de temporalidad de nuestra economía, que se sitúa hoy en el 31 por ciento, cuando en 1995 ascendía al 34,5 por ciento. La segunda, la creación de empleo femenino, que ha sido cuatro veces superior al masculino en los últimos doce meses.

La economía española, señorías, está siendo capaz de sortear una difícil situación económica internacional de una forma positiva que ya querrían para sí muchos de nuestros socios europeos, y que contrasta con lo que ha venido siendo la evolución tradicional del ciclo económico en España. En efecto, los españoles hemos estado demasiado acostumbrados a que los períodos de incertidumbre económica en el mundo se saldaran en nuestro país con fuertes recesiones y procesos muy intensos de destrucción de empleo. Hoy esto, sin embargo, ya no es así, y no lo es porque nuestra economía y nuestro tejido productivo se encuentran en la actualidad en mejor situación que nunca para afrontar momentos de dificultad económica.

Pues bien, señorías, esta mejor disposición de la economía española no es en absoluto casual; antes al contrario, es la consecuencia directa del proceso de reforma económica emprendido por el Gobierno del Partido Popular en los últimos años. Un proceso de reforma que se ha fundamentado en dos pilares esenciales. El primero de ellos ha sido, sin duda, la decidida apuesta de este Gobierno por ampliar el campo de juego de la iniciativa privada como motor esencial de crecimiento económico y creación de empleo, apuesta que ha traído consigo una relativa disminución del peso del sector público en nuestra economía. En el año 1995 el gasto público representaba el 45 por ciento de nuestro producto interior bruto; hoy por el contrario, esta cifra está ya por debajo del 40, por ciento. Por otra parte, el segundo pilar sobre el que se asienta la actual fortaleza de la economía española viene siendo el diseño de un marco de política económica tendente a garantizar un entorno de estabilidad para nuestro país. El ejemplo más palpable de esta nueva forma de hacer política económica es, sin duda, la apuesta por la estabilidad en el ámbito fiscal, encarnada en la aprobación de las leyes de estabilidad presupuestaria.

Permítanme que me refiera brevemente a los dos elementos fundamentales de cambio de nuestra economía a los que acabo de aludir. El primero decíamos que era el mayor campo de acción que se ha ido creando en favor de la iniciativa privada para que ésta pueda ser la protagonista fundamental del progreso económico en España. Pues bien, la mejor prueba de esta apuesta del Gobierno es, sin duda, el gran salto dado por nuestra economía en la liberalización y apertura a la competencia de los mercados de

productos y factores. Esta decidida reforma estructural ha aumentado considerablemente tanto el potencial de crecimiento de la economía española, como su capacidad para hacer frente a las perturbaciones externas de un modo eficiente. En este mismo sentido, el refuerzo de la política de defensa de la competencia que se ha venido llevando a cabo por el Gobierno del Partido Popular es esencial si queremos estar seguros de que los beneficios de la flexibilización de mercados van a llegar plenamente a los consumidores finales. El Gobierno está convencido de que buena parte de los resultados alcanzados por nuestro país en términos de convergencia real en los últimos años se debe a los avances en las líneas que acabo de comentar. Precisamente por ello, nuestra idea es la de perseverar en ambos frentes sobre la base del diálogo social. Consideramos que esta es la mejor manera de asegurar que España va a continuar siendo capaz de crecer a tasas elevadas, manteniendo al mismo tiempo diferenciales de inflación con el área euro que no pongan en peligro nuestra competitividad.

Señorías, decía antes que el segundo gran pilar sobre el que se asienta la relativa fortaleza actual de nuestra economía lo encontramos en el intenso proceso de saneamiento de las cuentas públicas acometido por el Gobierno del Partido Popular desde 1996 y ello por dos razones fundamentales: por un lado, porque el contar con una situación de estabilidad presupuestaria permite que nuestras familias y nuestras empresas se enfrenten hoy en sus decisiones de consumo, ahorro e inversión a tipos de interés reales a medio y largo plazo históricamente bajos, porque, señorías, esos bajos tipos de interés no se deben exclusivamente a nuestra pertenencia al área euro sino que son una muestra clara de que los mercados financieros internacionales aplican hoy a nuestro país una prima de riesgo muy baja, impensable hace solo unos pocos años. En concreto, la prima de riesgo respecto del bono alemán a diez años que los mercados financieros asignaban a España antes de la llegada al Gobierno del Partido Popular ascendía a 500 puntos básicos. A día de hoy, esta prima de riesgo es del orden de siete puntos básicos, es decir, prácticamente ha desaparecido. Este descenso en la prima de riesgo no se produce, lógicamente, porque nos haya tocado la lotería. Es la consecuencia inevitable del hecho de que los inversores internacionales han aceptado definitivamente que la apuesta de nuestro país por la estabilidad presupuestaria pretende ser una apuesta firme y con vocación de permanencia.

Pero, más allá de estos bajos tipos de interés, la estabilidad presupuestaria genera beneficios adicionales en estos momentos de incertidumbre económica internacional. En efecto, el margen de maniobra creado en los años de consolidación fiscal permite hoy a España contar con los grados de libertad necesarios para diseñar la política presupuestaria más adecuada al actual contexto económico. Nuestro país cerrará el año 2002 con una situación de equilibrio presupuestario por segundo año consecutivo, como lo prueba el hecho de que durante los diez primeros meses del presente ejercicio el Estado haya logrado un superávit equivalente al 1,25 por ciento del producto interior bruto. Se trata, además, de un equilibrio fiscal que está siendo

perfectamente compatible con el juego de los estabilizadores automáticos.

Este margen de flexibilidad con el que hoy cuenta nuestro país para decidir cuál es la política fiscal que más nos conviene contrasta de forma notable con las disyuntivas de política económica a las que se enfrentan algunos países miembros del área euro, en particular los más retrasados en el cumplimiento de los objetivos del pacto de estabilidad y crecimiento. Estos países no aprovecharon las fases altas del ciclo económico para hacer un esfuerzo suficiente en materia de consolidación fiscal y hoy están pagando las consecuencias de aquella falta de ambición. En nuestro país, por el contrario, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 se benefician de la apuesta por la disciplina presupuestaria asumida por el Gobierno desde que ganamos la confianza de los españoles en 1996.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene dibujan así una política fiscal que se inspira en los siguientes principios: en primer lugar, en el mantenimiento del compromiso de equilibrio presupuestario, por sus efectos positivos sobre las expectativas de los agentes y sus decisiones de consumo, ahorro e inversión. El Gobierno considera, además, que esa situación de equilibrio presupuestario es perfectamente compatible con el juego de los estabilizadores automáticos en la medida en que el año 2003 será un ejercicio de considerable recuperación de la economía. De esta forma, los presupuestos para el año que viene no tendrán ningún tipo de sesgo procíclico. De hecho, para asegurarnos de que esto va a ser así y aun en el caso de que el crecimiento del año que viene sea algo inferior al inicialmente previsto, el Gobierno no adoptará durante el próximo ejercicio ningún tipo de medida discrecional de gasto e ingreso público que suponga ir en contra de esa acción de los estabilizadores automáticos, ya que esto podría poner en peligro el crecimiento en nuestro país.

En segundo lugar y con la misma perspectiva de estimular el crecimiento económico, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 continuarán poniendo el acento en aquellas partidas de gasto más relacionadas con el bienestar presente y futuro de los españoles: el gasto social y el gasto en inversión. Con ello, se está dando prioridad a aquellos capítulos del presupuesto que tienen una capacidad mayor para dinamizar la economía.

Pero es que además, en tercer lugar, los presupuestos para el año que viene se acompañan de importantes rebajas de impuestos, que han sido posibles por el saneamiento de nuestras cuentas públicas en años anteriores. Precisamente porque esta rebaja impositiva tiene lugar en un contexto de equilibrio presupuestario basado en la disciplina del gasto, los agentes perciben que es permanente y no anticipan subidas futuras de impuestos. Por ello es de esperar que los consumidores trasladen buena parte de los menores impuestos hacia decisiones de consumo. En este mismo sentido, la supresión del IAE para la práctica totalidad de sus contribuyentes, unida a las mejoras introducidas en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades en lo que se refiere al tratamiento de la inversión empresarial, tendrán, a su vez, un efecto muy apreciable sobre el comportamiento inversor de nuestras empresas en el año 2003.

A la vista de todo lo dicho hasta aquí, considero que los Presupuestos Generales del Estado para 2003 contribuirán de un modo decisivo a situar a nuestro país en la mejor posición posible para aprovechar plenamente los efectos de una recuperación económica internacional que comenzará a cobrar fuerza a lo largo del año que viene.

Por primera vez en mucho tiempo, el sector público en nuestro país, que ya supone algo menos del 40 por ciento del producto interior bruto, está siendo un factor de estabilidad macroeconómica y no una fuente de incertidumbre, como lo ha sido en otros períodos de nuestra historia económica. Precisamente por ello y frente a las propuestas carentes de rigor de otros partidos políticos, el Gobierno pretende seguir apostando por su política de estabilidad presupuestaria basada en la disciplina de gasto corriente y compatible por ello con la rebaja de impuestos. De hecho, el reto en los próximos años, una vez que se confirme la recuperación económica, va a ser el de tender hacia superávit públicos estructurales, de forma que se haga plenamente compatible el requisito del equilibrio presupuestario nominal con el libre juego de los estabilizadores automáticos. Con ello estaremos contribuyendo, además, a preparar a nuestra economía para afrontar en las mejores condiciones los retos presupuestarios que en el largo plazo se derivan del envejecimiento de la población.

De cualquier manera, hay quien ha venido defendiendo que sería bueno hacer una política fiscal más agresiva, aunque ello implicase incurrir en unos déficit públicos pronunciados. Contra este recurso fácil al déficit público a través de vías discrecionales pretendidamente expansivas, puede, sin embargo, argumentarse lo siguiente: Primero, que cada vez es más patente que la política fiscal presenta extraordinarias limitaciones cuando pretende ser usada de un modo desordenado y discrecional como medio de estabilización macroeconómica a corto plazo.

Son muchos los ejemplos de países que han fracasado en su intento de llevar a cabo políticas presupuestarias agresivas dirigidas a intentar reducir las fluctuaciones cíclicas a las que, inevitablemente, se ve sometida toda economía, en algunas ocasiones porque los efectos de esas políticas presupuestarias sobre la actividad agregada resultaban ser mucho menores a lo esperado inicialmente, en otras, porque esos efectos llegaban demasiado tarde, con lo que la política fiscal tendía a exagerar, en lugar de reducir, las fluctuaciones cíclicas que en principio pretendía controlar. Pero es que, además, no debe olvidarse un elemento al que ya he hecho referencia antes: el efecto positivo de una política fiscal prudente sobre la formación de expectativa de los agentes. En países que, como el nuestro, han venido manteniendo una persistente tradición de déficit públicos, la apuesta por la estabilidad presupuestaria, lejos de ser contraria al crecimiento, tiene unos efectos expansivos sobre la actividad agregada claramente superiores a los que se derivan de políticas irresponsables de déficit público. Por otro lado, es evidente que España, a la hora de diseñar su política presupuestaria, no puede pasar por alto los compromisos que se derivan de nuestra pertenencia a una unión monetaria.

Si todos los países llevásemos a cabo políticas fiscales como los que algunos han venido reclamando, la labor del Banco Central Europeo sería prácticamente imposible, no ya más difícil y complicada de lo que lo es en la actualidad. La consecuencia final sería una combinación de políticas económicas en la eurozona que iría claramente en contra de los intereses de todos y cada uno de los Estados miembros.

Por último, hay una tercera causa que aconseja huir de políticas agresivas de déficit público en un contexto económico como el actual. Me estoy refiriendo al nivel de inflación vigente hoy en nuestra economía, variable que todo Gobierno responsable ha de tener en cuenta cuando diseña su política presupuestaria. En este sentido, es innegable que el ensanchamiento del diferencial de inflación de nuestra economía con respecto a nuestros socios comunitarios invita a la prudencia en materia fiscal, y lo hace por dos razones fundamentales: Primero, porque ese diferencial de inflación da lugar a que las condiciones monetarias en nuestro país sean más favorables que las existentes en otros Estados miembros de la eurozona. Segundo, porque nos tenemos que asegurar de que el diferencial de inflación español con respecto a nuestros socios comunitarios se sitúe a medio plazo dentro de unos límites razonables que no pongan en peligro nuestra competitividad. Para lograrlo, son esenciales, desde luego, tanto la moderación salarial como la contención de los márgenes comerciales en determinados sectores. Sin embargo, el Gobierno también tiene que cumplir con su cuota de responsabilidad, profundizando en la liberalización de mercados, fortaleciendo la política de defensa de la competencia y evitando que una política fiscal irresponsable ejerza presiones inadecuadas sobre la demanda agregada.

Señorías, sin duda uno de los aspectos que se han visto más reforzados como consecuencia del equilibrio presupuestario han sido las inversiones y el gasto social. Somos uno de los países que mayor porcentaje del PIB invierte a través del presupuesto. Desde que alcanzamos el equilibrio presupuestario, las inversiones han aumentado una media del 14 por ciento cada año, en 2001, un incremento del 20 por ciento; en 2002, el 9,3 por ciento. El esfuerzo inversor del sector público estatal para ejecutar los ambiciosos planes de inversiones en infraestructuras, I+D+I y medio ambiente, se incrementa un 13 por ciento en los Presupuestos Generales del Estado para 2003. La política en infraestructuras continuará avanzando dentro del Plan de Infraestructuras para el período 2000-2007, con importantes inversiones en carreteras de gran capacidad, en nuevas infraestructuras aeroportuarias, en la mejora de la capacidad de Puertos del Estado y en modernizar el transporte ferroviario, especialmente a través de la construcción de las líneas de alta velocidad.

Otra de nuestras prioridades es mejorar la conservación del medio ambiente y la gestión eficaz de los recursos hídricos para procurar un desarrollo sostenible de forma que el Gobierno impulsa en estos presupuestos la ejecución del Plan Hidrológico Nacional.

La inversión en I+D+I tiene también carácter prioritario y lo seguirá teniendo en los próximos años para lograr los objetivos establecidos por el nuevo Plan Nacional de In-

vestigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, que abarca el período 2000-2003. Este esfuerzo inversor no solo corresponde al Estado, sino que también es canalizado a través de empresas y entes públicos como AENA, que procura nuevas infraestructuras aeroportuarias, el GIF, encargado de modernizar el transporte ferroviario a través de construcción de líneas de alta velocidad, Puertos del Estado, preocupado en mejorar su capacidad y la calidad de sus servicios, y las sociedades de aguas, creadas para el desarrollo de obras hidráulicas y la mejora de la calidad de las aguas.

En estos presupuestos para el año 2003 es prioridad fundamental la seguridad ciudadana. La principal preocupación de todo Estado de Derecho debe ser atender la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, para lo cual debe reforzar el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en la lucha contra el terrorismo como en sus esfuerzos contra la criminalidad. La política de seguridad ciudadana, con una dotación de 5.424 millones de euros, tiene un incremento del 7,4 por ciento respecto del año anterior. Con este incremento, se intensificarán las actuaciones contra la criminalidad y se aumentarán los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los medios de los que estos van a disponer.

El aumento de presupuesto de seguridad ciudadana está también dedicado a la lucha antiterrorista, a proteger los derechos de aquellos españoles cuya vida diaria transcurre en un continuo desafío ante aquellos que quieren coartar su libertad e incluso terminar con su vida.

También la sociedad española reclama el acceso a una Justicia más rápida y eficaz. Así, la justicia es un servicio público prioritario en los Presupuestos Generales del Estado para 2003. Esta política, con una dotación de 1.137 millones de euros, se incrementa un 6,7 por ciento con el fin de avanzar en los objetivos del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. Entre las novedades más importantes para el próximo año destacan el Plan de implantación de juicios rápidos para determinados delitos y faltas, proyecto que cuenta con el consenso de todos los grupos parlamentarios.

El presupuesto del Estado para 2003 destina casi el 50 por ciento del gasto total, más de 102.000 millones de euros, a la función social, es decir, a garantizar la redistribución equitativa de la renta, las pensiones, la sanidad, el desempleo y todos los servicios sociales para las personas que necesitan más ayuda, más soporte de la solidaridad pública.

Las pensiones constituyen el más importante de los capítulos dentro de los gastos de carácter social. Con una dotación de 66.881 millones de euros, el gasto para pensiones se incrementa un 7,1 por ciento en relación con 2002.

Con la política de pensiones, tres son los objetivos que se persiguen. En primer lugar, garantizar la viabilidad de las pensiones a largo plazo. Para ello se aportan 1.202 millones de euros al fondo de reserva para pensiones que, a principios de 2003, superará los 7.300 millones de euros, muy por encima del compromiso que el Gobierno había fijado para 2004.

En segundo lugar, reforzar el principio de solidaridad con la mejora de las pensiones de los grupos más desfavorecidos, con un incremento especial de las pensiones mínimas y de las pensiones de viudedad y mantener el poder adquisitivo del conjunto de los pensionistas españoles.

Quiero recordar que este año se compensará a los pensionistas por la diferencia en la evolución de los precios calculada por el índice del mes de noviembre.

Continuar con el proceso de separación de fuentes dentro del ámbito no contributivo del sistema de la Seguridad Social constituye la tercera finalidad del presupuesto de ámbito social.

Con este presupuesto de 2003 el Estado asume complementos a mínimos de pensiones en el ámbito no contributivo, conforme al Acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social de abril de 2001.

Con esta finalidad la aportación del Estado en estos presupuestos para complementos a mínimos duplica a la prevista en el año anterior y alcanza así la cifra de 606 millones de euros.

En el plazo de 12 años el Estado habrá financiado la totalidad de los complementos a mínimos de pensiones.

El esfuerzo realizado por el Estado ha contribuido, asimismo, al saneamiento de la Seguridad Social, que ha pasado de un déficit del 0,3 por ciento del PIB al superávit del 0,5 por ciento previsto para el próximo año.

El superávit de la Seguridad Social es la mejor expresión de la elección de sanear y dar estabilidad al sistema de las pensiones públicas, y permitirá hacer frente con tranquilidad al envejecimiento futuro de la población.

La mejora del bienestar social se persigue dentro de la política de otras prestaciones sociales, y comprende las medidas destinadas a optimizar los niveles de protección de las personas y grupos más vulnerables y desfavorecidos.

Para 2003 se asignan a esta política 7.291,25 millones de euros. El crédito previsto para protección familiar aumenta un 5,26 por ciento, y se destinan más de 886 millones al pago directo a los beneficiarios. Destaca el 8 por ciento de incremento de la dotación para maternidad y riesgo en el embarazo.

En el año 2003 continuarán, en colaboración con otras administraciones, las actuaciones encaminadas a ofrecer unos servicios sociales adecuados a las demandas de las personas mayores. Así, dentro de las actuaciones del Plan Gerontológico se incorporan ayudas a las amas de casa que cuiden de una persona mayor.

Hay que destacar, asimismo, los programas de atención a la infancia y a la familia, en los que se pretende proteger al menor y promover la conciliación entre la vida familiar y laboral. Así, en el próximo ejercicio se van a destinar siete millones de euros a la creación de plazas de guarderías para la atención de menores de tres años.

Para el 2003 los créditos asignados al programa de acción a favor de emigrantes suponen un incremento del 14 por ciento respecto a 2002, y se destinarán a garantizar un nivel mínimo de protección social de los emigrantes españoles y sus familias, a su retorno, si así lo demandan, y a la inserción laboral de los trabajadores emigrantes.

La creación de empleo continúa siendo un objetivo prioritario de la política económica y social de este Gobierno. Para facilitar el acceso a un puesto de trabajo digno es imprescindible contar con una adecuada formación. En este presupuesto se destina a las políticas activas de empleo 5.357 millones de euros para financiar, entre otras actuaciones, las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de las empresas para incrementar el empleo estable, los programas de formación destinados a los trabajadores, ya cuenten con un empleo o estén en situación de desempleo y el programa de escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo, en el que se conjugan medidas de carácter formativo y de fomento del empleo.

La protección por desempleo se dota para 2003 con 10.690,88 millones de euros. Con este crédito presupuestario se protegerá a aquellos que pudiendo y queriendo trabajar pierden su empleo y ven reducidos sus recursos económicos.

La política de sanidad, una vez concluidas las últimas transferencias a las comunidades autónomas, comprende principalmente la asistencia sanitaria en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y asume la necesaria función de cohesión del conjunto del Sistema Nacional de Salud. La dotación destinada a Sanidad asciende a 3.369,52 millones de euros, lo que explica un aumento del 7,6 por ciento en términos homogéneos.

En la política de educación, una vez concluido el proceso de descentralización, se mantienen como prioritarias las actuaciones de promoción social educativa a través de los programas de becas y ayudas al estudio que suponen el 51 por ciento de la dotación total de esta política y que experimentan un incremento del 8 por ciento en relación con 2002.

Tanto la educación secundaria como la universitaria se benefician de un incremento superior al 20 por ciento dirigido especialmente a la implantación de la normativa básica de enseñanzas mínimas y de la Ley Orgánica de Universidades.

Otra preocupación de este Gobierno es que todos los ciudadanos tengan una vivienda digna. Durante estos años la importante creación de empleo y la bajada de tipos de interés en un contexto de estabilidad económica ha propiciado la compra de tres millones de viviendas aproximadamente. No obstante, el notable incremento de precios de los últimos tiempos obliga a todas las administraciones, Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, a buscar soluciones a un problema que afecta muy especialmente a los jóvenes. En estos Presupuestos se destinan 658 millones de euros al fomento de la vivienda en alquiler y para ayudar al pago de la entrada de la primera vivienda. Además, con la nueva reforma del IRPF entrarán en vigor nuevas mejoras fiscales para incrementar la oferta de viviendas en alquiler.

Los ingresos no financieros del Estado presupuestados para 2003 ascienden a 105.696 millones de euros, un 0,7 por ciento más que la recaudación estimada para el presente ejercicio. Este moderado incremento se explica en gran medida por la mayor participación de las comunidades autónomas en los tributos estatales derivada del nuevo

modelo de financiación y por la importante rebaja del IRPF, que entrará en vigor el próximo año. El esfuerzo de los años de consolidación presupuestaria ha generado unas condiciones que permiten afrontar la reforma estructural de nuestro sistema impositivo, lo que supondrá el año que viene un ahorro para las familias y empresas españolas superior a los 4.000 millones de euros. El año 2003 seguiremos mejorando la eficiencia económica y las neutralidades de nuestros impuestos respecto de las decisiones de los agentes económicos en materia de ahorro, inversión y oferta de trabajo. También continuaremos haciendo unos impuestos más equitativos y sencillos que favorezcan especialmente a las personas con menores ingresos y que faciliten a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Con la nueva reforma del IRPF el impuesto se verá reducido, desde que gobierna el Partido Popular, en un 25 por ciento por término medio. A los 5.000 millones de euros de ahorro anuales durante el período 1992-2002 habrá que sumar el año que viene otros 3.000 millones de euros, en total 8.000 millones de euros de ahorro gracias al equilibrio presupuestario.

La segunda gran reforma fiscal del próximo año corresponde a la financiación local, fruto de la negociación y del acuerdo unánime con los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias. El nuevo sistema prevé su entrada en vigor en dos fases: la primera, de carácter tributario, a partir del 1 de enero de 2003, y la segunda, de carácter financiero, un año después. La nueva ley dotará a las haciendas locales de una mayor capacidad para diseñar su política tributaria en función de sus objetivos y necesidades, y asimismo de nuevas posibilidades para establecer beneficios fiscales en favor de la familia, el empleo y el medio ambiente.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2003 garantizan desde su redacción inicial, y mediante un crédito ampliable, la suficiencia financiera de las corporaciones locales con el nuevo marco legal. Gracias a esta reforma más de dos millones 200.000 autónomos y pequeñas empresas estarán exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas, cumpliendo así el Gobierno una vez más sus compromisos electorales.

La tercera reforma tributaria supondrá, con la nueva Ley del Mecenazgo, la mejora del régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y de las personas y empresas que colaboran en actividades de interés general. Las entidades no lucrativas estarán exentas de tributación por las rentas que se deriven de su actividad filantrópica, de su patrimonio, o que sean meramente complementarias de éstas, mientras que las demás rentas que obtengan tributarán a un tipo reducido del 10 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades.

Por su parte, las personas físicas podrán deducir un 25 por ciento del valor de su donación y las personas jurídicas un 35 por ciento en las cuotas de sus respectivos impuestos personales. La ley, como principio fundamental, garantiza que los recursos bonificados fiscalmente se asignen a los fines sociales previstos y refuerza los mecanismos que aseguren la transparencia y la responsabilidad en la gestión de las entidades sin fines lucrativos.

Por último, en la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social que acompaña a la ley de presupuestos para el 2003, enriquecida con las aportaciones de los grupos parlamentarios durante su tramitación en ambas Cámaras, se han introducido diversas modificaciones normativas entre las que me gustaría destacar las siguientes: En el ámbito de la imposición indirecta se han realizado las adaptaciones en el IVA exigidas por las nuevas directivas de comercio electrónico y de facturación. En este impuesto también se ha reducido el tipo aplicable a determinados productos de higiene femenina.

Respecto a los impuestos especiales, se han congelado los actuales tipos y, adicionalmente, en el Impuesto sobre Hidrocarburos se ha creado un tipo cero para los biocarburantes y se han reducido los tipos para el queroseno de calefacción y los gases licuados del petróleo de uso general para vehículos. En cuanto al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se han flexibilizado los requisitos para la aplicación del Plan Prever con la finalidad de incentivar la renovación del parque de vehículos.

En cuanto a la imposición directa, continuando con la reforma progresiva del Impuesto sobre Sociedades que estamos llevando a cabo, se ha creado una deducción del 10 por ciento sobre los gastos de guardería que realicen las empresas para los hijos de sus trabajadores. También se ha elevado tres puntos la deducción por reinversión de plusvalías que creamos en la Ley de acompañamiento para este ejercicio, reforzando así el incentivo a la reinversión de los beneficios empresariales y equiparándose la tributación con el IRPF.

Para los residentes en Ceuta y Melilla se han introducido nuevas y mayores bonificaciones que afectan al Impuesto sobre el Patrimonio, al de Sucesiones y Donaciones y al de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Asimismo, se ha regulado un mecanismo de garantía recaudatoria del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación para asegurar la suficiencia financiera de ambas ciudades.

En el Régimen Económico y Fiscal de Canarias se han introducido diversas mejoras relativas a la reserva para inversiones, a la bonificación para empresas productoras de bienes corporales y al arbitrio sobre la importación y entrega de mercancías. Todas ellas persiguen el objetivo de estimular la actividad económica y la inversión empresarial en el archipiélago.

Anticipándonos a la nueva ley general tributaria, que presentaremos en esta Cámara en los primeros meses del próximo año, se han introducido mejoras técnicas que, por un lado, refuerzan la seguridad jurídica del contribuyente y, por otro, facilitan las comprobaciones inspectoras en aras de una mayor eficacia en la lucha contra el fraude.

Para mejorar la eficacia de la Administración de Justicia, se crea la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo, de cuyo pago estarán exentas las personas físicas, las pequeñas y medianas empresas y las entidades sin fines de lucro, garantizando así el derecho constitucional a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales.

En materia social y laboral se han introducido las modificaciones precisas en la normativa reguladora de la Función pública derivadas de los acuerdos alcanzados por la Administración y los sindicatos, que afectan esencialmente al régimen de retribuciones, vacaciones y permisos de los funcionarios y entre cuyos objetivos destacan el de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.

Por último, para los trabajadores autónomos se ha establecido la posibilidad de ampliar su derecho de protección social y de percibir prestaciones económicas derivadas de la incapacidad temporal.

Señorías, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 aplican, por primera vez, las leyes de estabilidad presupuestaria y muestran la firme voluntad del Gobierno de procurar que el equilibrio de las cuentas públicas se convierta en el escenario estable de la economía española.

En un contexto de dificultades de la economía internacional, el equilibrio presupuestario será el año que viene el principal instrumento de nuestra política económica para generar confianza a los agentes económicos, moderar las tensiones inflacionistas, facilitar la reducción de los impuestos, garantizar los proyectos de inversión pública y, en definitiva, respaldar el crecimiento y la creación de empleo.

Gracias a la disciplina del gasto público y el déficit cero, por tercer año consecutivo, en los presupuestos de 2003 tendremos menos impuestos; menos impuestos para impulsar el crecimiento de la economía; menos impuestos para favorecer la creación de empleo; menos impuestos para apoyar a las pequeñas empresas y a los trabajadores autónomos, a las familias, a las madres trabajadoras, a las personas mayores y a los discapacitados.

Muchas gracias, señor presidente. *(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Según lo acordado por la Mesa, oída la Junta de Portavoces, se debatirán conjuntamente las propuestas de veto presentadas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003 y al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Se han presentado las siguientes propuestas de veto: dos del Grupo Parlamentario Socialista; dos del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; una del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; cuatro del Grupo Parlamentario Mixto y dos más de don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Bru.

El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor Montoro, si tras la lectura detallada del documento presupuestario uno se quedaba con la conocida sensación de lo ya visto, del empecinamiento anual en los mismos errores, de una burbuja presupuestaria totalmente ausente de la realidad, aunque adornada, eso sí, con el imaginario del déficit cero, tras su intervención la perplejidad es la nota dominante, que nos invade, ante la inconsisten-

cia lógica, la incoherencia formal y, sobre todo, la absoluta falta de relevancia de la adecuación de su discurso con la problemática de la economía y la sociedad española.

Por un lado, tenemos los presupuestos y, por otro, la realidad, cada cual por su camino, inconexos, en un divorcio absoluto, y en medio, usted, debatiéndose entre el autismo presupuestario y el solipsismo económico, eso sí, espléndidamente ajeno, inmune a la realidad circundante; una realidad a la que usted nunca le va a consentir que estropee sus presupuestos; unos presupuestos que —tampoco cabe sorprenderse— son lo que son, lo que usted mismo ha dicho, la expresión económica de la voluntad política de un Gobierno, y, en efecto, estamos ante la manifestación económica de la política de un Gobierno que no gobierna; de un Gobierno que tarda semanas en reaccionar ante la mayor catástrofe medioambiental de la historia española; de un Gobierno anestesiado con sus problemas internos, sumido en el grave problema sucesorio como si de un principado de opereta se tratase; de un Gobierno en suma, señor Montoro, que, o no presupuesta lo que promete o no ejecuta lo que presupuesta; es decir, entre Escila y Caribdis, nos movemos entre el populismo peronista del señor Zaplana y la tremenda ineficacia del señor Matas; después volveremos sobre esta cuestión con cifras concretas de ejecución presupuestaria. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Señor Montoro, un año más, nos trae ante esta Cámara un presupuesto inserto en un irreal escenario de crecimiento que cifra en un tres por ciento y que nadie —estoy convencido de que ni siquiera ustedes mismos— puede creerse y, además, lo que es peor, nos sitúa en el mundo de la fe, de las creencias, no en el de la discusión racional, porque racionalmente no tienen ustedes el menor fundamento para plantearse en esta situación una cifra imaginaria que sólo surge de confiar en una recuperación del consumo interno, incentivada por su rebaja de impuestos, y de un hipotético crecimiento del comercio internacional; débiles fundamentos para marcarse este farol macroeconómico más propio de un juego de envite que de un ejercicio presupuestario riguroso. Porque el año pasado —¿lo recuerda?— comenzaron con otra cifra imaginaria: el 2,9 por ciento. Antes de que se aprobaran los presupuestos el señor Rato ya estaba hablando de revisarlos a la baja. Redujeron esa cifra al 2,4 por ciento, y en plena canícula, para que pasase desapercibido, la volvieron a reducir al 2,2 por ciento. ¿Y cuál es su último dato, señor Montoro? El 1,8 por ciento.

Señor ministro, durante este mismo debate el año pasado le avanzaba que el crecimiento de la economía española para 2002 difícilmente se iba a aproximar al 2 por ciento. Y lamento no haberme equivocado, porque, lo repito una vez más, nunca nos va a encontrar en el terreno del catastrofismo. Nunca vamos a jugar a «cuanto peor, mejor». Deseamos una pronta y, sobre todo, sólida recuperación económica. Queremos que la economía española crezca más y que se cree más, y sobre todo, mejor, empleo; todo ello, con una mayor cohesión social y llevando a cabo una corrección de las desigualdades, que desde que usted

gobiernan se han agrandado en España de forma incontrovertible, y las cifras son explícitas al respecto.

Ustedes han desaprovechado la etapa de crecimiento amplio y sostenido que se produjo en España, como en el resto de Europa, hasta el año 2000 para seguir cubriendo nuestros déficit en materia social. Ustedes prometieron bajar los impuestos manteniendo el gasto social, pero el resultado ha sido un aumento de dos puntos de la presión fiscal y una reducción del porcentaje del gasto social sobre el PIB de dos puntos y medio desde que ustedes gobiernan. Así, en 1996 el gasto social suponía el 22,5 por ciento del PIB, y cuatro años después era del 20 por ciento, luego se produce una pérdida de dos puntos y medio. ¿Y sabe cuál es la media europea en gasto social? El 27,6 por ciento. Ésa es la idea que tienen ustedes de la convergencia con Europa, una Europa donde ocupamos el penúltimo lugar, sólo por delante de Grecia, en relación con el gasto por alumno. Una Europa que ustedes sólo contemplan en lo que a la convergencia se refiere por el crecimiento de la renta española en relación con la media europea; y, por cierto, ese crecimiento fue mayor porcentualmente en la última etapa de crecimiento económico del Gobierno socialista, entre 1986 y 1990, que con ustedes.

Pero, situada ya esa renta per cápita en el 83,5 por ciento del promedio de la Unión Europea, el stock de capital público español en relación con la población todavía es del 67,5 por ciento del promedio europeo; el del capital humano es del 71,7 por ciento; el de capital tecnológico —en eso vamos en franco retroceso—, del 40, 8 por ciento —son datos del INE, señor Montoro—; la relación entre el gasto en I+D y nuestro PIB se sitúa en el 57 por ciento de la media europea, y el gasto público en educación, en el 71 por ciento. Así pues, señor Montoro, dígame, sin recitar jaculatorias neoliberales ni acudir a su mística preferida del déficit cero, cuántas décadas harían falta con presupuestos como los que usted ahora ha presentado para ir reduciendo esas diferencias, para ir llenando esos todavía considerables «gaps» que tenemos respecto de la media europea, máxime si consideramos que nuestros vecinos no se quedan quietos, sino que siguen avanzando y mejorando la cantidad y la calidad de sus dotaciones de capitales físico, tecnológico y humano, con una aportación del sector público en lo que respecta a su formación sensiblemente superior a la española.

Señor Montoro, usted mismo en su discurso, y en general el equipo económico del Gobierno, se esfuerzan en transmitir que, entre los condicionantes impuestos por la situación económica internacional —por cierto, antes parecía no existir: todo lo que ocurría en España era fruto de las magníficas políticas autónomas del Partido Popular, pero en cuanto las cosas vienen mal dadas se acuerdan de que estamos en un mundo globalizado, que existe un mercado abierto y que hay un Deus ex machina, que es la economía de los Estados Unidos. Pero lo piensan ahora, no antes. Para lo malo hay causas externas, mientras que para lo bueno todo era responsabilidad interna—, decía que en ese contexto ustedes se esfuerzan en transmitir que, pese a esos condicionamientos, la economía española mantiene un comportamiento positivo. Y usted mismo, con una

cierta propensión por lo hiperbólico, decía en el Congreso de los Diputados sin ambages ni tapujos, y cito literalmente: El próximo año encabezaremos la recuperación de los mercados mundiales. Fin de la cita.

Pues bien, mientras tomamos el relevo de la locomotora americana, que ya debe estar cansada de tirar sola de la economía mundial y es justo que le echemos una mano para que tenga un respiro, podemos, si a usted le parece bien, dar un repaso a nuestro programa económico, hoy, a mi juicio, con más sombras que luces y que presenta algunos signos que, sin ser alarmistas, más deberían llevarnos a la preocupación responsable que al optimismo infundado.

Señor Montoro, el optimismo infundado y desmesurado confunde el diagnóstico y predispone a formular las alegres previsiones que usted acostumbra y que la realidad se encarga de desmentir, porque como profeta no tiene usted mucho futuro. Declaraciones suyas formuladas a un diario económico a finales del pasado mes de junio afirman, bajo un titular un tanto grandilocuente que dice que Montoro confirma el repunte de la economía, que la recuperación se consolidará a finales de este año, período —y vuelvo a citar literalmente— en el cual estaremos creciendo ya a un ritmo del 3 por ciento. Pues mire usted, por desgracia ese ritmo no se ha cumplido, sino que ha sido del 1,8 por ciento; sólo 1,2 puntos de error que equivalen a unos 10.000 millones de euros sobre el PIB. Con estos cálculos nunca salen las cuentas, motivo por el que usted necesita acudir a la contabilidad creativa y a la estadística recreativa que las maquillen.

Señor Montoro —y no soy catastrofista, simplemente cito indicadores económicos que podemos encontrar en el INE y en cualquier estudio bancario— cuando en España está cayendo el consumo doméstico, caen los ingresos por exportaciones, los del turismo, la productividad, la inversión en bienes de equipo, se desploman los índices bursátiles, aumenta el paro, se deteriora nuestra balanza de rentas y sólo sube fuertemente la inflación y, por desgracia, el índice de siniestralidad laboral, así como el número de quiebras y de suspensiones de pago, el seguir manteniendo que la economía española presenta, pese a todo, un comportamiento positivo me parece un eufemismo no del todo responsable. Podemos discutir hasta qué punto estos datos son o no preocupantes, e incluso alarmantes, pero no podemos practicar la política del avestruz, sobre todo porque en algunos de estos problemas son directamente ustedes mismos los agentes causales.

El consumo doméstico ha caído al 1,7 por ciento, cuando el año pasado por estas fechas se situaba en el 5 por ciento. No me negará usted que éste es un dato preocupante donde los haya, puesto que esta variable, junto con la construcción, son las que sostienen hoy en día nuestra actividad económica y es la clave, usted acaba de confesarlo, para sus irreales previsiones de crecimiento.

¿Por qué cae el consumo doméstico, señor Montoro? Me gustaría que nos dijera si la política tributaria del Gobierno tiene algo que ver con ello, si el incremento brutal de impuestos indirectos que se ha producido este año y que según el secretario de Estado de Economía, corroborado

por el señor Rato, ha añadido 0,5 puntos a la inflación española —aunque usted lo niegue señor Montoro, y luego volveré sobre esa descoordinación gubernamental— tiene a su juicio algo que ver con esa caída, si esa inflación que usted alimenta con su voracidad fiscal, al restar capacidad adquisitiva a nuestras familias, influye en la caída del consumo, si la creciente precarización del mercado laboral, con una tasa de temporalidad que es el doble de la europea, influye en las perspectivas de las familias, y por tanto, en la caída del consumo; dígame usted si el hecho de que las familias españolas que tenían activos financieros en bolsa sean mucho más pobres hoy que en enero es debido, no al efecto riqueza, sino a ese efecto pobreza en el patrimonio familiar español causado por la política de cebar artificialmente la cotización de empresas privatizadas para atraer inversores y luego realizar las «stock-options», las succulentas plusvalías que luego usted acude solícito a desgravar y por las compras de grupos mediáticos afines al Gobierno que luego se hunden. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Quisiera saber, repito, si ese efecto pobreza ha tenido algún efecto sobre el consumo doméstico.

Señor Montoro, supongo que no me negará usted que los principales problemas que afectan hoy a la economía española son la elevada inflación y la baja productividad. Tenemos una de las inflaciones más altas de la Unión Europea y la productividad más baja, y esto es algo que ya se nota en la competitividad de nuestros bienes comercializables.

Señor Montoro, la cuota de mercado de nuestras exportaciones a nivel mundial, que llegó a alcanzar el 2 por ciento, ha descendido en el 2001 al 1,8, rebasando en tan solo una décima a la situación en 1993, hace casi una década. Y si es cierto que el comercio exterior de la Unión Europea retrocede, no es menos cierto que la mayor caída de toda la Unión Europea es la española y seguiremos retrocediendo en nuestra competitividad por culpa, en gran medida, de su primitivismo fiscal, por su desmesurada afición a subir los impuestos indirectos, a crear nuevas figuras impositivas, a subir y crear nuevas tasas, y esto no lo digo yo, señor Montoro, esto se lo dice con total claridad la CEOE, sus viejos conocidos. Se lo pueden decir más alto, pero no más claro.

Señor Montoro, para el ministro de Economía y para su secretario de Estado la inflación es el principal elemento de preocupación del Gobierno. Usted, por contra, se dedica a hablar —comillas— del fenómeno transitorio de alza de precios —cierro comillas— y profetizando nuevamente —y ya conocemos su capacidad profética— que el nivel de inflación actualmente vigente en nuestro país se debe a factores transitorios que irán desapareciendo en los próximos meses. ¿Reconoce la frase? Es suya. ¿Factores transitorios cuando existe una coincidencia absoluta en que uno de los grandes fracasos de los gobiernos del señor Aznar ha sido el control de la inflación? ¿Factores transitorios, señor Montoro? Con el debido respeto, no sé qué quiere decir con esto o no sabe usted de qué habla.

Cuando en octubre de 1982 los socialistas ganamos las elecciones la inflación estaba en el 13,82 por ciento.

Cuando en marzo de 1996 ustedes ganan las elecciones, el señor Solbes, entre tantísimas otras cosas positivas que pasa el testigo al señor Rato, le entrega una inflación del 3,4 por ciento. (*Aplausos.—Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!*) Seis años y nueve meses después están ustedes con una inflación del 4 por ciento y con un diferencial —que es lo más preocupante— respecto a la zona euro del 2 por ciento. Señor Montoro, fracaso rotundo, sin paliativos.

Usted siempre está en contra del equipo de Economía. Es una situación que empieza a ser ya preocupante y que debería obligar al presidente Aznar a tomar las riendas de su Gobierno. Va usted y declara a una revista a finales de octubre —tengo aquí las fotocopias, si quiere que le refresque la memoria— que no se puede hablar de relación entre la subida de los impuestos indirectos y el incremento del IPC. Pues casi simultáneamente el señor Guindos declaraba paladinamente en el Congreso de los Diputados —cito literalmente— que los impuestos indirectos de este año han supuesto entre cuatro y cinco décimas de inflación y lo mismo me reconocía en la Comisión de Economía del Senado el señor Rato por las mismas fechas. Esto no es una anécdota, es muy serio que todo un vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y su secretario de Estado reconozcan un hecho del cual usted es directo responsable y usted niegue la mayor y mire para otro lado. (*El señor Laborda Martín: ¡Muy bien!*) Así presupuesta usted como presupuesta. Si no se entera de los problemas, ¿cómo va a buscarles solución?

Señor Montoro, yo creo que usted debería hablar más con el señor Rato o, en todo caso, el señor Rato ejercer legítimamente su posición jerárquica en el Gobierno, porque siguiendo con la inflación, que es el problema más acuciante de la economía española para todos —para todos menos para usted, se ve que por eso la mima y la engorda—, el señor Rato no se cansa de afirmar que cuando un Gobierno no tiene política monetaria, su única alternativa es la política presupuestaria y en relación con esto —vuelvo a citar literalmente— afirma que el Gobierno tiene en marcha una política macroeconómica claramente antiinflacionista, una política presupuestaria restrictiva. Pues nada, usted erre que erre no se cansa de enmendarle la plana al señor Rato y declarar con profusión que estamos ante unos presupuestos expansivos porque contienen una bajada de impuestos y un aumento de la inversión pública. Pero lo peor de todo es que tiene usted razón, porque si baja los impuestos directos es una política fiscal expansiva y se mire como se mire, señor Montoro, esto indefectiblemente presiona al alza la inflación y si sube los impuestos indirectos, aunque aparentemente sea una política fiscal contractiva, el resultado indefectible es también siempre un aumento de la inflación, esta preocupante inflación que encuentra en usted, señor Montoro, su más fiel aliado.

Ese aumento de la inflación que usted ha provocado en este año, vía cláusulas de revisión salarial —que afectan, como sabe ya, al 76 por ciento de los trabajadores españoles—, se va a transmitir al año próximo, donde confluirán todos los efectos perniciosos de su nefasta política fiscal,

señor Montoro; su política de echar gasolina tributaria a la hoguera de la inflación (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*), y encima, como ustedes llevan más de seis años sin hacer los deberes, como tenemos una inflación sin control, el recorte de tipos que acaba de decidir el Banco Central Europeo va a agravar nuestras dificultades, porque resulta que lo que se estima que es bueno para la economía europea —que no tiene una inflación desmandada como la española— va a empeorar nuestro diferencial de precios respecto a Francia, a Reino Unido, a Italia, a Alemania, a nuestros principales destinos; va a empeorar nuestra competitividad, que tanto preocupa, y con razón, a la CEOE, y usted, señor Montoro, es uno de los responsables directos.

Pero no acaban ahí —en el problema de la inflación— sus graves diferencias (*El señor ministro de Hacienda, Montoro Romero, hace signos negativos*), sí, sus graves diferencias con el equipo de Economía. Se lo explico. Para el señor Rato —y lo manifestaba hace mes y medio aproximadamente en esta sede— los presupuestos —cito literalmente— deben ser estables, en el sentido de mantener sus velocidades de crucero, y afirmaba que aquellos países que tratan de acelerar la coyuntura a través del gasto público se encuentran con desagradables consecuencias. Pero usted, de forma pertinaz y contumaz, se esfuerza en predicar lo contrario, y declara —le cito a usted literalmente— el presupuesto es un instrumento para conseguir el crecimiento del 3 por ciento. Declara que el crecimiento económico inducido en el año 2003, por la elevada inversión pública y la reducción de impuestos, puede acercarse a un punto del PIB. Y el Secretario de Estado señor Rodríguez Ponga remata afirmando, sin ambages, que —cito también literalmente— el presupuesto es una herramienta eficaz para influir en el crecimiento económico. Así lo entendemos desde el Gobierno popular y así estamos utilizando este presupuesto.

Señor Montoro, me reconocerá que esto no es serio; que todo esto no es serio, pero que a la vez empieza a ser grave. O sea, el ministro de Economía pide una política presupuestaria restrictiva para combatir la inflación, y usted le da ración doble de política expansiva: vía gasto y vía reducción de impuestos. El señor Rato defiende presupuestos neutrales, y usted le sirve una herramienta para forzar el crecimiento, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos, señor Montoro? ¿Hay alguien todavía en La Moncloa capaz de tomar decisiones y de acabar con esta especie de «panchovillismo» imperante en el equipo económico de gobierno? (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) O, señor Montoro, ¿quizá es que además del síndrome del pato cojo hemos pasado a la situación del pato ausente? (*Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bonito!*) Hablando de bonitos, de pesca y de aves contaminadas, ¿dónde está el señor Aznar? Ya sabemos que en Galicia no, pero, ¿gubernamentalmente dónde se encuentra? (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) ¿Pensando cómo amueblar su despacho de la Fundación FAES? Alguien, insisto, debería hacer algo para acabar con esta permanente cere-

monia de la confusión, con esta superposición de mensajes y políticas contradictorias, con este caos entrópico que introduce usted de forma permanente en la política, en la economía y en la sociedad española.

Para ir concluyendo, tenemos unos presupuestos con un escenario macroeconómico irreal, que no sólo no resuelven, sino que van a agravar los principales problemas de la economía española, que no sabemos si son neutrales o anticíclicos, si son restrictivos, como quiere el señor Rato, o expansivos, como vende usted, y que además, señor Montoro, no se cumplen; no se cumplen porque ustedes son incapaces de ejecutarlos; son incapaces de gestionar los programas correspondientes. A 31 de octubre pasado, sólo se había ejecutado, del capítulo 6, inversiones reales, el 43,11 por ciento. (*El señor Laborda Martín: ¡Uh!*) A este paso no van a llegar ni al exigido 60 por ciento de 2001.

¿Sabe usted que un ministerio inversor tan importante como el de Medio Ambiente sólo había ejecutado al 15 de noviembre —hasta hace un par de semanas, ya con el año vencido— el 48 por ciento de su presupuesto total, incluidos sueldos de funcionarios y gastos corrientes —lápices, folios y toner para las impresoras—? (*El señor Laborda Martín: ¡Increíble!*) Y si miramos en este mismo ministerio de Medio Ambiente su capítulo de inversiones reales, según datos oficiales de la Secretaría de Estado de Presupuestos que he recibido hoy mismo, sólo llega al 35 por ciento de realización, o sea, poco más de un tercio en 10 meses. (*El señor Laborda Martín: ¡Increíble!*) Señor Montoro, patético, ineficacia patética (*El señor Laborda Martín: ¡Increíble!*)

Por otra parte, ¿sabe usted que, dentro de esta operación noche y niebla, de oscuridad y confusión, del apagón estadístico generalizado que ustedes han lanzado sobre los indicadores y datos que les comprometen en la gestión, sólo disponemos de datos fehacientes hasta el 31 de junio pasado sobre ejecución de programas porque ustedes no responden a nuestras preguntas ni requerimientos parlamentarios? ¿Pero sabe que esos datos son alarmantes en grado sumo, que a esas fechas el programa 431-A del Ministerio de Fomento, ni más ni menos que el programa dedicado a promoción y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda, sólo estaba ejecutado en cuanto a capítulo 6 en un 4,4 por ciento y en cuanto a capítulo 7 en un 18 por ciento? (*Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Uh, uh, uh!*) Explique eso, señor Montoro, explíquese a los jóvenes españoles que no pueden desarrollar un proyecto de vida autónomo porque no pueden acceder a la vivienda. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Explíquese, señor Montoro.

No es extraño que el señor Álvarez-Cascos haya suprimido drásticamente el boletín estadístico de su ministerio y que usted secuestre, cautive, retenga para censurar las memorias sobre gestión tributaria o los informes sobre la lucha contra el fraude fiscal.

Por otra parte, ¿sabe, por ejemplo, que un programa estrella de Medio Ambiente, como es el 512-A, el de gestión en infraestructuras de recursos hidráulicos, del que dependen, entre otras muchas materias, su cacareado Plan Hidrológico Nacional, sólo estaba ejecutado en un 10,5 por

ciento? (*El señor Laborda Martín: ¡Repítelo, repítelo!—Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Oh, oh, oh!*) ¿O que el programa 531-B, el Plan Nacional de Regadíos, tenía un grado de ejecución del 7,8 por ciento? (*Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—El señor Laborda Martín: ¡Ahí, ahí! Al telediario.*)

Explíqueme esto, señor Montoro, explíquese a los agricultores valencianos o explíquese a mis regantes valencianos. ¡Vaya a Valencia y explique esto!

No sigo, aunque podría aportar ante esta Cámara una lista interminable de incumplimientos, de ineficacias, de incompetencia. (*Varios señores senadores Grupo Parlamentario Socialista: ¡Habla, Habla!*) Sí, señoría, digámoslo claramente: de incompetencia gubernamental (*Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien, muy bien.—El señor Laborda Martín: ¡Al telediario, Montoro!—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Por las razones expuestas e incluso, dado el caos que envuelve a la concepción de estos presupuestos, que son expansivos o son restrictivos o dejan de serlo a conveniencia y gusto del predicador ministerial de turno, decía que incluso por motivos de higiene mental, solicitamos a esta Cámara la devolución del proyecto.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para el turno en contra, tiene la palabra el senador Caneda.

El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, después del numerito que montó Rodríguez Zapatero para ver cómo podía taparse y no decir nada en el Congreso (*Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡A la cuestión, a la cuestión!*), estaba yo con la incógnita de ver qué numerito iban a montar aquí, si saldría el portavoz disfrazado de globo o algo... (*Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡A la cuestión, a la cuestión!—El señor Laborda Martín: ¡Presidente, a la cuestión!*) Yo sí voy a hablar de presupuestos.

Aquí ha hecho lo mismo, ha hecho una colección muy buena para una tertulia de un montón de numeritos; no ha hablado prácticamente nada de los presupuestos y, además (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*), hace lo que realmente se quiere hacer cuando realmente no se quiere decir nada, que es abrumar, dar datos que han sacado con una visión parcial y sesgada. (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Dejádme hablar por lo menos cinco minutos y luego chilláis. Respecto a la política presupuestaria que hace el gobierno del Partido Popular, lo que sí me ha quedado claro es que no la entienden, pero nadie pretende que así sea.

El crecimiento sostenido de la economía —indudable— en los últimos seis años se debe en gran parte a una política presupuestaria que ha disminuido la necesidad de financiación y que ha permitido —dato incuestionable— que haya 250.000 empresas más que crean riqueza y trabajo.

El veto, así como la enmienda a la totalidad presentada en el Congreso al presupuesto —ya lo ha expuesto el señor ministro detenidamente y al final ha hecho una especie de resumen— me parece absolutamente leve e inconsistente. No dice nada de lo que se trata, que es de los presupuestos. En resumen, se dice que hay una falta de credibilidad, y ésta viene por el dato del crecimiento previsto del 3 por ciento, que según el Grupo Parlamentario Socialista es del 2,5 y otros organismos, como el Fondo Monetario Internacional, del 2,7.

A este respecto, yo haría dos consideraciones. El crecimiento que reconocen del 2,5 —con lo que está cayendo: Japón con una recesión prácticamente de diez años; Alemania entrando casi en recesión y toda Europa aletargada; Estados Unidos con un fracaso en su intento «keynesiano» de salir y recaer por no ser el medio adecuado; con casi una guerra en Irak, el debacle de las bolsas— constituye ya un reconocimiento de una buena política económica para el año que viene.

Además, cuando afirma que duda de este 3 o del 2,7 ¿lo que importa realmente en unos presupuestos es hablar de un número o de si va a ser posible conseguir los ingresos para poder ejecutar los gastos? Creo que es obvio que lo importante es esto último.

Señor Bru, usted decía que este año ha habido un 1 por ciento de desviación en las previsiones. Sin embargo, con datos de finales de octubre tenemos un superávit, y estamos cumpliendo perfectamente los presupuestos. Le digo por qué. Porque en una de las enmiendas que se incluyeron en la ley de acompañamiento del año anterior se adoptaron medidas que han hecho que, por ejemplo, a 30 de octubre, exista un crecimiento del 16 por ciento en los ingresos por sociedades y que vaya a finalizar con un 14,7; significa que lo importante es que los presupuestos vayan acompañados de una serie de medidas, y dentro de una política económica, con unos ingresos calculados de forma prudente que permiten cumplir los presupuestos, que es lo importante, no que el crecimiento sea de un 3 o de un 2,7. Al final, eso es de lo que se trata.

La otra magnitud que le cuesta asimilar es la previsión de inflación. Efectivamente, la inflación es un problema. En España es alta y a todos nos preocupa, pero estamos hablando de los presupuestos y, señor Bru, si hace un análisis, no creo que vaya a afectar a la consecución de los ingresos de estos presupuestos. La inflación tiene muchas causas, y no puede compararse la inflación que se puede tener después de cinco años de crecimiento nulo e incluso negativo en España, que la que se puede tener después de seis años seguidos de un crecimiento alto.

Cuando hablamos de las causas de la inflación, tenemos que reconocer que tenemos 4 millones más de consumidores porque se han creado 4 millones de empleos, el que todavía hoy —porque no estábamos acostumbrados a tener el dinero al 2,75— los créditos en este año suben un 13 por

ciento —mientras que en Alemania lo hace en un 1 por ciento— porque las familias españolas han tenido la posibilidad de endeudarse a largo plazo y de forma barata y antes no. Todas estas cosas efectivamente ayudan a la inflación, pero también a nuestro crecimiento económico y a la creación de empleo, que era y es el objetivo primordial de la sociedad española.

Ha comentado el miedo que le produce la productividad, pero hasta ahora no ha habido ningún problema porque, a pesar de la crisis internacional de estos últimos años, nosotros hemos seguido creciendo. En este sentido, aun viviendo un período de crisis del comercio internacional —que, por cierto, no había bajado nunca—, nosotros no hemos perdido penetración.

Ha centrado su segunda crítica en la falta de convergencia real y, sin embargo, ha reconocido que estábamos en un 77 por ciento y vamos a acabar en un 85 por ciento. ¿Cómo puede decir que no hay convergencia real si vamos a conseguir siete puntos de avance? ¿Cómo puede decir que no hay convergencia real cuando estamos cambiando todas nuestras infraestructuras y se está construyendo alta velocidad ferroviaria y grandes carreteras? Eso también es convergencia, señor Bru.

Con respecto al dato sobre el acercamiento de la renta le diré que éste se sigue produciendo. Así, mientras que hasta 1996 se decía —y era totalmente cierto— que cuando Europa estornudaba aquí había pulmonía, ahora podemos decir, afortunadamente, que cuando Europa tiene pulmonía aquí estamos estornudando. ¡Y que siga siendo así!

Tiene la costumbre de decir que no se creen los datos oficiales, y habla de los libros, del déficit oculto, etcétera. Si hubiese habido déficit oculto todos los años que ustedes lo han comentado, sería imposible que hubieran dejado una deuda de un 70 por ciento sobre el PIB y que ésta se vaya a situar ahora en el 55 por ciento, con una previsión para el año próximo del 53 por ciento. Además, cuando dice que no encuentran dónde está, le tengo que decir lo mismo, que hay una normativa presupuestaria, una contabilidad nacional, y que una cosa son los intereses que se pagan y otra distinta los intereses que se contabilicen; que puede haber una diferencia entre la necesidad de endeudamiento y el equilibrio presupuestario y, en este caso, hay equilibrio presupuestario y por eso tenemos un déficit cero. En cualquier caso, si quiere insistir en ese punto, yo insistiré en explicarle por qué no es así.

Ha hecho comentarios acerca de que no entiende, que no ve claro, que los datos no son correctos o, como también ha señalado, que no ha dispuesto de las memorias tributarias, pero éstas están incluidas en la página web, en todos los análisis y, desde el pasado 13 de marzo, hay libros circulando. Creo que se trata de la típica salida de todos los malos perdedores, que cuando se sienten impotentes o incompetentes ante algo, dudan, y tildan a todos los árbitros de manipuladores: todos los datos están manipulados, los del Instituto Nacional de Estadística, los del CIS, los del Banco de España, los del Fondo Monetario y también las encuestas, aunque en este último caso, sólo en ocasiones, y si los datos son favorables al PSOE, son rigurosos, pero no es así, en caso contrario.

Ninguna de las tres críticas en las que ha resumido su intervención tiene fundamento. España, gracias a sus presupuestos, tiene hoy unas cuentas muy saneadas y se permite hacer nuevas bajadas de impuestos como las dos que se han explicado relativas al IRPF y al IAE, que tiene que pagar menos intereses porque la deuda ha bajado y que tiene fondos suficientes para seguir avanzando en las prioridades de Gobierno.

España hoy, señor Bru, es una España de oportunidades para los españoles y para los 220.000 inmigrantes que en los diez primeros meses de este año se han inscrito en la Seguridad Social; para los 220.000 inmigrantes de países no comunitarios. Eso significa que tenemos una España que está brindando oportunidades a todos.

Además, hay una característica de este presupuesto que me gustaría resaltar, porque no se destaca mucho: que es un presupuesto muy consensuado. En este sentido, si sumamos todas las partidas que se han consensuado, como es el caso de las pensiones, las transferencias a comunidades autónomas, las transferencias a los ayuntamientos, el pacto de Estado para la reforma de la Justicia, los gastos del personal funcionario —consensuados con los sindicatos—, etcétera, podemos ver, señor Bru, que es un presupuesto participado por muchas personas y en el que se ha hecho un gran esfuerzo para conseguir la bajada de impuestos, el saneamiento de las cuentas y, además, que muchas gente participe en su consecución.

Normalmente se ha venido criticando la ley de acompañamiento, de la que yo no soy un entusiasta, ciertamente, pero que creo que es necesaria, y ya he dicho que algunas de las medidas que se tomaron el año pasado son las que han hecho posible que, ante un menor crecimiento, se consigan los ingresos. Pero lo que me parece incongruente, como todo su veto, son las enmiendas. Porque las enmiendas críticas que ustedes hacen a la ley de acompañamiento lo tocan todo y, en algunos casos, de forma descarada; pretenden enmendar una ley orgánica con una ley ordinaria. Por tanto, no sólo critican lo que ustedes hacían cuando estaban en el Gobierno, sino que ahora también abusan de ello desde la oposición. Basan sus críticas en las tasas porque no pueden incluirse en la ley de presupuestos. Y precisamente por esta razón, en 1993 ustedes hicieron la ley de acompañamiento. Las tasas tienen que revisarse porque sirven para acompañar la consecución de estos presupuestos.

Por otra parte, cuando ustedes vetan y solicitan la devolución del proyecto de ley de presupuestos al Gobierno, presentan unas enmiendas para ver qué es lo que quieren rectificar en estos presupuestos. Pues bien, la gran mayoría de ellas están ya incluidas en los presupuestos, las de carácter social ya están previstas en los presupuestos. Piden una enmienda para mejorar el acceso a la vivienda, y resulta que piden menos de lo ya previsto en el Plan de Vivienda en vigor. Eso sí, luego suben a la tribuna y hablan y hablan, pero cuando tienen que trasladarlo en medidas, no aciertan ni una. El poco rigor y trabajo de sus enmiendas refleja la importancia que le dan a una política. Y cuando suben aquí intentando explicar su incoherencia y su poco rigor, tenemos que recordarles que la gran mayoría de sus enmiendas o van contra directivas comunitarias, o contra

acuerdos que se han establecido con los sindicatos y las comunidades autónomas, o ya están incluidas en los presupuestos. Pero la enmienda estrella es que venga aquí su portavoz a presentar la solicitud de un observatorio para la violencia doméstica, cuando ya se había creado, ya existe y está en vigor. Estaban ustedes presentes cuando se creó, ya ha tenido una reunión, lo cual demuestra su desconocimiento. Pero, aparte de eso duele ver cómo al principal partido de la oposición le importa realmente un bledo, el seguimiento del observatorio que se ha constituido porque, ni siquiera, sabe que está en marcha, que ya se está trabajando y ya ha celebrado reuniones.

Si quitáramos todas estas enmiendas, las ya incluidas y las que van en contra de normativas y directivas comunitarias, no quedaría nada, señor Bru, sino un puñadillo de enmiendas que perfectamente podrían haberse pactado. Y este es el problema, que ustedes salen a los medios, piden más gastos, piden 40.000 millones, les da igual cuánto, pero cuando tienen que trasladarlo, nada, todo es pura teoría y pura prensa. Hablan para la prensa para buscar titulares, pero no tienen ninguna medida concreta. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Dentro de los presupuestos, señorías, lo importante son los ingresos y en qué se aplican, cuáles son las prioridades de este Gobierno. Usted se ha quejado en las comisiones del furor legislativo económico de este Gobierno. Pues cuando existe una situación como la que ustedes y nosotros hemos descrito, de gran incertidumbre, como esto no es pura matemática de dos más dos, sino que hay que buscar entre unos y otros cómo ir haciendo flexible la economía para que pueda navegar en estas aguas de zozobra, se elaboran un montón de leyes que van creando el marco necesario para conseguir los ingresos y ejecutar los gastos. Estas leyes financieras, la reforma del IRPF, el IAE, de mecenazgo, todas las que hemos aprobado para que entren en vigor el uno de enero, hacen posible estos ingresos. Y cuando vemos la previsión de ingresos, ¿en qué son elevados, señor Bru? Es una previsión que, como todas, se hace considerando los ingresos fijos obtenidos hasta octubre y la previsible para los próximos cuatro meses, en función de la actual economía. Y como las previsiones del año anterior y el otro eran prudentes, estas siguen siendo prudentes y, según todos los estudios, permiten que una desviación en el crecimiento pueda absorberse perfectamente con estos mayores ingresos.

Como consecuencia de la rebaja fiscal, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas crece levemente, un 2,7, debido simplemente al aumento del salario y del número de empleos previstos en 280.000, lo que es perfectamente razonable. Esos 3.000 millones de euros se dan al mercado, se dan a los ciudadanos, sobre todo a rentas bajas, que son los que mayores bajadas tienen en los impuestos y mayor propensión muestran al consumo. Luego, es lógico pensar que efectivamente, junto a los nuevos empleos, haya un alza importante en el IVA, para el que se prevé un crecimiento del 8,4 por ciento.

Y en cuanto al Impuesto sobre Sociedades, si previsiblemente este año va a acabar con un incremento de un 14,5 por ciento, dado que además existen nuevas medidas

para favorecer a las empresas, a las pequeñas empresas y a los autónomos, parece más que razonable el crecimiento del 7 por ciento.

Igual sucede respecto a los Impuestos Especiales, que simplemente recoge el impuesto sobre la economía por el aumento del consumo de carburantes, lo que, senador Bru, es muy razonable. Si habláramos en términos de razonabilidad y de presupuestos, así también les parecería a ustedes.

¿Y para qué son estos ingresos? Por ahí es por donde se hace la política económica de un gobierno. Nosotros seguimos pensando que los gastos fundamentales tienen que estar dirigidos, en primer lugar, a la creación de riqueza a fin de poder seguir obteniendo recursos para gastos sociales. Y esto es lo que hacen estos presupuestos, como los anteriores.

En primer lugar, se adoptan medidas para que sigan creciendo las infraestructuras de España, para que siga aumentando su productividad como país. Es por eso que vuelven a aumentar las inversiones en infraestructuras, en este caso en un 13 por ciento, muy por encima del crecimiento de la economía, muy por encima del crecimiento medio de los gastos, y ello tanto para carreteras, ferrocarriles, como respecto al plan hidrológico, como saneamiento de aguas, de manera que, por lo que se refiere al Plan de Infraestructuras 2000-2007 y el Plan Hidrológico, España va a tener de las mejores infraestructuras de comunicaciones de Europa. Y esto tiene su repercusión en estos presupuestos, y sin ningún problema, senador Bru. Problemas los que encontramos cuando teníamos déficit y tuvimos que cortar las inversiones, problemas los que tienen ahora los países que apostaron por el déficit y ahora tienen que recortar las inversiones. Por eso, desde que hemos llegado al equilibrio presupuestario, cada año tenemos una media de crecimiento en inversiones de un 14 por ciento, cosa que no pueden hacer ninguno de los países que han apostado por el déficit. *(El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.)*

Y eso prueba la buena elección al apostar por el equilibrio presupuestario, lo que no significa absoluta rigidez, porque, señoría, puede suponer expansión o no expansión, puede ser como exactamente son estos presupuestos, donde se restringen los gastos y se invierte y se expande donde interesa, es decir, en inversión porque ello crea riqueza.

El equilibrio es cero. Simplemente hay una elección sensata, inteligente sobre qué gastos incrementar más de la media del 4 por ciento y cuáles menos. Ahí está la diferencia, en que hay que saber elegir y utilizar la inteligencia en los presupuestos.

Otro de los campos a tratar, después del relativo a infraestructuras, es el de la investigación. Sin duda es cierto lo que su señoría dice sobre que España lleva retraso en cuanto a investigación y desarrollo. Evidentemente esto es así puesto que nos hemos incorporado muy tarde a este área. Pero no pretendemos afirmar que en un año, en dos, ni en seis vamos a llegar a estar entre los líderes. Estamos haciéndolo poco a poco. Hay que crear esa cultura inversora, porque no depende solo del déficit del sector público

español, sino que tenemos que lograr que el 60 por ciento de la inversión en investigación venga de las empresas, para lo que hoy día España tiene probablemente el mejor sistema de incentivación en investigación y desarrollo, el mejor sistema fiscal para promocionar la investigación y el desarrollo. Pero si lo que quiere decirme es que todavía no hemos conseguido estar a los niveles del que más aporta, le doy la razón. Estamos trabajando en la línea que permite crecer en investigación y poniendo los medios para ello, pero hay una parte importante que es la cultura, la educación, que es la que estamos intentando remediar cada año.

La tercera línea de prioridad, que ha venido siéndolo además en todos los presupuestos y que está a caballo entre la economía, las dos medidas anteriores y lo social, es el empleo. Con los presupuestos de estos seis años se ha conseguido en política de empleo lo más que se le podía pedir al Gobierno hace seis años, que haya más empleo que parados en el Gobierno socialista, casi cuatro millones. Es cierto que se ha creado una España de oportunidades, se ha incorporado la mujer al trabajo, más del 50 por ciento de los nuevos puestos de trabajo lo ocupan mujeres, afortunadamente, lo que significa que sube la población activa. Hay que seguir trabajando, hay que seguir tomando medidas para seguir creando empleo, y en lugar de cuatro millones habrá que crear más para que esa tasa de desempleo, que antes era del 24 y ahora es del 10, siga bajando hasta el pleno empleo. Por eso se siguen poniendo medios en los presupuestos, se da prioridad, dedicándose más de 5.000 millones de euros a políticas de fomento de empleo, y aunque ustedes no estén a favor, se hace discriminación positiva hacia la mujer, hacia los discapacitados, hacia los jóvenes dedicando dinero, tanto en formación como en subvención a la contratación fija de los sectores más desfavorecidos.

Otro capítulo importante que hay que destacar son las pensiones, que tenía para nosotros tres objetivos fundamentales: mantener el poder adquisitivo, que se mantiene; aumentar el fondo de reserva en 1.200 millones de euros, aunque ya está cubierto y dispone de cantidad suficiente para las previsiones cara al 2004, y otro muy importante es subir las pensiones más bajas, lo que se hace año tras año, y este año se vuelven a subir. Se suben de nuevo las pensiones de viudedad, las pensiones mínimas, las de orfandad, y eso es lo importante de estos presupuestos, que pueden hacer todo esto porque la política que se ha seguido de creación de empleo les permite tener superávit cada año, y eso significa que de los 16,5 millones de cotizantes que hoy tenemos, un 36 por ciento ha subido en sólo seis años, luego tan mala no será esta política, señor Bru, y eso continúa, con más de 600.00 nuevos afiliados en lo que va de año.

Dentro de esta protección social, se tienen en cuenta nuevas prestaciones, como las pensiones para emigrantes, una subida de un 39 por ciento para el Plan Gerontológico. Por cierto, en estos presupuestos se encuentra incluida una de las medidas, entre las muchas que ustedes piden. Búsquenla, encontrarán las ayudas para mayores dependientes, también encontrarán aumentos en el Imsero. Solicitan 20 millones para dos centros especiales, uno en Valencia y

otro en Murcia, y hay expresamente 21 millones, están dentro de la protección social, Imserso.

Tenemos otras prioridades, como incrementos mayores de la media en Justicia para aplicar el pacto para la reforma de la Justicia, y en seguridad ciudadana por las nuevas necesidades creadas en esta nueva España, señor Bru.

Terminando, si yo criticaba el veto por su inconsistencia, por su levedad, porque no tiene sentido después de analizar las enmiendas que han presentado, creo que hay que valorar de los presupuestos algo muy importante, que es la capacidad de combinar algo tan difícil como es la satisfacción de las necesidades del presente con la solidaridad con el futuro, y cuando se hacen inversiones importantes en el Plan Hidrológico, en carreteras y en trenes de alta velocidad, en puertos y en aeropuertos, todo al mismo tiempo, como se está haciendo en este momento, cuando se baja la deuda para no dejar a las generaciones venideras deudas que pagar y además liberar dinero con los intereses, se baja la renta que queda como forma estructural, eso es solidaridad con el futuro, que hace que este presupuesto se presente equilibrado. Por cierto, seguro que ahora habrá muchos españoles que no estén de acuerdo con nuestras soluciones a los problemas, pero lo que no se puede negar es que tanto el Gobierno como el grupo parlamentario que lo soporta llevan seis años haciendo unos presupuestos con honradez, que cada año ha aumentado el bienestar de los españoles y que en este momento pensamos que es el más eficaz porque crea estabilidad y porque, además, es solidario. El veto que ustedes presentan y que nosotros, por supuesto, no vamos a apoyar, solo es un pataleo y una falta de rigor económico.

Muchas gracias. *(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)*

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Caneda. *(El señor Bru Parra y el señor Ministro de Hacienda piden la palabra.)*

Senador Bru, me pide la palabra y se la podría conceder por el artículo 87, pero también me la pide el señor ministro. Si se la concedo ahora a su señoría, no podría intervenir luego con posterioridad al ministro. En consecuencia, tiene ahora la palabra el señor ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, ante todo quiero expresar mi agradecimiento por las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senador Caneda, que ha hecho una intervención brillante en defensa de unos presupuestos que suponen una gran apuesta por el crecimiento económico y por el empleo en España.

Frente a ello, esta mañana en la tribuna el senador Bru ha puesto de manifiesto cuál es la política del Partido Socialista para la sociedad española. La política del Partido Socialista es: cuanto peor, mejor, señorías. *(Fuertes y prolongadas protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—El señor Laborda Martín: Eso llevas diciendo todos los años.)* Ésta es la única política que ofrece

el Partido Socialista a los... *(Continúan las protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)*

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Un momento, por favor, señor ministro.

Señorías, por favor, guarden silencio. *(Continúan las protestas.—Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.)* Señorías, por favor, guarden silencio. *(Continúan las protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)* Señorías, por favor, guarden silencio. Continúe, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Decía que el cuanto peor, mejor, es la forma triste de entender la política del principal partido de la oposición frente a todo lo que ocurre en nuestro país y también frente a las desgracias, como ha sido el caso de la catástrofe ecológica que estamos padeciendo en... *(Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista. El señor Laborda Martín: ¿No provoqué, ministro!)*

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Este fin de semana hemos tenido otra nueva muestra de lealtad al Gobierno de España por parte del partido de la oposición *(El señor Laborda Martín: ¡No provoqué, ministro! ¡Patriota!—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)* cuando nos ha pedido... *(Continúan las protestas.—El señor Laborda Martín: Pregunte a los gallegos.)*

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Laborda, por favor. Perdón, señor ministro. Un momento, por favor.

Senador Laborda, le ruego que guarden silencio, por favor, señorías. *(Continúan las protestas.)* Por favor, guarden silencio. El ministro está en el uso de la palabra y sus señorías tendrán los turnos correspondientes para replicar al señor ministro. Por favor, les ruego que guarden silencio mientras interviene por respeto al señor ministro. Ya tendrán... *(El señor Laborda Martín: ¿Que se modere!)*

Senador Laborda, por favor, no discuta con la presidencia. Guarde silencio. Silencio, señorías, por favor. *(El señor Laborda Martín: ¡Que se modere! ¡Que se modere!—Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)*

Continúe, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Estaba diciendo, señor presidente, que este fin de semana hemos tenido la ocasión de ver a los diferentes portavoces del Partido Socialista reclamar al Gobierno de España la gestión de los fondos europeos para hacer frente a la catástrofe del «Prestige», ignorando, señorías, que hace más de tres semanas que esos fondos europeos están siendo gestionados por el Gobierno de España. *(Fuertes*

protestas en los escaños de los grupos parlamentarios Mixto, Entesa Catalana de Progrés y Socialista.) Ésta es la clase de política que hace el Partido Socialista. (*Continúan las protestas.—Un senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¿No se nota!*) El Gobierno está atendiendo con diligencia los problemas de nuestra sociedad, señorías. Son problemas graves, son problemas serios, frente a los que un presupuesto equilibrado está proporcionando los recursos presupuestarios, los recursos económicos y los recursos monetarios para que, junto a los del Gobierno de la Xunta de Galicia, hoy estén cobrando los principales implicados en el desastre del Prestige, señorías. Hoy ya tienen esa compensación económica. (*El señor Quintana González: ¿Ya está bien! ¡Mentira! ¡Mentira!—Fuerzas protestas en los escaños de los grupos parlamentarios Mixto, Entesa Catalana de Progrés y Socialista.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): ¡Silencio! Senador Quintana, por favor, le llamo al orden. Silencio, por favor.

Señorías, por favor, guarden silencio. Tengan respeto a la Cámara. Respeten el debate. (*Protestas en los escaños de los grupos parlamentarios Mixto, Entesa Catalana de Progrés y Socialista.*)

Senador Quintana, silencio. (*El señor Carracao Gutiérrez pronuncia palabras que no se perciben.*)

Señorías, por favor, guarden silencio. Senador Carracao, guarde silencio. Tengan respeto a la Cámara. (*El señor Laborda Martín: ¡Y él a nosotros!*)

Silencio, señorías. El señor ministro está en el uso de la palabra y puede decir lo que crea oportuno. Ya tendrán sus señorías tiempo para replicar la intervención del señor ministro. (*Continúan las protestas en los grupos parlamentarios Mixto, Entesa Catalana de Progrés y Socialista.*)

Continúe, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente .

Los presupuestos para el año próximo vuelven a apostar por la política que está permitiendo que España, en esta década, pueda aspirar a la sociedad de pleno empleo, que es nuestra gran ambición política, la gran ambición de la sociedad española para el comienzo del siglo XXI.

El senador Bru ha subido a la tribuna a recordar la herencia de los gobiernos socialistas para el gobierno del Partido Popular. La herencia, senador Bru, fue la de la España retrasada en la convergencia real frente a Europa, perdiendo posiciones frente a la Unión Europea. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Protestas en los escaños de los grupos parlamentarios Mixto, Entesa Catalana de Progrés y Socialista.*)

La herencia, senador Bru, fue la de la España de los tres millones de parados. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Protestas en los escaños de los grupos parlamentarios Mixto, Entesa Catalana de Progrés y Socialista. Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!*)

La herencia, senador Bru, fue la de la tasa de paro del 24 por ciento, con una tasa de paro juvenil del 45 por

ciento. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Protestas en los escaños de los grupos parlamentarios Mixto, Entesa Catalana de Progrés y Socialista.*)

La herencia fue un déficit público situado en el 7 por ciento, que significa, en definitiva, que estábamos pagando los españoles la forma más injusta de pagar los impuestos que existe, que es el déficit público.

Y la herencia era una deuda galopante que se situó en el año 1996 en el 70 por ciento de nuestro producto interior bruto, y que hacía imposible que España fundara el euro, que España fuera miembro de la Unión Monetaria. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Ésa es la herencia a la que su señoría se ha referido esta mañana cuando ha comparado las tasas de inflación que dejaron los gobiernos socialistas con las tasas de inflación que hoy tiene la economía española. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Si usted prefiere tasas del 3,5 por ciento con tasas de paro del 24 por ciento, esa es su opción política, y eso es lo que tiene que explicar a los españoles, que tasas de inflación del 3,5 por ciento se correspondían con tres millones de parados. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Protestas en los escaños de los grupos parlamentarios Mixto, Entesa Catalana de Progrés y Socialista.—El señor Laborda Martín: ¡Venga ya!*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Eso es lo que tiene que explicar a los españoles como resultado de una política económica aplicada durante más de 14 años en la sociedad española. (*El señor Laborda Martín: ¡A buenas horas mangas verdes!*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio. Senador Laborda, por favor, le ruego guarde silencio.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Ha habido ciertos cambios desde el año 1996 que, sin duda alguna, han sido beneficiosos para la sociedad española y que intentan perpetuar y hacer permanentes los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2003.

Esos presupuestos responden a un ámbito de recuperación de la economía mundial, y en ese ámbito el pronóstico del Gobierno es que España estará liderando el año próximo la recuperación económica mundial. En eso coinciden todos los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión de la Unión Europea y todos los analistas internos y externos. Todos coinciden en que España tendrá el año próximo un marco de crecimiento económico superior y volverá a liderar la recuperación de la economía mundial, es decir, estaremos a la cabeza del crecimiento de la economía mundial que se anuncia para el año próximo.

Ello será posible precisamente porque hemos sentado las bases para que nuestro país esté siendo capaz de crecer en medio de una recesión económica tan severa como la

que ha sufrido la economía mundial durante el año 2001 y buena parte del año 2002. Es la primera vez en la historia económica de España que sorteamos una crisis mundial creciendo y creando empleo. Porque, senador Bru, ¿dónde está el error de diagnóstico del Gobierno en la creación de empleo para este año 2002? ¿Se van a crear 200.000 empleos este año o no se van a crear, señoría? ¿No es esto lo que importa en el crecimiento económico? ¿Qué es lo que importa? ¿Que haya unas décimas más o menos, o que haya cientos de miles de empleos más, señoría? (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Fuerzas rumores.*) Esto es lo que realmente le importa a la sociedad española, que haya crecimiento económico y creación de empleo. Y para este año 2002 no ha fallado el principal y primero de nuestros pronósticos, aunque queriendo ser justos tendríamos que decir que hemos fallado por haber sido demasiado cautos en nuestra previsión de creación de empleo. En este año 2002, un año extraordinariamente difícil para la economía mundial, la creación de empleo va a ser claramente superior a la previsión inicial del Gobierno, señorías. (*Fuerzas rumores.*) Eso es lo que en definitiva importa, señorías. Lo que importa es que en 1995 había en España cuatro millones 340.000 mujeres ocupadas y en 2002 hay seis millones 143.000, es decir, señorías, hay un millón 800.000 mujeres más trabajando en ese período. (*Varios señores senador es desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.—Fuerzas rumores.*) En el año 1995 había tres millones 310.000 jóvenes ocupados; hoy hay cuatro millones 296.000 jóvenes, es decir, casi un millón más de jóvenes trabajando en nuestro país. En cuanto a tasa de ocupación de empleo masculino, en 1995 había ocho millones 250.000 hombres ocupados, pasando esa cifra a ser actualmente de 10 millones 214.000.

Señorías, esto es lo que da sentido a la política económica de un Gobierno; esto es lo que da sentido a una política presupuestaria de un Gobierno: la creación de empleo. Para eso somos miembros de la Unión Europea (*Fuerzas rumores.—Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*), para que a través de la creación de empleo nuestro país pueda converger acercando las tasas de ocupación a las de los países más avanzados de la Unión Europea. Ésa es la convergencia real, ésa es la convergencia de empleo que interesa a los españoles. (*Risas.—Fuerzas rumores.*) Cuando eso ocurre, no puede afirmarse, como ha hecho el senador Bru, que en España hay un retroceso en cuestión social, señorías. (*El señor Molas i Batllori pronuncian palabras que no se perciben.—Fuerzas rumores.—Risas.*) La política social más importante, la más rigurosa que puede tener un país es la creación de empleo, es eliminar el «gap» del desempleo, el «gap» del paro, y a partir de ahí se eliminan los «gap» sociales de mayor calado, de mayor incertidumbre que pueda haber en un país, señorías. (*Fuerzas rumores.*) No hay políticas sociales pasivas que puedan suplir la carencia de puestos de trabajo. Cuando eso se intenta lo único que se hace es incurrir precisamente en políticas que llevan a la destrucción de empleo, a la desocupación, en políticas que llevan a la mayor desigualdad de oportunidades que puede tener una

sociedad cual es la del paro. Ésa era la sociedad española de mediados de los 90; ésa es la España que heredamos, y ésa es la España que presupuestos como los de 2003 están corrigiendo. Unos presupuestos que reaccionan aportando más incremento en gasto social.

El gasto social se incrementa en los nuevos presupuestos en un 8,2 por ciento. Es decir, crece muy por encima del crecimiento de la economía en términos nominales. De manera que el gasto social es el que está sirviendo también de garante de la confianza que hace que la sociedad española siga creciendo y siga creando empleo. Para el año próximo el aumento del gasto social se traducirá también en un incremento del fondo de reserva del sistema público de pensiones. Para el año próximo el aumento del gasto social permitirá mejorar las pensiones de viudedad en 2 puntos mejorando su cobertura y mejorándose también las pensiones inferiores por encima de la evolución de la inflación. El año próximo aumentan la mayoría de gastos sociales a los que me he referido en mi primera intervención. Aumenta la acción a favor de los inmigrantes un 14 por ciento; aumenta el Plan gerontológico nacional un 40 por ciento; aumentan los programas de atención a personas con Alzheimer un 75 por ciento; aumenta el Plan de acción integral para personas con discapacidad un 11,24 por ciento; aumenta el gasto de atención a la infancia y a la familia un 23,9 por ciento.

Ésos son los presupuestos del Estado para el año próximo. Se trata, por tanto, de unos presupuestos fuertemente comprometidos con esa protección social que hoy en España está saneada en su sistema público de pensiones y que permite mirar hacia el futuro con la confianza que da esa apuesta por el gasto social.

Igualmente, el presupuesto del Estado apuesta por el incremento de la inversión pública en nuestro país; la inversión pública para el año que viene asciende un 14 por ciento, señorías, con respecto al año anterior. (*La señora Martínez García: No es así.*) Se trata de una inversión pública cuya ejecución, senador Bru, asciende el 93 ó 94 por ciento cada año. (*Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡No!*) Ésos son los únicos datos fiables y reales de un presupuesto que se ejecuta en sus capítulos de inversión. Exactamente, el año 2001 se ejecutó el 23,1 por ciento, señorías. (*El senador Bru Parra: Aquí está lo suyo.*) Perdón, el 93,1 por ciento en el 2001 (*Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ah!*) y en 2002 se ejecutará un 93,3 por ciento. Por tanto, estamos ante una inversión que se programa de manera ambiciosa y se ejecuta fielmente de acuerdo con las previsiones presupuestarias.

Somos el país de Europa que más inversión está acometiendo en este momento, señorías. Como ha recordado el senador Caneda, otros países están ahora recortando sus inversiones porque están enfrentados a déficit públicos muy elevados, pero ése no es el caso de España. Nosotros tenemos las cuentas saneadas y estamos incrementando la inversión pública nada menos que en un 14 por ciento para el año 2003. Una inversión pública que va a permitir dar pasos decisivos a la hora de dotarnos del equipamiento físico que necesita nuestra sociedad y de las infraestructuras

que necesitamos en España en el campo de los transportes, de las comunicaciones, de la energía y de las nuevas tecnologías.

Todo ello, insisto, se hace con un presupuesto equilibrado. Además, en ese presupuesto equilibrado se acomete la política fiscal, que es el santo y seña del Gobierno del Partido Popular y que el senador Bru ha calificado de nefasta política tributaria para España. Efectivamente, señorías, bajar los impuestos es hacer una política fiscal nefasta para los españoles. Pues bien, como queremos seguir siendo tan nefastos, el año próximo vamos a bajar los impuestos a los españoles. (*El señor Agramunt Font de Mora: ¡Muy bien!—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Vamos a bajar los impuestos a los trabajadores y pensionistas desde el comienzo del año, en total 3.000 millones de euros. Vamos a aplicar una paga, y es la primera vez que la Hacienda Pública lo hace, para 500.000 madres trabajadoras con niños menores de 3 años a su cargo. Señorías, vamos a suprimir el pago del IAE, un impuesto ineficiente e injusto, a 2.200.000 contribuyentes. Como también vamos a congelar los impuestos especiales para el año próximo. Por tanto, en el presupuesto equilibrado de 2003 vamos a bajar los impuestos.

Ésa es la nefasta política tributaria que aplica el Gobierno del Partido Popular en cumplimiento de sus promesas electorales; es decir, cumpliendo la palabra que dio a sus ciudadanos en las elecciones generales del año 2000. Vamos a bajar los impuestos. Los españoles ya saben por qué el Partido Socialista califica de nefasta esta política tributaria, y es que sistemáticamente se opone a la bajada de los impuestos, señorías. Eso es lo que hace el Partido Socialista, que con su voto se opone a la bajada de los impuestos y a que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 acometamos una nueva bajada de los impuestos. Ésa es la única política del Partido Socialista, oponerse a la bajada de los impuestos ante una alternativa real de hacer otra política tributaria. (*Rumores.*)

En cuanto a la evolución económica de nuestro país, señorías, el senador Bru ha dicho que el consumo cae. No, señoría, el consumo no cae, el consumo en España se ha desacelerado. (*Risas.—El señor Carracao Gutiérrez: ¡Qué buen chiste!*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Es un pequeño matiz de lenguaje que sus señorías conocen con gran propiedad. Una cosa es retroceder y otra es crecer menos. En fin, parece un tecnicismo que a su señoría supongo que se le alcanza. (*Risas.*) Imagino que se le alcanza ese tecnicismo. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Señorías, en la España de 2002 el consumo sigue creciendo cerca del 2 por ciento, sostenido precisamente en la creación de empleo; como hay más empleo hay también una evolución sostenida del consumo en España y gracias a esa evolución de la demanda interna de nuestro país, a esa evolución del consumo y a la evolución del consumo

en vivienda se está manteniendo el crecimiento de la economía española en el sector de la construcción, que en materia de inversión es el que está sosteniendo el crecimiento económico reciente y contribuyendo muy positivamente a la evolución del empleo en nuestro país. (*Rumores.—Un senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Con la especulación!*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías.

El Señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): La diferencia es que en el año 1995, con un gobierno socialista, un préstamo hipotecario de 10 millones de pesetas suponía pagar 92.583 pesetas, es decir, 540 euros actuales al mes de intereses, mientras que ahora (*Un señor senador: ¡Ahora no se puede pagar!*) el mismo préstamo de 10 millones exige una cuota mensual de 40.666 pesetas al mes, 240 euros al mes. (*Rumores.*) Ésa ha sido la herencia del Partido Socialista.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Carracao, guarde silencio, por favor.

Señorías, les ruego guarden silencio. No hagan un comentario a cada frase del señor ministro. Sus señorías tendrán oportunidad de replicar por voluntad de la presidencia, no por obligación, porque sus turnos han finalizado. Puede continuar, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias señor presidente.

Como iba diciendo señorías, los Presupuestos Generales del Estado contienen también la dotación presupuestaria para acometer en España el Plan de vivienda, en definitiva, la promoción de viviendas de protección oficial que se presenta de manera innovadora, puesto que se facilita a los más jóvenes una dotación para la primera cuota destinada a la adquisición de esa vivienda y, además, se promueve la vivienda en alquiler. El Plan de vivienda lo desarrollan las comunidades autónomas y, por tanto, se irá ejecutando a medida que éstas participen en su aplicación e implantación

En relación con la evolución económica de nuestro país, señorías, he de destacar que el senador Bru ha subido a la tribuna a hacer otra afirmación que no es correcta porque ha dicho que la cuota de mercado de la exportación española está cayendo. No es cierto, señoría. Lo que ha ocurrido es que ha habido una recesión del comercio mundial y, en consecuencia, una desaceleración profunda de la evolución de nuestras exportaciones. Pero no se ha producido una caída de la cuota de exportaciones en los grandes mercados receptores del comercio español y, por tanto, aunque es cierto que la inflación interna de España puede ser una amenaza a medio y largo plazo para la competitividad, no es verdad que ya se haya manifestado en una pérdida de cuota de mercado; lo que ha sucedido es que el comercio mundial no se ha desacelerado sino que ha descendido en términos reales y en consecuencia la exportación española se ha resentido, como no podía ser de otra manera; lo

mismo sucede con nuestro déficit comercial, aunque también es verdad que el menor crecimiento de nuestra demanda interna ha llevado también a una desaceleración de nuestras importaciones.

Así pues, señorías, desde la preocupación por la inflación, los Presupuestos Generales del Estado insisten en el equilibrio presupuestario. ¿O no son unos presupuestos equilibrados la mejor respuesta de la política fiscal al problema de la inflación, senador Bru? ¿Entonces qué son? ¿Presupuestos con déficit? ¿O es que su señoría pretende presupuestos con superávit? ¿O su señoría no sabe lo que pretende, que considero la respuesta correcta a esta interpretación?

Suba usted a esta tribuna para decir si, frente a la inflación, su señoría está pidiendo un superávit presupuestario en España o un mayor déficit público. Suba usted aquí a explicar los elementos básicos de su política presupuestaria. Suba usted a presentar una alternativa a la política del Gobierno. (*Rumores.*) Pero ya sé que eso es mucho pedir; si su líder, el señor Rodríguez Zapatero, únicamente subió a la tribuna en el Congreso de los Diputados para hacer denuncias y no presentar alternativas, pretender que usted las presente ahora es realmente pedir peras al olmo. (*Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

También me llama la atención que su señoría coincida en las críticas de la CEOE a la política tributaria del Gobierno —ya sabemos dónde estamos cada uno de nosotros y también sabemos lo que ustedes están defendiendo—. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Y le insisto en el debate que ya mantuvimos la semana pasada sobre el concepto de productividad aparente del factor trabajo. Señoría, la productividad no está aumentando en España porque estamos viviendo un crecimiento económico creador de empleo, es decir, casi todo el crecimiento se dirige a los nuevos empleos, lo que lleva a que la productividad esté reducida. Sería ideal crecer más, pero no lo sería que ese crecimiento económico no se refiriera a los nuevos empleos. Desde luego, hay una forma completamente diferente de incrementar la productividad, que es la que practicaron los gobiernos del Partido Socialista: destruyendo empleo. De esa forma sí se incrementa la productividad del país. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Sin embargo, nosotros estamos llevando a cabo políticas estimulantes de la creación de empleo, por lo que es lógico, e incluso inevitable, que la productividad esté aumentando modestamente. En cualquier caso, actualmente está en tasas cada vez más cercanas al 1 por ciento, por lo que estamos ante una normalización de la evolución de la productividad.

Por otro lado, en el nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas —parte de la nefasta política tributaria que practica este Gobierno— también vamos a favorecer la adquisición de vivienda, que en España cuenta con unos incentivos fiscales muy importantes. Así, el año que viene los españoles se van a ahorrar por ese concepto más de 2.700 millones de euros, casi tanto como lo que supone la

propia bajada de dicho impuesto prevista para el año próximo. Asimismo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vamos a seguir favoreciendo la salida de un mayor número de viviendas en alquiler a través de incentivos fiscales que estimulen ese mercado, cuyas carencias son importantes, y de lo que el Gobierno es conocedor, motivo por el cual seguimos estimulando la adopción de medidas en ese sentido conjuntamente con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para subsanar ese problema.

Acabo, señor presidente, con la misma reflexión con la que he comenzado mi intervención. No se trata de que el Partido Socialista critique las previsiones de los presupuestos, es decir, las previsiones económicas de nuestro país, puesto que el señor Rodríguez Zapatero en el debate de la ley presupuestos en el Congreso admitió que la economía española iba a crecer durante el año próximo el 2,5 por ciento en términos reales; por tanto, se situó muy en línea con las previsiones del Gobierno. Lo que está detrás de estas críticas a los presupuestos es la intención de que la economía española no registre un mayor crecimiento el año próximo. En definitiva, se trata de una apuesta del Partido Socialista por «cuanto peor, mejor» —mejor para el Partido Socialista— (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Un señor senador desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Hala!*), a pesar de que eso sea negativo para la sociedad española. Si no es así, señorías, suban a esta tribuna y ofrezcan alternativas a la política económica del Gobierno, alternativas a los presupuestos generales del Estado para 2003 (*Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular*), alternativas a la acción de Gobierno de este país, alternativas de las que su señoría, señor Bru, carece por completo, porque tiene bastante con destruir en lugar de crear y ayudar lealmente a la solución de los problemas españoles. (*Un señor senador desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Faltón!*)

Muchas gracias, señor presidente. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor ministro.

Senador Bru, su señoría dispone de cinco minutos en virtud de lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento.

El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.

Señor Montoro, en su falta de pudor parlamentario usted no me va a arrastrar por los terrenos por los que usted suele moverse. A usted le gustan los terrenos cenagosos, pero yo voy a ir al grano. Respecto de la lamentable primera parte de su intervención y de la detestable segunda parte le digo lo mismo que dice aquel tango: «Qué falta de respeto, qué atropello a la razón.» Por cierto, señor Montoro, entra usted en un terreno peligroso, porque usted ha afirmado en sede parlamentaria con luz y taquígrafos que el Gobierno estaba gestionando hace semanas las ayudas del SIDAC, pero dice hoy en prensa que las negociaciones están muy avanzadas. ¿Qué sucede, señor Montoro? ¿Ha visto usted lo que le pasaba a Pinocho? Que le crecía la na-

riz. Usted ha dicho aquí, con luz y taquígrafos, que el Gobierno ya está gestionando las ayudas, y en dos periódicos nacionales dice que éstas se están solicitando y que las negociaciones están avanzadas. ¿Sabe usted cómo se llama eso, señor Montoro? Se llama mentir en sede parlamentaria. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Usted ha mentido en sede parlamentaria, señor Montoro.

Pero dejemos a un lado ese tema, pues insisto en que no me van a arrastrar ustedes por su camino de obscenidad parlamentaria, y vayamos al grano, que son cuatro cosas sobre las que le he preguntado y a las que no me responde, yéndose usted por las ramas hablando de Chindasvinto y de Recesvinto. En primer lugar, los presupuestos son irreales, y nadie, ni siquiera usted, se cree el objetivo del crecimiento. En segundo lugar, los presupuestos son contradictorios, señor ministro. Usted ha dicho hoy mismo aquí que estos presupuestos son el principal instrumento para moderar las tensiones inflacionistas. Yo le niego rotundamente esta afirmación y le desafío a que me diga, si es que tiene usted todavía algo de respeto intelectual a su profesión, si unos presupuestos que suben los impuestos indirectos o tienen los efectos perniciosos de los mismos, que bajan los impuestos directos y que incrementan el gasto son o no inflacionistas.

Nadie le seguirá en esa barbaridad de negar este extremo. Un presupuesto expansivo vía gasto y vía reducción de impuestos es matemática e indefectiblemente inflacionista y usted no tendrá el valor de negarlo en esta tribuna. No tendrá el valor de hacerlo porque no puede, porque sería una barbaridad que en su demagogia no creo que esté dispuesto a cometer. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Por tanto, estos presupuestos no sirven para ayudar a resolver el principal problema de la economía española, que según su vicepresidente de Gobierno es la inflación. Sí, señor Montoro, el principal problema es la inflación.

Habla usted de infraestructuras y nos facilita unos datos. ¿Reconoce usted este papel que le muestro? Lleva un cuño del Ministerio de Hacienda y una firma de la señora Mateas Corchero y tiene fecha de salida del día 4 de diciembre. ¿Lo reconoce? Son datos de ejecución que provienen de usted, de su directora de gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Según estas cifras, en Medio Ambiente figura el 35 por ciento a día 31 de octubre. (*Rumores y protestas.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señorías, silencio, por favor.

Senador Bru, si desea hacer entrega de ese documento al señor ministro, le ruego que previamente lo entregue a esta presidencia para que se lo haga llegar.

El señor BRU PARRA: Sí, señor presidente, en este momento hago entrega de él.

No niegue los datos que salen de sus propias oficinas, señor ministro. Le he dicho que sus datos son irreales, contradictorios, inútiles para resolver la economía española, y

le he dicho también que me da igual lo que diga porque ustedes no ejecutan sus programas, son unos incompetentes. Por otra parte, insisto, hay contradicciones graves en el seno del equipo económico del Gobierno que usted no ha desvelado. El señor Rato le pide a usted unos presupuestos neutrales y usted dice que no, que anticíclicos; el señor Rato pide presupuestos restrictivos y usted presenta presupuestos expansivos. Esto en cualquier Gobierno normal del mundo se zanjaría con una crisis. O usted o el señor Rato sobran en el Gobierno, señor Montoro. (*Fuertes aplausos.—Fuertes protestas.*)

Habla usted continuamente del déficit, del equilibrio. ¿Usted es un ministro y un profesor de economía o es un chamán? (*Fuertes protestas.*) Estamos en una época antropológicamente relativista, chamán no es un insulto. ¿Usted cree que la verdad puede establecerse mágicamente por su simple enunciación y que usted habla aquí de equilibrio, equilibrio, equilibrio y es verdad? ¿Y el déficit? Señor Montoro, preguntas, ¿dónde están los 4.300 millones de deuda de Radiotelevisión Española? (*Rumores.*) ¿Dónde están las deudas de las 23 empresas públicas que ustedes han creado para centrifugar las inversiones? (*Rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): ¡Silencio!

El señor BRU PARRA: ¿Dónde están o de dónde va a sacar los 2.200 millones de euros que van a ser necesarios? Porque como la inflación se va a ir al 4 por ciento, lamentablemente, eso va a costar dos puntos de inflación y eso son, según el señor Camps, 2.200 millones. Como de esa inflación usted tiene la culpa en medio punto, usted es responsable de que los contribuyentes gasten 600 millones más de euros por su política fiscal irresponsable y nefasta (*Rumores.*), porque usted cobra impuestos a todos los españoles y el peor impuesto, el más regresivo, el más antisocial es la inflación. Usted está consiguiendo que todos los españoles cobren un 4 por ciento menos el año que viene (*Aplausos.*), porque si la inflación sube, hay menos capacidad adquisitiva. (*Fuertes rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Bru, le ruego vaya concluyendo, por favor.

El señor BRU PARRA: Sí, señor presidente, termino.

El otro día en el Congreso de los Diputados —veo que le gustan las referencias históricas— aludía usted a la política de don Raimundo Fernández Villaverde. No es su modelo, señor Montoro, su modelo es don Alejandro Lerroux, la demagogia y el populismo, la falta de rigor. (*Fuertes protestas.—Fuertes aplausos.*) Acabo con esto, señor presidente, sigue usted demostrando falta de rigor en sus expresiones. Habla de la vivienda, del tipo de interés y de los costes, pero señor Montoro, ¿usted fija en España el tipo de interés o es el señor Duisenberg? ¿Usted tiene algo que ver con los tipos de interés? Nada. Sin embargo, la vivienda en España cuesta ahora cuatro veces más que cuando ustedes empezaron a gobernar y ahí sí que es usted responsable. (*Fuertes aplausos.*) O sea, usted se viste, se adorna con plumas ajenas porque usted no tiene nada que

ver con el tipo de interés y, sin embargo, donde tiene la culpa, que es en el incremento brutal y especulativo de la vivienda, usted quiere quitársela. Como muestra de su manifiesta irresponsabilidad... (*Fuertes protestas.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Bru, concluya. ¡Silencio, señorías!

El señor BRU PARRA: Y como muestra de sus graves discrepancias con el señor Rato, el señor Rato, que es responsable, sensato y riguroso, aunque no coincido con él, está, como es lógico, más que preocupado, asustado con la bajada de tipos de interés y, sin embargo, usted viene aquí a presumir de una bajada de tipos de interés que va a empeorar nuestros problemas. Señor Montoro, siga por el camino del señor Rato, que es responsable. La bajada de tipos de interés en este momento no conviene a la economía española, incluso han salido planes gubernamentales para enfriar la concesión de créditos hipotecarios porque piensan que esto se va a recalentar demasiado. Lo han dicho ustedes, ¿y ahora usted aquí presume de que están muy bajos los tipos de interés que no son asunto suyo? ¡Explíqueme por qué está cara la vivienda y no por qué está barato el tipo de interés! (*Rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): ¡Silencio, señorías!

El señor BRU PARRA: Señor Montoro, en definitiva, yo creo que está demostrado claramente... (*Un señor del Grupo Parlamentario Popular pronuncia palabras que no se perciben.*) Sí, sí.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Concluya

El señor BRU PARRA: Lo que está demostrado es que usted es una calamidad, una calamidad pública, una plaga bíblica para la sociedad española.

Muchas gracias. (*Fuertes rumores y fuertes aplausos.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): ¡Silencio, señorías!

Señor ministro de Hacienda, tiene su señoría la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.

Entiendo que hemos asistido a la elegancia parlamentaria del Partido Socialista en el planteamiento de este debate. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Su señoría ha acabado como ha empezado, de la misma forma, con el mismo tono elevado de debate parlamentario, y sobre todo ha utilizado los cinco minutos para explicarnos las alternativas del Partido Socialista al gobierno económico de España, señorías. (*Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Ha utilizado los cinco minutos muy inteligentemente, señoría. (*Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

En primer lugar, y en relación con la utilización de los fondos europeos para el «Prestige», hace más de quince

días, exactamente el viernes de hace dos semanas, celebré un encuentro con el comisario Barnier y buena parte de su equipo, encuentro en el que abordamos el planteamiento de los fondos europeos y la posibilidad de su aplicación al caso del «Prestige». El comisario Barnier mostró su mejor disposición para llevar adelante la aplicación de esos fondos europeos y para que, en definitiva, el desastre ecológico de Galicia y de buena parte de las costas cántabras pudiera remediarse con dicha aplicación. Por tanto, lo que nos queda es su materialización, de aquí a final de año; pero insisto en que ese planteamiento nació de una conversación que yo mismo mantuve con el comisario y con buena parte de su equipo presente, y a su vez acompañado por buena parte de mi equipo del Ministerio de Hacienda, señoría. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Por otra parte y en lo que se refiere a la irrealidad del presupuesto, ya he insistido en que todos los pronósticos económicos sitúan a España a la cabeza de la recuperación de la economía mundial, que se producirá el próximo año 2003. Eso también traerá más empleo, y significará la creación de 280.000 nuevos empleos para los españoles en un año en el que tenemos que seguir apostando y fortaleciendo este crecimiento económico.

A la vista de la evolución de la economía de nuestro país y a la vista de la evolución de los precios internos, el Gobierno apuesta por el equilibrio presupuestario como la política fiscal que, por un lado, apoya y estimula las expectativas de los agentes económicos a la hora de promover nuevas inversiones y, por otro, apoya la bajada de los impuestos como mecanismo para estimular el crecimiento económico; apoya el crecimiento de la inversión del país con inversiones públicas; favorece la financiación de la economía del país, puesto que sigue reduciéndose el nivel de deuda pública y, por tanto, en términos netos, el Estado no tomará ahorro de los contribuyentes, ahorro de los particulares, sino que dejará más margen para que nuestras empresas, nuestras familias encuentren la financiación adecuada. Todo ello es coherente con un equilibrio presupuestario que, en definitiva, es la política presupuestaria más correcta para acometer la lucha contra la inflación en España.

Por eso, señorías, no hay ninguna contradicción entre presupuesto expansivo, elementos expansivos y el saldo de un presupuesto que es neutral, como ha celebrado, en su informe sobre la economía española, el Fondo Monetario Internacional. El FMI ha dicho que España está haciendo la política fiscal correcta para reforzar su crecimiento económico, precisamente porque está combinando el saldo presupuestario comprometido con la neutralidad que le exige la evolución económica de España, con los elementos reactivadores que conforman ese ejercicio de expansión económica a través de la bajada de los impuestos, del incremento de las inversiones, de favorecer la financiación de la economía del país, con el control del déficit y con la reducción de la deuda pública.

Entre Fernández Villaverde y Lerroux hay diferencias políticas, señorías, hay diferencias de planteamiento; sin embargo, no hay diferencias políticas entre el Partido

Socialista del año 2002 y el Partido Socialista que gobernaba España en el año 1995, señorías. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Entre ellos no hay ninguna diferencia política; estamos ante la apuesta de la nada. Nos hemos quedado como estábamos antes del debate presupuestario. No sabemos si el Partido Socialista critica los Presupuestos Generales del Estado del año 2003 porque apuestan por el equilibrio, es decir, no sabemos si quieren más déficit, si quieren unos presupuestos con superávit; no sabemos lo que quieren porque sencillamente no tenemos una política presupuestaria alternativa en España, y créanme que lo lamento, señorías. Créanme que lo lamento. El ejercicio de la oposición no es sólo denunciar aquello que está funcionando incorrectamente en un país; el ejercicio de la oposición no es sólo controlar al Gobierno parlamentariamente; el ejercicio de la oposición es ofrecer alternativas a los grandes planteamientos que está haciendo el Gobierno para resolver los problemas de España. (*El señor Laborda Martín: ¡Danos lecciones, Montoro!—Fuerzas protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Y esta mañana, señorías, ha quedado patente la carencia más absoluta del Grupo Parlamentario Socialista...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): ... en cuanto a alternativas al planteamiento presupuestario del Gobierno de España para el año próximo.

Gracias, señor Presidente. (*El señor Laborda Martín: ¡Memoria, memoria!—Fuerzas protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor ministro. (*El señor Caneda Morales pide la palabra.*)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 87, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de cinco minutos.

El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.

Es tal la simpatía que tengo yo por el portavoz del Grupo Socialista que no puedo dejar que vaya tan equivocado por ahí. (*Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Me ha extrañado de su última intervención su afán no sólo porque no sabe, sino porque no entiende lo que le explican, pero es que por más que se lo expliquen no lo va a entender porque tiene otra política, otra visión de las cosas. (*El señor Bru Parra: ¡Es que soy tonto!*) Luego me referiré a las enmiendas y al porqué.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Bru, silencio por favor.

El señor CANEDA MORALES: Se encierran, no ven la realidad y dicen: ¡A ver quién tiene una ocurrencia nueva. Si no, no se explica que pidan 27.000 viajes para mayores cuando van a viajar 500.000 —¿quieren que se deduzca?—; no se explica que pidan una entrada, una subvención para un 10 por ciento en vivienda, cuando está vigente un 11 por ciento; que se considere mayores a los menores de 30 cuando se considera a los de 35. No ven la realidad, no quieren verla, sólo ven los periódicos. Sale otra vez aquí con un titular porque sólo viven para la prensa, y eso no funciona, no funciona. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Además ustedes tienen el valor, el descaro, la... —me callo la palabra— (*Varios señores senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Dilo, Dilo!—El señor Laborda Martín: ¡La osadía!*) de defender su política del pasado, vuelven a recoger a Solchaga de asesor, quien después de hundir la economía española se fue a asesorar a los países sudamericanos, y miren cómo andan, miren cómo andan. (*Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien, muy bien!—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Se empeñan en decir que el primer problema de España es la inflación, y se equivocan, como hace seis años; el primer problema de España es el desempleo, son los españoles, no los numeritos. Y hay que hacer políticas que creen empleo, que creen empleo, pero nunca en su vida han podido ni imaginar una política que con crecimientos del 2 cree un 1,8 de empleo, es decir, que se siga trasladando el 90 por ciento al empleo. ¡No vayan pensando sólo en los periódicos, piensen en los españoles de vez en cuando, para variar! (*Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien, muy bien!—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

No se preocupen porque tenga que revisarse con la inflación la Seguridad Social, va a costar 1.000 millones. Pues pese a esos 1.000 millones sobrarán todavía 2.000 millones más, porque, afortunadamente, esta política permite que los nuevos cotizantes hagan que tengamos superávit todos los años y que no esté en quiebra la Seguridad Social, como su política hacía y volverá a hacer si algún día tienen la oportunidad. (*Rumores.*)

La vivienda —que se puede escoger fácilmente para hacer demagogia y política eminentemente socialista— sube por muchas razones, y venir a decir que es sólo por una es poco inteligente por poco creíble. Señorías, una de las cosas que hace que la vivienda suba es precisamente la subida de precios, es un círculo. (*El señor Bru Parra hace signos negativos.*) Se compra más por la subida de precios, sí, señor Bru. Ahora mismo se están vendiendo 500.000 viviendas; en su época, 200.000. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Y pregunta que qué ocurre realmente: que los españoles tienen posibilidades, tienen dinero barato, tienen empleo, tienen más plazos para pagar y el simple hecho de la confianza en el futuro, de que la vivienda sube, de que hay estabilidad, hace que quiera invertirse, por eso le digo que es la subida lo que está haciendo que se refugien ahí. Y los españoles no son más pobres, como usted dice, no se están empobreciendo, se están en-

deudando justo al mismo nivel —incluso por debajo— que los demás países de la Unión Europea, pero son más ricos porque tienen esas viviendas que antes no podían soñar en pagar, señor Bru; antes no las podían pagar y ahora sí porque tienen empleo.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—El señor Bru Parra pide la palabra.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Bru, el artículo 87 se concede solamente en una ocasión.

Finalizado el debate del veto del Grupo Parlamentario Socialista, suspendemos la sesión hasta las cuatro de la tarde, en que reanudaremos con el debate del veto del Grupo Entesa Catalana de Progrés.

Eran las catorce horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señorías, se reanuda la sesión.

Corresponde debatir a continuación la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Aroz.

La señora AROZ IBÁÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero dar las gracias a los señores senadores y senadoras que nos acompañan esta tarde al comienzo de la sesión.

Mi Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha presentado dos vetos de devolución al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado 2003 y a la ley de acompañamiento. Estos dos proyectos de ley, al contrario de la impresión que podía haber quedado esta mañana de que prácticamente eran rechazados por un solo grupo parlamentario o por una sola formación política, a lo largo de la tramitación parlamentaria han recibido un total de 28 propuestas de devolución entre las enmiendas de totalidad al Congreso y los vetos que se han presentado en el Senado.

Es evidente que la mayoría absoluta da para que sean aprobados estos dos proyectos de ley, pero un rechazo tan amplio debería hacer reflexionar al Gobierno. En este momento veo que se incorpora el señor ministro de Hacienda y agradezco su presencia para escuchar también a la portavoz de este Grupo.

A lo largo de la tramitación parlamentaria hemos asistido a debates importantes, a debates muy brillantes en el Congreso, y también en esta Cámara hemos tenido esta mañana un debate interesante y animado. Prácticamente los principales problemas, las principales objeciones que se plantean por parte de la oposición están ya debatidas a lo largo de este trámite parlamentario en el Congreso y en el Senado, y podríamos decir que todo está dicho, pero, señorías, no por reiterados pierden fuerza los argumentos y cuando hay razones de peso la reiteración viene a reforzarlos.

Presupuestos para 2003. El principal problema de estos presupuestos —y se ha dicho— es su falta de credibilidad por diversas razones. La primera, por el exceso de optimismo, incluso voluntarismo, de las previsiones macroeconómicas.

Y aquí el problema no es, como planteaba esta mañana el Grupo Parlamentario Popular, si es bueno o malo conseguir el 2,5 o el 3. Evidentemente, conseguir el 3 por ciento del crecimiento es magnífico, conseguir el 2,5 también es muy bueno y conseguir, incluso, el 2 es muy bueno cuando se crece a cero por parte de otras economías europeas. Siempre es mejor tener este diferencial.

Pero, señorías, señor ministro, éste no es el problema. Cuando se plantea esta cuestión desde el punto de vista de la credibilidad se está haciendo a la vista del impacto que objetivos planteados y no conseguidos van a tener sobre la consecución de los objetivos presupuestarios. Y éste es, a nuestro juicio, el problema, así como las discrepancias que hay entre lo que se consideran previsiones más ajustadas a lo que es posible conseguir por parte de analistas, de los sectores económicos sociales del país, organismos internacionales, Banco de España, etcétera, discrepancias de todos ellos respecto a las previsiones que realiza el Gobierno en el cuadro macroeconómico como diferencias en los resultados si lo que prevalecen son las primeras previsiones y el impacto que van a tener en la consecución de los objetivos presupuestarios. Y eso plantea una primera incertidumbre, insisto, respecto de estos presupuestos y del cumplimiento de los objetivos presupuestarios.

Estoy de acuerdo, señor ministro, en que las previsiones para 2003 se han fijado en un escenario de gran incertidumbre y que hay dificultad en establecer previsiones acertadas. No obstante, hay que tener en cuenta que a partir del año 2001, coincidiendo con la desaceleración del crecimiento y el aumento de los precios del petróleo ya se han ido produciendo desviaciones en estos dos años que han colocado los resultados por debajo de las estimaciones y esto debería haber hecho extremar el realismo en la previsión de los presupuestos del año 2003.

No se ha hecho. Por el contrario, las previsiones son voluntaristas y en la medida que por tercer año no se cumplan, señoría, señor ministro, tiene que convenir que esto va a producir una pérdida de credibilidad en la política económica y en la política presupuestaria.

Yo no sé si España estará liderando el crecimiento mundial el año que viene. Lo deseo fervientemente. ¡Ojalá, señor ministro! Esto no lo sé, pero sí sé que llevan ustedes fallando ya dos años en sus previsiones macroeconómicas y que la realidad actual cuestiona sus cifras para el año 2003.

El cuadro macroeconómico está basado en tres grandes parámetros: crecimiento del producto un 3 por ciento, inflación un 2 por ciento y creación de 282.000 nuevos empleos. ¿Pero qué nos dicen los analistas? ¿Qué nos dicen los principales expertos del país? Nos dicen sencillamente que, hoy por hoy, no hay razones suficientes para considerarlo probable. Aunque es cierto que la economía española está mejor que otras de la Unión Europea en esta fase bajista del ciclo, las principales variables económicas muestran aún tasas a la baja o negativas sin que se pueda apre-

ciar claramente un cambio de tendencia inmediata o una aceleración.

La tasa de crecimiento del consumo privado, que está siendo uno de los dos motores —creo que el principal motor— del crecimiento económico lleva un año reduciéndose, está creciendo al 1,5 por ciento en el tercer trimestre, pero ha tardado un año en bajar desde el 2,8 del crecimiento del tercer trimestre de 2001 hasta las tasas de crecimiento actuales. Por lo tanto, cuando se invierta la tendencia, que no se ha invertido —porque en el tercer trimestre todavía se ha desacelerado en dos décimas—, es razonable esperar que tarde un tiempo parecido en volver a este nivel del 2,9 por ciento, que es la tasa anual media que prevé el Gobierno.

Ya se ha dicho que tenemos una tasa muy baja —desde 1997 la más baja— y que responde a una desaceleración del empleo, el aumento del paro, la erosión del poder adquisitivo y el endeudamiento de las familias. El año que viene hay medidas para incentivar el consumo privado, habrá una rebaja del Impuesto sobre la Renta, que está estimada en el 12 por ciento, y una bajada de los tipos de interés, que va a reducir el coste de las hipotecas, bajada de interés que todos consideramos poco deseable y poco conveniente para la economía española, y que está pensado más para economías que están en franca recesión. Va a haber más liquidez, pero hay que tener en cuenta, por una parte, que esa reducción del 12 por ciento en el IRPF no va a compensar la inflación acumulada desde la reforma anterior de 1998 y, por otro, también hay que tener en cuenta que la situación de incertidumbre está llevando a las familias a preocuparse más por el ahorro.

En relación a la inversión, la formación bruta de capital tampoco da signos de aceleración, aunque ha avanzado cuatro décimas —y nos parece positivo— hasta el 1,5 por ciento, pero la inversión en bienes de equipo lleva año y medio en tasas de crecimiento negativas —actualmente en torno al 4 por ciento—, y esto muestra la falta de confianza en la reactivación del sector empresarial.

La inversión en construcción es verdad que crece a tasas elevadas, el 4,8 por ciento, pero en cierto modo se considera que está operando como indicador anticíclico, y si crece a un ritmo superior quizá no sería una buena noticia, porque ello vendría a indicar que los otros epígrafes de la inversión se mantendrían por debajo.

El mercado exterior en este momento tiene una contribución nula al crecimiento, la reanimación de las restantes economías europeas no está clara y el retraso en su reactivación afectaría a las posibilidades de que la demanda global de la economía española pueda crecer a ritmos sustancialmente superiores a los de este año. Aquí también hay un problema de competitividad, como se ha indicado, derivado fundamentalmente de la evolución de la inflación.

En cuanto al empleo, las cifras de la contabilidad nacional ratifican las que recoge la EPA para el tercer trimestre, que indican una desaceleración del crecimiento de ocupación; ha aumentado un 1,3 por ciento el empleo neto —y está muy bien la creación de empleo neto cuando estamos en esta situación—, pero estamos hablando de desaceleración del empleo, que en el año anterior, en el

mismo período, creció un 1,9 por ciento. El empleo creado este año asciende a 203.000 nuevos empleos, cifra que representa una disminución de 100.000 respecto a igual período en 2001.

¿Todo esto qué quiere decir? Señorías, el comportamiento de todas estas variables nos indica no hay motivos para el optimismo del cuadro macroeconómico del Gobierno con relación al crecimiento del empleo, y capítulo aparte sería el objetivo de la inflación.

Una segunda cuestión que se plantea mi grupo parlamentario en relación a los presupuestos es si se han hecho desde un diagnóstico correcto de la situación económica, si se han orientado hacia políticas que tiendan a corregir los problemas e impulsar la reactivación, el crecimiento del empleo, la eficiencia de los factores productivos y si nos van a permitir avanzar de manera decidida en la convergencia real con los países en mejor posición de la Unión Europea.

El trámite presupuestario es, sin duda, la ocasión para hacer un diagnóstico de situación, pero es evidente que no se ha hecho. Además, como también hemos podido comprobar esta mañana, el Gobierno siempre muestra una reacción muy a la defensiva, lo que desde mi punto de vista indica falta de confianza. La economía española no está en una situación de decrecimiento, no estamos en un crecimiento cero sino del 1,8 por ciento, todavía creamos empleo y, por tanto, la credibilidad del Gobierno sería mayor si aceptase entrar en una reflexión sobre los problemas actuales. Este diagnóstico no se ha querido hacer, se niegan o minimizan los problemas —como hemos visto esta mañana en el debate sobre la inflación— y, mientras tanto, se van acumulando los problemas sobre la economía española.

Señor ministro, debe preocuparnos que tengamos una inflación del 4 por ciento. Con esta inflación, y siguiendo los criterios de Maastricht, hoy no entraríamos en la Unión Económica y Monetaria. Estamos en un 4 por ciento interanual, con una inflación acumulada del 3,5 por ciento y todo ello cuestiona, sin duda, el modelo económico del Gobierno. Hoy los precios crecen más del doble que la economía, y con relación a la Unión Europea, tenemos un diferencial del 1,7 por ciento, que no puede mantenerse sin riesgo para nuestra competitividad. Esto no lo dice solamente la oposición, también lo cree el Gobierno porque he tenido oportunidad de escuchar en repetidas ocasiones a sus portavoces —al vicepresidente y al señor ministro de Hacienda— que el diferencial no puede superar el uno por ciento y estamos alcanzando casi el doble, señor ministro.

En el debate de los presupuestos no se ha dicho que éste sea un problema grave, sino que incluso siempre se deja caer el mensaje de que podemos estar tranquilos porque nuestra inflación es el reflejo de un mayor crecimiento diferencial; sin embargo, hay coincidencia en que el Gobierno no está actuando sobre las causas reales de la inflación.

Según nos dicen los expertos, el problema de los precios es la falta de eficiencia en el funcionamiento de los mercados. La muestra más clara de esa ineficiencia es la evolución de la productividad, que ha de ser el fundamento

de un crecimiento sostenido y de la competitividad de la economía. En este punto se produce un debate sobre el papel de la política presupuestaria en relación al objetivo de inflación; yo puedo estar de acuerdo con usted, señor ministro, que en relación al problema de la inflación lo que conviene es un presupuesto equilibrado, pero lo que no es admisible es que el Gobierno tire la toalla y, complementariamente, no se tomen medidas para resolver este problema. Las liberalizaciones están paradas, no hay una auténtica liberalización en sectores estratégicos —energía, comunicaciones—, se han hecho reformas que han resultado ineficaces —por ejemplo, en relación con el suelo— y creo que es el momento, tal y como han dicho todos los portavoces —incluso los de los grupos que les apoyan y que apoyan estos presupuestos—, de que tomen medidas para corregir el problema de la inflación.

Quizá la respuesta a esta tranquilidad gubernamental radique en que la inflación permite al Gobierno cuadrar las cuentas. Esta afirmación es un poco dura, pero podría ser la explicación, porque los ingresos fiscales están creciendo al 8 por ciento y no se han reducido gracias a la inflación, ya que el producto interior bruto nominal sigue creciendo al 6 por ciento. A los impuestos, señoría, les da exactamente igual que ese PIB nominal se deba, como ahora, a un 2 por ciento al crecimiento real y a un 4 por ciento a los precios, que a un crecimiento del 4 por ciento y a unos precios del 2 por ciento. El problema es que esta estructura de crecimiento no es sostenible, la economía crece más que la de la mayoría de los socios de la Unión Europea, pero de forma desequilibrada, con mucha inflación.

Y hablando del equilibrio presupuestario, al igual que en los presupuestos de 2002, el superávit del sistema de la Seguridad Social compensa en los presupuestos de 2003 el déficit de la Administración central, que es el 0,5 del PIB. Y aquí se plantean dos cuestiones, en primer lugar, la conveniencia o no de que la Seguridad Social financie el déficit de la Administración Central del Estado y reformas fiscales que supongan la bajada de impuestos, que es lo que está sucediendo. ¿Qué supone esto, señorías? Que un impuesto sobre el trabajo que son las cotizaciones sociales está financiando la rebaja de impuestos generales. Y no nos parece que ese objetivo pueda ser deseable ni para los trabajadores ni para los empresarios ni para la oposición. Y creo que para el Gobierno tampoco debería ser un buen procedimiento para cuadrar el déficit en un país como el nuestro, que todavía tiene, no sé si como primer problema pero sí como primer objetivo la creación de empleo. No es bueno que mantengamos las cotizaciones sociales sin tocar desde que gobierna el Partido Popular. Se han bajado mucho en el pasado para los empresarios y para los trabajadores, y cuando hay un superávit creo que deberíamos pensar en una bajada de las cotizaciones sociales que contribuya al crecimiento del empleo. El superávit debería permitir engrosar el fondo de la reserva, mejorar algunas prestaciones, y rebajar las cotizaciones sociales de manera lineal un punto, que es lo que proponemos en estos presupuestos como estímulo a la contratación laboral.

La segunda cuestión que se plantea con esta compensación del déficit a cargo del superávit en la Seguridad So-

cial, es el trato discriminatorio para las administraciones territoriales. Las administraciones territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos, en cumplimiento estricto de la ley de estabilidad tienen que obligar sus cuentas con un auténtico equilibrio presupuestario. Y algunas comunidades habían pedido razonablemente una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar, una vez que se hace algo que no es deseable, la compensación a cargo de la Seguridad Social del déficit del Estado, que ese superávit sirviera para compensar también el déficit o para el mayor margen de maniobra del conjunto de las administraciones públicas, no solamente de la Administración del Estado. Y algunas comunidades autónomas socialistas habían pedido una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se distribuyera entre las tres administraciones de una manera razonable: un 0,3 por ciento para la Administración central, 0,2 para las autonomías y un 0,1 para la administraciones locales, pero se ha rechazado. ¿Y qué supone esto? Pues una enorme discriminación que perjudica a objetivos de inversión de las comunidades autónomas. Supone colocar a las administraciones territoriales en una situación de desventaja y, además, hay que tener presente que en los últimos meses se han aprobado leyes que implican obligaciones de gasto para las comunidades autónomas, y se ha acordado sin una financiación adecuada. Me refiero a nuevas prestaciones sanitarias, a la ley de calidad de educación o a la ley penal del menor. Insisto, en que estamos colocando al resto de administraciones públicas en una situación de desventaja. Y aquí, señorías, sí que hay que hablar de deslealtad, institucional en este caso, y no cuando la oposición plantea críticas al Gobierno por actuaciones que legítimamente puede considerar ineficaces.

Y sobre esta cuestión también quiero reafirmar la posición inequívoca de nuestro grupo parlamentario en favor de un equilibrio presupuestario. Lo hemos dicho de manera permanente en todas las ocasiones que hemos tenido, también cuando se debatió la ley de estabilidad presupuestaria, pero el Gobierno trata de neutralizar determinadas críticas respecto a dicha ley o al presupuesto descalificando a la oposición, y diciendo que detrás hay una voluntad de aumentar el déficit. No es eso, señorías, pero ustedes no aceptan el debate sobre esta cuestión.

Con la ley de estabilidad presupuestaria nosotros queríamos debatir sobre la vulneración de la autonomía de las comunidades autónomas, y ustedes trataban de descalificarnos diciendo que con la crítica lo que queríamos era aumentar el déficit. Ahora, en el debate de la ley de presupuestos, al referirnos al equilibrio presupuestario, al mismo tiempo queremos hablar de convergencia real, queremos analizar el gasto público respecto de ese objetivo, pero a ustedes ese debate tampoco les resulta cómodo y lo resuelven descalificando a la oposición, como hemos visto esta mañana, diciendo que lo que queremos es el déficit público. No es así, señores del Grupo Popular. Acepte, señor ministro, que pueda haber un debate sobre las prioridades en el gasto.

Nosotros entendemos que en cuanto a la convergencia real, que es un gran objetivo, un gran desafío para nuestro país de cara al futuro, estos presupuestos no contemplan el

esfuerzo presupuestario necesario a través de prioridades claras dirigidas a la convergencia real de nuestro país con los países más avanzados de la Unión Europea en aspectos de productividad y de bienestar social. Y esto, insisto, no tiene que significar un aumento en el gasto público. Puede haber una recomposición del mismo y un establecimiento de prioridades.

Y cuando hablamos de convergencia real hablamos de renta por habitante —que es la variable central de los determinantes del crecimiento, de la dotación de factores productivos, de la eficiencia con la que estos se usan—, hablamos de innovación y de progreso técnico y hablamos de aproximación en los niveles de bienestar social. Y para progresar en la convergencia real, España tiene que mejorar en factores determinantes de la misma a largo y medio plazo.

Como se ha dicho, tenemos déficit estructurales en capital humano y en desarrollo tecnológico, pero no vemos una respuesta adecuada del Gobierno, con objetivos claros y firmes y las medidas oportunas para reducir estas diferencias. Los últimos indicadores de convergencia real son muy claros —ya se han indicado esta mañana, por lo que no los repetiré— y suficientemente explícitos acerca del esfuerzo inversor necesario.

En relación al diferencial en el gasto social, sí quisiera hacer un comentario adicional a lo que ya se ha expuesto. Tenemos un diferencial del 7,5 por ciento en relación al PIB, un diferencial que se ha incrementado en los dos últimos años. Y no son cifras sectarias, ni partidarias, señorías. Son cifras de Eurostat, que nos dicen que el ajuste fiscal que se ha hecho en España para nuestra entrada en la Unión Económica y Monetaria ha comportado una reducción del gasto social.

De todas maneras, desde nuestro punto de vista, esto, aun siendo importante, no sería lo más relevante. Y me gustaría pedirle al Gobierno y al Grupo Popular que fuéramos capaces de debatir esta cuestión desde una posición que no sea la de estar a la defensiva permanentemente. Creo que España debe hacer una reflexión sobre dónde estamos y de dónde venimos. España tiene un retraso de 40 años en el inicio de su Estado de bienestar, que empezó con la democracia. Entre todos, con un gran esfuerzo presupuestario por parte de toda la sociedad española y dirigido por los gobiernos socialistas, hemos desarrollado un Estado de bienestar. El Partido Popular lo ha respetado —creo que esto es de agradecer—, pero no podemos quedarnos en eso.

Cuando mi grupo plantea un debate sobre esta cuestión no es para reprocharles que hayamos bajado dos puntos en relación al PIB sino para decir, señores del Partido Popular, que España debe hacer todavía un gran esfuerzo para tener un Estado de bienestar tan avanzado como el de los otros países europeos, y esto significa esfuerzo presupuestario y buscar un gran consenso en la sociedad española.

Ustedes dicen que el empleo lo resuelve todo, que el empleo es un gran objetivo y nos va a permitir financiar estas cuestiones. Pero además de que el empleo nos va a permitir esta financiación, debemos plantearnos el objetivo de superar todos los déficit que tenemos en gasto social, por-

que tenemos un déficit de 7,6 puntos en relación a la media europea.

En concreto, tomemos para este análisis el caso de otros países de nuestro tamaño o inmediatamente superior. Por ejemplo, en Alemania el diferencial es del 9,6 por ciento y en Francia se sitúa en el 10,3 por ciento. ¿Y no le mueve al Gobierno de España la ambición de que nuestro país tenga los mismos niveles de bienestar que los países de nuestro entorno? Este objetivo debería ser también planteado por el Gobierno y no seguir en ese «laissez faire, laissez passer». Por tanto, nuestro grupo parlamentario quiere destacar que estos diferenciales existen en productividad, en gasto social y que, con ambición, España debe plantearse nuevos objetivos, en primer lugar, en relación a la eficiencia productiva y, en paralelo, para conseguir un bienestar social que sea equiparable al del resto de los países europeos, y aquí entendemos que el esfuerzo presupuestario es insuficiente.

Paso a comentar otro aspecto, señorías, que hace referencia a algo no general, sino que pertenece al ámbito de la comunidad autónoma a la que representa nuestro grupo parlamentario, aunque lógicamente tiene trascendencia para el conjunto de España. Me refiero a la inversión del Estado. En esta materia hay que señalar que la distribución de ésta, una vez más, resulta discriminatoria para algunos territorios. No se trata solo del caso de Cataluña, pero represento a Cataluña y quisiera ceñirme a ello. Se trata del ámbito de las infraestructuras. No se hace un esfuerzo inversor suficiente. En Cataluña, excluido el proyecto del AVE, que trasciende el ámbito territorial y es de interés general, la inversión pública del Estado tan solo supone el 3,56 por ciento de las inversiones territorializadas del sector de la Administración pública estatal, y eso está muy lejos, señorías, de las cifras de inversión estatal necesarias para contribuir a situar a esta comunidad en los niveles de stock de capital público que le corresponderían por su peso, su población, su actividad económica o su contribución fiscal, y en un objetivo que es de todos, ya que el que Cataluña vaya bien le conviene al resto de España. Que Cataluña sea motor económico de España es un objetivo de todos, no solamente propio de los ciudadanos y representantes políticos y parlamentarios de nuestra comunidad. *(El señor presidente ocupa la presidencia.)*

Es verdad que el proceso inversor estatal no ha sido casi nunca satisfactorio. Hay coincidencias sociales en Cataluña sobre la insuficiencia de la inversión pública tanto del Estado como de la Generalitat, pero este proceso ha sufrido altibajos, ha estado más alto otros años, a finales de los ochenta, a principios de los noventa, y en los últimos años se ha producido un descenso muy acusado, una insuficiencia clara que preocupa a los sectores económicos y sociales en nuestra comunidad. Esto se ha intentado paliar a lo largo de los últimos años con enmiendas que hemos ido presentando los tres grupos parlamentarios representados en Entesa Catalana de Progrés. En concreto, el Partit dels Socialistes de Catalunya, tanto en el Congreso como en el Senado, pero fundamentalmente en aquel, lo ha hecho a través de enmiendas y de propuestas apoyadas por el conjunto del

Grupo Parlamentario Socialista. Nunca hemos tenido éxito. Estas propuestas para tratar de superar estas insuficiencias no han prosperado, pero a veces el grupo que apoya al Gobierno, *Convergència i Unió*, ha tenido más éxito y se han aprobado algunas de sus enmiendas.

Quiero destacar en este debate que en los presupuestos para 2002 se introdujeron algunas enmiendas. Desgraciadamente, de esos mandatos del Parlamento para que se hicieran determinadas obras, que eran muy necesarias en Cataluña, no se ha ejecutado ni una, señorías, y es el momento de denunciar este incumplimiento. Por ejemplo, la travesía de Tárrega de la N-II; la rotonda de Rosselló, en la Nacional 230; la travesía de la N-II, en la Junquera y Can Cortró; en l'Aldea estaba prevista la construcción de un enlace entre la A-7 y la nacional 340; por ejemplo, un paso a nivel de Flaçá. Eran una serie de mandatos del Parlamento para que el Gobierno llevase a cabo estas obras que no se han cumplido, y este es el momento de denunciarlo. Este año, quizá para curarse en salud, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* ha presentado bastantes enmiendas. En el Congreso de los Diputados se le han aceptado siete creo por un valor de 14,5 millones de euros, pero quizás para curarse en salud —repito—, estas propuestas de nuevas inversiones se financian con obras que estaban presupuestadas para Cataluña. Es un mal sistema y por eso quisiera pedir que las enmiendas que ha presentado nuestro Grupo y que apoya el Grupo Socialista tuvieran también el apoyo de los senadores catalanes, de los senadores del Partido Popular de Cataluña y de los senadores del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*.

Voy acabando, señorías, y gracias por su atención.

Los presupuestos de 2003, como decía anteriormente, están impregnados de falta de credibilidad, y eso es un problema de primera magnitud porque afecta al clima de certidumbre y confianza que debe favorecer las actuaciones de los agentes económicos.

Además, la orientación de la política económica que contienen no va, a nuestro juicio, en la dirección adecuada para corregir problemas, impulsar la reactivación de la economía, el crecimiento del empleo, en definitiva, para garantizar más bienestar a las familias y a las empresas ni tampoco para avanzar en la convergencia real en términos de desarrollo y bienestar social con los países más avanzados de la Unión Europea.

El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.

La señora AROZ IBÁÑEZ: Por todas estas razones nuestro Grupo propone la devolución al Gobierno de este proyecto de ley de presupuestos y de la ley de acompañamiento, indicándole al señor ministro que en este trámite parlamentario no está prevista la presentación de alternativas, como ocurre con las enmiendas de totalidad del Congreso. Es un trámite exclusivamente de devolución al Gobierno y esto es lo que solicita mi grupo pidiendo el apoyo de las señoras y señores senadores.

Muchas gracias, señor Presidente. (*Aplausos en los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aroz.

Para defender el veto por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Albistur.

El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, tenga usted buenas tardes.

Le digo buenas tardes porque parece que se ha quedado usted sólo con la oposición. (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡No, hombre!*)

No les quiero decir cuántos estaban porque proporcionalmente estábamos más del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés que todos ustedes. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—El señor Molas i Batllori: ¡Sí señor!*)

Señores del Grupo Parlamentario Popular, le han dejado solo al señor ministro. No tienen vergüenza. Ustedes vienen aquí a sacarse la foto, nada más. (*Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.

El señor ALBISTUR MARIN: Así me gusta, que protesten, porque por lo menos se van a levantar de la siesta. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular pronuncian palabras que no se perciben.*)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor ALBISTUR MARIN: Señoras y señores del público que están escuchándonos, vean ustedes lo que pasa. No lean la prensa, vean la realidad de lo que pasa aquí en este país. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Una señora senadora del Grupo Parlamentario Popular: Está prohibido dirigirse al público.*)

Señorías, un poco de calma. No se pongan nerviosos.

Todos los años nuestro grupo, desde el año 1996, viene presentando un veto a los presupuestos generales del Estado. Perdón, desde el año 1996 no, desde el año 2000. La matización es importante porque antes hubo un proyecto de cooperación que no resultó y que después ha terminado en lo que ha terminado.

Estos presupuestos generales realmente no nos satisfacen por actitud política ante el Grupo Parlamentario al que represento, por sus iniciativas, por sus enmiendas, etcétera.

Con este Gobierno y con sus actuaciones debemos marcar distancias. Usted ha dicho, señor ministro, durante una de las réplicas, que están buscando la sociedad del pleno

empleo. Realmente no vemos por dónde la quieren buscar porque cada vez hay más empleo precario, sin más prestaciones y con mayores problemas. Ya hablaremos de eso a lo largo de mi exposición.

Lo importante de todo este tema es que no hay diálogo, no hay posibilidades de acuerdo en nada, ni siquiera de leerse las enmiendas de la oposición. No hay ningún interés en nada. Los resultados de su política, hoy día públicamente expuestos, no nos gustan ni nos interesan. Este es el tercer año que por estas fechas subo a esta tribuna para recordar que los fundamentos macroeconómicos, pensados por ustedes en primer lugar y después presentados por el Gobierno para plantearlos a su vez en esta Cámara, no tienen relación significativa alguna con la coyuntura económica que se está dando en el momento de su aprobación. Ni voy ni quiero entrar en discusión alguna sobre previsiones del incremento del producto interior bruto, tasa de empleo, incremento de la inversión, previsión del crecimiento de los precios o incremento del consumo público o privado. A mi modo de ver todo esto es un debate absolutamente estéril.

Señor ministro, voy a hacerle una pregunta: ¿El momento político y económico en que usted presentó los presupuestos se parece algo al momento actual? Podemos sacar todos los recortes de prensa de las hemerotecas y compararlos. De verdad, señor ministro, con rigor y con seriedad, con la mano en el corazón, ¿presentaría usted hoy estos mismos presupuestos con todo lo que ha sucedido desde que comenzó a presentarlos hasta ahora? Y no me refiero sólo a los indicadores macroeconómicos, a un producto interior bruto que es menor que las previsiones, a una inflación que es mucho mayor que las previsiones, o a las poco optimistas opiniones que sobre el crecimiento de la economía española tienen el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la OCDE, el Banco de España e incluso muchos de los que con sus comentarios halagan las decisiones económicas y políticas del Gobierno. Me refiero sobre todo a que la economía en su conjunto no presenta signos de crecimiento sólido. La opinión de los empresarios muestra más bien signos de duda que signos positivos, y pocos de los denominados expertos son capaces de pronosticar un horizonte con crecimientos positivos y significativos de actividad industrial, del empleo, de la productividad, de la inversión y del ahorro en los próximos meses. Y ¡ajo! porque los próximos meses no están muy lejanos, y ustedes están anunciando que en el primer semestre de 2003 va a haber una reactivación económica, en la que nadie cree salvo el Gobierno.

Señor ministro, estos presupuestos vuelven a ser los del déficit cero, los de la consolidación del equilibrio presupuestario que nosotros —y usted lo sabe muy bien— hemos compartido con usted. Pero eso se ha convertido en una receta aprobada por el presidente del Gobierno que luego, en la rebotica de La Moncloa, se ha transformado en algo parecido a la purga de Benito, algo que debería aplicarse a los imprudentes gobernantes de los países miembros de la Unión Europea. Porque en opinión del señor presidente, extraequilibrio presupuestario, «nulla salus

est», lo cual quiere decir que parece que han encontrado una verdad inamovible. Lo cierto es que países muy próximos, que deciden verdaderamente en la Unión Europea, como Francia, Alemania, Inglaterra e incluso Italia, crecen menos pero tienen una menor inflación y se han decidido por incrementar los impuestos, por crear planes de empleo, por no dejarlo a la voluntad del mercado y por promover la inversión pública.

Cuando estos presupuestos se presentaron, la oposición, incluido por supuesto nuestro grupo parlamentario, planteó el incremento de las partidas destinadas al gasto social. Pero la respuesta no fue negativa solamente en el Parlamento; incluso en los medios de comunicación afines al Gobierno hubo una crítica fuerte y dura a la oposición por plantear estos hechos. Todo ello fue realizado con el aplauso de los corifeos modernizantes —por no llamarles modernillos— de la economía española.

El Gobierno, sin embargo, vergonzantemente —es la verdad—, no ha tenido más remedio que reconocer un incremento en las ayudas a las familias numerosas y madres trabajadoras; no ha tenido más remedio que modificar el decretazo y las medidas laborales; atender a colectivos marginalizados —hoy les llamaríamos inmigrantes—; incrementar el gasto para atender a una inmigración descontrolada; incrementar los gastos de servicios para atender a la seguridad ciudadana; atender a colectivos afectados por lluvias y fenómenos meteorológicos o desastres naturales y atender a las consecuencias de un petrolero que estaba descontrolado. Y además, a las ayudas que ustedes han tenido que entregar y tienen que entregar de forma inmediata a los pescadores y trabajadores gallegos, señor ministro, faltan todavía por añadir las que afectan a las costas, a los pescadores y al sector turístico de Cantabria y Euskadi, si es que Francia no pide responsabilidades ante la Unión Europea.

Además de todo esto, todavía faltan 2.200 millones de euros, cifra que ustedes ha dado y han proporcionado la prensa esta mañana, por el incremento de las pensiones y la adecuación al IPC, sobre el que ustedes habían previsto.

Vuelvo a preguntar, señor ministro, si después del debate de la semana pasada, en el que aprobamos una supuesta rebaja de los principales impuestos directos —y le comenté que volveríamos a hablar de ello—, habría planteado hoy estos presupuestos con los actuales criterios políticos que los fundamenta. ¿Qué proyecto vamos a aprobar? ¿Qué proyecto de presupuestos vamos a aprobar? ¿Para qué sirve todo este debate? ¿Para la satisfacción del partido que ostenta la mayoría? No parece que sea para más. Cumplimos un mero trámite, pero —como trataré de plantear a continuación— no es un debate real.

La actuación política y la gestión del Gobierno se ejecutan al margen de este proyecto. Esto es así, y más que una auténtica política parece una política de parcheo. Se demuestra desde la entrada de los presupuestos en el Congreso y con su debate allí, pero con la entrada en el Senado aparecen numerosas enmiendas que modifican sustancialmente el proyecto y las leyes que lo acompañan respecto al presupuesto anterior. Si esto no es una política de parcheo y no responde al oportunismo de aquello que en cada mo-

mento se comenta y que el Gobierno considera más oportuno para sus intereses electorales, ¿qué es realmente? ¿Dónde se encuentra plasmada la política que actualmente el Gobierno está realizando en estos presupuestos? ¿En qué se parece la política actual del Partido Popular a lo que figura en estos presupuestos?

A ustedes, que tanto les gusta introducir enmiendas a sus propias enmiendas en cada proyecto de ley o en los propios presupuestos, ¿por qué no han aprovechado este debate en el Senado con toda la oposición para traer a esta Cámara, para su aprobación por amplio consenso y con las aportaciones de todos los grupos, las medidas para atender a la comunidad gallega y aquellas necesarias para impulsar el empleo, la inversión, el ahorro, la investigación, etcétera. Ésas sí formarían parte en este momento del debate de lo que significaría el presupuesto para el año 2003 durante los próximos meses. Así, se podría atender la asistencia a la crisis que será necesario plantearse próximamente, y es que hay que reconocer que verdaderamente estamos en una situación próxima a la crisis.

El pasado noviembre, señor ministro, usted presentó un avance de las cuentas públicas del año 2002. No lo recuerdo en este momento pero me parece que se referían a los diez meses del año 2002. Aparte de lo que usted persiguiera con aquella presentación, a mi modo de entender y en base a lo que he leído —leo la prensa, a pesar de que al portavoz del Partido Popular parece que no le gusta que se lea la prensa—, deduje una doble finalidad. En primer lugar, callar las voces críticas sobre los datos negativos de la coyuntura económica referidos al Estado español y un menor crecimiento del producto interior bruto y un mayor crecimiento de la inflación, tema que parece preocupar a los santones de la economía fuera del propio Estado español. En segundo lugar, confirmar la política de equilibrio presupuestario y déficit cero.

Todo ello se hacía mientras el ««Prestige»» andaba a la deriva, las medidas sociales citadas anteriormente eran planteadas y puestas en marcha por el Gobierno y se aprobaba una importante reducción de impuestos directos cuyas consecuencias no conocemos. ¿O sí conocemos esas consecuencias? Porque, o la aprobación que llevamos a cabo hace apenas diez días era simplemente un maquillaje, o ya se había realizado el descuento del coste de esa aprobación. Ése es un tema sobre el que todavía no ha se ha dado respuesta.

¿Para qué sirve entonces presumir de un superávit del 1,25 por ciento —según sus propias palabras— del producto interior bruto, si en la sociedad española cada semana hay necesidades, no nuevas, sino ya existentes, a las que no se atiende? Si algo demuestra, por ejemplo, la catástrofe del ««Prestige»» es que una parte importante de la sociedad gallega y de su prosperidad tenían fundamentos quebradizos que ni la Xunta ni el Gobierno del Estado español se han preocupado en consolidar ni hacer sostenibles. No citamos el empleo, tan enfáticamente creado durante estos últimos años, ya que dos tercios de cada empleo es temporal o precario. No hay más que mirar lo que ha sucedido, porque ha habido situaciones mucho más graves de las ocurridas en el Estado español en Alemania, en

Francia y en Inglaterra. (*El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.*)

Por eso, la pregunta que uno se hace es la siguiente. ¿Para qué sirve plantear tan enfáticamente y con una frialdad, por lo menos analítica, tan manifiesta que el déficit cero es una de las necesidades de la sociedad, y particularmente de la sociedad española? Pienso que es para que los ciudadanos se alejen de las prácticas colectivas, crean menos en el sector público, y para aumentar de alguna forma el desprestigio de la clase política cuando esos ciudadanos ven que no hay respuestas desde el propio sector público. Porque el Gobierno ha hecho todo lo contrario que Alemania durante las inundaciones de este verano, que Francia, cuando nada más ganar la derecha las elecciones se dio cuenta de que había un enorme problema de inseguridad ciudadana, o que Tony Blair —tan amigo del presidente del Gobierno—, quien ha subido los impuestos porque los servicios públicos, arruinados por las teorías de la señora Thatcher, no funcionaban, y esa desregulación ya nada aportaba a la sociedad inglesa.

Nuestro grupo ha presentado enmiendas a los presupuestos para llevar a cabo mejoras legislativas y fiscales. También ha presentado alternativas —que usted pedía esta mañana a un sector concreto de la oposición— para atender a colectivos específicos; y citaré uno de ellos: los autónomos, que precisan de ayudas asistenciales y atención al desempleo. Y ha propuesto asimismo atenciones para inversiones locales específicas, así como impulsar la inversión pública que corresponde al Estado en materias de su competencia en nuestra comunidad autónoma, que afectan a costas y medio ambiente.

Decimos que el Estado debería ejercer como mínimo una función subsidiaria y acompañar la inversión pública autonómica, pero eso no ha sido atendido ni en ponencia ni en comisión. La inversión pública realizada por ustedes en la comunidad autónoma vasca no cubre el 30 por ciento del valor de las competencias que aún se reserva el Estado en el caso de nuestra comunidad. No sólo no se transfieren competencias, sino que no se ejecutan las que ustedes se guardan ilegítimamente, en un incumplimiento manifiesto del Estatuto de Autonomía de Guernica. Se ejerce una acción política de signo negativo, no se actúa, no se ejercen responsabilidades que corresponden al Estado, y como consecuencia de ello se crean problemas. Y ahí están los atrasos en la inversión en obras hidráulicas, como es el caso de la presa de Ibiur, para la que parece que se van a adjudicar las obras, la discriminación de los regadíos alaveses, el plan de reforma del aeropuerto de Hondarribia, o el proyecto de alta velocidad con conexión con Francia, denominado la Y vasca.

Podemos hablar también de investigación y desarrollo. Durante esta mañana se han oído aquí las maravillas realizadas desde el Gobierno, pero realmente —noticia de hoy— tres comunidades reúnen el 75 por ciento de los recursos provenientes de Europa para la investigación y el desarrollo: Madrid, Cataluña y el País Vasco. España aporta el 7,5 por ciento del presupuesto, y recibe el 6 por ciento de los recursos para investigación. ¿A qué se debe este hecho? A que el esfuerzo en investigación y desarro-

llo es bajo y el impulso público timorato, limitado e insuficiente pese a lo que aquí se ha dicho; prueba de ello es que las comunidades citadas por este orden, Madrid, Cataluña y País Vasco, reciben más que su peso en la economía, pero también realizan un mayor esfuerzo público y privado y gastan más en relación a su producto interior bruto.

Ustedes han gastado ya 33 millones de euros en dos cosas absolutamente insignificantes: una, en traer un tanque de Alemania, y otra, en enviar a un señor en representación del Gobierno español, pues no creo que sea en nombre de la sociedad española, a la base MIR. Treinta y tres millones de euros, señorías, una partida muy importante cuando hay dificultades incluso ideológicas para la ejecución de proyectos de investigación con impacto en la vida social y en el bienestar. Estamos hablando de la investigación en células madre, de la participación en el centro de investigación nuclear en Ginebra, de los becarios en situación precaria, de los investigadores en el exterior y de un larguísimo etcétera.

Podría citar muchos temas, pero quiero centrarme en uno concreto que es relevante y que está en estos presupuestos y en las leyes que los acompañan, y es el intervencionismo, cuyo fin no es otro que recuperar un poder que el desarrollo constitucional no reconoce al Gobierno del Estado —y no me estoy refiriendo ahora al caso de la sanidad, que ya veremos qué ocurre con la famosa coordinación—. Consideramos que es exagerada la intromisión en las potestades autonómicas y que se continúa realizando ese marcaje a las comunidades autónomas para resolver los temas de las concesiones de la televisión local. En este momento es preciso recordar que el proceso de otorgamiento de las concesiones respecto de la normativa básica contractual es competencia de los gobiernos autonómicos, y por tanto, ellos son los responsables de fijar las carencias en los trámites a efectuar hasta completar el procedimiento, así como de planificar sus recursos y sus intereses. No es, por tanto, el Estado el sujeto indicado para establecer los hitos temporales en que desarrollar tales procesos.

Señor presidente, señorías, señor ministro, hace pocos días leía un artículo en un periódico en el que se formulaba una pregunta: ¿Quién está al timón? El artículo estaba relacionado con el tema de Galicia y era certero, porque realmente este Gobierno no tiene el control; hay alguien al timón, pero no sabe llevar el barco. Les hemos venido diciendo a ustedes en debates similares a éste que se atribuían la fuente de una coyuntura favorable y de una economía expansiva. El mar les llevaba, pero en la marejada actual ustedes no tienen proyecto ni saben qué hacer en política; yo diría, además, que parece que ni siquiera tengan título de patrón. ¿Está España inmersa en una crisis económica o no lo está? Ustedes se empeñan en decir que no lo está, pero si la respuesta finalmente es afirmativa, si todavía puede haber un empeoramiento de los indicadores de consumo, ahorro, inversión y paro, ¿quién dice que ésta no se va a producir? Si la crisis latinoamericana perdura, si Europa sigue con crecimientos débiles y altos endeudamientos, ¿por qué el Gobierno español no prepara, no presenta, no plantea en estos presupuestos, o fuera de ellos,

pero aprovechando esta oportunidad, un plan de atención ante esa crisis que ya está presente?

Hace muy pocos días el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés hasta el 2,75 por ciento y a este Gobierno le ha costado mucho admitir esta decisión y no ha explicado abiertamente sus razones. Sin embargo, mi grupo piensa que para la Unión Europea en su conjunto y para la sociedad europea la medida es francamente beneficiosa no tanto porque vaya a estimular demasiado las decisiones de los gastos de los consumidores e inversores como de alguna forma y maliciosamente se dice, sino porque supone, a nuestro modo de entender, una importante y significativa disminución de las cargas financieras de las pequeñas y medianas empresas, que son nuestro tejido industrial y de las familias, sobre todo de éstas, que últimamente están fuertemente endeudadas pese a que al portavoz del Partido Popular le parezca que esto es un signo de la riqueza española.

La disminución de las cargas financieras es un elemento esencial para mantener la cuenta de resultados de las empresas en la actual coyuntura y poder liberar renta disponible a las familias, ¿sí o no? Ésa es una realidad y eso es lo que verdaderamente va a ser motor de la economía. El problema para la economía española es que esa bajada puede influir en las tensiones inflacionistas, pero el Gobierno, aunque reconoce que la tensión inflacionista es grave —y usted lo ha dicho aquí por primera vez, antes se lo había oído al señor Rato—, no está preocupado, y nosotros consideramos que el Gobierno no puede quedarse cruzado de brazos, tiene que hacer horas extras para abordar este problema. Quizá sería bueno llevar a cabo alguna de las reformas que los organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, les acaban de plantear.

A mi grupo parlamentario, señor ministro, no le gusta practicar la oposición por la oposición. En nuestras enmiendas hay propuestas alternativas. Si ustedes tienen por lo menos el respeto de haberlas leído, podrían haber encontrado propuestas y acuerdos importantes. Si ustedes no quieren alternativas porque nosotros las proponemos, lo que nosotros queremos es llegar a acuerdos, a diálogo, a que se nos escuche, a encontrar la forma de mejorar, porque para nosotros la convergencia con Europa también es un objetivo, pero no es el mismo objetivo con ustedes o por lo menos ustedes no lo quieren compartir, porque respecto a la diferencia en la convergencia con Europa parece ser que nosotros sí queremos que se reduzca el diferencial de inflación, que haya inversión pública eficaz.

Esta mañana el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista le ha presentado este mismo documento que yo he podido conseguir esta mañana. Esto es preocupante. En el año 2001 todavía queda por gastar el 57 por ciento del presupuesto de inversiones, y en un epígrafe curioso, que se llama resto de secciones, queda el 73 por ciento del presupuesto por gastar. Pero lo mismo ocurre el año 2002, y esto, después de haber oído que en España se invierte, esta hoja que ha sido enviada por el Ministerio de Hacienda y que tenía como destinatario el excelentísimo señor Presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, esta

hoja más vale que no salga en la prensa porque indica lo que es la política inversora del Gobierno. ¡No tenemos nosotros ganas de estar incordiando! Esto es la realidad. En consecuencia, no se nos puede decir aquí que se viene a invertir. Esto es la verdadera realidad. Queremos que haya una inversión pública eficaz. Y queremos que la convergencia con Europa sea sin recortes de prestaciones sociales, sobre todo que afecten al desempleo, a los pensionistas y a la atención al inmigrante, que se realice en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas respetando sus competencias y su representación posible en Europa, impulsando la investigación política y científica y permitiendo que los agentes sociales acuerden y que los medios de comunicación también informen y no se inter venga para forzar sus actuaciones a las políticas que le gustaría al Gobierno que se pudieran ejercer.

Estos presupuestos no plantean una incorporación eficaz de España en los países líderes de Europa, ni preparan a la economía del Estado para las consecuencias de la ampliación, sobre todo cuando va a haber una reducción significativa y muy próxima de fondos provenientes de la Unión Europea. Estas opiniones no las decimos nosotros. En una reciente encuesta realizada por el Instituto Opina, cuando se le pregunta a los ciudadanos españoles sobre si los precios han subido a lo largo de este año diga si son responsables o no los agentes que le diré a continuación, el 72,6 por ciento dicen que la política económica del Gobierno, y los sindicatos, patronales, etcétera, los dejan muy abajo. Cuando se les pregunta si creen que las diferentes políticas que les citaré a continuación influyen sobre la situación económica de España, un 84,5 por ciento de los ciudadanos responde que la política económica de España tiene la culpa o es responsable de la situación económica de España. En consecuencia, no es una opinión sólo de la oposición, sino también de los propios ciudadanos.

Terminaré, señor presidente, señor ministro, diciendo que los presupuestos para el año 2003 —al igual que hemos dicho en años anteriores— parece que flotan sobre la realidad política y económica de este país. Parece que, a la vez, puede aumentarse el gasto social, la inversión pública en infraestructuras, el gasto en investigación y desarrollo, según dicen ustedes, y va a haber más dinero para destinar a la sanidad, ahora que se va a hacer a través de las comunidades autónomas. Parece que este Gobierno ha conseguido el milagro de eliminar, por un lado, los costes en un presupuesto y, a su vez, también incrementar los ingresos; no lo sé. Usted presentó, como he dicho anteriormente, unas cuentas a finales de noviembre que no sé si podrá mantener a finales de diciembre. Todo esto, claro está, tiene sus ventajas políticas, y lo estamos viendo en este caso. Si se aumentan todos los gastos, si se bajan todos los impuestos o parte de ellos, si resulta que el Gobierno no tiene que explicar su política económica, porque tiene una mayoría que le apoya, porque además ustedes desarrollan todas las políticas —según dicen ustedes aquí...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Albistur, le ruego vaya concluyendo, por favor.

El señor ALBISTUR MARIN: Termino ya, señor presidente. Acabo en menos de un minuto.

Ustedes son capaces de hacer la política social, la política del ajuste presupuestario, la política de expansión, la política cíclica —que en estos momentos está en pleno auge—, y cualquier otra forma de política o de ideología que afecte a la plasmación del presupuesto; ustedes son capaces de hacer todo. Además, repito que tienen la mayoría para poder justificarlo. Pero yo sí tengo que decirle, como le decía al principio —por eso no quería entrar en un debate económico, porque realmente no vale para nada—, que el presupuesto del año 2003 no sirve como indicador de lo que sucede en la economía española; más bien parece un monólogo, acompañado por las generalidades de todo lo que se va a hacer y de todo lo que se quiere hacer. La crítica desaparece, no sirve para nada, no tiene valor ninguno; la realidad política se convierte en un paseo casi militar, cómodo, sin obligaciones ni responsabilidad alguna. Pero este procedimiento no es sólo suyo, señor ministro, ni es sólo del equipo económico del Gobierno; es una práctica que tiene el Partido Popular.

Nos hubiera gustado votar a favor del presupuesto, por supuesto que sí; nuestro partido es un partido de Estado, y tiene sentido de Estado —lo hemos dicho muchísimas veces—. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Es un partido que tiene sentido de Estado...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Albistur, le ruego concluya, por favor.

El señor ALBISTUR MARIN: Termino, señor presidente.

Le guste o no a ustedes el término, tiene sentido de Estado; a lo mejor, lo que pasa es que entendemos un Estado mucho más amplio, donde cabe mucha más gente de la que ustedes creen.

Esta propuesta nuestra no va a contar, desde luego, para votar positivamente el presupuesto; va a tener una ventaja: que a nosotros nos va a votar toda la oposición que representa a la mayoría en España.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.

Señorías, se ha comunicado a esta presidencia, por parte del Grupo Parlamentario Popular, que el turno en contra se acumulará para el final, tras la defensa de todos los vetos.

En consecuencia, pasamos a la defensa de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el senador Quintana González y la senadora Boneta y Piedra. Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador Quintana, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor QUINTANA GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, como es de rigor en el debate en que hoy nos encontramos, el Bloque Nacionalista Galego se disponía a efectuar la defensa de los dos vetos que he-

mos presentado tanto a la ley de Presupuestos Generales del Estado como a la ley llamada de acompañamiento. No voy a utilizar el tiempo que comparto con mi compañera Inmaculada de Boneta en repetir la argumentación que sustenta estos vetos. Para ello tendría que volver a insistir nuevamente en la falta de credibilidad de unas cifras macroeconómicas que organismos avalados por el propio Gobierno —y no tanto por el Bloque Nacionalista Galego— se han encargado ya de desmentir, desmintiendo tanto las tasas de crecimiento como de inflación previstas por el Gobierno en estos presupuestos. Tendríamos que hablar una vez más de esa —nosotros consideramos— obsesión del Gobierno por convertir lo que debía ser un instrumento presupuestario como es el equilibrio presupuestario en un fin en si mismo, transformando el déficit cero no en un objetivo, sino en un dogma que además se quiere trasladar a las comunidades autónomas encorsetando aún más si cabe sus posibilidades legislativas y su capacidad de gobierno.

Si hiciéramos esa defensa deberíamos poner de manifiesto otra vez los desequilibrios en inversión territorial que estos presupuestos establecen y que significarán el agrandamiento de la distancia —y su mantenimiento— que aún existe hoy en términos de bienestar y de riqueza entre diferentes comunidades autónomas. Tendríamos que hacer un llamamiento desesperado para que se corrigiese lo que es un precario sistema de financiación de los servicios públicos y nominalmente de la educación, sometida ahora a nueva regulación legal sin que esté sustentada en unos mecanismos financieros que puedan asegurar su viabilidad futura. O tendríamos que oponernos otra vez más a un sistema de financiación de las entidades locales que nuevamente discrimina a Galicia, que reúne en sus 315 ayuntamientos nada menos que 33.000 de los 60.000 núcleos de población que contiene el Estado español, sin que esto sirva para el Gobierno como un criterio básico para la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado.

Haríamos todo esto y no podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque si es cierto que la política tiene carne y huesos, no puede ser menos cierto que tiene que tener sobre todo alma, y su intervención de hoy, señor ministro, demuestra que la política que ustedes practican carece de alma. Sólo así se entiende que en la situación actual usted pueda presentar ante esta Cámara unos presupuestos que en términos de inversión colocan una tasa de inversión por habitante en Galicia de 282 euros, en contraste con la media estatal de 497 euros. Para Galicia, señor ministro, en la situación actual, señor ministro. ¡Que en estos presupuestos que usted presenta —y no de «motu proprio», sino a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular— la única consideración que se haga sobre el caso que tiene atenta a toda Europa y a todo el mundo —a todo el mundo menos al Gobierno español—, la situación de Galicia hoy, sólo sea tocada en estos presupuestos por una enmienda que incluye en ellos la miserable cantidad de 10 millones de euros para atender, según usted dice, a los necesitados de Galicia!

Además, usted ha defendido estos presupuestos, que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular los ha secun-

dado en sus palabras, para atestiguar la necesidad y la conveniencia del adelgazamiento del Estado y la necesidad de caminar hacia un sector público menos abundante.

Señor ministro, el 14 de noviembre empezaba la odisea del «Prestige». Aquel día un barco vetusto navegaba a la deriva a pocas millas de la costa gallega; no había ningún sistema de radar de la Administración del Estado que pudiera fijar su posición; no había ningún sistema de control vía satélite que pudiera indicarle a la Administración del Estado dónde demonios podía estar tal barco. Después de las primeras señales de auxilio, la Administración del Estado tardó 20 horas en enterarse de que había problemas a bordo de un barco, otras 20 horas en aproximarse al mismo. Cuando el barco «Prestige» empezó a perder fuel, en Galicia la Administración del Estado no tenía ningún remolcador que pudiera acudir en su ayuda, no contaba la Administración del Estado en Galicia con ningún barco anticontaminación, con ningún barco capaz de traspasar el fuel del «Prestige», ¡y usted dice que hay que adelgazar más el Estado! ¿Cuánto más quieren adelgazar el Estado? Señor ministro, el Estado no existe en Galicia. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías, por favor.

El señor QUINTANA GONZÁLEZ: Por eso, porque no existe el Estado, el caso del Prestige no es un desastre natural; es la consecuencia lógica de la negligencia política, de una negligencia política que permite sustituir al Estado por los negocios y tratar a Galicia como si se tratara de una colonia de ultramar en el siglo XIX. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Veinte días ha tardado la Armada española en enviar un buque a Galicia, y el primer día que llega lo primero que se hace es convertir la cubierta en un plató para la nueva emisión de un folletín propagandístico gubernamental. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!*) ¿No es esa situación igual que la de una colonia tercermundista en el siglo XIX?

No ha sido un desastre natural porque esto ya ha pasado antes, ha vuelto a pasar ahora y pasará en el futuro si no se toman las medidas necesarias para que así no ocurra, y para eso habría que utilizar el presupuesto general del Estado. Por eso, me parece inadmisibles que en la situación actual usted pueda subir a esta tribuna a defender un presupuesto como éste como si absolutamente nada estuviera pasando.

Yo tengo que pedir disculpas por mi actuación de esta mañana al presidente de la Cámara, a todas sus señorías y al señor ministro porque no es el método gritar desde el escaño —no es el mío, ni lo comparto, ni lo puedo admitir—. Pero me ratifico en el fondo de las cuestiones porque usted, señor ministro, esta mañana ha mentido desde esta tribuna, y eso en política tiene que tener un precio.

Usted no puede decir, como dice, que ya están gestionando fondos europeos cuando hoy a la mañana mismo el portavoz comunitario de política regional, el señor Pierre-Jérôme, ha declarado con toda claridad que no ha habido por parte del Gobierno español de las autoridades españolas, una demanda respecto del fondo de solidaridad, que se han limitado a solicitar el fondo de mareas negras que ya estaba previsto desde el «Erika II».

Y usted, después de la situación que se está viviendo, no sólo no se conforma con no plantear en los presupuestos las medidas estructurales necesarias para que esto no vuelva a pasar nunca más, sino que, además, nos tira a la cara el dinero que le van a dar a los damnificados.

Los damnificados de los que usted habla no significan ni el cinco por ciento de todos los damnificados. Y el dinero que reciban ¡es dinero suyo, de sus impuestos! ¡Sólo faltaba que aún encima ustedes vendieran como una victoria política del Gobierno pagar lo que ustedes han provocado y nada más que ustedes! (*Grandes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

No pueden ustedes pretenderlo cuando ustedes lo han provocado. No pueden ustedes pensar que el desastre económico, social, medioambiental y político se puede solventar con una miseria que nada va a resolver.

Usted, señor ministro, ha defendido hoy aquí un presupuesto indefendible para Galicia y no ha entrado en el fondo de una situación que era necesario analizar y utilizar esta base presupuestaria para colocar las bases que permitan que esto no vuelva a suceder nunca más.

No sé si no lo ha hecho porque no ha querido, porque ni siquiera lo ha pretendido o porque dentro de ese reparto de papeles que usted hace a usted no le tocaba. Quizás le toque entonces hoy por la noche a su presidente, al presidente Aznar, que, lejos de hacerlo en el Parlamento, aprovecha a sustituir el programa «Operación Triunfo» para actuar él como gran espectáculo en la televisión.

Sepan que la credibilidad del Gobierno en este momento es cero y que lo único que se puede salvar es la credibilidad de las instituciones; ¡y en las instituciones democráticas y en la democracia las responsabilidades políticas se dirimen y se pagan con dimisiones y eso es lo que estamos esperando ver, únicamente eso es ya lo que esperamos de este Gobierno!

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Quintana.

Corresponde ahora dentro de la misma propuesta de veto hacer uso de la palabra, por tiempo de 15 minutos, a la senadora Boneta del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, en este momento —ha habido otros durante el debate de presupuestos— hemos tenido la sensación de que estábamos en un debate real y no en un debate ficticio.

En este momento estamos sufriendo en carne viva lo que todos estamos sintiendo, seamos gallegos o no, y lo que realmente preocupa a todo el conjunto del Estado y debe preocupar a todos los ciudadanos del mundo.

A mí me parece que no se pueden diluir en un concepto tan amplio las responsabilidades y, por tanto, habrá que ver quién y quiénes han debido tomar unas decisiones y por qué en este momento estamos hablando de unas cuestiones que afectan fundamentalmente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 y a lo que representa presupuestar que no es sino definir las prioridades y las cuestiones más importantes en las que tenemos una profunda divergencia y, por eso, hemos presentado, en nombre de Eusko Alkartasuna, dos vetos, uno al proyecto de ley de presupuestos y otro al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la llamada ley de acompañamiento.

Digo esto porque esta llamada de atención hacia la realidad a la que acabamos de asistir —la exposición que ha hecho mi compañero de grupo, el senador Quintana— y la que se viene haciendo a lo largo de este debate presupuestario, sin duda en materias más técnicas, nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de no dogmatizar sobre determinados principios que se observan año tras año a la hora de presentar este proyecto de Presupuestos, no admitiendo absolutamente ninguna enmienda de la oposición por parte del grupo que está sustentando al Gobierno, por parte del Grupo Parlamentario Popular.

Dentro de los grandes grupos de conceptos que lleva a Eusko Alkartasuna a presentar esta enmienda a la totalidad, quiero empezar por el final, y es que aunque hubiéramos estado de acuerdo con estos presupuestos nunca podríamos apoyarlos, porque de una forma que resulta hasta sarcástica, el Gobierno que está diciendo que apoya el Estatuto de Guernica, el Gobierno que está diciendo que apoya el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que apoya sus competencias, olvida una vez más en estos presupuestos lo que al País Vasco le corresponde gestionar, ejecutar y políticas que corresponden al País Vasco. Me estoy refiriendo al presupuesto y a la falta de transparencias en políticas básicas como motor de la propia economía y del propio desarrollo del País Vasco como son las políticas de investigación, empleo, incumplimiento de la territorialización del gasto y las inversiones; es decir, ni siquiera se cumple —lo que debería estar previsto— en materia de inversiones en lo que concierne al acuerdo que representa tanto para el País Vasco como para Navarra el concierto y convenio económicos.

Esto es un ejemplo de lo que estamos diciendo, en lo que no me voy a extender demasiado, porque todos los años traemos la misma cuestión y todos los años obtenemos nula respuesta ante esta situación.

Otra cuestión es, por ejemplo, si se está hablando aquí —y en estos presupuestos el señor ministro lo decía esta mañana— de un incremento de los presupuestos destinados a seguridad ciudadana y la necesidad de combatir tanto los problemas derivados del terrorismo como los derivados de la seguridad ciudadana en general y la delincuencia general, hay un aumento importante y, sin embargo, es sor-

prendente que el mismo Gobierno que dice defender esos principios se oponga a un aumento de la plantilla de la Ertzaintza a la que corresponde, en primer término, tratar de estos problemas en la comunidad vasca, además existen unos acuerdos alcanzados en la propia Mesa de Arkaute a los que el Gobierno no da respuesta.

Dicho esto, y es algo que todos los años repetimos, en materia de inversiones —y ahí están las enmiendas a las que ya ha hecho referencia el señor Albistur, que hacen referencia a infraestructuras, a compromisos del Gobierno no cumplidos, infraestructuras de todo tipo, ferroviarias, de puertos, recursos hidrológicos, etcétera, infraestructuras como la de la Y vasca, de la que siempre hablamos, hay toda una serie de cuestiones que desgraciadamente todos los años tenemos que repetir aquí, porque todos los años presentamos enmiendas sobre cuestiones y compromisos no cumplidos por el Gobierno central en relación con obligaciones contraídas o que debe contraer con el País Vasco.

En efecto, quiero repetir algunas cuestiones de las que aquí se ha hablado, que me parece importante reiterar, aunque sea muy someramente.

Esta mañana me parecía que habían pasado meses desde que presentamos las enmiendas de veto que en este momento estoy defendiendo. Me parecía que habían pasado meses por el cúmulo de acontecimientos —en líneas generales no buenos— que han sucedido desde entonces. Nuestros peores augurios o planteamientos a la hora de argumentar nuestro veto en contra de las previsiones que representan estos presupuestos, desgraciadamente, se han cumplido. Estamos hablando de unas previsiones de crecimiento que se han visto mermadas de forma importante porque estábamos hablando de crecimientos cercanos al 3 por ciento y ahora, desgraciadamente —porque no es que estemos contentos de que se hayan cumplido nuestros augurios—, no van a superar el 2 por ciento. En este sentido, estábamos hablando de unos presupuestos que preveían una inflación muy inferior a la que se ha producido y que, lamentablemente, no será menor del 4 por ciento. Nos preguntábamos entonces, y nos preguntamos ahora con mayor motivo, ¿cómo se va a equilibrar el presupuesto? ¿De dónde va a sacar dinero el Gobierno para equilibrar el presupuesto si, por un lado, se va a producir una disminución del crecimiento y, por otro, la inflación va en aumento? ¿Acaso va a reducirse el gasto social?

El señor ministro nos hablaba esta mañana de una situación idílica, de un crecimiento muy importante del gasto social y también del esfuerzo inversor, pero hay que recordar que para que la distancia relativa con el entorno europeo sea menor, deberíamos tener en cuenta que ellos dieron los pasos hacia el Estado de bienestar con veinte o treinta años de antelación. Ésa es una distancia que tenemos que recorrer, acelerando e invirtiendo relativamente mucho más, no ya para acercarnos o para ponernos a la altura de Europa, sino para no alejarnos demasiado; sin embargo, este hecho no se cumple en estos presupuestos porque parece que las previsiones no dan lugar siquiera a que se pueda hacer realidad un tímido acercamiento.

Por otra parte, esa especie de sacralización del déficit cero es una cuestión que realmente no podemos entender.

Solamente unos hechos como los del «Prestige» —derivado de decisiones equivocadas del Gobierno o de los gobiernos— han obligado al vicepresidente del Gobierno, señor Rajoy, a decir que es más importante solucionar o paliar este problema que el mantenimiento del déficit cero; por fin hemos visto algo que pueda mover esta especie de dogma. Aquellos países de nuestro entorno europeo que han tenido problemas de crecimiento económico, como por ejemplo los derivados de la unificación de las dos Alemaniás, han ralentizado su crecimiento e incluso han decidido abandonar el objetivo del déficit cero para el año 2006 y, por ello, no entiendo que hayamos tenido que esperar a que se produjeran estos últimos acontecimientos para que el Estado español haya decidido mover el tema del déficit cero. En cualquier caso, ya veremos si el vicepresidente económico y los ministros competentes en la materia están dispuestos a dar su brazo a torcer.

Señorías, al presentar una enmienda de veto a la ley de acompañamiento, mi grupo quiere hacer referencia a cuestiones que también se han señalado reiteradamente, año tras año. Están aplicando una técnica legislativa que afectaba, aproximadamente, a 59 leyes y que, posteriormente, a raíz de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se han visto incrementadas en otras dos o tres. Por otra parte, y como siempre, no han presentado una memoria económica —o por lo menos no lo han hecho a tiempo—; y, por cierto, también como siempre, hacen una política fiscal cada vez menos redistributiva y más lesiva para las economías menos favorecidas. Es decir, hacen una política fiscal con una mayor incidencia en los impuestos indirectos que en los directos y, obviamente, esto produce una mayor injusticia o una falta de equidad desde el punto de vista social.

Pero, señorías, yo me quería referir también a que desde el Senado el Grupo Parlamentario Popular ha empeorado todavía más la situación. Ha presentado un numeroso grupo de enmiendas a la ley de acompañamiento, de las cuales quiero destacar por su importancia el renacimiento —entre comillas— de una tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso—administrativo. Ustedes justifican esta tasa en diversos motivos, pero en todo caso habría que decir que es una medida absolutamente regresiva. Yo creo que la introducción del principio de gratuidad de la Justicia fue un logro de la sociedad democrática. Y en esta situación parece increíble que ustedes se hayan saltado todas las opiniones y los acuerdos alcanzados con las comunidades autónomas con competencias en la materia. Incluso, si no me equivoco, el Gobierno y las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia deberían tener una reunión el día 11 de diciembre, o sea, pasado mañana, para decidir sobre esta cuestión, pero ustedes ya han presentado estas enmiendas y han modificado una cuestión importantísima, que parece muy injusta y hace renacer algo que se había olvidado y era una conquista de la sociedad y de la ciudadanía democrática. De todas formas, solamente considerar como hecho imponible el ejercicio de la función jurisdiccional, me parece que revela un concepto y es difícil expresar de una forma más burda la calificación de esta tasa.

Tendremos ocasión de discutir sobre estas cuestiones, pero desde Eusko Alkartasuna hemos pedido la vuelta al no texto del Congreso por estas cuestiones y otras relativas a la comunicación, telecomunicación y televisión privada que ustedes han introducido aquí. Y sin perjuicio de entrar en el fondo de la cuestión, debo decir que nos ha parecido muy grave, toda vez que son temas que no pueden colarse de rondón en unos presupuestos y en una ley de medidas, sino que deberían ser objeto de un debate tranquilo y meditado, para que de alguna manera se pudiera buscar el futuro de la comunicación, ya que es importante para la democracia buscar una solución lo más consensuada posible.

Por lo tanto, señorías, dejo planteados estos apuntes por los que desde Eusko Alkartasuna hemos presentado los dos vetos y nuestra mayor oposición, todavía si cabe, a esta ley de acompañamiento. Y termino diciendo que una vez más...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora De Boneta, le ruego que concluya.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Ustedes se han reído cuando algún compañero ha dicho que querían llegar a acuerdos en materia presupuestaria. Todos quisiéramos llegar a acuerdos, pero razonables. Ustedes no permiten estos acuerdos porque no cuellan ni admiten ninguna sugerencia de la oposición, sea buena o mala; basta que sea de la oposición para que ustedes no la admitan.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.

Corresponde ahora la propuesta de veto presentada por don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares, ambos senadores del Grupo Parlamentario Mixto. Para el turno a favor tiene la palabra el senador Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, en principio le agradezco que esté aquí presente escuchándonos a todos. Ha habido dudas respecto a si estaría usted por la tarde, por lo que le manifiesto mi agradecimiento.

En primer lugar, en mi opinión es una pena que año tras año los Presupuestos Generales del Estado se hayan convertido en un trámite burocrático en esta Cámara, independientemente de los rifirrafes, de la discusión o los planteamientos dialécticos, en un acto burocrático.

Señorías, tengo que denunciar —hay que decirlo así— que no ha habido debate en comisión, dada la actitud de querer concentrar y hacer coincidir en comisiones diferentes el dictamen de dos leyes de una especial importancia, muy sustantivas, la ley de presupuestos y la ley de la calidad de la educación. Hay que decir que la expresión de esta actitud fue real. Imagino que usted conocerá, señor ministro, que, aquel día de reunión de la Comisión de Presupuestos, su Grupo, aquí presente, hacía en su momento una rueda de prensa, concretamente, a las 13 horas, y decía,

más o menos: no vamos a aceptar ninguna enmienda porque la oposición no aporta nada. ¡Estupendo!

La pregunta es, señor ministro, si usted me puede contestar: ¿Es esto serio? ¿Entre cientos y cientos de enmiendas no hay una, dos, doce, las que sean, que merezcan la pena, que aporten algo, aunque sean en el sentido despectivo con que la expresión se suele usar en esta Cámara, es decir, enmiendas de campanario? ¿No había alguna enmienda que tuviese la consideración de la mayoría política?

Sinceramente, creo que esta actitud disminuye la democracia, el entendimiento, el diálogo y la propia dialéctica política, porque es imposible que unos sean muy listos y otros seamos muy torpes, hasta el punto de no aportar nada, y, por tanto, el Grupo Popular considerar a las 13 horas del día de la reunión de la Comisión de Presupuestos que no iba a aceptar ninguna enmienda porque la oposición no aportaba nada. Naturalmente, se convierte en un trámite burocrático cuando el grupo mayoritario se limita a utilizar el Senado para meter sus enmiendas, pactar algunas con Convergència i Unió, alguna otra con Coalición Canaria y rechazar el resto. Están en su legítimo derecho, pero es indiscutible que así no se hace debate político. Al menos, no hay el mínimo entendimiento necesario para seguir dando a las cámaras el papel que les corresponde.

Y hay otra pregunta, señor ministro, que también le quería hacer. ¿Se ha preguntado por qué en algunos momentos llega el escándalo con usted? Personalmente, he tenido la ocasión de presenciar ciertos espectáculos en este sentido, pero no lo tome usted a título personal, porque es una crítica política. Quizás sea por el estilo, las maneras o las formas, pero es espectacular. Y de esa manera recibimos habitualmente su mensaje, las palabras de su primera intervención —no me refiero a las respuestas, puesto que es legítimo y lógico que haya debate y fuerza política también en las palabras—. Pero, insisto, desde esas formas recibimos el mensaje de su primera intervención, siempre como una provocación, metiendo el dedo en el ojito —lo digo sinceramente—. Así es, al menos, como yo lo percibo.

Por tanto, ¿viene usted una vez más a explicar solo los presupuestos? ¿No ha venido a hacer oposición a la oposición, buscando el aplauso fácil de su partido, nada más que de su partido? Creo, señor ministro, que no es inteligente actuar de esta manera. Y le presumo inteligente y por eso le doy este consejo, porque no es inteligente actuar de esa manera.

Y por esa vía, pierden ustedes centralidad, medida y equilibrio. Desearía que no fuera así, porque, a fin de cuentas, ustedes gobiernan y, por tanto, sería menester que tuviésemos otro estilo y otras maneras a la hora de enfocar los problemas tanto en este como en otros lugares.

Señor ministro, ¿España va bien? No voy a referirme al escándalo que ha significado el desastre ecológico, medioambiental, económico, etcétera, que ha supuesto el «Prestige», pero es el espejo perfecto para delimitar con toda claridad el nivel de eficacia, entre comillas, y de responsabilidad de su Gobierno. Aquí ya se han dicho muchas cosas, pero cogiendo la hemeroteca de principio a final, a día

de hoy, es un auténtico escándalo y despropósito una cuestión tras otra. Yo me sumo a la propuesta política dada por mi compañero Anxo Quintana, para decir que, cuando se dan estos desatinos tan tremendos solo hay una cosa que se deba hacer: exigir responsabilidades políticas y, por tanto, dimisiones o, al menos, aceptar que ha habido errores profundos en la gestión de esta crisis.

Vaya por delante también nuestra solidaridad con todos los gallegos, por lo que representa para las personas que tienen cara y ojos, todo lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en el futuro. Yo también les reclamo no solamente palabras sino medios presupuestarios para hacer frente, en el presente y en el futuro, a cualquier catástrofe. Por cierto, durante estos últimos días oí decir al presidente Aznar o a algún ministro aquello de: No vamos a tener unos medios esperando a que un barco se rompa y suceda una tragedia. Es lo mismo que decir que, ante la posibilidad de incendios, no vamos a tener mangueras, porque es solo una posibilidad. Es una auténtica barbaridad, señor ministro. Creo sinceramente que usted debería reconocer que existe una mala gestión de esta crisis y, sobre todo, intención de escurrir el bulto, de huir de esa responsabilidad.

En el ejercicio que acaba, quizá sea ésta una de las mayores preocupaciones de la sociedad española, que, además, presiona sobre la solidaridad del conjunto del Estado. En mi opinión, el ejercicio que acaba lo hace enseñando un poco, permítanme la metáfora, la patita del dogma y la soberbia, y le repito una vez más que creo sinceramente que el Gobierno está perdiendo equilibrio y centralidad.

Ha habido otro acontecimiento importante, que hemos debatido en otras ocasiones, que es el de la huelga y, después, de la rectificación. Se dejaron en la cartera algunas cosas y, sin embargo, otras continúan de forma importante, como es el subsidio para los trabajadores del campo. En definitiva, muchas cosas han ocurrido.

Yo le he estado escuchando a usted con atención durante su intervención, y me he permitido, en función de asuntos que no tengo en el veto, sino al calor de este debate y de sus propias palabras, tomar unas notas con respecto a algunas cuestiones muy concretas que reflejan la política presupuestaria y, al menos, algunos comentarios que usted ha hecho de forma altisonante respecto a que, como decía al principio, España todavía va muy bien.

Es verdad que estamos en un contexto económico realmente preocupante a nivel mundial. En Europa hay unos signos de recesión económica, de desaceleración del crecimiento económico, y yo le preguntaría si es verdad o no que existe en este contexto de la Unión Europea y, por tanto, en España, una dependencia excesiva de Estados Unidos en el quehacer y en la orientación económica para Europa. En cualquier caso, desde finales del año 2000, está claro que se ha experimentado una importante desaceleración. Solamente un dato: en el marco europeo, comparado con España, el IPC, que usted ha mencionado, en España está en el 3,5 por ciento, algo más, quizás, cuando terminemos diciembre. En la Unión Monetaria es el 2,1, y en la Unión Europea es el 1,9 por ciento. Son apuntes que he cogido para que usted me responda a una cuestión. Este IPC es el mayor de los im-

puestos, hace perder competitividad y que se empobrecen ciertas capas de la población, porque, como es lógico, con este IPC también surge otro problema, y es que hay cientos de miles de trabajadores que no tienen cláusulas de revisión salarial y que, por tanto, van a perder poder adquisitivo, porque en España ha crecido la economía de forma importante durante un tiempo, ahora se encuentra en un proceso como el que antes he apuntado, pero esta economía que ha crecido durante un tiempo no ha sido beneficiosa para todos o no todo el mundo ha sido artífice de ella por igual, muy especialmente porque ha habido moderación salarial, por ejemplo. Se ha demostrado mucha responsabilidad por parte de los trabajadores y de los sindicatos. En momentos de crecimiento económico, ha habido moderación salarial. Pues bien, en momentos como el actual, este IPC incide de forma directa muy especialmente en los sectores donde no existen cláusulas de revisión salarial, en los empleados públicos y en el salario mínimo interprofesional de manera especial. Por tanto, estamos en presencia de un empobrecimiento de ciertas capas de la población de este país.

La desaceleración económica, iniciada el año pasado, se ha profundizado este año, señor ministro, ¿sí o no? Yo creo que sí, afectando a la tasa de desempleo, que está aumentando. Los datos no son míos, sino del propio Inem y de la EPA.

Señor ministro, el crecimiento de la actividad económica, ¿será o no inferior al 2 por ciento? Los analistas apuntan a que sí será inferior.

La deuda de las familias no sólo ha crecido en relación con el total de la riqueza nacional, sino también respecto a su renta bruta disponible. Se ha pasado del 40 al 77 por ciento. ¿Es verdad o no? Hay un mayor endeudamiento de una forma clara. La gente ha gastado más en momentos de recesión y esa deuda puede influir de forma negativa en un futuro inmediato.

En cuanto a los precios en España, han aumentado un 3,5 por ciento en tasa interanual comparativamente con Europa. La inflación subyacente en el mismo porcentaje, más o menos. De terminar con el 3,5 por ciento el incremento sería superior en un 1,5 por ciento sobre la base de la previsión inicial planteada por el Gobierno,

Señor ministro, en relación con el empleo debo decirle que la temporalidad en el sector público ha pasado del 15,7 por ciento a primeros del año 1996 a suponer el 21,5 en la mitad de este año, es decir, un aumento del 1,6 por ciento. En el sector privado es actualmente del 33,6 por ciento.

En fin, ha bajado muy poco, en mi opinión, a pesar de los incentivos que salen de los excedentes del propio Inem y que van a parar al incentivo empresarial por la contratación indefinida según un acuerdo del año 1997, que no ha funcionado todo lo bien que quisiéramos porque, lógicamente, la temporalidad sigue manteniéndose de forma alta, y usted aquí presume de que ha bajado. Es insuficiente, porque estaba en el 34-35 por ciento y está en el 33,6 por ciento.

En cuanto a la contratación indefinida, señor ministro, deja de crecer en el año 2000, representando el 9,1 por ciento del total de los contratos. Éste es un dato muy im-

portante. ¡Claro que en el año 1995 era incluso ligeramente inferior! Pero es muy poco lo que se ha potenciado la contratación indefinida, que representa, insisto, el 9,1 por ciento.

Por lo que se refiere a la rotación laboral y al encadenamiento de los contratos, ya no le quiero ni hablar. Es un escándalo, hasta el punto de que la Unión Europea ha tirado de las orejas al Gobierno español con respecto a la eventualidad, la rotación y la precariedad laboral en nuestro país, que está muy por encima de la media europea. Es la primera en Europa y, por tanto, hay que tener en cuenta esta cuestión.

Siguiendo con la cuestión del desempleo, desde hace tiempo está aumentando. Se crea empleo malo, pero se crea, aunque también se destruye. En la cesta hay que ver todo, y el desempleo está aumentando de una forma clara. De hecho, el primer semestre de este año el paro había aumentado en un 9,5 por ciento anual, lo que equivale a 179.000 desempleados más, al menos en ese primer semestre.

Si se toman en consideración las cifras de paro registrado, que es un indicador adelantado del paro de la EPA, parece que el desempleo ha aumentado de manera significativa a lo largo de ese segundo semestre que antes comentaba. De hecho, entre septiembre de 2002 —último año disponible— y septiembre del año anterior el paro registrado en las oficinas del Inem aumentó en 101.713 personas. Ha venido creciendo en términos anuales desde finales de 2001 en tasas cada vez más altas, como lo demuestra el momento presente. Por tanto, el paro está aumentando, aunque usted solamente nos diga que aumenta la creación de empleo, y efectivamente, porque con el crecimiento económico experimentado por España y el tirón que eso representa no había más remedio que crear empleo. Ésa es la consecuencia de la situación económica internacional y europea. No obstante, estamos en un momento delicado y es conveniente tomar cartas en el asunto para evitar esta situación.

Señor ministro, cuando nos habla sobre los servicios sociales, la conciliación de la vida laboral y familiar, etcétera, lo que estamos viendo es que la falta de infraestructuras de servicios sociales que ayuden a dicha conciliación es un escándalo. No existe, no hay. Y lo que ustedes pueden hacer ahora es muy poco puesto que tienen que hacer un plan sostenido en el tiempo para crear esas infraestructuras. Ahora bien, yo me alegraré de que rectifiquen para que eso sea una realidad en un futuro.

Señor ministro, países como Francia y Alemania, con una importante red de servicios sociales, tienen una tasa de ocupación femenina alta que se sitúa en el 55 y en el 58 por ciento respectivamente. En cambio, en España, con un bajo desarrollo de esos servicios, la tasa de ocupación femenina sólo supera ligeramente el 40 por ciento, porque la tasa de empleo femenina está relacionada con las infraestructuras de los servicios sociales. La diferencia que se mantiene con la tasa de ocupación femenina, señor ministro, es de 15 puntos en Francia y del doble en España. Señor ministro, en España trabajan 4,5 personas por cada mil habitantes en la prestación de servicios sociales. Este ratio

es el más bajo de los países de la Unión Europea, y hay información al respecto sobre la que no me voy a extender.

Alcanzar el nivel francés, señor ministro — como usted sabe es una meta muy ambiciosa por ser el más alto de la Unión Europea, con 18 ocupados por cada mil habitantes—, supondría tener en España 540.000 puestos de trabajo adicionales para la prestación de servicios sociales. Eso también es una política de empleo. Por eso, cuando por ejemplo este senador presenta aquí una moción en relación con el empleo para personas dependientes, resulta que se rechaza en el Senado, en el Congreso y en todas partes porque ustedes tienen que hacer su política, que desde luego no es otra que no estar pendientes de esos factores esenciales para un país: bienestar, riqueza y modernidad.

¡Y qué decir —hablando de las personas dependientes— de las personas mayores! A principios de 1999 en el Imserso se contabilizaron en España 198.351 plazas residenciales para personas mayores, lo que supone un índice de cobertura del 3,2 por ciento sobre la población total mayor de 65 años. De ellas, algo más de 78.000 plazas son públicas. Según el Imserso, señor ministro, el 28 por ciento de los mayores de 65 años declaran necesitar algún tipo de ayuda o cuidado especial. El perfil de la persona que lleva a cabo el cuidado informal es una mujer adulta, de entre 45 y 64 años. Eso está desapareciendo ya. Es urgente que se hagan unos planes concretos en este capítulo que permitan ayudar a las personas dependientes, sustituyendo, sobre todo, a esas cuidadoras informales por cuidadores formales, por residencias, por inversiones importantes. Se estima en un millón 700.000 las personas que realizan estas tareas de cuidadoras informales. De ellas, más de 700.000 tienen una dedicación media superior a las 40 horas semanales. Son políticas sociales a desarrollar, entre otras, intentar corregir esta tendencia.

Pero, en fin, señor ministro, lo peor que le puede pasar a este presupuesto es que no tenga credibilidad, lo que se consigue con creces en éste que discutimos en este momento por muchas de las cosas que se han dicho aquí. A mí me toca hablar en último lugar y no quisiera repetir nada de lo que ya se ha dicho, pero en algo de lo que se ha dicho me siento reconocido.

Si atendemos a la literatura de estos presupuestos, en 2003 se va a conseguir el equilibrio presupuestario, reducir en 3.000 millones de euros el IRPF sin que se resientan los ingresos públicos y priorizar los gastos sociales y la inversión pública, lo que va a suponer participación en el PIB. Esto es la literatura. Para cuadrar todo esto se formulan unas previsiones macroeconómicas con un optimismo, señor ministro, fuera de lugar: una inflación del 2 por ciento —vamos a ver dónde terminamos con una inflación del 2 por ciento— y un crecimiento real del PIB del 3 por ciento.

En opinión de Izquierda Unida, con la información de la que hoy en día disponemos y según la perspectiva de la Unión Europea y de la economía mundial, son previsiones poco fundamentadas que desvirtúan los estados de gastos e ingresos de estos presupuestos. Pensar, como hace el Gobierno, que nuestra economía va a ser inmune al deterioro económico internacional es caer en la autocomplacencia. Pero también supone desconocer o no querer ver algunas

de las debilidades estructurales relativas de nuestra economía: diferencial de inflación con la Unión Europea, fragilidad de nuestro mercado laboral, peores dotaciones de capital público humano y tecnológico en comparación con otros socios comunitarios y un mayor ensanchamiento de nuestros déficit sociales.

La política fiscal en estos presupuestos no hace nada por corregir estas debilidades, señor ministro, y la neutralidad que proclama el Gobierno puede acabar por convertirse en un freno a un verdadero proceso de convergencia real con Europa. La reforma del IRPF va a ser, según el ejecutivo, uno de los grandes protagonistas de los presupuestos. El problema, señor ministro, es que esta nueva reforma va a operar en un escenario de estancamiento económico y aumento del desempleo, o al menos de desaceleración de la economía.

En estas condiciones, señor ministro, es muy probable ahorrar antes que gastar. En cualquier caso, usted sabe que hemos criticado la reforma del IRPF y que estamos profundamente en desacuerdo con su iniciativa de bajar los impuestos. Es normal, ustedes representan a la derecha y tienen mayoría absoluta para hacer la política que consideren oportuno, mientras que yo sólo represento a una fuerza política pequeña pero constante. Sin duda, hemos atravesado desiertos más importantes que el de ahora y, como tenemos cultura de mayoría, algún día podremos plantear nuestras políticas, que son tan buenas para nosotros como las suyas lo son para ustedes.

En cualquier caso, está claro que los IPC, los IVA y los consumos están perjudicando notablemente y machacando a las capas de población más amplias y con menor poder adquisitivo. A los que tengan menos ingresos les repercute, no la bajada de impuestos, sino el aumento de los impuestos en su conjunto, porque ustedes no hacen progresivo el impuesto directo y aumentan los impuestos indirectos, con lo cual la situación es calamitosa para la mayoría de la población.

Voy a terminar, señor ministro, señorías, porque todo lo que viene a continuación usted ya lo ha escuchado en el Congreso de los Diputados. No quiero repetir los discursos —de hecho, se conocen perfectamente— pero sí referirme a una cuestión esencial y fundamental. La política presupuestaria es el eje central de toda política. A través de los presupuestos, se pueden ver unas voluntades u otras y las formas de acometer las diversas políticas. Desde luego, no estamos de acuerdo pero quiero hacerle una recomendación, señor ministro. Si su Gobierno y el grupo que le sustenta continúa actuando de forma tan prepotente y distante y sigue cometiendo equivocaciones importantes, como el caso de Galicia o la huelga general, estará cometiendo un error de envergadura que la gente tendrá en cuenta cuando concurrámos a las elecciones. Espero que sea así, por el bien de España, por el bien de la mayoría de la sociedad, y porque ustedes, con los ejemplos que aquí se han expuesto hasta ahora, no merecen gobernar. En todo caso, mientras gobiernen asuman la responsabilidad política de presentar estos presupuestos y no atender las demandas sociales de forma urgente, por ejemplo, el actual problema de Galicia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cámara.

Finalizada la defensa de los vetos, corresponde ahora un turno final en contra.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Caneda.

El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente, y gracias a todos, señorías, por su tono moderado y la coherencia al exponer sus posiciones.

Antes de referirme a los vetos me gustaría hacer un comentario sobre la intervención del señor Quintana. Me parece muy lógico que en momentos duros, en momentos de dolor, se hable con el corazón y no con la cabeza, aunque con ello en un principio se puedan formar opiniones equivocadas. Pero creo que todos somos víctimas de esa catástrofe, especialmente los gallegos, y dentro de Galicia, si hay alguien que lo sufre más es el Partido Popular, que es el partido mayoritario. Por tanto, no me sirve que alguien venga aquí a hacerse la víctima y a acusar a la mayoría del pueblo gallego sólo porque hable directamente con el corazón, porque no tengo ninguna duda de que fuera el que fuera el partido que estuviera en el poder: el Bloque Gallego, el PSOE, el Partido Comunista, o el Partido Popular, haría todo lo que pudiera para paliar la situación. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Creo que es mejor hablar de lo peor de la condición humana y de la miseria en los momentos difíciles cuando se enfrían los ánimos, con objeto de que ahora se pueda analizar debidamente el problema. Por ejemplo, hay legislaciones que no puede modificar unilateralmente España. A mí me gustaría muchísimo que no existiera el secreto bancario suizo y el blanqueo de dinero; España lo ha intentado, pero no ha podido conseguirlo. Y ahora, todavía en caliente, ha costado mucho convencer al Reino Unido, Grecia y Holanda para que prohíban los buques moncasco. Con esto quiero decir que las cosas no son tan sencillas, y probablemente algunos responsables y gobernantes del Partido Popular hayan hecho malas gestiones porque eran los que debían tomar las decisiones. No lo sé. No conozco ese asunto tan en detalle como usted. Cuando se solucione este problema será cuando haya que pedir responsabilidades, pero mientras tanto lo que hay que hacer es trabajar y trabajar.

Por lo que se refiere a la cantidad asignada en los presupuestos para paliar esta catástrofe, se ha dicho por activa y por pasiva que se ha aprobado un real decreto en el que no hay limitación económica, es decir, que la cantidad se va a ampliar continuamente para cubrir las distintas necesidades.

Y paso ya a hablar de los presupuestos y del debate que ahora nos ocupa. Siguiendo el orden de intervenciones, empiezo por agradecer, como siempre, a la senadora Aroz su talante y la voluntad de hacer aportaciones. Evidentemente, no compartimos algunas de las cuestiones que usted plantea por razones que quizá se repiten. Cuando se hacen unas previsiones es obvio que se pueden discutir los números, pero lo que no se puede discutir es que hayamos acertado en una serie de medidas que en nuestra opinión

eran las más importantes. Por ejemplo, hemos acertado en la creación de empleo —una prioridad absoluta—, ya que se han creado los puestos de trabajo estimados. Las pensiones tienen asignadas las cantidades previstas, y el fondo de reserva cuenta con más de lo previsto, otra importante prioridad. Por otro lado, el hecho de que el crecimiento en lugar de ser del 2,9 por ciento haya sido del 2 por ciento no ha afectado en absoluto a la consecución de los presupuestos de este año, por los motivos que ya he explicado esta mañana y que luego comentaré.

Hay una cuestión que diferencia a los partidos de izquierda de los partidos centristas, y es la siguiente. ¿Tienen que ser los presupuestos dictados por la coyuntura, o hay que elaborarlos para modificar esa coyuntura? Pues bien, tanto en estos presupuestos como en la ley de acompañamiento se adoptan medidas para influir en la coyuntura y conseguir un crecimiento económico. Y una de esas medidas es el equilibrio presupuestario, pero no como idea fetiche, sino como instrumento para que si España tiene un crecimiento potencial del 2,7 por ciento y, por ejemplo, llegáramos al 3 por ciento, tuviéramos superávit; y de crecer menos podríamos tener algún problema si no fuera porque tenemos esa flexibilidad, demostrada ya en los ingresos por su prudencia. En cualquier caso, señorías, se demuestra que la política presupuestaria está siendo coherente y este año vamos por el mismo camino.

La inflación es preocupante y no he oído al ministro decir lo contrario ni tampoco yo lo he hecho esta mañana. La inflación es un problema, pero, tal y como se ha dicho —y lo reitero—, a la hora de elegir entre inflación y empleo nosotros hemos optado por el empleo. Prefiero una inflación del 3,4 por ciento con la creación de cuatro millones de puestos de trabajo, que una inflación del 2 por ciento con cuatro millones de parados. Ésa es la cuestión, señorías, pero en este momento se nos combate con la inflación y se dice que tenemos unos presupuestos expansivos al tiempo que estamos promoviendo el equilibrio, y yo digo que lo que hacemos es poner el dinero donde creemos que hay más eficacia, en manos de los ciudadanos, mediante la rebaja de impuestos, a la vez que estamos exigiendo a las administraciones públicas que sean buenos gestores para controlar la inflación. Se trata, pues, de dos cosas perfectamente compatibles, tal y como se ha demostrado.

En cuanto al Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés debo decir que si estamos de acuerdo respecto del equilibrio, me parece estupendo. Tenemos distintas prioridades y he dicho que las nuestras son las inversiones, las pensiones y los gastos sociales, pero hay algo que quiero dejar claro una vez más: contablemente los Presupuestos Generales del Estado incluyen a la Seguridad Social, en consecuencia si una de sus partes tiene superávit sirve para cubrir a la otra, pero solamente a efectos contables, porque el dinero de la Seguridad Social no cubre ningún déficit. El dinero de la Seguridad Social está físicamente en la Seguridad Social y se utilizará para fondos de reserva para subir las pensiones más bajas en el futuro o para tener una cuenta corriente en previsión de lo que ustedes quieran, pero desde luego no se empleará para financiar a nadie.

En cuanto a las inversiones, es difícil que cada comunidad no diga que se siente discriminada y que debería tener más; hace ya unos años que hay 17 discriminaciones, todo el mundo se siente discriminado, pero lo cierto es que la inversión en Cataluña ha crecido este año un 23 por ciento, que éstos han sido unos buenos presupuestos para Cataluña y que representan un 3,5 por ciento del total, que es una cantidad razonable. Además de ello, las obras son de interés general, porque casi todas las obras que quedan dentro del ámbito de competencia del Gobierno central son de interés general, pues de lo contrario las estarían ejecutando los ayuntamientos o las comunidades autónomas.

Todos los grupos que han intervenido se han referido al cuadro macroeconómico y en algún caso han hablado incluso de contabilidad imaginativa. Señorías, el cuadro macroeconómico que presentamos está absolutamente claro. Se dice que en los presupuestos se habla de un 3 por ciento, el Fondo Monetario habla de un 2,7 por ciento y el Banco de España de un 2,5 por ciento, es decir, 0,3 décimas de diferencia, que es el argumento que utiliza la mayoría de los grupos y, según parece, la causa principal de la presentación de los vetos; y también se habla de la contabilización. Señorías, aquí no tiene nada que ver la contabilidad nacional. Si existen letras a 18 meses, los presupuestos recogen los gastos de los intereses, que están contabilizados ahí, pero en la contabilidad nacional se recoge exclusivamente lo que correspondería a cada uno de los meses y consecuentemente no coinciden, pues uno contabiliza los pagos y el otro los devengos. Ésa es, señorías, la causa de esas diferencias y el motivo de que no coincida la necesidad de endeudamiento con los gastos.

En cuanto al veto expuesto por la senadora De Boneta, ya he explicado el superávit de la Seguridad Social y no del Estado y digo que es lo mismo, además es lo primero que figura en el Título I, Capítulo I, artículo 1, los organismos que componen los Presupuestos Generales del Estado, entre los que se encuentra la Seguridad Social. Quiero aclarar, además, que el dinero no cambia de mano. Por otra parte, ya me he referido a la estimación del crecimiento, que también exponía la senadora De Boneta. Para nosotros además hay algo adicional: poner un 3 por ciento, que parece que no se ve muy bien, tiene una función. En mi opinión, los Presupuestos Generales del Estado deben tener una autoexigencia, deben crear unas expectativas. Yo pienso que es bueno que el Estado se autoexija para ello toma medidas que pueden ser compartidas o no, pero toma medidas para aumentar el crecimiento, como son el incremento de las inversiones y la bajada de impuestos, lo cual aumenta el consumo. Se puede equivocar, pero como hasta ahora no ha salido mal, sigue haciéndolo.

En cuanto al déficit cero, se ha hablado de que otros países que son mucho más desarrollados, como Alemania, no lo respetan y que de hecho en el pacto de estabilidad —y lo ha recalcado— hay una recesión. ¡Pero si es que yo estoy de acuerdo! Si hubiera una recesión, automáticamente vendría un déficit. Lo que ocurre es que la situación de Alemania no es la situación de España en este momento, Alemania sí está teniendo problemas de cuasi recesión, Alemania está estancada, Alemania ha tenido que anunciar

una cascada de incremento de impuestos porque tiene serios problemas. España en el momento actual, por haber dado respuesta a las políticas de los últimos años, sigue creciendo un 2 por ciento, que no es una recesión, sino una desaceleración y para controlarla se intentan adoptar medidas en estos presupuestos. Así pues, como creemos que el equilibrio presupuestario es un arma para evitarla, es por lo que, en nuestra opinión, hay que adoptar medidas. Respecto a la convergencia real, en la medida en que todas las estimaciones que se han manejado nos dan entre punto y punto y medio más de crecimiento de la Unión Europea, seguiremos convergiendo en renta por lo menos un año más, y yo creo que más.

Las tasas judiciales —cuestión que puede ser opinable— básicamente se suprimieron por su difícil manejabilidad —no existía entonces la telemática y la informática como ahora y generaba corrupción en los juzgados— y hoy aparecen sólo para las grandes empresas. Me parece mucho más justo que el gran usuario de la justicia cargue con ello en determinados procedimientos —no la persona física, ni las ONG—, y no que paguemos entre todos a los que se benefician de ese alto uso de la justicia. En esas condiciones han quedado recogidas en los presupuestos.

El señor Cámara entra en el debate de impuestos directos e indirectos, debate sobre el que tenemos opiniones distintas, por lo que nunca le voy a tratar de convencer. Lo que sí le digo es que los impuestos directos e indirectos actuales y los de hace doscientos años no son los mismos, ni los impuestos directos que había en 1995 en España eran progresivos, ya que había un momento en el que los que tenían mucho dinero no pagaban impuestos, a lo sumo el 35 por ciento. Sin embargo, ahora los indirectos no tienen una tasa única, sino que hay un 4, un 7, un 16 y cuando hay impuestos especiales que gravan vehículos de lujo pagan más los que consumen más, los que tienen más dinero; es decir, hay una cierta progresividad en el impuesto indirecto moderno que antes no existía y hoy se rebajan los impuestos poniendo un especial énfasis en las clases menos favorecidas. Usted tiene su criterio, pero permítame que yo crea que este sistema moderno es mucho más justo que el que existía anteriormente.

Usted, como es lógico, en función de su ideología, tiene una fe ilimitada en el gasto público y yo le pongo muchos matices por la prueba de la evidencia, que es la que más me convence: Japón lleva diez años intentado salir de la crisis con gasto público y con déficit y no lo consigue. Los países que han apostado en Europa por el déficit no lo han conseguido y ya le digo que no sacralizo el déficit. Eso es lo que distingue a unos dirigentes de otros, saber elegir en cada momento la política, y la política que ha elegido en este momento este Gobierno y los presupuestos que nos presenta ha sido la adecuada y sigue siendo la adecuada en las circunstancias actuales, donde la característica fundamental es la incertidumbre y esto crea certeza de que la Administración Pública va a intentar administrarse con rigor.

Se ha hecho alusión a la falta de transparencia, pero yo creo que, con la cantidad de información que se ha dado, con las páginas web que existen en el ministerio, con las

comparencias que se han ofrecido por secciones de los secretarios de Estado, que algunas ni se han utilizado, si al final ha habido falta de transparencia, es porque no se ha trabajado lo suficiente, desde luego no ha sido por voluntad del ministerio.

El senador Cámara también hacía referencia a la Seguridad Social. Espero que le quede claro que la cuenta corriente de la Seguridad Social no tiene por qué estar a cero. La Seguridad Social tiene unos ingresos y tiene unos gastos, al final queda un superávit, que pagará con creces el 2 por ciento que se ha fijado, quedarán 1.200 millones para el fondo de reserva, y además quedará un dinero en la cuenta corriente, que se decide cada año en los presupuestos, y no tiene por qué preguntarse constantemente qué pasa con ese dinero. Haga su señoría una pregunta sobre el saldo y sobre cómo se remunera, porque el dinero de funcionamiento debe estar ahí.

Usted no se cree que vaya a crecer la economía si se bajan los impuestos y se aumentan las inversiones. Volvemos a lo mismo: es que no hay que preguntarse eso; es al revés: como aumentan las inversiones y como bajan los impuestos, crece la economía. Hay una barrera, y no nos entendemos. Creemos que lo que hace el presupuesto es estimular el crecimiento, y no hay que preguntarse por qué. Cada vez que se han bajado los impuestos, se ha recaudado más; ha funcionado. Hemos bajado el Impuesto sobre la Renta, ha bajado la plusvalía y se ha recaudado más en un caso y muchísimo más en el otro, y eso estimula la economía. ¡Claro que no somos inmunes a la recesión mundial, cuando se nos dice que hacemos los presupuestos sin tenerlo en cuenta! Si el sector exterior aportase un par de puntos al crecimiento, en lugar de poner un tres pondríamos un cinco, y en lugar de crear 280.000 puestos de trabajo crearíamos 500.000. El sector exterior nos afecta, entre otras cosas porque España es la segunda economía más abierta del mundo, después de Canadá, y claro que nos afecta; igual que nos afecta la recesión de Alemania porque vienen menos turistas y porque es uno de los países a los que más exportamos nuestros productos.

Termino refiriéndome a la ley de acompañamiento, ya que todos coinciden en que no es una buena técnica legislativa; yo he dicho que tampoco soy un entusiasta, pero creo que es necesaria, porque hay medidas que se tienen que recoger ahí. Se critica porque la Constitución Española prohíbe expresamente que se creen tributos, en el artículo 134, cosa que es cierta, pero se prohíbe que se creen en la Ley de Presupuestos, no en la ley de acompañamiento, que para eso se hizo por el Grupo Parlamentario Socialista en 1993; es una ley que asume directivas comunitarias, que tiene mejoras técnicas y que recoge acuerdos.

Hay una parte especial que ha sido tratada por el señor Cámara y también por la señora Aroz. Nosotros tenemos mayoría, aprobamos los presupuestos con el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y de Coalición Canaria, lo que significa que el 75 por ciento de la cámara los aprueba, y aunque haya 5, 6 ó 24 grupos minoritarios que hayan presentado vetos, la verdad de la democracia es que el 75 por ciento de la Cámara los aprueba, y no se han elaborado sólo por el Partido

Popular, porque, como he dicho esta mañana, es difícil encontrar unos presupuestos donde los apartados más importantes de gastos, empezando por las pensiones, las transferencias a ayuntamientos, las transferencias a comunidades autónomas, los gastos de personal, la justicia, estén consensuados con los afectados; luego no es un presupuesto que se haya elaborado de forma unilateral, sino que se ha negociado con todos los sectores para llegar a un presupuesto final que, a lo mejor por estar tan consensuado, por estar tan trabajado, da los resultados que ha dado y los que esperamos que dé en los ejercicios sucesivos.

Nada más y muchas gracias. (*Aplausos en los escaños de Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.

Corresponde ahora la palabra al señor Ministro, si desea intervenir. Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos llevando a cabo el actual debate de presupuestos del Estado en medio de una situación muy grave vivida en Galicia, por la sociedad gallega, y extendida en buena parte a otros litorales de la costa española. Ese planteamiento ha dominado mis primeras palabras, mi primera intervención, en la que he dicho que gracias a un equilibrio presupuestario hoy podemos dotar al desastre ecológico de Galicia de los recursos presupuestarios necesarios para compensarlo. He hablado también de que hoy comenzaban a percibir las ayudas los directamente afectados, señorías, y eso es verdad, hoy están empezando a recibir esas ayudas los directamente afectados con una celeridad y con una agilidad como nunca se había dado antes en ninguna crisis de esta naturaleza. He hablado también de que se han iniciado las gestiones con la Unión Europea para dirigir la totalidad de los fondos europeos, para contrarrestar los efectos económicos y compensar al menos económicamente el desastre ecológico que ha provocado esta situación. Esta mañana he descrito a la Cámara las conversaciones que yo mismo tuve con el comisario europeo de política regional, el señor Barnier, nada más iniciarse la crisis del «Prestige» para garantizar precisamente que esos fondos llegarían a Galicia con la celeridad y con la agilidad pertinentes.

Por tanto, señorías, Galicia va a recibir la solidaridad de España, Galicia va a recibir la solidaridad de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, Galicia va a recibir la solidaridad de Europa, y esa es la única verdad que se ha escuchado esta mañana en esta Cámara, la única verdad que ningún senador ha podido contradecir cuando ha exhibido aquí unas declaraciones absolutamente artificiosas (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) que se refieren a la gestión formal del fondo de solidaridad, señoría, se refieren a la presentación cuantitativa de la demanda de ese fondo de solidaridad, no a negar ninguna de las afirmaciones que ha hecho el Gobierno de España esta mañana desde esta tribuna.

El Gobierno de España está con Galicia, está apoyando a Galicia, está poniendo a disposición de Galicia los Presupuestos Generales del Estado del año 2002 y pondrá los del año 2003, y puedo garantizar a la Cámara esta tarde que no habrá ninguna carencia presupuestaria para atender la catástrofe que está viviendo Galicia, señorías. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Por tanto, menos demagogia desde esta tribuna, señoría, porque hacer política sobre el dolor, hacer política sobre el sufrimiento, ¿cómo se denomina esa clase de política, señorías? ¿Es política sólo de la demagogia o es política de otra clase de caridad, de otra clase de condición, señorías? Y eso es lo que se ha venido a hacer a esta Cámara esta tarde por parte de algunos senadores. Una cosa es estar en la oposición y otra es estar ayudando con lealtad al Gobierno de España cuando el Gobierno de España está haciendo frente a situaciones como las que estamos viviendo. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Fueres rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Por tanto, ya está bien de hacer demagogias baratas, ya está bien de hacer políticas de las que he tratado de evitar el calificativo hasta ahora, señorías, pero son auténticas políticas de coyotes del desierto (*Fueres protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista*), políticas de perros del desierto. Ya está bien, señorías. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Vamos a hacer una política constructiva para el país en un momento en el que el país lo necesita, señoría, necesita de ese apoyo de la oposición y no de discursos como los que se han escuchado esta tarde desde esta tribuna de oradores del Senado de España. (*Fueres protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías, por favor. (*El señor Pérez Sáenz: Nos ha llamado coyotes.*)

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Coyote u otra cosa, otra cosa. (*Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías.

Senador Bru, le ruego que tome asiento, por favor.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): La opinión pública sabrá poner a cada uno en su sitio, señorías, una vez que se seren los acontecimientos y una vez que se sienten las condiciones objetivas sobre las que se está actuando. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Las críticas de esta tarde a los Presupuestos Generales del Estado se resumen en materia de la credibilidad de los mismos. Estamos en el ejercicio normal de la oposición democrática; la oposición, por sistema, no se cree los presupuestos que trae el Gobierno a la Cámara. Eso se puede

explicar, se puede justificar diciendo que no se coincide con el objetivo de crecimiento económico, pero en realidad cada uno de los portavoces tiene una razón política para oponerse a los presupuestos desde sus propias posiciones políticas, que están claramente definidas por cada uno de ustedes. Por tanto, entrar en un debate de credibilidad de los cuadros macroeconómicos, es un debate hasta relativamente superfluo.

Nadie niega que España está a la cabeza del crecimiento de la economía mundial en el año 2002. Nadie puede negar con un mínimo de seriedad rigor que en España se está creando empleo al ritmo de tres y cuatro veces el ritmo de creación de empleo de la Unión Europea, y nadie puede negar que todos los pronósticos económicos para el año 2003 anuncian una recuperación de la economía; todos apuntan a que España va a estar a la cabeza de ese crecimiento económico y todos, por tanto, apuntan para que el año 2003 vuelva a ser un año de importante creación de empleo, además de reducción de la distancia que nos separa de los niveles de desarrollo de los países más avanzados de la Unión Europea, señorías. Esas son las verdades que hoy están en la escena económica dentro y fuera de España.

Algunas de sus señorías ha hablado aquí de recesión económica. Si estar creciendo en torno al 2 por ciento y estar creándose 200.000 empleos en toda España es recesión económica, a lo mejor es que algunas de sus señorías tiene que despertar su talento, su ingenio político por otras vertientes, puesto que por la del campo económico no es precisamente por la que más experto está, como ha sido el caso del senador Albistur. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Rumores.*)

El senador Albistur ha dicho que no a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, y tiene sobradas razones, como ha explicado. Efectivamente, el Partido Nacionalista Vasco es un partido de Estado, sólo que es de un estado que no cabe en la Constitución Española, señorías; ése es el problema del Partido Nacionalista Vasco, que es un partido de Estado que no cabe en la Constitución Española. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Ésa es la auténtica razón por la que su señoría presenta este veto a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado. Ésa es la posición política del Partido Nacionalista Vasco que es muy distinta a la que tenía cuando el Partido Nacionalista Vasco apoyaba a los gobiernos del Partido Popular que presentaban presupuestos que están exactamente en la misma línea (*El señor Albistur Marin: ¡Antes!*), presupuestos de equilibrio presupuestario, presupuestos de fuerte inversión pública, presupuestos de protección social, presupuestos de creación de empleo, presupuestos de reducción de impuestos. Ésos son los mismos presupuestos que vienen a la Cámara para el año 2003 y esos son los que en su día apoyó el Partido Nacionalista Vasco y hoy, si el Partido Nacionalista Vasco nos los apoya es el Partido Nacionalista Vasco el que tiene que explicar por qué no apoya esos presupuestos, señoría. (*El señor Albistur Marin: Se lo he explicado, pero usted no oye.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, senador Albistur, por favor.

Continúe, señor Ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Es el Partido Nacionalista Vasco el que ha cambiado radicalmente su posición política, y eso es lo que tienen que explicar a los vascos y al conjunto de los españoles, y no subir aquí a hablar de recesión económica, a hablar de vetos a los presupuestos sobre criterios que no están en estos presupuestos y que son los mismos que un día su señoría y que su grupo parlamentario apoyaron con decisión cuando venían a esta Cámara. (*El señor Albistur Marin: ¡Eran mejores!*)

La señora Aroz ha hablado también de esa falta de credibilidad de los presupuestos, de esas previsiones que califica de voluntaristas, y ha reconocido en definitiva que España está y va a seguir liderando el crecimiento de la economía mundial. Eso es verdad porque estamos a la cabeza del crecimiento de la economía europea y a la cabeza de la economía mundial, por mucho que a algunas señorías del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto les disguste esa situación, pero la realidad es la que es y es la que están viviendo los españoles después de cinco años de crecimiento continuado. (*Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadores Díaz Sol y Fuentes Gallardo, guarden silencio, por favor. Continúe, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Tenemos un problema en la inflación diferencial, efectivamente. Tenemos un problema al que dan respuesta unos presupuestos equilibrados, señorías. Es decir, frente a un problema de inflación, la única acción que tiene el Gobierno es precisamente equilibrar sus presupuestos, sanear las cuentas públicas como respuesta de la política presupuestaria a la situación de excesiva inflación de nuestro país. (*El señor presidente ocupa la Presidencia.*)

Por lo tanto, estos presupuestos son los correctos para una situación que el Gobierno califica de delicada en materia de inflación, reconociendo que la inflación es fundamentalmente un acontecimiento monetario y que corresponde al Banco Central Europeo arbitrar la política monetaria para el conjunto de la zona euro. Por tanto, desde las políticas nacionales tenemos que dar una respuesta; y ésa es la razón de plantear unos presupuestos equilibrados para el año 2003.

Quiero también dejar claro ante la Cámara lo que ya ha dicho el senador Caneda esta tarde aquí. El presupuesto de la Seguridad Social no financia al Estado en absoluto, señoría. Es incorrecta la expresión que ha utilizado su señoría. (*La señora Aroz Ibáñez: ¡Comparte!*) No hay un sólo euro del superávit de la Seguridad Social que sirva para financiar las cuentas del Estado. Lo único que ocurre es que en la Administración central del Estado se compensa el signo negativo del Estado con el signo positivo de la Seguridad Social. Eso da como resultado el equilibrio presu-

puentario que el Gobierno presenta a la Cámara, un equilibrio presupuestario resultado del superávit de la Seguridad Social.

El tener a la Seguridad Social en superávit es realmente positivo para la sociedad española, porque eso da confianza para los pensionistas del presente y da confianza para los pensionistas del futuro, y esa situación de superávit permite seguir avanzando en la mejora de las prestaciones básicas de la Seguridad Social como hacen los presupuestos del Estado que prevén un incremento de las pensiones de viudedad del 8 por ciento para el año que viene y un incremento de las pensiones de menor cuantía claramente superior a la de la inflación para el año próximo, de forma que seguimos avanzando también en hacer que nuestro sistema de prestaciones sociales sea más equitativo y más justo.

Decía la senadora Aroz que el Gobierno no ha querido convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir estas cuestiones. No es así, señoría. Le han informado mal. El Gobierno convocó la reunión preceptiva del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde tratamos del objetivo del déficit de las comunidades autónomas, que estaba trazado desde el objetivo de déficit del Estado y el superávit de la Seguridad Social. Por tanto, ese Consejo se celebró en la primavera pasada y se abordaron todas estas cuestiones.

También se celebró un Consejo dedicado precisamente al impacto de la rebaja del IRPF sobre nuestras comunidades autónomas. Es verdad que luego determinados gobernantes autonómicos socialistas han pedido que el Consejo vuelva a tratar de las mismas cosas que se han tratado ya en los consejos celebrados, pero esa es una política de gestos públicos sin contenido y, en definitiva, una política que buscaba aunar a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista en la búsqueda de un mayor déficit público para el año próximo. Ése fue el objetivo declarado de esa supuesta convocatoria y para eso se hizo —insisto—, liderada por el portavoz económico del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, el diputado señor Sevilla.

Y en materia de prioridades de gasto, por supuesto que la oposición puede y debe tener criterios distintos, pero la política del Gobierno es hacer una apuesta donde la gran mayoría del gasto es el carácter social y crece un 8 por ciento. La inversión pública crece un 14 por ciento. Se rebajan los grandes impuestos del Estado, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que se reduce el año que viene 3.000 millones de euros. Cuando se reduce ese Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas lo que estamos haciendo es bajar la presión fiscal sobre los salarios en España y bajar la presión fiscal sobre las pensiones en España. Estamos liberando renta disponible para las familias y estamos inyectando, en definitiva, recursos económicos a nuestros ciudadanos.

Esa es la política que es rechazada por la oposición, ciertamente. Ésa es la política que el Grupo Parlamentario Mixto del Senado también rechaza. Lo ha dicho el senador Cámara en su intervención rechazan la reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el año

próximo. No se preocupen los contribuyentes españoles, que vamos a bajar el impuesto con independencia de que su Grupo político rechace la bajada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Le diré también al senador Cámara que este Gobierno dialoga políticamente hasta el punto de haber llevado adelante el acuerdo de financiación autonómica, el acuerdo de financiación local, acuerdos en materia del concierto económico vasco, como nunca antes se había conseguido, señor senador; nunca antes se había conseguido la agrupación de todos los votos en los diferentes órganos de representación de los gobiernos autonómicos y municipales para traer leyes a tramitación parlamentaria completamente consensuadas; consensuadas —como ocurre con las haciendas locales— con Izquierda Unida, pues su grupo ha consensuado también con el Gobierno la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas. En efecto, esa bajada de impuestos parece que le gusta más a su señoría o a su grupo, en el supuesto de que éste tenga una posición clara y coherente, que es mucho suponer; dicho sea de paso, decir que Izquierda Unida tiene un proyecto para España es realmente adelantar mucho. (*Rumores.*) Por eso decía que, ciertamente, su señoría está en su perfecto derecho de oponerse a los presupuestos que traen la bajada de los impuestos para los españoles —y hace muy bien, señoría—, pero el Gobierno está también en su perfecto derecho de cumplir la palabra que contrajo con los electores, cumplir su programa electoral y convertir al año 2003 en un nuevo año de crecimiento económico, en un nuevo año de creación de empleo y en un nuevo año de bajada de los impuestos, que es en definitiva el programa político del Gobierno y es por el que este Gobierno recibió el apoyo mayoritario de los españoles, en marzo del año 2000, para llevar adelante su acción de Gobierno. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintana.

El señor QUINTANA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Mis compañeros de grupo me permiten utilizar unos minutos de este turno de portavoces para poder contestar a un calificativo que se ha vertido, por parte del señor ministro, sobre nuestra intervención y nuestra política, con el que evidentemente no estamos de acuerdo.

Además, es lógico que ustedes lleguen a esa conclusión y a ese calificativo tan duro si parten del concepto, como lo hacen, de que estamos ante un desastre natural equiparable al que puede suceder cuando el viento tira unas casas o cuando unas lluvias torrenciales inundan unos pueblos: aparecen, no son previsibles, nadie tiene responsabilidad y en lo único en lo que tenemos que centrarnos es en ver cómo podemos paliar los daños. Pero es que yo le niego la mayor, señor ministro. No podemos equiparar esto a un de-

sastre natural de esas características. Porque esto ya había pasado antes, ha pasado ahora y volverá a pasar.

¿Por qué pasa? ¿Por qué hay tempestad en el mar? No. Ése es el escenario en el que se produce, pero sucede porque existe un corredor atlántico a escasas millas de la costa gallega. Ese corredor atlántico no está vigilado por ningún mecanismo del Estado que permita detectar los barcos que por él circulan. No existe ningún organismo policial capaz de controlar la navegación marítima de mercancías peligrosas por parte del Estado. No existen en Galicia los medios necesarios para que cuando se produce el hecho se pueda atacar con prontitud y minimizar los efectos. Esto no se produce por casualidad, es consecuencia de que la Administración del Estado, año tras año, mantiene la situación.

Sería bueno que recobráramos ahora las actas de la discusión del presupuesto del año pasado y, así, podrían comprobar que este senador reclamó en sus enmiendas mayores presupuestos para la dotación del salvamento marítimo en Galicia y el control de seguridad en el tráfico marítimo en las costas gallegas; y fue una enmienda denegada, como se había denegado el año anterior, el anterior y el anterior. Ese escenario es el que provoca que bombas flotantes como el «Prestige», en un día de tempestad, puedan provocar lo que ocurrió.

Señor ministro, señor Caneda, mi intervención de hoy no es igual a la que hice tres días después del accidente ¡y ya era tarde! Tres días después del accidente, cuando tuve oportunidad de preguntarle al señor ministro de Fomento —y él mismo calificó mi intervención de constructiva—, yo estaba esperando la reacción del Gobierno, que se pusieran en marcha los mecanismos necesarios ¡y ya era tarde! Llevábamos tres días de retraso y aun así confiaba en que el Gobierno pudiera actuar como tal Gobierno, pero es que no se ha hecho nada y lo que se ha hecho se ha hecho mal. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Digo que no se ha hecho nada porque no puedo considerar como algo el que se haya tomado una decisión que aún no se ha explicado —la de mover un buque hasta alta mar— provocando que la marea negra se extienda por toda Galicia.

No es de recibo que cuando nosotros reclamamos aquí que se mueva ese corredor Atlántico, que se impida a buques como el «Prestige» circular por él, el señor ministro de Fomento nos conteste lo mismo que ha dicho hoy el señor Caneda, que las legislaciones internacionales no se pueden cambiar de un día para otro. (*El señor Martínez Oblanca: ¡Claro!*) Es cierto, pero en ese caso, ¿cómo es que el presidente del Gobierno, hace una semana dijo que enviaba un buque de la Armada para desviar del corredor Atlántico un petrolero igual que el «Prestige»? ¿Se pueden hacer las cosas o no se pueden hacer? Claro que se pueden hacer; se pueden hacer cuando la presión ciudadana es tal que es imposible seguir con los brazos cruzados.

Una semana después de que la marea negra llegara a las costas de Galicia, el Gobierno seguía diciendo que no había marea negra, que no existía el problema y cuando nosotros avisamos —y no sólo nosotros, los que más saben del mar, los marineros— que iba a llegar también a las

Rías Baixas, se nos tachó de alarmistas pero, desgraciadamente, ha llegado.

Estos hechos son los que han motivado que pidamos responsabilidades políticas. No pido que se asuma la culpa porque no creo en las culpas en política, pero sí creo en las responsabilidades políticas y en los hechos que de ellas se derivan, porque ése es el sustento de la democracia y de las instituciones. ¿Cómo pueden los ciudadanos creer en las instituciones si cuando se produce una cadena de hechos como ésta y una cadena de despropósitos como los que hemos vivido nadie, absolutamente nadie, se hace responsable y se nos pretende hacer creer que son cosas del viento y de las mareas? El descrédito de las instituciones está servido.

Hace tan sólo unos meses, en Portugal, se derrumbó un puente por un fenómeno meteorológico —la crecida de un río—; se trataba de un puente que no había hecho el Ministerio de Fomento ni el titular de la cartera en Portugal, en ese momento y, sin embargo, el ministro de Fomento asumió su responsabilidad y dimitió, porque efectivamente era su Ministerio el que tenía que proteger y garantizar la seguridad de ese puente. No se consideraba culpable, pero sí responsable político. ¿Qué tiene que pasar en este Estado para que dimita alguien? Es lo que se preguntan los ciudadanos gallegos hoy, ciudadanos gallegos que no son ni del Bloque Nacionalista Galego, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista. ¿Pero qué es eso de apellidar a los ciudadanos con que son del Partido Popular, del otro o del otro? Son ciudadanos libres, y dentro de una sociedad plural expresan su opinión con libertad.

¿Quiénes son los directamente afectados, señor Ministro, esos a los que ya empezó a pagar? En la situación actual, ¿quiénes son los directamente afectados?, ¿los percebeiros de Corme?, ¿los mariscadores de Muxía?, ¿los pescadores del cerco de la Ría de Arousa?, ¿los pescadores de arrastre de la Ría de Vigo?, ¿los comerciantes de pescado de Malpica?, ¿los empleados de la lonja de Bueu? ¿Quiénes? Ni siquiera el cinco por ciento de estos que todo el mundo, incluso ustedes, consideran directamente afectados, se van a ver afectados por las ayudas que ustedes empezaron a pagar. Y lo grave, señor ministro, es que usted siendo el Ministro de Hacienda demuestra con su segunda intervención que aún no es consciente del gravísimo problema económico, social y medioambiental que Galicia vive, aún no es consciente.

Y como no es consciente y a mí se me acaba el tiempo, tengo que decirle que no es solidaridad lo que pide Galicia hoy. La solidaridad la agradecemos, es el sinónimo de una sociedad viva, democrática y libre; la solidaridad que expresan todos esos voluntarios de todo el Estado que este fin de semana trabajaron con nosotros codo con codo. Pero al Estado lo que le reclamamos es justicia, no solidaridad. Y estos presupuestos que usted presentó hoy aquí no son justos para Galicia. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar aprecio, senador Quintana, un cambio de tono en su intervención. Lo que dijo que era mentira de mis afirmaciones, ya no se ha atrevido a sostenerlo esta tarde aquí en su segunda intervención. Y es que el Gobierno, en una palabra, está disponiendo los medios necesarios para atender a una catástrofe como la que está sufriendo la sociedad gallega. Estamos ante un desastre, ante una catástrofe (*El señor Mesa Ciriza: ¡Una pequeña manchita!*), y ante esa catástrofe, señoría, estamos poniendo los medios necesarios para afrontar las peores y más perversas consecuencias de la misma, señoría. No habrá carencia de medios a la hora de afrontar esa catástrofe. Lo quiero decir con toda claridad para la sociedad gallega y para el conjunto de la sociedad española. No hay limitaciones presupuestarias a la hora de afrontar esa catástrofe, como no hay restricciones en los fondos europeos que tiene capacidad de recibir España a la hora de orientarlos para paliarla. O sea, que lo ha dicho usted en esta otra intervención de que no se ha hecho nada, es completamente falso. Se ha estado actuando desde el primer momento, se han estado tomando decisiones desde el primer momento y disponiendo los medios, (*Rumores*) y nunca antes ante una catástrofe así, se habían dispuesto todos medios, incluidos los económicos, como son los de la compensación económica (*El señor Romero Calero: ¡Vete del escaño!*) para a partir...

El señor PRESIDENTE: Silencio, señoría.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señoría, sí existe el problema, claro que existe ese problema, y la disposición del Gobierno es precisamente poner todos los recursos y medios para solventarlo.

Y lo que Galicia y España entera piden a sus políticos en estos momentos es responsabilidad, es que no empleen este argumento para desgaste del Gobierno, es que estén con el Gobierno de España a la hora de buscar y de dar soluciones a esta crisis, señoría. Ése es el auténtico sentido de responsabilidad que su señoría, como portavoz de grupo de oposición al Gobierno en esta Cámara, tenía que haber mantenido esta tarde, como debe mantener también como grupo de oposición en el Parlamento de Galicia. Ése es el sentido de responsabilidad que exige una situación como ésta: colaboración y lealtad con el Gobierno a la hora de impulsar soluciones.

Muchas gracias, señor presidente. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Morales.

La señora MORALES RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, nos encontramos ante un nuevo debate de los presupuestos para el año 2003, un debate que durante todo el día se ha planteado en términos parecidos a los que ya debatíamos los presupuestos para 2002. Las principales críticas que se hacen al documento radican en la falta de credibilidad, en concreto respecto a si

los objetivos de crecimiento de la economía que se marcan en los presupuestos son acertados o no y si son los más adecuados para reactivar el crecimiento económico del país en un momento de estancamiento de la economía.

Ya se ha dicho por parte de otros grupos —y nosotros en cierta medida también estamos de acuerdo— que las previsiones del Gobierno sobre el crecimiento del tres por ciento son bastante optimistas y probablemente no llegaremos a alcanzar dicha cifra. No obstante, desde Coalición Canaria nos parece que este aspecto no es relevante y que, incluso, podría ser acertado poner objetivos que sean estimulantes y que permitan afrontar el próximo año con optimismo, convencidos de que si no se logra el objetivo de crecimiento del tres por ciento tampoco pasará nada, como no ha pasado respecto a los presupuestos de 2002. Y para ello tenemos datos que juegan a nuestro favor. Es cierto que España no ha crecido durante el presente año lo previsto por el Gobierno, pero también es verdad que hemos crecido por encima de la media europea.

En cuanto a las previsiones para el próximo año, aun teniendo en cuenta las últimas estimaciones de la Comisión Europea para el primer trimestre de 2003 sobre estancamiento del crecimiento económico en la Unión Europea, hay previsiones de una recuperación gradual de la actividad durante el próximo año, siendo las perspectivas para España de continuación del crecimiento por encima de la media de la Unión Europea.

Sin embargo, este optimismo con el que afrontamos los retos presupuestarios del próximo año no deben hacernos olvidar algunos factores que añaden incertidumbre a la situación económica, de por sí ya compleja. No debemos perder de vista la posibilidad de un conflicto en Iraq, el incremento del precio del crudo o la recesión económica en Iberoamérica. Son factores que en una economía abierta como la nuestra pueden tener importantes repercusiones, pudiéndose crear situaciones económicas en las que los objetivos previstos puedan ser absolutamente inalcanzables. Ello significa que nuestras previsiones no sólo dependen de nuestra política presupuestaria sino también de la evolución de la política internacional. Por ejemplo, en el caso de la guerra, se podría generar no sólo una situación catastrófica en la economía mundial sino, especialmente, en la economía española, y, desde luego, debemos estar preparados.

Como decía, los objetivos que se marcan en los presupuestos sobre crecimiento de la economía puede que estén algo inflados, pero, desde nuestro punto de vista, no es prioritario acertar exactamente en el crecimiento, medio punto arriba o, más bien, abajo. Se puede producir el ajuste sin mayores consecuencias. Lo importante, desde el punto de vista de Coalición Canaria, es si estos presupuestos, junto con otras medidas, sirven para reactivar el crecimiento económico en estos momentos.

Desde nuestro grupo, nos gustaría señalar algunos aspectos que hacen de este un presupuesto que responde a las necesidades del momento y que sirve al objetivo principal de crecimiento económico de un país.

Para conseguir un crecimiento estable, para crear empleo, para aumentar las políticas de cohesión social y para

acercarnos más a Europa, estos presupuestos son una continuidad de los anteriores, unos presupuestos que han apostado durante los últimos años por la estabilidad presupuestaria y el déficit cero, por contener y controlar los gastos corrientes en una política de saneamiento de las políticas públicas —lo que se está consiguiendo—, al tiempo que se potencian también las políticas de inversión en infraestructuras y se hace una apuesta por asuntos de política social, como es el caso del incremento del fondo de las reservas de las pensiones en 1.200 millones de euros, incrementado por encima de lo acordado en el pacto de pensiones —ya estamos en 7.300 millones de euros, cuando lo acordado en el pacto de pensiones para 2004 situaba esta cifra en 6.000 millones de euros—. Creemos que este presupuesto sigue apostando por la creación de empleo en el contexto de incertidumbre económica en el que países como Alemania tienen una tasa de desempleo como no habían conocido en muchos años. Este país crea empleo, como decía, y ése es uno de los mejores pronósticos de nuestra economía, lo que no significa que no podamos ir más allá. Debemos ir más allá en las políticas activas de empleo y en la potenciación de las rentas activas de inversión, pero que en agosto llegáramos a 16.200.000 personas afiliadas a la Seguridad Social es una prueba de que las previsiones de los años anteriores eran correctas.

Este presupuesto, junto con otras medidas como la reforma del IRPF, apuesta por la expansión del consumo interno al trasladar más de 3.000 millones de euros con la reforma fiscal a los ciudadanos. Una reforma a través de la que se beneficiaría un colectivo de personas muy importante y que contribuirá a crear un mayor clima de confianza, a aumentar el consumo y a reactivar la economía.

Sin embargo, estas bondades que vemos en los presupuestos no nos deben permitir caer en la autocomplacencia. Al contrario, debemos estar atentos a algunos aspectos en estos momentos fundamentales. El control de la inflación es un problema que debe afrontar el Gobierno. Decía esta mañana el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el senador Caneda, que el problema de España es el paro, no la inflación. Estamos de acuerdo en que el paro es un problema de vital importancia, y estamos creando empleo, pero la inflación no deja de serlo, y está afectando a miles de personas que están perdiendo poder adquisitivo y, por tanto, influye también en el aumento del consumo interno. Necesitamos intervenir en aquellos sectores responsables de la inflación. Las privatizaciones no siempre han supuesto mayor competencia de los sectores privatizados. Entre otras medidas tendríamos que favorecer la competitividad efectiva en estos sectores que suponga un abaratamiento de los costes.

Necesitamos esforzarnos en la modernización tecnológica de España. Este año se han destinado 1.300 millones de euros para el Plan de Ciencia y Tecnología, que no se han gastado totalmente. Tenemos, por tanto, que mejorar la gestión y redefinir los objetivos en el Plan de Ciencia y Tecnología, que termina en el 2003, para los próximos años.

La modernización tecnológica es importante si queremos una economía competitiva, y debe pasar no solamente

por el necesario impulso de la inversión pública, sino también por la inversión de las grandes empresas privatizadas como ENDESA, Telefónica, etcétera. Necesitamos inversiones claras en sectores como telecomunicaciones, energía y transportes, que dependen en gran medida de la inversión pública, pero también de la inversión de las grandes empresas privadas. En Canarias estamos teniendo problemas muy serios, que se pueden agravar, en sectores estratégicos como el de la energía, por ello hay que exigir de las empresas privadas que actualicen y se comprometan en sus programas de inversiones. Es necesario crear los medios para que la universidad, las empresas y las administraciones públicas trabajen coordinadamente en unas agencias que actúen con objetivos de desarrollo tecnológico y científico en la comunidad española. Tenemos que consolidar la productividad de la economía, y para ello es imprescindible invertir en capital fijo, en capital tecnológico y en la mejora de nuestros recursos humanos a través de políticas de educación y de formación profesional. Tenemos que poner los recursos necesarios si queremos ser competitivos. Tenemos que mejorar la productividad de la empresa española si queremos competir en la Europa ampliada.

Por último, hay un aspecto que me gustaría señalar, porque entendemos que en los presupuestos no se recoge suficientemente, y son los recursos destinados a afrontar los problemas de la cooperación al desarrollo y la inmigración. En Coalición Canaria pensamos que las políticas de inmigración pasan por cuestiones básicas que requieren un esfuerzo presupuestario importante. Un primer aspecto que debe abordarse es la necesidad de incrementar la cooperación al desarrollo, principalmente con aquellos países emisores de inmigrantes que, a la larga, hará posible que las personas procedentes de estos países no tengan que emigrar para buscar oportunidades que les son negadas en sus países de origen. En ese sentido, tenemos que decir que los compromisos de España en la cumbre de Monterrey no son suficientes y, por tanto, habría que hacer un mayor esfuerzo y mejorar los controles en nuestras fronteras. Se ha hecho un esfuerzo en los últimos años, el SIVE es un ejemplo de ello, pero insuficiente. En Canarias, por ejemplo, existen sólo tres patrulleras, y de éstas, dos están financiadas por la comunidad autónoma. En algunos casos se ha dado la coincidencia de que las tres estuvieran rotas. No se pueden controlar fronteras con esa falta de medios. Debemos seguir ampliando la red de centros estatales tanto de internamiento como de acogida.

Por último, es necesario establecer políticas de integración hacia los inmigrantes que se encuentren en nuestro país. Hay miles de inmigrantes legales que se están dando de alta en la Seguridad Social y, por tanto, garantizando la Seguridad Social y nuestro sistema de pensiones en el futuro. Se necesitan más políticas de integración de los inmigrantes, en coordinación con las comunidades autónomas, dentro de las políticas de la Seguridad Social, que para eso, y también gracias a ello, tiene superávit. Es una prioridad en la política europea. Desde luego, seguir con declaraciones que ligen la inmigración con la delincuencia no ayuda en nada a esta integración necesaria,

sino que puede tener unas consecuencias nefastas que debemos cuidar mucho.

Termino insistiendo en que España tiene un gran margen para seguir manteniendo las políticas económicas de estos últimos años, políticas de estabilidad y crecimiento que han dado resultados positivos y que han permitido reducir el déficit, aumentar la inversión y generar empleo.

Es cierto que estamos ante una situación económica compleja, pero también es verdad que tenemos una economía más abierta y competitiva, que está creciendo por encima de la media europea y que sigue creando empleo aún en momentos de desaceleración, que es el balance más positivo que podemos hacer.

Por ello el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria no votará a favor de los vetos y daremos nuestro apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Albistur.

El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ha habido muchos temas y estaba usted sólo con la oposición rodeándole al comienzo de esta tarde en el debate y entiendo que no haya sido capaz de entender las razones por las cuales nuestro Grupo votaba en contra. Ahora que va a tener más tiempo, una vez aprobados los presupuestos, le invito a leer con tranquilidad mi intervención y así caer en la cuenta de cuáles son las razones por las que el PNV no vota a favor de estos presupuestos.

También tengo que reconocerle —hay que dar al César lo que es del César— que es usted el mejor ministro de Hacienda que tiene el Gobierno. El único.

Sólo me queda decirle al pueblo español que Santa Rita, que es abogada de los imposibles, nos siga protegiendo.

Que tenga usted feliz año.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la senadora Aroz.

La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.

En esta sesión sobre los presupuestos se ha introducido un debate muy duro y muy penoso sobre la catástrofe que afecta a Galicia, que nos afecta a todos los españoles, y quiero expresar a todos los senadores gallegos del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del BNG, la solidaridad no sólo de nuestro Grupo Parlamentario en esta catástrofe, no sólo del millón de ciudadanos que nosotros representamos, sino que estoy segura que represento la voluntad y la disposición de toda la sociedad catalana. Como se ha demostrado este fin de semana, hay una gran solidaridad, hay una gran preocupación y miles de voluntarios catalanes han participado en las tareas de lucha contra los efectos de la marea en Galicia.

En relación con los reproches que se han vertido sobre el Gobierno —muy penosos y seguramente con razón— le diría que haga lo que toca, y cuando lo haga tendrá el apoyo y la solidaridad debida. Eso, señorías, creo que es una reflexión que no debe caer en saco roto.

Pasando al debate presupuestario y a la intervención que ha tenido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y el señor ministro, quiero agradecerles a los dos el tono de su intervención y hacer algunos pequeños comentarios a las respuestas que han dado a la intervención de esta portavoz en nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Por lo que se refiere a la credibilidad de los presupuestos, evidentemente, no nos vamos a poner de acuerdo, pero la realidad es tozuda, como se dice aquí en Madrid, y la falta de credibilidad deriva de la falta de credibilidad del cuadro macroeconómico y del impacto que la desviación sobre los objetivos y el cuadro macroeconómico que contiene va a tener en el cumplimiento de los objetivos presupuestarios. Y en esta realidad y en esta incertidumbre están basadas las desviaciones habidas desde el ejercicio de 2001.

Señor ministro, una vez que no acepta usted críticas razonables, a usted le toca defender la credibilidad de estos presupuestos, pero insisto en que los datos que he aportado esta mañana en relación con el comportamiento de las variables de crecimiento plantean una seria incertidumbre respecto de la consecución de los objetivos del cuadro macroeconómico.

Señor ministro, el resultado de esta decisión del Gobierno es que ahora tenemos unas previsiones altas, a nuestro juicio voluntaristas, además de incertidumbre. Me parece que habría sido mucho mejor tener unas previsiones más ajustadas, más realistas, más bajas, para poder tener un clima de más confianza y de más certidumbre que, sin duda, hubiese beneficiado las expectativas y el comportamiento de los agentes económicos, pero el Gobierno ha preferido la primera alternativa.

En relación con la compensación del déficit del Estado, creo entender correctamente cómo funciona. Creo que he hablado de compensación del déficit del Estado por la Seguridad Social. Se le llame como se quiera, lo cierto es que aquí hay un déficit de la Administración del Estado del 0,5 por ciento del PIB que financia—compensa la Seguridad Social. Y lo que aquí se está planteando es que permitan ustedes que ese margen de maniobra que va a tener la Administración central del Estado lo puedan tener las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. Distribuyan ustedes ese 0,5 por ciento, señores del Gobierno, entre la Administración central en un 0,3 por ciento, un 0,2 por ciento para las comunidades autónomas y un 0,1 por ciento para los ayuntamientos. Esto colocaría al resto de las administraciones públicas en una situación similar a la que tiene la Administración central. Porque si no, estaremos hablando de desventaja para las comunidades autónomas y de deslealtad institucional —debo reiterarlo— de la Administración central para con el resto de las administraciones públicas.

Señor ministro, usted ha reconocido que además de haberse celebrado un Consejo de Política Fiscal y Financiera,

que está previsto por ley en relación con esta cuestión, había pedido que se celebrara un Consejo de Política Fiscal y Financiera específico para tratar de una manera más concreta esta distribución con las comunidades autónomas. Pero como usted mismo ha dicho, no ha tenido lugar. Se celebró uno en primavera y no precisamente en relación con esta cuestión específica. Usted lo dijo, señor ministro, y así constará en el «Diario de Sesiones», pero repito que no se ha hecho.

En relación con esfuerzo presupuestario que se hace respecto a las prioridades contenidas en el presupuesto, yo insisto, señor ministro y señor Caneda, que es un esfuerzo insuficiente. No basta con aumentar ligeramente la proporción de gastos sobre el producto interior bruto. En estos presupuestos hay que hacer un esfuerzo mucho mayor del que contempla el Gobierno. Y les doy un dato. La diferencia entre las tasas de crecimiento del gasto en capital y del gasto corriente, que es un buen indicador de la calidad del gasto público en términos de su aportación a la convergencia real ilustra de una manera muy clara que la composición del gasto en estos presupuestos no es adecuada en ese objetivo. Ese diferencial ha pasado de estar en torno al 5 por ciento en 1998 a ser de apenas un 1 por ciento en los Presupuestos Generales del Estado para 2003. La inversión pública crecerá en torno al 8 por ciento, es cierto, pero su peso relativo se mantiene en un modesto 3,6 por ciento. El gasto en investigación también tiene una subida más o menos del 8 por ciento, pero mantiene su peso en el gasto total en un 0,9. Y lo mismo podemos decir del gasto en educación, que representa el 0,7 por ciento del gasto total.

Señoría, se ha hecho un pequeño esfuerzo presupuestario y lo reconocemos, pero en estos presupuestos no hay políticas de modernización ni de convergencia real.

Muchas gracias, señor Presidente. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, en primer lugar, quiero agradecerle su presencia a lo largo de toda la jornada en este debate de presupuestos que se ha visto condicionado —de alguna forma ha variado su tono habitual— por la magnitud de la catástrofe que asola a Galicia por el «Prestige». También quiero aprovechar la ocasión para manifestar, en nombre de nuestro grupo, la solidaridad con todos los afectados, el pueblo gallego, y reiterar lo que ha dicho la senadora que me ha precedido en esta tribuna, la señora Aroz, sobre que la solidaridad del pueblo catalán es muy grande. Sepan que en situaciones como ésta nuestra solidaridad va a estar siempre con los afectados, en este caso el pueblo gallego.

Entrando en el debate de presupuestos, anuncio que nuestro grupo, tal como hizo en el Congreso de los Diputados, va a dar su apoyo a los presupuestos generales que ha presentado el Gobierno para el año 2003 y a las líneas principales de actuación en ellos contenidos, así como a la

Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social que los acompaña.

El hecho de apoyar estos presupuestos, siendo relevante, no es ninguna novedad por parte de Convergència i Unió, ya que hemos venido dando apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de forma ininterrumpida desde el año 1993. Podemos exceptuar el año 1996 por la situación compleja que se vivió —como todos recordarán—, pero incluso en aquel momento nuestro grupo, a pesar del desencuentro, tuvo la voluntad de consensuar un decreto ley que complementó una prórroga presupuestaria. Es evidente que, desde las últimas elecciones, el apoyo que venimos dando a los Presupuestos Generales del Estado no es necesario. No es necesario que Convergència i Unió apoye los presupuestos para que salgan adelante, pero para nuestra federación este apoyo es un ejercicio de coherencia política.

Somos conscientes de que los presupuestos que ha presentado el Gobierno no son la panacea y de que por sí mismos no nos devolverán a la senda del crecimiento de hace dos años ni serán un instrumento válido a la hora de conseguir un mayor crecimiento y continuar generando empleo. Aun así, por una clara vocación constructiva, creemos que debemos continuar manteniendo una posición de apoyo a los mismos desde el convencimiento de que el proyecto que ahora estamos discutiendo es un instrumento útil para impulsar, de nuevo, la economía española hacia sendas más elevadas de crecimiento y continuar creando empleo de manera simultánea. Este último es nuestro principal objetivo, y en ello coincidimos con el senador Caneda.

No es sólo la coherencia política lo que nos anima a votar favorablemente estos presupuestos. Desde Convergència i Unió votamos a favor de unos presupuestos que asumen buena parte de las líneas prioritarias de la política económica que propugna nuestro grupo, las mismas que contribuimos a impulsar tras las elecciones de 1993 y que se reforzaron a partir del año 1996. Por ello, no hay motivo alguno para que no apoyemos estos presupuestos en el Senado.

La mera existencia de unos presupuestos como éstos en un momento como el que los estamos debatiendo ya significa un elemento de estabilidad económica. Que en un momento de incertidumbre y hasta de pesimismo existan unas claras líneas orientadoras de la política económica contribuye a mejorar las expectativas, lo cual afecta positivamente a la inversión y el consumo, pero es que, además, las prioridades sobre las que se orientan las mismas son de por sí positivas. En un contexto de austeridad estos presupuestos garantizan un fuerte impulso inversor, principalmente en materias de infraestructuras y de innovación y desarrollo, y potencian el gasto en aquellos aspectos de mayor demanda social, como son las pensiones, la sanidad y la seguridad ciudadana.

Quisiera hacer una mención específica sobre la inversión prevista por el Estado en Cataluña en materia de infraestructuras. La dotación prevista en los presupuestos es importante; de hecho, es una de las más importantes de cuantas se han producido en los últimos años. Ahora bien,

del mismo modo que valoramos el esfuerzo inversor contenido en el proyecto, queremos reiterar que es necesario que la inversión prevista se ejecute. Ya se ha comentado anteriormente, y es que pensamos que de ello depende la competitividad futura de Cataluña y, por ende, de todo el Estado. Les instamos, por tanto, a no caer en la tentación de recortar las inversiones como medida fácil para aliviar las tensiones en el presupuesto, porque ello es negativo para la economía, negativo para nosotros, y negativo para las generaciones futuras.

Por lo que se refiere a las inversiones en Cataluña, también nos preocupa que, tras la finalización de los grandes proyectos que han llevado a que actualmente las magnitudes sean de la dimensión que son, no se estén previendo ya otros proyectos que permitan mantener ese ritmo inversor en Cataluña.

Estos presupuestos también contemplan dos importantes novedades desde la perspectiva fiscal, que han sido durante mucho tiempo reclamadas por nuestro grupo. La primera de ellas es la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que estamos convencidos beneficiará de manera directa a las familias mediante una reducción de la presión fiscal, y a su vez servirá para estimular el consumo y la demanda interna, lo que debe contribuir a acelerar el crecimiento económico.

La segunda de las medidas es la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas para la gran mayoría de los autónomos y pequeños empresarios. La eliminación de un impuesto profundamente injusto, que no gravaba la capacidad económica sino su mero ejercicio, es también una medida positiva que ha sido mucho tiempo solicitada por Convergència i Unió.

Asimismo, consideramos positivo el mantenimiento del equilibrio de las cuentas públicas para 2003, y no sólo este hecho, sino que quisiera destacar que, por encima de otros aspectos, nuestra apuesta por la estabilidad presupuestaria es muy grande. Con el mantenimiento del equilibrio presupuestario se consigue enviar un firme mensaje a la sociedad de clara apuesta por la continuidad de una política, lo que es muy positivo en las circunstancias actuales. A nuestro entender la apuesta por esta política es una exigencia para el propio sector público, así como una exigencia progresista y de solidaridad para con las generaciones actuales, porque sirve para generar certidumbre y de esa forma no perjudicar unas expectativas ya de por sí «tocadas». También lo es para con las generaciones futuras, porque les evita tener que pagar una factura por unas decisiones anteriores en las que no han podido participar y que condicionan notablemente sus expectativas de futuro. Por ello, es bueno que en las cuentas públicas se actúe bajo el criterio de no gastar más de lo que se ingresa; de lo contrario seríamos profundamente insolidarios con las generaciones futuras y con aquellas capas de la sociedad que se ven más afectadas por la inflación.

Ahora bien, del mismo modo que valoramos positivamente la apuesta del Gobierno por el déficit cero en esta coyuntura, si en el devenir del ejercicio se ve que la proyectada recuperación económica prevista en el segundo semestre no se produce y los ingresos no crecen al ritmo es-

perado, tampoco debemos rasgarnos las vestiduras. Y de producirse el déficit, éste será reducido, y desde luego, señor ministro, de mucha menor intensidad que el de nuestros principales socios de la Unión Europea.

Por ello, y ante las voces que apuestan —y aquí hemos oído alguna esta tarde— por impulsar una política decidida de expansión que se olvide del equilibrio presupuestario y aumente el gasto, desde Convergència i Unió creemos que debemos esperar. En todo caso, en función de cómo evolucione la economía nos plantearemos esa hipótesis de cambio de política económica en los presupuestos del año que viene.

En relación con las críticas que se hacen a estos presupuestos respecto de sus previsiones macroeconómicas —tema en el que han incidido prácticamente todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra—, somos conscientes de que prever una tasa de crecimiento real del orden del 3 por ciento para el año próximo es ser excesivamente optimista en una coyuntura en la que la dinámica interna es la desaceleración. Pero, del mismo modo que manifestamos que las previsiones del Gobierno son, en el mejor de los casos, voluntaristas y que es criticable que el presupuesto se asiente sobre unas bases que pueden ser consideradas poco creíbles, quiero dejar bien claro que ello no es óbice para que reconozcamos uno de los principales activos de la economía española: los esfuerzos realizados en materia económica a lo largo de los últimos años han fructificado. Ése es, sin duda, un gran activo para nuestra economía. Tenemos una economía más abierta, más competitiva, con una capacidad de crecimiento por encima de la media de la Unión Europea y capaz de seguir creando empleo en un entorno más incierto. De ello se han dado sobradas muestras a lo largo de este año, cuando se ha producido ya la desaceleración y continuamos creando empleo; sin duda alguna, el resultado máspreciado de nuestro balance económico.

Ello es muy positivo, pero no debemos caer en ningún triunfalismo, sino aprovechar esas potencialidades y continuar trabajando para que esas medidas perduren en el tiempo, algo que es más difícil desde la incorporación de España a la zona euro. Y es más difícil, pues en estos momentos el control de dos variables como son el tipo de interés y el tipo de cambio ya no están en manos del Gobierno para que sean utilizadas a su discreción. A pesar de ello, continuamos precisando el mantenimiento de una tasa de crecimiento más elevada que la media europea si queremos avanzar en la convergencia real y, sobre todo, mantener nuestra competitividad.

Otro aspecto que preocupa especialmente a Convergència i Unió es el problema de la inflación. A lo largo de este año se ha perdido dinamismo económico, pero los que no han perdido empuje alguno han sido los precios, que prosiguen su senda alcista, motivo por el que el diferencial respecto de los precios de la zona euro, no sólo no se reduce, sino que se incrementa hasta el extremo de que a día de hoy, señor ministro —y esto es importante—, España no podría incorporarse a la zona euro por incumplir el criterio de convergencia en precios.

Éste es un tema que ha de hacernos reflexionar sobre el problema de la inflación, porque el consumo se desacelera, hay menos presión en cuanto a la demanda, no se ha producido en España una espiral salarial, sino más bien al contrario, ha habido un proceso importante de moderación salarial que debe ser valorado en su justa medida, a pesar de todo lo cual los precios suben, y no sólo los relacionados con los carburantes.

Reconozcan ustedes, señores del Grupo Popular, señor ministro, que cuando menos algo falla. Tenemos que liberalizar de forma real aquellos sectores que ustedes privatizaron, porque la sola privatización no trae implícita la competencia. Señor ministro, no son los horarios comerciales y la apertura de festivos la solución a la inflación, sino que hay otros aspectos que creemos que hasta hoy no se han abordado en profundidad.

Ahora bien, del mismo modo que afirmo que estos presupuestos son útiles para nuestra economía, motivo por el que los vamos a apoyar, también me gustaría dejar bien claro que éstos no son globalmente los presupuestos que hubiera presentado Convergència i Unió. Si los presupuestos dependieran de Convergència i Unió, éstos contendrían más medidas de apoyo para los 2,5 millones de trabajadores autónomos que hasta el momento actual han sido los grandes olvidados por parte de muchos gobiernos. Es necesario que se adopten medidas con carácter urgente para favorecer a este colectivo, hay que eliminar todas las asignaciones que tienen actualmente respecto de los trabajadores asalariados en los casos de incapacidad temporal, así como las restricciones para contratar a los familiares directos del autónomo como asalariados. Éstos son aspectos no contemplados con la concreción suficiente en estos presupuestos sobre los que nuestro Grupo seguirá incidiendo a través, en este caso, de las enmiendas que tenemos presentadas en el Senado.

Asimismo, Convergència i Unió hubiera deseado que estos presupuestos fuesen más sensibles de lo que lo han sido hasta el momento para con los pensionistas con menor poder adquisitivo y menores rentas, especialmente los que perciben las pensiones de viudedad. Se trata de medidas de estricta justicia redistributiva que no podemos demorar más en el tiempo. Las pensiones mínimas y las de viudedad se han incrementado por encima del crecimiento previsto de los precios, algo que valoramos positivamente, pero ahora debemos suprimir de una vez por todas la incompatibilidad entre las pensiones del SOVI y las de viudedad. El mantenimiento de esta incompatibilidad es, desde nuestro punto de vista, una profunda injusticia. En el Congreso de los Diputados ustedes se comprometieron a ello y les pedimos que no se demoren en cumplirlo. Nuestro Grupo sigue manteniendo una enmienda con este objetivo, que esperamos se pueda resolver en el Senado.

Creemos sinceramente que el Gobierno debe reflexionar sobre hasta qué punto puede ser justa una situación donde la Seguridad Social cuenta con un superávit creciente, destinándose una parte del mismo a financiar el déficit del Estado a sabiendas de que en materia de pensiones existen todavía situaciones límite para muchos de nuestros pensionistas. Es un acto de justicia el procurar que todos

los ciudadanos y ciudadanas se suban al tren del bienestar, y de forma especial aquellos que por sus circunstancias personales o por su edad no tienen posibilidad de aspirar a una nueva oportunidad.

Lo mismo ha ocurrido con el salario de los funcionarios, que ha estado congelado desde hace años. Nuestro Grupo propuso, a través de sus enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados, incrementar un 3 por ciento las retribuciones de los funcionarios. Ustedes rechazaron en aquel momento nuestra propuesta para, días más tarde, presentarla como propia. Lo importante para nosotros es que esta medida de justicia social se va a llevar a la práctica, aunque parece que lo que no era bueno hace 15 días ahora sí lo es. Afortunadamente vemos que en esto han cambiado ustedes de opinión, algo que celebramos.

Tal y como he mencionado anteriormente, aún quedan temas por resolver y mejorar en estos presupuestos, motivo por el que Convergència i Unió sigue proponiendo nuevas modificaciones y defendiendo sus enmiendas en aras de avanzar en una mejora del bienestar de toda la sociedad. Ésta es la máxima prioridad de las enmiendas que hemos presentado en el Senado.

Para finalizar, señor presidente, diré que desde el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió consideramos que, en líneas generales, los presupuestos son un instrumento útil, sin embargo hay aspectos que pueden ser objeto de mejora respecto de lo inicialmente previsto por el Gobierno y por el texto remitido por el Congreso de los Diputados, motivo por el que nuestro Grupo los enmendará durante el trámite del Senado a fin de que, con el afán constructivo que siempre nos ha caracterizado, estas mejoras puedan incorporarse al texto final, pues entendemos que serán buenas para el proyecto. Por todo lo expuesto reiteramos nuestro voto contrario a los vetos defendidos por los distintos grupos a lo largo de esta sesión.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Bru.

El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor Montoro, a estas alturas del debate está dicho ya casi todo y creo que incluso se han dicho algunas cosas de más, de las cuales alguien posiblemente puede estar ya incluso arrepentido. En fin, uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Usted acaba de calificar hace unos minutos a la oposición en esta Cámara, con la elegancia que siempre reivindica y que a usted particularmente le caracteriza, de coyotes del desierto. A mí no me sabe mal, el coyote es un animal simpatiquísimo, nunca coge al correcaminos y a mí particularmente me cae bien el coyote. En todo caso, por si no está arrepentido ya de haber pronunciado ese calificativo no muy honorable en sede parlamentaria y tiene tentación de volver a estos exabruptos, yo no voy a iniciar un debate calificando sus afirmaciones de esta mañana como mentiras. Podemos hablar de metalenguaje, un metalenguaje por el cual cuando usted

dice que el Gobierno está gestionando unos fondos que no gestiona, sino que está en vías avanzadas de negociar, me permite —por no calentar el debate en esos términos— hablar de metalenguaje y reserva mental. Pues si quiere esconder su error garrafal con este metalenguaje, le sugiero que para mayor amenidad y variación en la exposición en su próxima intervención puede llamarnos, por ejemplo, hienas carroñeras o bultúridos hediondos y voraces o quizá pestilentes coleópteros necrófagos, cualquier cosa podría valer con tal de cambiar su intervención. Señor Montoro, allá usted y sus desahogos verbales, aunque sería oportuno, a mi juicio, que seosegase su ánimo y templase su espíritu.

El debate acaba aquí y aquí usted se deja, y lo sabe, varias preguntas trascendentes sin contestar. El Gobierno, por boca del señor Rato, el Gobierno, señor Caneda, por boca del señor Guindos, se lo repito una vez más, ha calificado la inflación como el principal elemento de preocupación del Gobierno; no soy yo, no venga aquí a decir que yo estoy empeñado con sus decimitas de inflación. No; es su Gobierno, el Gobierno del reino de España el que ha manifestado, por boca de cualificados portavoces, que su principal preocupación es la inflación y yo he traído esa preocupación del Gobierno a esta Cámara. No diga que es mía, es mía porque la comparto, porque es cierto, pero es una preocupación del Gobierno. Esa pregunta sobre la inflación no ha obtenido respuesta, queda sin contestar, excepto alguna perorata más o menos incoherente.

En segundo lugar, estos presupuestos, señor Montoro —por última vez le pregunto— como están planteados, con su política expansiva en el gasto, con incremento de inversión y con su política de reducción de impuestos van a incrementar la inflación, o sea, van a actuar en el sentido de potenciar un problema que el Gobierno reconoce como principal y queda sin contestar, sin respuesta. Se me esconden en proclamar que todo da igual, que se crea empleo y que eso lo justifica todo; se esconden en lo que el señor Guindos ha teorizado como el principio de desmitificación de las décimas. No; en derecho dos y dos pueden sumar lo que sea, pero en economía dos y dos suman cuatro. Aquí no vengamos a decir que da igual punto arriba o punto abajo porque son miles de millones y miles de problemas; las décimas son el rigor y si no vamos a discutir del rigor, ¿para qué vale este debate? Si da igual todo, ¿para qué presentan los presupuestos cuadrados, equilibrados, etcétera si luego a ojo de buen cubero se cuadran y todo se justifica porque se crea o no empleo en la economía española? Con ese argumento podíamos habernos ahorrado este trámite y no abrumar a la Cámara con un debate estéril, puesto que al fin y al cabo la mayoría absoluta lo va a aprobar todo y lo va a justificar todo.

Volviendo al tema fundamental, usted, señor Montoro, pese a tantas palabras gastadas, se va —y se lo repito una vez más— sin contestar a preguntas muy concretas, muy específicas y muy importantes que en esta Cámara se le han hecho. Y no venga con el truco retórico de decir: planteen alternativas. Mire usted, en primer lugar, con el tiempo limitado que tenemos, éste es un debate de totalidad de los presupuestos, y usted no tiene por qué decirme

lo que tengo que hacer; yo plantearé mis alternativas cuándo, cómo y dónde mi partido desee. En segundo lugar, usted conoce perfectamente —perfectamente lo sabe— que existe una prohibición constitucional y reglamentaria por la cual la oposición no puede plantear presupuestos alternativos, por tanto, si yo tengo una prohibición constitucional y reglamentaria que me impide presentar un presupuesto alternativo, ¿por qué usted me exige que presente una alternativa aquí? (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Esto simplemente es un truco retórico, señor Montoro, en el cual sigue usted con estas leañías escapistas para rehuir el debate. Usted no puede exigirme en esta Cámara, repito, lo que la Constitución Española me prohíbe y el Reglamento me impide. Usted no se preocupe, que tiempo tendremos de debatir alternativas. Están próximas las elecciones; no se preocupe, que van a ser las últimas en las que nos veamos las caras.

Por último, aunque como dijo un gran lógico sólo puede haber preguntas donde hay respuestas, y es evidente que hoy aquí el Gobierno, por boca del Ministro de Hacienda, ha evidenciado una y otra vez su falta de respuestas, voy a acabar con una también muy concreta, que tampoco me va a contestar, pero por intentarlo que no quede.

Usted habla siempre del equilibrio, del déficit; yo le he preguntado —también sin éxito— por la deuda de Radiotelevisión Española; dónde están, cómo se computan, cómo se financian, cómo se pueden amortizar los 4.300 millones de euros de deuda. Le he preguntado por el diferencial de IPC de 2.200 millones que vamos a tener que pagar; le he preguntado por la deuda de las 23 empresas públicas que usted ha creado.

Ahora le voy a preguntar —y no lo tomo como ejemplo, sino como un acuerdo de Consejo de Ministros— qué significa lo que ustedes han hecho con la llamada «deuda Zaplana». El señor Zaplana, cuando accede a la presidencia de la Generalitat, tiene una deuda viva, generada por trece años de gobierno socialista, de 400.000 millones de pesetas. Seis años después, la ha más que triplicado y la deja en un billón doscientos mil millones. Para endeudarse de esa forma —y usted lo sabe perfectamente, porque se sentaba en el Consejo de Ministros— el señor Zaplana, en ningún caso, ha pedido el permiso preceptivo que marca la LOFCA para endeudamientos. ¿Qué ocurre? Que de repente se encuentran con un muerto entre las manos, y en una reunión en la que usted, señor Montoro, se sentaba, el día 2 de agosto de este año, en plena canícula, para que pasase desapercibida, resulta que el Consejo de Ministros autoriza a la Generalitat valenciana para realizar una emisión de deuda, y en divisas, por un importe de 3.242 millones de euros, cuya amortización se aplaza hasta los años 2029, 2030, 2031 y 2032. Señor Montoro, la comunidad valenciana supone el 10 por ciento de la población española, de la exportación; siempre decimos que supone el 10 por ciento de todo. Si todas las comunidades españolas hubieran hecho como el señor Zaplana, y ustedes hubieran tenido que ir al Consejo de Ministros a convalidar estas deudas, hubiéramos subido la deuda pública a 32.000 millones. ¿Por qué al señor Zaplana sí y a otros no? ¿Por qué este diferencial? Y usted, que tanto presume de moderni-

dad, ¿sabe qué ha hecho con esa transformación? Volver al siglo XIX español; usted ha transformado la deuda flotante del señor Zaplana a corto plazo, y en vez de haberlo requerido a pedir los permisos específicos, cuando era el lugar, la ha transformado en deuda perpetua no amortizable, porque ningún gobierno de ningún color del mundo que pueda haber dentro de 30 años va a poder asumir el pago cuatrienal de 3.200 millones con sus ingresos ordinarios. Por tanto, usted ha hecho una operación de consolidar deuda flotante en deuda perpetua no amortizable. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Usted, señor Montoro, nos retrotrae a la época decimonónica; dentro de poco habrá que ir por ahí buscando arreglos de la deuda, y esto no es forma de predicar el equilibrio, y desde luego de hacer este tipo de operaciones. Ahora bien, si tiene una respuesta al interrogante le ruego que me explique qué significa este acuerdo del Consejo de Ministros del día 2 de agosto del año 2002.

Por último, no es preciso, ni siquiera necesario —lo que está en el corazón no hace falta siquiera manifestarlo— que exprese aquí nuestra solidaridad y nuestra fraterna lealtad con el pueblo gallego, pero señor Montoro, ni usted ni su Gobierno pueden pretender silenciar a la oposición con llamadas a la lealtad, a la solidaridad, les falta poco para pedir la fidelidad perruna. No puede hacer eso, señor Montoro, la crítica no es incompatible con los sentimientos.

Para acabar, me gustaría que usted me dijera con quién tengo que mostrarme solidario, con quién. ¿Con quién se fue a cazar? ¿Con quién estaba en Doñana? ¿Con quién todavía no ha ido a Galicia? Dígame con quién tengo que mostrarme solidario y lo haré muy gustoso.

Muchas gracias (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Caneda.

En señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.

Largo debate hemos tenido, yo creo que fructífero y, en consecuencia, sean mis primeras palabras para agradecerle al señor ministro su presencia y haber estado todo el día con nosotros. Lo mismo digo para los grupos de Coalición Canaria y CiU, que rechazarán estos vetos, y a los demás, porque todos los que estamos en el área económica hemos tenido dos meses muy intensos y positivos para la economía española.

En cuanto a los comentarios últimos del portavoz socialista, ni los tengo en cuenta. El sentido común de cada uno y la humanidad propia sabe lo que tiene que hacer en cada caso. El que lo tiene lo tiene y el que no, no; no vamos a volver a explicar lo que hay que hacer y a quién hay que dar solidaridad.

Una cosa sí es cierta: nosotros explicamos una y otra vez —porque es nuestra obligación— por qué defendemos nuestro presupuesto, pero cuando se nos pide más gasto porque somos cicateros, porque no aprovechamos, porque

nos empeñamos en el equilibrio..., al mismo tiempo tenemos que oír de la misma persona que no tenemos en cuenta la inflación, que éste es el principal problema, que lo ninguneamos. Y cuando se nos dice blanco y negro al mismo tiempo no es que se les pida alternativas, se les pide un poco de coherencia simplemente.

El presupuesto que presentamos no es idílico, evidentemente, la palabra que mejor lo define es adecuado; es el presupuesto adecuado para el momento en el que estamos, para un momento que todos hemos descrito que es tremendamente difícil y complicado. Es obvio que al igual que no se tarda lo mismo en correr 100 metros lisos que 100 metros obstáculos, no podemos crecer lo mismo que si estuviéramos en una situación mundial óptima o por lo menos buena. En este momento es más difícil y lo adecuado precisamente es que el presupuesto equilibre y no, como pide el portavoz socialista, más gasto y más control. Lo que hace el presupuesto es equilibrar; es prudente en la estimación de gasto pero a la vez es optimista, con cierto grado de voluntarismo —como aquí se ha reiterado— que yo llamo autoexigencia, creer en lo que se hace, creer en unos presupuestos que tienen que influir en la coyuntura y no dejarse llevar por ella; eso no es voluntarismo, es fe en el trabajo. Sería mucho más fácil —y todos podrían comprenderlo, incluso la mayoría del electorado— que hiciéramos electoralismo, tiráramos la toalla y tuviéramos déficit; no pasaría nada porque hemos bajado 15 puntos la deuda y aumentarla en un punto o dos, en teoría —según su criterio—, sería incluso sano. Eso sería mucho más fácil, pero creemos que no, creemos que hay que trabajar con unos principios, unos principios que hasta ahora nos han llevado a una permanente mejora del bienestar en España y se tienen que seguir defendiendo aunque cueste hacerlo.

Senador Cambra, estamos en el mismo camino; lleva razón cuando nos habla del deseo de seguir mejorando las pensiones mínimas de las viudas, pero gobernar es buscar ese equilibrio. Es cierto que la Seguridad Social tiene superávit —por eso, vuelvo a recalcar que con ese superávit hay de sobra para pagar los dos puntos de inflación de más—, pero la responsabilidad del gobernante significa tener en cuenta para el futuro el efecto sustitución en las pensiones; cada pensionista que entra nuevo cuesta mucho más que el que se da de baja por fallecimiento, cada año tenemos más pensionistas y con mayor esperanza de vida. Cuando se toma una decisión hoy no hay que buscar sólo la facilidad y la venta de la misma, que puede quedar muy bonita, sino que hay que tener en cuenta qué va a pasar en el equilibrio de la Seguridad Social en el futuro. Recorreremos el camino juntos, todos dentro del pacto de Toledo, pero es deseable que todo se haga con mucho sentido común para no poner en riesgo el equilibrio del futuro de las pensiones.

Estoy totalmente de acuerdo con su preocupación por los autónomos. Hay muchos ejemplos en el mundo de economías que han tenido inyección de dinero y no les ha servido absolutamente para nada. La riqueza de un país viene cuando se hace paulatinamente, equilibrando sus ingresos, sus gastos, y trabajando y creando riqueza que se mantenga en el tiempo. Nosotros creemos que tenemos que ha-

cer exactamente lo mismo; hemos ido mejorando cada año a cada uno de los sectores hasta dónde se ha podido, manteniendo el equilibrio, porque para el conjunto era bueno. Ahora estamos con los autónomos y tenemos que darles prioridad; por eso se va a hacer un estatuto del trabajador autónomo, en el que estamos trabajando y en el que se están considerando todas esas cuestiones que usted con toda justicia ha reclamado.

En consecuencia, estos presupuestos guardan el equilibrio que nosotros pensamos que necesitamos en este momento. No es verdad que nosotros no hayamos aprobado enmiendas a nadie. Decía antes el señor Cámara que en una rueda de prensa mientras se estaba celebrando la comisión, nosotros dijimos que no aprobaríamos ninguna enmienda; seguramente por error ha dicho una inexactitud. Nosotros no dijimos que no aprobaríamos ninguna enmienda a los grupos de la oposición, sino que muchas de las enmiendas que había presentado el PSOE estaban incluidas en nuestro presupuesto y que se podrían haber ahorrado presentarlas.

Muchas gracias, señor presidente. *(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. *(Pausa.)*

Iniciamos la votación de las propuestas de veto comenzando por la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 77; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 76; en contra, 139; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 77; en contra, 139; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés al proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 77; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 77; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el senador Quintana González, al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2003.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 77; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto originariamente presentada por la senadora De Boneta y Piedra al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 77; en contra, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el senador Quintana González, al proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 77; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por la senadora De Boneta y Piedra, al proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 78; en contra, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto de don Manuel Cámara Fernández y de don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 77; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del senador don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, al proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 77; en contra, 140.

— DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2003. (Continuación) (S. 621/000094; C. D. 121/000109).

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Iniciamos el debate del articulado del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003. Título I, artículos 1 a 12 y anexos I y II. Enmiendas números 202 a 209, correspondientes a los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.

Tiene la palabra el senador Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, muy brevemente, voy a dar cuenta de este grupo de enmiendas. La primera que quiero destacar —las que no mencione las daré por defendidas— es la 202... *(Rumores.)*

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Cámara. Señores senadores del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, no hagan corrillos, dejen intervenir al senador señor Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Decía que es una enmienda de modificación que pretende sustituir las cantidades de los estados de ingresos de un modo determinado, que obra en su poder. Esta modificación pretende, ni más ni menos, un incremento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, debido a una reforma en profundidad del tributo que asegure la progresividad de la tarifa, mejore de forma efectiva la tributación entre rentas del trabajo y del capital, iguale las deducciones personales y familiares para todos los contribuyentes, y sirva para evitar la elusión fiscal. La segunda argumentación se centra en el Impuesto sobre Sociedades, por la revisión y disminución de diversos beneficios fiscales. Asimismo, el aumento de los ingresos fiscales como consecuencia de una mayor inversión pública y la aplicación de los fondos comunitarios. Y, por último, mejores resultados en la lucha contra el fraude y la elusión fiscales.

El conjunto de estas medidas originaría la obtención de 10.694.000 miles de euros de más con relación a los ingresos previstos y, desde Izquierda Unida, pretendemos que

se incorporen como alta en la Sección 31, Programa 633.A, Imprevistos y funciones no clasificadas, en el artículo 63, para desde ahí asignarlo en las distintas políticas activas de nuestras enmiendas.

La enmienda número 203 plantea una adición con el fin de ejercer de forma efectiva un control del contenido de ingresos y gastos; las Memorias explicativas de los objetivos de cada Programa, gasto de inversión diferida en el tiempo, operaciones financieras de créditos asignados a cada ministerio, organismo, ente, Seguridad Social, sociedades y entidades. Se trata, ni más ni menos, de que se ponga en marcha una oficina presupuestaria para evitar lo que es, desde nuestro punto de vista, una opacidad intolerable por parte de quien ejecuta estos presupuestos, el Gobierno.

La enmienda número 204, de adición, pretende que a partir de este ejercicio presupuestario el Gobierno adjunte a los documentos presupuestarios una memoria de beneficios sociales que comprenda el conjunto de bonificaciones, exenciones o subvenciones que afecten a los ingresos de las distintas administraciones públicas y, en particular, de la Seguridad Social. Por tanto, pretende conocer de forma ordenada la pérdida de recursos y el coste de oportunidad de estas políticas.

Por lo demás, señorías, doy por defendido el conjunto de las enmiendas restantes.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cámara.

Para la defensa de las enmiendas números 3 y 4, del senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas en su nombre, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu, para la defensa de las enmiendas números 874, 875 y de la 928 a la 930.

El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.

Antes que nada quiero anunciar que voy a defender todas las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario al articulado. Lo voy a hacer así porque la mayor parte de ellas son repetición de las que se presentaron en el Congreso y que no fueron aceptadas, pero entendemos que vale la pena seguir con su defensa.

En cualquier caso, voy a hacer referencia especial a las que hemos presentado nuevas y, en particular, a la enmienda número 874, al artículo 11, que propone nada más y nada menos que «El Gobierno comunicará al Congreso y al Senado durante el primer semestre de 2004 el nivel de ejecución de todos y cada uno de los proyectos de inversión correspondientes al capítulo 6 contempladas en los anexos de inversiones reales, tanto de los Ministerios como de los Organismos Públicos, de la Seguridad Social, de las Sociedades Mercantiles Estatales, de las Fundacio-

nes Estatales, de las Entidades Públicas Empresarias y restantes Organismos Públicos». Esto puede parecer que no tiene excesiva importancia, pero desde nuestro punto de vista es la clave de la transparencia de unos presupuestos.

En la dinámica que seguimos en las Cortes Generales de España estamos acostumbrados a debatir los presupuestos que se van a ejecutar, y muy poco acostumbrados a debatir los presupuestos que se han ejecutado. Pero entiendo que esto debemos cambiarlo y les voy a decir por qué. La primera vez que yo oí hablar del modelo escandinavo de los presupuestos me sorprendió, pero entendí que aquello tenía sentido. En la mayor parte de los países escandinavos se producen dos grandes debates. Uno que define cuánto dinero se puede gastar el Gobierno, un debate importante que se produce antes de la ejecución del presupuesto del año que viene. Y un segundo debate producido después de que se haya ejecutado el presupuesto, en qué se ha gastado el Gobierno el dinero que podía gastar. Pues bien, aquí solamente debatimos en qué se va a gastar el Gobierno el dinero. Lo debatimos a nivel de proyectos, en qué proyectos se va a gastar el Gobierno el dinero. Y nosotros, los grupos de la oposición, hacemos enmiendas intentando modificar los proyectos en los que el Gobierno se va a gastar el dinero. Es un intento inútil por dos motivos, el primero porque muere en manos de la mayoría, que decide que los presupuestos están bien tal como están, lo cual me parece legítimo; pero mucho más inútil porque luego el Gobierno hace aquello que quiere.

Y no lo digo porque sí. Señorías, este senador lleva años preguntando por todas y cada una de las obras contempladas en el capítulo de inversiones reales en Cataluña. Desde la ejecución de los presupuestos del año 1997 yo he preguntado por la ejecución de las obras. Y tengo respuestas, este año tenemos respuestas. Voy a decirles a ustedes la respuesta sobre la ejecución de las obras referidas al año 2001. En el año 2001 en los Presupuestos Generales del Estado había 158 proyectos referidos a Cataluña. De los 158 proyectos, en 57 las respuestas del Gobierno me dicen que éste no se gastó ni un real —ni una peseta porque era todavía en pesetas— en estos proyectos. Exactamente en más del 36 por ciento de los proyectos referidos a Cataluña, el Gobierno no se gastó, no aquello que había presupuestado, ni siquiera una peseta. Mucho más espectacular es la inversión del Ministerio de Medio Ambiente referida a costas. En el año 2000 en medio ambiente y, concretamente, en costas se había contemplado una inversión para Cataluña de 1.093 millones y se gastó cero pesetas. En el año 2001 había presupuestados 1.639 millones de pesetas y se gastaron 262 millones.

Pero, además, es que en estas respuestas el Gobierno me dice que el presupuesto inicial de esta obra era de 50 millones y en una modificación presupuestaria ha dicho que aquí se podía gastar cien. Bien, en el debate presupuestario del año anterior había enmiendas que pretendían modificar esta partida y fueron rechazadas por el grupo mayoritario; después el Gobierno lo hace porque quiere. Yo no voy a discutir la capacidad del Gobierno para hacerlo. Me parece bien que el Gobierno decida dónde y cómo puede gastar el dinero que hay que gastar, pero hay

casos que llaman la atención. Por ejemplo, respecto a un proyecto de ejecución de obra en la N-202, entre Lleida y Els Alamús, esta partida presupuestaria aparece por primera vez en los Presupuestos para el año 1997 con 18.700.000 pesetas, reaparece en 1998 con 76 millones de pesetas; lo mismo sucede en 1999, con 176 millones de pesetas; en el año 2000 se asignan 1.476 millones de pesetas y en el año 2001, 276 millones. Y año tras año, la respuesta es la misma: nos hemos gastado cero pesetas, cero patatero. No se han gastado ni un real. Pero es normal, porque si uno además cuadra el proyecto de inversiones reales con el «Boletín Oficial del Estado» descubre que la obra ha salido a licitación el 12 de enero de 2002 y la publicación de su adjudicación el 15 de octubre de 2002. Y además todavía hoy no se ha gastado un real. A lo mejor, me dirán que los topógrafos andan por allá y gastan.

¿Qué pretende la enmienda de la que estoy hablando? Saber en qué se ha gastado el dinero el Gobierno —insisto, saber en qué se ha gastado—. Negar que las Cámaras, el Congreso y el Senado, puedan conocer en qué se ha gastado el dinero es oscurantismo, es lo contrario de la transparencia. Y eso es lo que va a hacer el grupo de la mayoría y sus secuaces si no votan a favor de esta enmienda. Van a votar a favor de que el Gobierno pueda hacer lo que quiera y las Cámaras no lo sepan.

Estoy de acuerdo en que el Gobierno haga lo que quiera, me parece bien, porque algunas de las obras para las que figura una dotación en los presupuestos después no se pueden ejecutar y el Gobierno tiene la obligación de gastarse el dinero. Por tanto, me parece bien que se lo gaste, pero que diga dónde se lo ha gastado.

Este año hemos llegado a la filigrana de que aquellas obras generales relativas a arreglos de carreteras, que antes eran respecto de toda España y hace unos años aparecieron por comunidades autónomas, ahora en el anexo de inversiones reales aparecen por provincias. Y esto sólo ha servido para que el senador por Tarragona —en mi caso— diga que el presupuesto para obras se ha aumentado en tanto en dicha provincia. Evidentemente, estas partidas el año pasado figuraban para Cataluña y hace cinco años para España; ahora son para Tarragona. ¿Cuánto se gastará? No lo sé, porque cuando un senador pregunta cuánto se ha gastado el Gobierno en obras de arreglo de carreteras en Cataluña, se le contesta que la partida era de 17.000 millones. Pero esa es la partida para España y yo pregunto respecto de la que se ha referido concretamente para Cataluña. Entonces hay que preguntar y volver a preguntar y al final uno puede llegar a saberlo o no. Por tanto, lo que esta enmienda pretende es saber. Pero el Gobierno lo hace y no tiene ningún reparo en hacerlo. Y me parece bien.

Les voy a leer lo que dijo el secretario de Estado de Aguas en la comparecencia para la explicación de los Presupuestos: Como usted bien conoce, en el litoral mediterráneo, particularmente en la primavera de este año y en el invierno del año pasado, ha habido un número muy importante de temporales. Concretamente, en la costa de Cataluña ha habido hasta nueve temporales consecutivos, que han azotado el litoral y que han producido daños impor-

tantes en el dominio público marítimo-terrestre. Eso ha ocurrido en un momento puntual, pero también en el año 2001 se produjo una situación similar, que es un elemento, sin duda, muy importante para determinar estas situaciones. Concretamente, en infraestructuras de emergencia para resolver estas problemáticas planteadas en estos últimos doce meses, el Ministerio de Medio Ambiente ha invertido más de 50 millones de euros. Si recordamos que el presupuesto de la Dirección de Costas para el año 2002 es de 150.650.000 euros, estamos hablando de una inversión muy importante en obras de emergencia, que supone algo más de un tercio del presupuesto total para resolver las problemáticas producidas en el litoral en las Islas Baleares, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía y en Murcia. Igualmente, se han producido otras actuaciones que hemos tenido que desarrollar en la Comunidad Autónoma de Canarias, y alguna pequeña actuación, ya muy aislada, en Galicia y en el País Vasco. Pero esta inversión estaba centrada sobre todo en el litoral de la comarca del Maresme, en Cataluña, donde los efectos de estos temporales continuados se hicieron notar.

Sin ninguna duda, señoría, eso ha modificado las inversiones presupuestarias del ministerio, pero ahí tiene usted la respuesta. La inversión que se ha realizado ha sido incluso más importante que la que estaba prevista. ¡Si me parece bien! Lo que no me parece bien es que no me lo digan. Lo que no me parece bien es que el Gobierno no sea capaz de explicar en qué se ha gastado el dinero previsto en el capítulo. Ésta es la enmienda en la que tengo mucho interés.

La otra enmienda distinta de las que hemos presentado en el Congreso es consecuencia de las enmiendas que ha introducido el Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Popular ha introducido unas enmiendas consecuencia del acuerdo con los sindicatos, que nuestro grupo votó favorablemente en la ponencia porque queremos respetar el acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno. Pero, sin que venga a cuento, sin que nosotros sepamos por qué, en el artículo 20 se añade como básico el punto 2 del artículo 20. Este punto 2 no estaba reflejado en absoluto en los acuerdos entre los sindicatos y el Gobierno, y no entendemos por qué el Grupo Parlamentario Popular impone esta medida, coartando la libertad de las otras administraciones públicas, fundamentalmente la de los ayuntamientos y la de las comunidades autónomas. Por eso nosotros vamos a votar en contra de la introducción que se ha producido en el punto 5 del artículo 20 de los Presupuestos Generales del Estado. (*Aplausos en los escaños de los grupos parlamentarios Entesa Catalana de Progrés, Mixto y Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aleu.

Para defender el voto particular mantenido por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, enmiendas números 1690 a 1695, tiene la palabra el senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Nuestro grupo mantiene seis enmiendas, todas al anexo II, en las cuales solicitamos incorporaciones de varios conceptos en calidad de créditos ampliables, que ahora voy a comentar.

El objeto de la enmienda 1690 es incorporar una nueva letra al Anexo II, Primero.Uno, para prever la posibilidad de incrementar los salarios de los trabajadores al servicio de las administraciones públicas y con ello compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios. Ya he comentado anteriormente en el debate de los vetos que ése era un objetivo que ya perseguía nuestro grupo desde el Congreso de los Diputados, que ha sido tenido en cuenta por el Gobierno, pero sería positivo incorporar este crédito ampliable para poder hacer frente a este objetivo.

Las enmiendas 1691 y 1692 tienen por objeto declarar ampliable un crédito destinado a compensar a las concesionarias de autopistas con el fin de posibilitar una reducción del precio del peaje equivalente al incremento que comportará la subida del tipo del IVA. Como recordarán, a instancias de Convergència i Unió se decidió aplicar el IVA reducido del 7 por ciento en los peajes de las autopistas y derivado de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha tenido que volver a aplicar el tipo normal del 16 por ciento. El incremento que ello va a representar debe ser compensado, y por eso solicitamos en estas dos enmiendas que se declare ampliable un crédito destinado a este objeto.

En cuanto a la enmienda 1693, tiene por objeto también, por medio de declaración de crédito ampliable, garantizar los recursos a las corporaciones locales ante la inminente supresión del IAE, como veremos posteriormente en este Pleno cuando tratemos la reforma de la Ley de Haciendas Locales.

La enmienda 1694 tiene por objeto declarar también ampliable en este caso la partida destinada al convenio de infraestructuras de Barcelona para el período 2001-2005.

Con ello creemos que se pueden cubrir las necesidades previstas en este convenio, tanto las derivadas del presupuesto del año 2003 como la menor aportación que se ha producido de forma efectiva en el ejercicio 2002.

Por último, la enmienda número 1695 tiene por objeto ampliar la partida destinada al nuevo contrato-programa para el período 2002-2005 entre la Administración general del Estado y la Autoridad del Transporte Metropolitano para la financiación del transporte público de viajeros en la Región Metropolitana de Barcelona.

En referencia a estas dos últimas enmiendas, los números 1694 y 1695, existe por parte de nuestro grupo sendas enmiendas de modificación del estado de gastos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para el voto particular mantenido por el Grupo Parlamentario Socialista sobre las enmiendas números 1263 y 1313 a 1315, tiene la palabra el senador Mesa.

El señor MESA CIRIZA: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para la defensa de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista al

Anexo I, al Anexo II y al Título I del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

En concreto, son las enmiendas números 1313, al Anexo I, y 1314, al Anexo II, que pretenden introducir modificaciones en coherencia con la enmienda por la que se crea un nuevo programa en la Sección 14, concretamente el Programa 211.B, que tiene por objeto dar cumplimiento a algunas de las recomendaciones recogidas en los informes del Tribunal de Cuentas.

En cuanto a la enmienda número 1315, también al Anexo II, pretende otorgar la categoría de ampliable al crédito referido a transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro.

Por último, haré mención a la enmienda número 1263, al artículo 12, apartado dos, del Título I, De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones.

Mediante esta enmienda mi grupo pretende modificar dicho apartado y que su redacción sea la siguiente: «El Estado aporta al sistema de la Seguridad Social 900.000 miles de euros para atender a la financiación de los complementos para mínimos de las pensiones de dicho sistema.»

Para nuestro grupo avanzar en la correcta financiación en las prestaciones no contributivas, descargando así a las cotizaciones sociales de las obligaciones indebidas y posibilitar la separación de fuentes exige aumentar la partida de referencia, al menos para dar cumplimiento a los propios acuerdos a que llega el Gobierno. Hablamos presupuesto tras presupuesto de que ni tan siquiera se recoge en ellos aquello a lo que el Gobierno se compromete. En este caso estamos haciendo referencia al Acuerdo para la mejora y el desarrollo de la protección social de abril de 2001.

Nuestro grupo entiende que con esta enmienda se da una circunstancia muy peculiar. Dentro de los muchos errores que presenta este presupuesto —no quiero entrar en un debate más agrio puesto que ya lo hemos tenido en la discusión previa de los vetos—, sin duda uno de ellos es el de aferrarse con un concepto de fundamentalismo al déficit cero. Creo que es un error, y sigue creyéndose que puede lograrse el equilibrio presupuestario gracias a una serie de circunstancias, como el hecho de que la Seguridad Social se esté convirtiendo en los últimos años en el único factor de estabilidad macroeconómica de esta sociedad, porque cubre con cotizaciones lo que debería cubrirse con impuestos, porque con cargo a la Seguridad Social se cubren una serie de tareas que deberían correr a cargo de los presupuestos del Estado, es decir, que estamos aprovechando un superávit de la Seguridad Social que podríamos reinvertir en los compromisos que se adquieren para dar cumplimiento a esos acuerdos y, sin embargo, lo estamos derivando a hacer algo que se debería hacer con aportación de los presupuestos del Estado.

Es una intención que tratamos de trasladarles año tras año y seguramente alguna vez vamos a conseguir convencerles.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. *(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para un turno en contra tiene la palabra el senador Azuara.

El señor AZUARA CAROD: Muchas gracias, señor presidente.

Empiezo refiriéndome a las enmiendas del senador Cámara Fernández. Con la enmienda 202 se propone que se modifique el presupuesto de ingresos para el ejercicio de 2003 de varios entes aportando nuevas cantidades, lo que supondría incrementar lo inicialmente presupuestado, y justifican esos aumentos presupuestarios mediante cambios en el IRPF, lo que supondría un aumento de ingresos de 4.809 millones de euros como consecuencia de las circunstancias personales y familiares, es decir, deducción por gastos de custodia de hijos, por alquiler de la vivienda habitual y por aportaciones a planes de pensiones. Aunque esto no se concreta en su contenido, se deduce que se pretende que se actúe en todos los casos sobre la cuota íntegra, la integración de las ganancias y pérdidas patrimoniales en la base del impuesto, la supresión por doble imposición interna, la elevación de los tipos y el número de tramos de la tarifa, el fortalecimiento del régimen de transparencia fiscal y el aumento del límite para la plena exención de los rendimientos de trabajo. Estos cambios serían contrarios a la actual estructura del impuesto y a las modificaciones que en el mismo se introducen con la reforma parcial que entrará en vigor el 1 de enero de 2003. Por las razones expuestas, no vamos a aceptar esta enmienda.

La número 203, que propone crear un nuevo artículo 2 bis, de título transparencia en los Presupuestos Generales del Estado, tampoco podemos aceptarla por cuanto que los presupuestos, con sus ingresos y gastos, son totalmente transparentes y asequibles en cada una de sus secciones, organismos, Seguridad Social, sociedades y entidades. Por tanto, repito, tampoco vamos a aceptarla.

Con la número 204 también seguimos esa misma línea de no aceptación por cuanto que el artículo 134.2 de la Constitución Española establece que los Presupuestos Generales del Estado consignarán el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos. Esto se cumple anualmente con la documentación que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado al tiempo que el presupuesto otorga información suficiente en relación con el asunto planteado. En consecuencia, no se considera necesaria la inclusión de una memoria explicativa que integre los beneficios sociales que afectan a las cotizaciones sociales.

La enmienda número 205 tampoco vamos a aceptarla. La Ley 22/2001, de 27 de diciembre, en consonancia con las leyes del fondo de compensación interterritorial anteriores, define claramente la inversión civil nueva, que se tomará en consideración para el cálculo de la base del fondo como aquélla realizada directamente por la Administración del Estado y sus organismos autónomos excluyendo el sector público empresarial. En consecuencia, no quedarían excluidas aquellas inversiones que se realicen bajo la denominación de peaje en sombra ni tampoco las inversiones realizadas por la compra de activos financieros. Por otra parte, la cuantía total de los fondos de compensación interterritorial cumple el porcentaje del 35 por

ciento de la base de cálculo de la inversión pública fijado en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del año 1992.

La número 206 propone que se sustituyan determinadas referencias cifradas en los puntos Uno.1 y Uno.2 del artículo 6 y relativos a los presupuestos del Ente Público Radiotelevisión Española y de Televisión Española Sociedad Anónima y Radio Nacional de España S. A., aumentando sus cuantías al objeto de dotar adecuadamente estas partidas presupuestarias, que tendrán su correspondiente reflejo en los estados de ingresos del Ente Público y de las sociedades mercantiles estatales correspondientes. No está motivada en la propia enmienda la razón de estos aumentos propuestos, que deben recogerse asimismo en los presupuestos del Ente Público Radiotelevisión Española y sus sociedades mercantiles estatales. En consecuencia, senador Cámara, no podemos aceptarle tampoco esta enmienda.

La enmienda 207 pretende eliminar el carácter finalista de los fondos transferidos de la agencia de infraestructura de equipamiento de la defensa del Estado. Sin embargo, la supresión propuesta del artículo 10.uno.9 supondría dejar únicamente sin competencia al Ministerio de Hacienda para autorizar la generación de crédito en el Ministerio de Defensa, sin que ello implique eliminar la facultad que el artículo 71.3 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social otorga a la gerencia de infraestructura de equipamientos de la defensa para remitir fondos al Estado y atender las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la oportuna generación de crédito.

Por otra parte, los fondos que se pueden remitir al Ministerio de Defensa no proceden de ingresos irregulares, tal como se expone en la motivación de la enmienda, sino que provienen de la enajenación de bienes inmuebles que son puestos a disposición del organismo por el departamento para su administración y disposición a título oneroso, según se dispone en el artículo 71.2.c de la citada Ley 50/1998. Por supuesto, no aceptamos la enmienda.

La enmienda 208 tampoco es aceptada, en consonancia con lo manifestado en relación con la anterior.

La enmienda 209, que también está relacionada con las dos anteriores, no la aceptamos por incidir en la Ley 50/1998. Tampoco estamos de acuerdo en que manifiesten que el presupuesto de Defensa no es transparente y que no saben cuánto nos gastamos en cañones o en mantequilla.

Por todo ello, señor Cámara, no aceptamos estas enmiendas propuestas por su grupo.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el señor Quintana González, se propone un incremento sobre las retribuciones del sector público del 5,5 por ciento; es decir, pasar del 2 por ciento propuesto por el Gobierno al 5,5 por ciento, justificando la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido este personal.

En la enmienda número 3 del senador Quintana se propone eliminar las competencias de autorizaciones de crédito para financiar la movilidad del personal de la administración. No podemos aceptar dicha enmienda, puesto que el acuerdo entre la administración y los sindicatos

aprobado por el Gobierno el 15 de noviembre contiene, en el título relativo a las medidas dirigidas a aumentar la eficacia y la calidad en la prestación de los servicios, diversas precisiones sobre movilidad forzosa del personal, por lo que no parece procedente impedir las transferencias de crédito para hacer efectivas unas medidas que se han acordado previamente con las organizaciones sindicales. Las precisiones a las que se refiere el señor Quintana serán incorporadas al ordenamiento jurídico, a través de la ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para el año 2003. Por lo tanto, esta enmienda tampoco va a ser aceptada. *(El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.)*

La enmienda número 4 del señor Quintana también pretende evitar la autorización de generaciones de crédito por servicios prestados por otros ejércitos de países integrados en la OTAN. Esta enmienda tampoco la aceptamos por cuanto el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en su artículo 69, autoriza al ministro de Defensa a aprobar las generaciones de crédito en los supuestos contemplados en los apartados a) y b) del artículo 71. El artículo al que se refiere la enmienda pretende, simplemente, ampliar esta competencia al caso que nos ocupa, toda vez que ello permite una mayor agilidad en el funcionamiento operativo de los ejércitos.

Paso a las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Me referiré a las números 874, 875 y 931, que han sido defendidas por el senador Aleu.

La número 874 propone la necesidad de que las cámaras tengan conocimiento del nivel de cumplimiento o ejecución de las inversiones públicas durante el ejercicio presupuestario. El señor Aleu ha dicho que es difícil saber a dónde va a parar la dotación de los proyectos de inversiones que no se realizan, y creo que tan sólo es cuestión de ver la sección correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado del Estado. Además, usted ha manifestado que en algún caso le han dado información, aunque no le haya convencido.

La información que el Gobierno debe remitir a las cámaras viene desarrollada en el artículo 131 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y en la Orden del Ministerio de Hacienda, de 23 de mayo de 2002, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado. En dicha instrucción se establece que se proporcionará información sobre la ejecución del presupuesto de gasto, desagregado por sección presupuestaria, función y artículo. Por tanto, las cámaras tienen información sobre el nivel de cumplimiento de las inversiones públicas con el detalle señalado. Por otro lado, proporcionar información sobre el grado de ejecución de todos y cada uno de los proyectos de gasto de las inversiones reales puede resultar ineficaz debido a la exhaustiva y amplia información que ello supondría. Asimismo, consideramos claramente definido el período al que se refiere la información que se debe proporcionar durante el primer semestre del año siguiente al de los presupuestos. De cualquier forma, el Gobierno da respuesta a solicitudes puntuales de información sobre la ejecución de los proyectos de gasto efectuados por los miembros de las cámaras.

En la enmienda número 875 se propone que la aportación del Estado al Sistema de la Seguridad Social para atender la financiación de los complementos para mínimos de las pensiones de dicho sistema sea de 900.000 miles de euros, en lugar de los 606.350 miles de euros que se asignan en el artículo 12, apartado dos. La aportación del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social se cifra, efectivamente, en 606.350 miles de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2003. Con dicho importe se da respuesta al acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social, en el que se estableció como límite máximo el de 12 años para que el coste total del mencionado complemento quedara financiado íntegramente por el Estado. En consecuencia, no podemos aceptar esta enmienda.

La enmienda 931 tampoco es aceptada, en consonancia con lo expuesto respecto de la enmienda a la que me acabo de referir.

Y paso ya a los anexos. A éstos el Grupo de Entesa Catalana de Progrés presenta las enmiendas números 928, 929 y 930, proponiendo todas ellas la creación de nuevos programas o ampliaciones de crédito. El Grupo Popular no va a aceptar estas enmiendas. Independientemente de que están relacionadas con las Secciones 14 y 17, que serán abordadas por los senadores que defiendan dichas secciones en lo referente a los créditos ampliables, se trata de un traslado de la propia ley general de presupuestos, por lo que no procede realizar los citados créditos ampliables. Lo que se debería hacer es dotar debidamente las partidas presupuestarias que se pretenden ampliar y, en todo caso, si a lo largo de la ejecución presupuestaria esas dotaciones no fueran suficientes se podría solicitar la ampliación a través de modificaciones dentro de la correspondiente sección, ya que de esa manera se consigue mantener el equilibrio presupuestario evitando déficit no controlados.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* números 1690 a 1695, la enmienda 1690 propone la posibilidad de incrementar los salarios de los trabajadores al servicio de las administraciones públicas al objeto de compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo. Pues bien, al igual que lo que hemos manifestado al hablar de la enmienda número 930, de Entesa, quiero hacerle observar, señor Cambra, que tras los acuerdos del 13 de noviembre entre la administración y los sindicatos para la modernización y mejora de las administraciones públicas ha sido informada favorablemente una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado a través de la cual se incrementa un crédito específico con el que hacer frente al citado acuerdo. Por esa razón no procede aceptar la mencionada enmienda.

Por lo que respecta a las enmiendas números 1691 y 1692, que pretenden compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de tarifas de peaje, debo manifestar a su señoría que el Consejo de Ministros del pasado 5 de diciembre ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley sobre concesión de tres suplementos de crédito y un crédito extraordinario por importe de 43 millones 681.177 euros para compensar a las sociedades concesionarias de

autopistas de peaje por la pérdida de ingresos derivada de la rebaja de las tarifas de peaje en un 7 por ciento. Por todo lo expuesto, tampoco aceptamos estas enmiendas, ya que lo que en ellas se pretende está recogido en el citado proyecto de ley.

En cuanto a la enmienda 1693, referida a las corporaciones locales, sobre liquidación y nuevo modelo de financiación local, debo remitirle al acuerdo mayoritario y unánime alcanzado por la Federación Española de Municipios y Provincias con los ayuntamientos, donde se recoge la compensación económica por la eliminación tan acertada del Gobierno del Partido Popular del Impuesto sobre Actividades Económicas, que ratifica una vez más la rebaja de impuestos de la que en este caso van a beneficiarse más de dos millones de españoles, y por ello queda justificada nuestra no aceptación de la citada enmienda.

Tampoco vamos a aceptar las enmiendas 1694 y 1695, pues lo que se pretende en ellas es una mayor dotación económica que, si ha lugar, deberá plasmarse en el correspondiente convenio a suscribir entre el Gobierno y la Generalitat, ya que esta cuestión está así recogida en dichos convenios.

Paso ya a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En la número enmienda 1263 el señor Mesa plantea una modificación para que la aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar los complementos para mínimos de las pensiones sea, en el ejercicio 2003, al igual que plantea la Entesa, de 900.000 miles de euros en lugar de los 606.350 miles de euros. Esta enmienda no podemos aceptarla por el mismo concepto que hemos argumentado respecto de la número 875, pues, como ya he dicho, la aportación del Estado se cifra en los Presupuestos Generales del Estado en 606.350 miles de euros, y con dicho importe se da respuesta al acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social, donde se estableció como límite máximo el de 12 años para que el coste total de mencionado complemento quedara financiado íntegramente por el Estado.

En cuanto a las enmiendas a los Anexos I, II y VII números 1313, 1314, 1315 y 1316, que provienen de la Sección 14 las dos primeras y de la Sección 19 las últimas, y que serán debatidas en las mencionadas secciones, vuelvo a reiterar que tanto las dotaciones, como las ampliaciones e incorporaciones son un traslado de la propia ley general de presupuestos. Lo que se debería hacer es dotar debidamente las partidas presupuestarias que pretenden modificarse o ampliarse, y en todo caso, si a lo largo de la ejecución presupuestaria éstas no son suficientes, se puede, como he dicho, solicitar la ampliación, dotación, etcétera, a través de las correspondientes secciones, ya que de esta manera se consigue mantener el equilibrio presupuestario, evitando los déficit no controlados.

Nada más, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Azuara.

Pasamos al turno de portavoces. En primer lugar tiene la palabra el senador Cámara por el Grupo Parlamentario Mixto.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos empezando el debate del articulado y mañana discutiremos las secciones. A este respecto quisiera hacer una observación, y es que para huelga a la japonesa está la que yo puedo hacer con mis enmiendas. No obstante, pienso sinceramente que el debate ya se ha realizado en parte, sobre todo respecto de aquellas enmiendas que ya se han debatido en el Congreso de los Diputados, y los senadores del Grupo Parlamentario Mixto consideramos que es suficiente con mencionar algunas enmiendas que fijen nuestra posición. Eso sí, si ustedes van a respondernos enmienda por enmienda, incluso sobre aquellas que no hemos defendido, como digo, hacemos la huelga a la japonesa, que la podemos hacer muy bien porque tenemos un montón de enmiendas para ello. Así pues, señorías, les pido moderación a fin de agilizar el debate, que no significa que se limite la libertad lógica de cada uno para expresar lo que quiera. Ésta es una sugerencia que les hago para evitar mosqueos innecesarios.

No obstante, simplemente quisiera contestar a su señoría diciéndole que, efectivamente, y como no podía ser menos, tenemos una política distinta, también en materia de ingresos y gastos, motivo por el que presentamos la primera enmienda en este grupo como es lógico. Pensamos, por ejemplo, que existe otro IRPF, otro sistema impositivo diferente y alternativo. Creemos sinceramente que la tributación de las rentas del trabajo tienen que compensarse en beneficio en relación con las del capital.

Quizá sea ésta una posición de izquierdas. Ustedes ya nos han dicho que no somos modernos, que somos antiguos, pero no importa, en mi opinión defendemos los intereses de la mayoría de la sociedad; cosa distinta es que contemos con los votos para representarla mejor en el Senado, pero mientras eso no ocurre, seguiremos defendiendo lo que defendemos en Izquierda Unida: un nuevo modelo impositivo, distinto y diferente. Señor Caneda, en el debate anterior me contestó usted diciendo que hoy lo moderno es el tema del IVA, impuesto indirecto, modernizado, porque es más progresivo que el que nosotros planteamos. Como yo no creo eso, seguimos manteniendo esa posición y la primera enmienda que hemos presentado engloba el conjunto de las enmiendas que he defendido o he dado por defendidas en el conjunto de mi exposición.

Nada más y muchas gracias y espero que se atienda a la sugerencia de evitar la contestación a enmiendas que no defendemos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Cámara.

Me imagino que los grupos parlamentarios habrán tomado buena nota de su sugerencia.

¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)

Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu.

El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.

Intentando hacer caso al señor Cámara y para no cansar, he estado a punto de no intervenir, pero aceptar como válido el argumento de que una información exhaustiva y amplia puede resultar más ineficaz ofende a la inteligencia, ofende a la razón. Yo ya he venido a este Pleno con el convencimiento de que ustedes no iban a aceptar ninguna enmienda y es una posición legítima. Ustedes dan su apoyo al Gobierno y tienen la responsabilidad y me parece muy bien, pero al asesor que le ha escrito eso jubílenlo, porque no se puede decir que una información exhaustiva y amplia puede resultar ineficaz, es lo contrario.

Yo le hago otra pregunta, le invito a que se mire el 90 por cien de las enmiendas presentadas a las secciones, son de modificación de proyectos, no de artículos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿El ridículo? ¿Es eso lo que pretende decir la persona que ha escrito eso, que cuando pretendemos modificar un proyecto estamos haciendo no sé qué? No. Además, yo no le pido que modifiquen eso, lo que pido es que informen y la información nunca es ineficaz, siempre ayuda a un concepto básico para la consolidación de la democracia, que es la transparencia, que todo el mundo sepa qué se ha hecho con su dinero, los ciudadanos deberían saber qué se ha hecho. Usted me dice que nos quedamos a nivel de artículo 60 ó 61, yo le digo que dé un paso más, vamos a darlo en el Capítulo VI a nivel de proyecto, vamos a decir qué se ha gastado y en qué en cada proyecto. No estamos pidiendo nada más. Por favor, el argumento de que una información amplia y exhaustiva puede resultar ineficaz me parece bastante impresentable.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Aleu.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Mesa.

El señor MESA CIRIZA: Gracias, señor presidente.

Brevemente, para fijar la posición de mi grupo respecto a este título, relativo a la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones. Yo me quedo más con la argumentación que con la defensa que en otras ocasiones se ha hecho de este título, incluso la que se ha hecho en el Congreso de los Diputados, que es medianamente acertada, de tratar de hacer referencia a este título donde se fija el cómputo de ingresos y de gastos y definirlo como donde se trazan las líneas maestras en las que se basa el presupuesto del Estado. En esa línea, después del debate de los vetos, les quedará a ustedes claro cuál es la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre esas líneas maestras, sobre esa valoración que hacemos del proyecto de presupuestos y, por tanto, comprenderán que nos vamos a oponer y que vamos a votar en contra.

No quiero insistir y echar más leña al fuego, pero no compartimos absolutamente nada. Una buena parte de la sociedad se ha pronunciado, incluso expertos de reconocido prestigio, diciendo que no se cree los presupuestos que presenta el Partido Popular. El Gobierno del Partido

Popular presenta unos presupuestos que no son creíbles, sus recetas económicas no tienen validez, cuesta trabajo hasta pensar que ustedes se las creen, ni cuando se habla de crecimiento económico, ni de inflación.

La verdad es que tiene sus pegas, se coja por donde se coja. Si además de ir perdiendo esa credibilidad, los ciudadanos pueden observar cómo sus problemas, que deberían intentar resolverse a través de los Presupuestos Generales del Estado, no se resuelven: ni lo está el problema de la vivienda, ni lo está el problema de la inseguridad, ni lo está el problema que ha surgido en las costas gallegas, por desgracia, con el «Prestige», ni lo está el problema del paro, ni el de la siniestralidad laboral, ni lo están tantos problemas, ¿para qué valen los presupuestos?

El señor Aleu ha dado un dato, en el que creo que tiene razón. Dice que se nos habla de inversiones que luego no se hacen, y tampoco se da información de por qué no se hacen, entonces, ¿cómo quieren ustedes que creamos en este presupuesto? Hablaba el señor Aleu de datos escalofriantes sobre Cataluña; no quiero darle datos todavía más tristes, pero es que en ese ejercicio de preguntar actuación por actuación, tengo que decir que la ejecución de los presupuestos del año 2001, ejercicio cerrado, para la provincia de Jaén, que es mi circunscripción, es del 27,7 por ciento. Díganme ustedes qué credibilidad pueden tener unos presupuestos cuando no tienen más que trampas y engaños desde el principio, y además el engaño máximo es que ni tan siquiera se cumple lo que figura en ellos.

Por tanto, comprenderán ustedes nuestro voto en contra. Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.

Para finalizar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Azuara.

El señor AZUARA CAROD: Muchas gracias, señor presidente.

Brevemente le voy a decir al señor Cámara que estoy de acuerdo en algunas de las cosas que él ha manifestado, pero también él tendrá que estar de acuerdo con nosotros en que proponen enmiendas cuando realmente esos temas están ya prácticamente recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, y además a través de acuerdos alcanzados entre la Administración y los sindicatos, precisamente para que no exista ningún problema. Eso quiere decir que de alguna forma hemos tenido la habilidad de llegar a esos acuerdos para que se plasmen en los presupuestos las cantidades que realmente tienen que consignarse.

En lo que respecta al señor Aleu, me ha dicho que no puede compaginarse una información exhaustiva con ineficacia. Yo creo que su señoría lo ha interpretado como le ha interesado, porque realmente yo he querido decir que muchas veces resultaría ineficaz la cantidad de información que habría que dar. Él ha hablado de casos puntuales en su primera intervención, y ha indicado que cuando ha querido enterarse de algo ha ido a la sección correspondiente y ha encontrado la información solicitada. Por tanto, tampoco hay que dar un detalle exhaustivo de todas esas

partidas. En este sentido, yo creo que los presupuestos son transparentes a más no poder, y creo que cuando se pide alguna información, se da puntual respuesta en todos los sentidos, y si no, a mí que me diga alguno de los senadores que han ido a pedir alguna información en la propia sección si no se les ha atendido y se les ha dado la respuesta oportuna.

¿Dónde se invierten los dineros que no se han gastado en la partida en que estaban consignados? Si ha ocurrido eso, posiblemente haya sido porque, si se ha hecho el proyecto en una fecha determinada, luego la subasta se ha producido prácticamente a finales de año, lógicamente ese año no se puede gastar ese presupuesto, y, por tanto, habrá ido a alguna otra partida de la propia sección o a alguna parte en que haya sido necesario, como se hace habitualmente en todos los presupuestos que hemos venido haciendo.

Al señor Mesa quiero decirle que nunca han estado, por supuesto, de acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular, pero lo que me parece de muy poca seriedad es que diga que los presupuestos no son creíbles, cuando realmente los únicos presupuestos que ha habido creíbles a lo largo de estos años han sido los presentados por el Grupo Parlamentario Popular, a partir de que gobierna, y además en estos tres últimos años hemos conseguido precisamente algo que era materialmente imposible que ustedes hubiesen conseguido: que los ingresos se equiparasen a los gastos y no hubiese déficit, y ése es un éxito que ustedes quisieran haberlo hecho anteriormente, y que también hubiese ido muy bien a todos los españoles.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.

Como saben sus señorías la votación de este título se pospone para mañana.

Pasamos al Título II, Capítulo I, artículos 13 y 14 y Anexos IV, V y VI.

Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, originariamente por el senador Quintana González. Para su defensa, tiene la palabra el senador Cámara por tiempo de tres minutos.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La doy por defendida.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Cámara.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Barahona.

El señor BARAHONA HORTELANO: Gracias, señor presidente.

Nosotros la damos por rechazada. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Barahona.

¿Algún portavoz desea intervenir? (Pausa.)

Título II
Capítulo II
(Artículos
15 a 17)
Título II
Capítulo III
(Artículo 18)
Título III
(Artículos
19 a 35)

Pasamos al Título II, Capítulo II, artículos 15 a 17, que no han sido objeto de enmiendas, así como el Título II, Capítulo III, artículo 18.

En consecuencia, pasamos al Título III, artículos 19 a 35.

En primer lugar, corresponde la defensa de las enmiendas números 210 a 227, de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el senador Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Voy a resaltar simplemente alguna enmienda que nos parece significativa como muestra de la posición de Izquierda Unida en este Capítulo III.

La enmienda número 210 básicamente pretende establecer un incremento retributivo que permita, además de compensar la inflación prevista para el año 2003 del 2 por ciento, resarcir a los trabajadores del sector público de esa desviación del 2 por ciento y, además, de la desviación que se está produciendo en el presente ejercicio de 2002 entre la previsión de inflación de los actuales presupuestos y la inflación real. Y es que a pesar de los acuerdos suscritos entre los sindicatos y la Administración éstos resultan insuficientes porque el fijo de incremento salarial sigue siendo del 2 por ciento. Respetando ese acuerdo, entendemos que se trata fundamentalmente de mejorar esta situación.

Asimismo planteamos una reivindicación histórica que Izquierda Unida viene repitiendo en los últimos ejercicios, consistente en establecer una cláusula de revisión salarial. Estos trabajadores no solamente no tienen derecho a la negociación colectiva típica y clásica, sino que también tienen el problema de que lo que se pacta puntualmente o se aplica directamente en los presupuestos basándose en unas previsiones de inflación tiene luego desviaciones, lo que conlleva una pérdida clara de poder adquisitivo, para unos funcionarios o trabajadores públicos más que para otros, pero en el cómputo global realmente tienen una situación bastante precaria. Yo he planteado muchas veces en el Senado modelos que se dan en Europa con el fin de poder contemplar esta posibilidad, modelos de negociación de los sindicatos con el gobierno o con los que ostentan las mayorías parlamentarias y, lógicamente, los acuerdos adoptados se llevan a los parlamentos. La cláusula de revisión salarial permitiría automáticamente tener en cuenta esa desviación de la inflación.

La enmienda número 213 pretende aclarar que las Administraciones están obligadas a convocar los puestos o plazas dotados presupuestariamente y ocupados interina o temporalmente. En la Sanidad tanto las plazas a convocar como la provisión de plazas han sido realmente un ejemplo —con sus más y sus menos, con sus pegas— de lo que se debe hacer en el conjunto de la función pública. Por tanto, se trata de suplir este vacío, porque las plazas ocupadas de forma interina o temporalmente son situaciones anómalas dentro de la función pública que en algunos casos alcanzan porcentajes enormes. Se intenta con ello reducir la temporalidad —que ya he dicho hoy al ministro Montoro que es

altísima en el ámbito público— y evitar la prolongación injustificada de situaciones transitorias que no se justifican, insisto, de ninguna manera. Por otra parte, con esta medida también se trata de ajustar la literalidad de la ley a lo dispuesto en la normativa en vigor.

La enmienda número 215 pretende que la Administración pública cumpla la legislación laboral vigente, reduciendo la precariedad, la inestabilidad y la carencia de derechos laborales. Los contratos temporales tienen que cumplir el principio de causalidad, principio que se eliminó hace un montón de años y que no se ha vuelto a recuperar. Esta enmienda crea un punto seis con la siguiente redacción: las Administraciones públicas evitarán la contratación precaria y fomentarán contratos que garanticen la estabilidad de los trabajadores. No contratarán con empresas de trabajo temporal o con sociedades prestatarias de servicios personalizados...

La enmienda número 216, al artículo 21, es de sustitución y adición y propone destinar una parte del incremento salarial, el 1 por ciento de las retribuciones íntegras, para mejorar las retribuciones de los colectivos más desfavorecidos, dentro de nuestra propuesta de no poder exceder del 6,5 por ciento. El valor del 1 por ciento se refiere a los funcionarios pero también al personal estatal de Correos y Telégrafos —enmienda 217—, así como a otros colectivos, como es el personal laboral del sector público.

La enmienda número 219 pretende eliminar la percepción del complemento de productividad por los altos cargos —ya la presentamos el año pasado— porque es un concepto incompatible con el propio carácter de alto cargo y que en la actualidad se ha convertido en un complemento fijo, independiente de la productividad. Estos colectivos deben reflejarse en el complemento específico. A tal fin se establece el mandato de que el Gobierno elabore una relación también de puestos de trabajo de altos cargos, donde se determine la cuantía de dicho complemento para cada puesto. También se establece un límite a las retribuciones, hoy altamente infladas de los presidentes, vicepresidentes o directores generales cuando ejerzan funciones ejecutivas de máximo nivel en los Entes y Entidades de Derecho Público.

La enmienda número 224 propone la participación de los funcionarios no incluidos en el régimen general de la Seguridad Social, en la financiación de la formación profesional en las diferentes modalidades establecidas y, por tanto, argumentamos el porqué.

Sin más, doy por defendidas el conjunto de las enmiendas, que son diecisiete.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Cámara.

Corresponde ahora las enmiendas números 6 a 34 del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el senador Quintana González.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.

Pasamos a la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto número 654, originariamente presentada por la senadora De Boneta y Piedra. El senador Cámara tiene la palabra.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: La doy por defendida.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.

Pasamos a las enmiendas 740 a 743 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Para su defensa, el senador Aurrekoetxea tiene la palabra.

El señor AURREKOETXEA BERGARA: Muchas gracias, señor presidente.

Las enmiendas 740, 741, 742 y 743 las podríamos dividir en dos grupos. En primer lugar, las números 740 y 741 plantean la supresión del apartado cinco de los artículos 19 y 20 respectivamente, porque entendemos que más que evitar la distorsión de la ordenación general establecida por el Estado, supone la alteración del orden constitucional de distribución de competencias y la reducción del margen de decisión para que podamos desarrollar una política propia. La supresión de la consideración como básica de tales normas es importante para que se pueda realizar esa política propia que demandamos.

Y en segundo lugar, las números 742 y 743 tienen el mismo objetivo, y es que no existe justificación alguna para que el incremento retributivo que se plantea para los altos cargos sea diferente al aplicado a otros colectivos dependientes también de los Presupuestos Generales para el año 2003. Por lo tanto, estamos disconformes y, sin abundar en más explicaciones porque también el senador Cámara ha aludido a ello, como no existe esa justificación, debiera someterse a los mismos planteamientos que se van a aplicar para los otros colectivos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Aurrekoetxea.

Pasamos a las enmiendas números 876 a 882 de Entesa Catalana de Progrés que están dadas por defendidas, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en relación con el punto 5 al artículo 20 modificado por la introducción de la enmienda número 1186 del Grupo Parlamentario Popular.

Corresponde ahora la defensa de la enmienda número 1670 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El senador Cambra tiene la palabra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Mantenemos una única enmienda mediante la que proponemos suprimir el apartado cinco del artículo 19 del proyecto de ley con el objetivo de eliminar el carácter básico del establecimiento de topes a los incrementos retributivos del personal al servicio de las administraciones públicas.

Ésta es una competencia que año tras año viene manteniéndose como exclusiva por parte del Estado y creemos que no se justifica seguir manteniendo esta limitación, ya que de esta forma lo que se hace es vaciar de competencias a las comunidades autónomas en un elemento muy importante de política económica, puesto que la remuneración del personal al servicio de las administraciones públicas es un elemento importante para poder desarrollar una política económica propia.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cambra.

Corresponde ahora la defensa de las enmiendas números 1264 a 1270, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en relación con el punto cinco del artículo 20 modificado por la introducción de la enmienda número 1186 del Grupo Parlamentario Popular.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Arjona tiene la palabra.

El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señor presidente.

Los presupuestos referidos al Título III sobre los gastos de personal en la Administración pública que nos llegan al Senado poco o nada tienen que ver con el proyecto presentado en el Congreso y la clave ha sido el acuerdo Gobierno-sindicatos que se ha producido en el ámbito de la Función Pública.

Nuestro Grupo ha venido insistiendo en los últimos años en la necesidad de llegar a ese acuerdo, pero el Gobierno no lo aceptó nunca y por ello hemos puesto sobre la mesa la pérdida de poder adquisitivo que han venido sufriendo en los últimos años los empleados públicos desde que gobierna el Partido Popular.

El Gobierno siempre ha negado que este hecho se estuviera produciendo y año tras año las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista se han rechazado en todo lo referido a gastos, retribuciones y plantillas del personal al servicio del sector público. ¿Qué ha ocurrido este año? Lo que ha sucedido es que hay elecciones y, por tanto, hay acuerdo.

En fin, saludamos este acuerdo pues no es ni más ni menos que lo que nuestro Grupo venía pidiendo desde hace varios años. Pero, ¿para qué ha servido el trámite parlamentario? ¿De qué sirve lo presentado por el Gobierno en la Ley de Presupuestos? ¿Se ha negociado e informado a las comunidades autónomas y a los entes locales? Pensamos que no es serio lo que se ha hecho con la presentación de estos presupuestos.

Hemos presentado la enmienda tanto este como otros años en la dirección que finalmente se ha acordado entre el Gobierno y los sindicatos y siempre se nos había dicho que

no. Sin embargo, ahora este acuerdo viene a decir sí a todo lo que se llevaba planteando desde hace varios años. Bienvenido sea. Nos alegramos de que rectifiquen, pero pensamos que no es ésa la forma.

Si existía y existe la necesidad de firmar unos acuerdos en la Función Pública no pueden ser buenos este año en el que hay elecciones y, sin embargo, no serlo otros años. La verdad es que los empleados públicos, como decía anteriormente, llevan varios años perdiendo poder adquisitivo. Las plantillas están congeladas hace años y la temporalidad se ha consagrado como práctica por mor del Gobierno popular. Bienvenido sea el acuerdo. El Gobierno ha hecho de la necesidad virtud que le han arrancado la sensatez y la política dialogante de los empleados públicos que año tras año venían pidiendo y reivindicando un acuerdo. De cualquier forma, en el Senado es el momento de plasmar esos acuerdos en la Ley de Presupuestos y decir claramente cuál es el aumento real de las retribuciones, si va a ser el 2 o el 3,3 por ciento —como se ha dicho—, no se puede camuflar más un acuerdo diciendo un día una cosa y al día siguiente lo contrario.

En efecto, éste será el primer año desde que gobierna el Partido Popular en que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo si se llevan a cabo los acuerdos tal y como han sido firmados. Eso lo quieren corregir a través de este acuerdo y, si así se hace, nos parece razonable.

Con nuestras enmiendas pretendemos que las retribuciones de todos los altos cargos, presidentes de empresas públicas y presidentes de sociedades estatales sean transparentes.

¿Por qué no se aceptan? ¿Es que hay algo que esconder? ¿Cómo es posible que aquí no conozcamos lo que gana el presidente de una sociedad estatal cuyo presupuesto aprobamos? Es curioso que, a menor transparencia, mayores retribuciones.

¿Por qué no se ha informado antes del acuerdo de forma clara, a los representantes de las comunidades autónomas y entes locales, un acuerdo que les afecta de forma muy importante, en cuanto a que son empleadores de funcionarios públicos en proporción, yo diría que de dos a uno, con el Estado español? Consideramos que esta forma de actuar no ha sido la más conveniente.

Paso a defender las enmiendas presentadas. La número 1264 lo es al artículo 20 y plantea que el número de plazas de nuevo ingreso debe ser el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos, ya que se puede producir un mayor deterioro de la calidad de los servicios que prestan las distintas administraciones públicas y restringir aun más las limitadas posibilidades de acceso al empleo de los jóvenes.

La número 1265, al artículo 20, apartado 3, se refiere a autorizar como oferta de empleo público la convocatoria de plazas vacantes de nuevo ingreso del personal de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, y en las mismas condiciones una convocatoria de plazas vacantes del Instituto Nacional de la Seguridad Social e Higiene en el Trabajo y al Instituto Nacional de Empleo.

Este incremento de plantilla se justifica para que, en el plazo de cinco años, dupliquen las existentes con el fin de luchar adecuadamente en el ámbito de la prevención de

riesgos laborales y de vigilancia de las condiciones de trabajo. Asimismo, también persigue la reforma y mejora del sistema nacional de empleo.

La número 1266 es al artículo 23 y se refiere a las retribuciones de los altos cargos del Gobierno y de la Administración general del Estado. Pretende que el importe máximo que podrá perseguirse por complemento de productividad no superará el 30 por ciento de las retribuciones establecidas en el apartado 2 de este artículo, así como que las cantidades percibidas por productividad sean de conocimiento público.

Se justifica por la debida proporcionalidad que debe guardar el concepto de productividad y la retribución total, así como el conocimiento por las Cortes Generales de estas retribuciones.

La enmienda número 1267, al artículo 23, se refiere a las retribuciones de los altos cargos del Gobierno y de la Administración general del Estado para que las Cortes Generales tengan un conocimiento exacto de las retribuciones que perciben los presidentes y directores generales de todos los entes del sector público estatal que no están concretamente determinadas en el Título III de este proyecto de ley.

La enmienda número 1268, al artículo 25, apartado 3, pretende una modificación en relación con los funcionarios interinos y sus retribuciones básicas y complementarias que correspondan al puesto que desempeñen referido a la percepción del concepto retributivo de trienios.

La número 1269 es de adición y pretende incrementar las retribuciones mínimas de los militares de tropa y marinería a 9.950 euros anuales, por considerar que la escasa cuantía actual es una de las causas de la baja tasa de incorporación, considerando que la medida propuesta incentivaría el acceso a las Fuerzas Armadas.

La enmienda número 1270, al artículo 35, se refiere a la contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones, y pretende que se informe al Parlamento y a las organizaciones sindicales representativas de las contrataciones realizadas por la Administración general del Estado con cargo a los créditos para inversiones.

Por último, mi Grupo Parlamentario defiende un voto particular al dictamen de la Comisión, por el que nos oponemos a las modificaciones introducidas por la enmienda número 1186, del Grupo Parlamentario Popular, al apartado 5 del artículo 20, ya que consideramos que el texto remitido por el Congreso de los Diputados era más adecuado y no invadía competencias de comunidades autónomas y de entes locales.

Doy por defendidas, en los términos expresados, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Arjona.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Primo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

La señora PRIMO ALBERT: Gracias, señor presidente.

Aunque voy a intentar seguir las normas de cortesía que tan claramente ha dejado marcadas el senador Cámara, realmente a esta senadora le va a ser casi imposible porque sus señorías han debatido prácticamente todos y cada uno de los artículos. Por ello, intentaré ser lo más breve posible, pero sin desatender el derecho de los distintos grupos parlamentarios, y de los senadores que les han representado, a conocer el porqué rechazamos determinadas enmiendas o el motivo por el que se han presentado otras y, concretamente, hago referencia a las enmiendas números 1185 y 1188, que se presentaron en ponencia al Título III.

En el Título III, de los gastos de personal, dentro del propio Capítulo I, el artículo 19 hace referencia a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. Se ha hecho especial referencia a la enmienda número 210, presentada por Izquierda Unida, a la enmienda número 1670, de *Convergència i Unió*, y a la 740, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, aparte de la 654, de *Eusko Alkartasuna* o los números 6 y 7, del BNG. En el caso de la enmienda número 210, se propone la modificación del incremento propuesto del 2 por ciento, hasta el 6,5 por ciento, para las retribuciones de todo el personal al servicio del sector público, justificándolo en la pérdida del poder adquisitivo sufrido por este personal a lo largo de los años. Mi grupo va a rechazar esta enmienda por cuanto considera que las masas salariales de los empleados públicos, con las mejoras adicionales de los colectivos específicos, han experimentado incrementos superiores a los del IPC real, tal y como ha quedado patente en los correspondientes estudios que se han puesto a disposición de los distintos sindicatos y cuya metodología ni siquiera éstos han cuestionado. Además, también se rechaza porque en el acuerdo firmado el 13 de noviembre pasado entre la Administración y los sindicatos —que fue aprobado el día 15 por el Gobierno—, en el título relativo a medidas de ordenación retributiva e incentivos salariales se contempla un incremento general de las retribuciones del 2 por ciento, que es el IPC previsto, además de otras medidas puntuales entre las que se pueden señalar la modificación de la estructura y cuantía de las pagas extraordinarias, con una incidencia generalizada para todo el personal de la Administración General del Estado. Por tanto, en base a estos planteamientos, vamos a rechazar también la enmienda número 6, presentada por el representante del Bloque Nacionalista Galego.

Las enmiendas números 7, 654, 1670 y 740, del BNG, *Eusko Alkartasuna*, *Convergència i Unió* y Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, respectivamente, además de la citada 210 de Izquierda Unida, pretenden la modificación del apartado 5 del artículo 19, que establece el carácter básico del límite de incremento de las retribuciones del personal del sector público. Señorías, mi grupo entiende que lo que se pretende es que prevalezca la reserva de ley contemplada por la Constitución Española en la fijación de las condiciones de empleo de los empleados públicos, siendo entre ellas de destacar el incremento retributivo anual y, por ello, se considera que debe ser el Parlamento quien fije dicho incremento con carácter gene-

ral y equitativo para todo el sector público, y que ello sea, además, compatible con la responsabilidad del Gobierno en la planificación general de la actividad económica. Además, señorías, esta opinión está contrastada y enjuiciada por el Tribunal Constitucional en base a las competencias estatales que se derivan del artículo 149.1.13^a y 156.1 de la Constitución, a través de las sentencias del Tribunal Constitucional 63/1998, 171/1996 y 103/1997, entre otras. Por tanto, quedan rechazadas.

Respecto al artículo 20, oferta de empleo público, se han nombrado las enmiendas números 741 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, 211 a 215 de Izquierda Unida y la 1265 del Grupo Parlamentario Socialista. El artículo 20 se refiere a la regulación de la oferta pública de empleo del conjunto del sector público. Desde 1996 se ha llevado a cabo una política restrictiva en la oferta de empleo público, con el fin de ajustar los recursos humanos existentes de la Administración Pública a las distintas necesidades reales del personal. Mi grupo parlamentario considera que el objetivo que se perseguía con la medida anterior se ha logrado en gran parte, al haberse producido el ajuste necesario en determinadas áreas. Y ahora, completando las políticas anteriores, se hace necesario aumentar la estabilidad en el empleo, por lo que se consideraran prioritarias las medidas que promuevan dicha estabilidad y que controlen, sobre todo, la temporalidad.

También se recoge esta voluntad en el acuerdo Administración-sindicatos, antes nombrado, de 13 de noviembre. No obstante, con la modificación propuesta por mi grupo parlamentario en el artículo 20 a través de la enmienda número 1186, se permite que el personal de nuevo ingreso alcance hasta el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos, que pretende, de una parte, mantener el control sobre la oferta pública de empleo al limitarla al cien por cien de la tasa de reposición y, de otra, aplicar una de las medidas previstas en el citado acuerdo: reducir la temporalidad, puesto que se incluyen en la oferta pública de empleo todos los puestos y plazas desempeñados por interinos, nombrados o contratados durante los ejercicios anteriores, excepto aquellos sobre los que existe una reserva o estén incurso en procesos de provisión.

Respecto al mismo artículo 20, la enmienda número 9 del Bloque Nacionalista Galego hace referencia a que se excluya del límite de la tasa de reposición de efectivos a los servicios de asistencia sanitaria y asistencia social. Cabe señalar que el porcentaje de la tasa de reposición que se establezca no es directamente aplicable a cada uno de los departamentos, sino que tiene carácter global para cada una de las administraciones. Su distribución, según los servicios que presten, debe realizarse de acuerdo con la propia ley, el Gobierno de la nación y los consejos de gobierno de cada comunidad autónoma, que deberán considerar en su conjunto las necesidades de personal en el ámbito de su competencia, y ver qué sectores son prioritarios o afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, que podrían ser perfectamente los incluidos en el texto de la enmienda. Así pues, mi grupo parlamentario votará en contra de las enmiendas números 8 y 9 del BNG, 211 y 212 de Izquierda Unida y 876 del Grupo Parlamentario Entesa

Catalana de Progrés, sobre la base de los planteamientos aquí efectuados.

Con la enmienda número 877 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que además coincide con la número 1265 del Grupo Parlamentario Socialista, se pretende garantizar que se duplique la plantilla actual de funcionarios de la Inspección de Trabajo, Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y Subinspectores de Empleo y de Seguridad Social, que además se amplía al personal dependiente del Instituto Nacional de Seguridad Social e Higiene en el Trabajo y al Instituto Nacional de Empleo en los próximos cinco años. No se pueden aceptar los términos de sus enmiendas, señorías, por varias razones, pero por señalar alguna les diría que el incremento de efectivos del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo en los últimos años ha sido notable. En 1998, señorías, había 662, al finalizar el año 2002 son 767, que se incrementarán hasta 795 en junio de 2003. Pero, además, no es admisible incrementar el número de inspectores en el porcentaje indicado por el fuerte desequilibrio económico presupuestario que ello supondría, agravado además por llevar aparejado el del personal auxiliar y administrativo correspondiente, puesto que sin ellos se colapsarían las actuales inspecciones provinciales de trabajo, que no podrían absorber y tramitar las actuaciones de tal volumen de inspectores y subinspectores, más dotaciones de edificios, más material de oficina, medios informáticos, etcétera. No obstante, permítanme que les recuerde que se han propuesto medidas de apoyo y colaboración con las distintas comunidades autónomas en determinadas actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, con cargo a los funcionarios públicos que actualmente tienen competencias de asesoramiento y consulta en materia preventiva, que dependen de las distintas comunidades autónomas. Estas medidas no comportarían incremento del gasto público y actualmente están sometidas al diálogo institucional con las referidas comunidades autónomas.

Y en cuanto a la propuesta de incremento de plantillas de los subinspectores de empleo y de la Seguridad Social, basada únicamente en el incremento de las funciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales y el control de las relaciones laborales y condiciones de trabajo, cabe rechazarla también puesto que estas materias están excluidas de las competencias de los citados subinspectores de empleo y Seguridad Social y competen en exclusiva al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Al apartado cinco del citado artículo 20 sus señorías han presentado las enmiendas números 10 del BNG, 741 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y 214 de Izquierda Unida, más otra enmienda número 213 de sustitución del citado párrafo y una de adición, la número 215 también de Izquierda Unida, creando un punto sexto en consonancia con sus planteamientos.

Respecto a las tres primeras, de supresión, cabe rechazarlas puesto que se refieren al carácter básico del apartado del apartado uno del artículo 20, referido a la oferta pública de empleo, lo que conlleva que todas las comunida-

des autónomas y corporaciones locales deben recoger en sus normas presupuestarias los mismos criterios establecidos con carácter general.

Señorías, entendemos que esta medida del proyecto de ley forma parte de la competencia del Gobierno en relación con la dirección y la coordinación de la política económica general, lo que no debe significar la colisión con la autonomía de las distintas comunidades autónomas. Y, como antes ya he citado, ese carácter básico ha sido enjuiciado por el propio Tribunal Constitucional sobre la base de las competencias estatales que se derivan de los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución Española. Además, está reflejado en las sentencias del Tribunal Constitucional 63/1988, 171/1996 y 103/1997, entre otras.

Respecto a las enmiendas números 213 y 215, de Izquierda Unida, la primera de ellas la rechazamos porque consideramos que la enmienda número 1188, del Grupo Parlamentario Popular, recoge con mayor precisión la regulación de la oferta pública de empleo y, además, responde al acuerdo entre la Administración y los sindicatos de 13 de noviembre con una serie de medidas para aumentar la eficacia y la claridad en la prestación de los servicios, con un planteamiento más concreto y completo que el contenido propio de su propuesta.

Respecto a la enmienda número 215, mediante la que se pretende la adición de un apartado nuevo en el artículo 20, Izquierda Unida coincide con el contenido de esta enmienda en los planteamientos sindicales sobre la oposición a la contratación temporal, lo que comparte claramente y en la práctica la Administración General del Estado.

Señorías, la participación de los sindicatos en las mesas en las que se trata este asunto y la información que pone la Administración General del Estado a su disposición contradicen determinadas afirmaciones sobre la precariedad en el empleo en dicha Administración y especialmente las políticas de restricción de la temporalidad implantadas, así como el conjunto de medidas positivas de consolidación de dicho empleo que ya se han abordado en los cuatro últimos ejercicios por la Administración General del Estado. Incluso, en el acuerdo entre la Administración y sindicatos de 13 de noviembre también se da como prioridad reducir la temporalidad, puesto que se incluye la oferta pública de empleo. Y esto ya está recogido en este artículo 20, señorías, al adaptar este proyecto de ley con el acuerdo todos los puestos y plazas desempeñados por interinos nombrados o contratados durante los dos ejercicios anteriores, excepto aquellos en que, naturalmente, exista una reserva o estén incursos en proceso de provisión. Por ello, también cabe rechazar estas enmiendas.

Respecto al Capítulo II, de los regímenes retributivos, al artículo 21 se han presentado las enmiendas números 216 y 217, de Izquierda Unida. También se referían al mismo las enmiendas números 11, 12 y 13, del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto. Todas ellas pretenden la modificación del artículo 21 en el sentido de modificar la referencia al incremento del dos por ciento al 5,5 por ciento de las retribuciones básicas y complementarias en sus apartados a), b) y c) y la sustitución del apartado tercero y la incorporación de un nuevo párrafo para la ade-

cuación de los colectivos más desfavorecidos de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S. A. del uno por ciento.

Estas enmiendas se rechazan porque en el acuerdo suscrito entre la Administración y los sindicatos, en el título relativo a medidas de ordenación retributiva e incentivos salariales, se contempla un incremento general de retribuciones del dos por ciento, además de otras medidas puntuales, como la modificación de la estructura y la cuantía de las pagas extraordinarias, que ya han sido incorporadas al texto de este proyecto de ley a través de las distintas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y, en especial, mediante la enmienda número 1185.

Hago referencia ya al artículo 23, relativo a las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de la nación, órganos consultivos y Administración General del Estado. Se han presentado la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que coincide con la del Grupo Entesa Catalana —son las números 1266 y 1267 respectivamente— y las números 219 y 220, de Izquierda Unida, Grupo Mixto. A este respecto también voy a incluir la enmienda número 743, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que, aunque está presentada al artículo 29.2, por tener la misma argumentación podemos contestarla al mismo tiempo.

Las cuatro primeras pretenden limitar la cuantía individual que por el concepto de productividad podrán percibir los altos cargos y para dar conocimiento a las Cortes Generales de las retribuciones de los presidentes y directores generales de todos los entes del sector público estatal. Las dos siguientes pretenden excluir de la percepción de productividad a estos altos cargos, además de la creación de una relación de puestos de trabajo para altos cargos y la publicación en el BOE de las retribuciones del personal directivo del Banco de España.

Respecto a las enmiendas que proponen limitar la cuantía individual que por concepto de la productividad podrán percibir los altos cargos, dando un límite del 30 por ciento del total de las retribuciones, nos parece totalmente subjetivo, dado que el límite por dichos conceptos retributivos viene a quedar definido tanto para los funcionarios como para los altos cargos en cuestión, por los créditos presupuestarios que las Cortes Generales aprueban al respecto, tal y como queda establecido en el artículo 23.3.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

En relación con las enmiendas que pretenden la adición de un apartado 6 al artículo 23, que recoja el conocimiento por las Cortes Generales de las retribuciones de los presidentes y directores generales de todos los entes del sector público estatal, cabe decir que, según el artículo 19 del proyecto que nos ocupa, los presidentes y directores generales de las sociedades y entidades públicas y empresariales forman parte del sector público; que el artículo 55.3 de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, establece que la determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, requerirán el informe conjunto previo y favorable de los ministerios de Administraciones Públicas y de Hacienda.

Por otra parte, dichas entidades están sometidas también a la Ley General Presupuestaria, luego puede concluirse que la publicidad y la transparencia de los gastos del personal de éstas se encuentran plenamente garantizados en el ordenamiento vigente. Por tanto, doy por rechazadas dichas enmiendas.

Ya en el artículo 24, que hace referencia a las retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, hay una enmienda, la 742, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Dicha enmienda pretende rebajar la retribución del presidente del Tribunal Constitucional para que experimente, en el año 2003, un incremento sólo del 2 por ciento y no del 3,35 por ciento, como se ha efectuado. La razón de este incremento responde, señorías, sólo y exclusivamente a la equiparación de las retribuciones del presidente del Tribunal Constitucional con las del presidente del Tribunal Supremo, que, a su vez, lo es del Consejo General del Poder Judicial. Para mi grupo parlamentario, esta equiparación se considera conveniente al tratarse de máximos órganos con función jurisdiccional en sus distintos ámbitos.

El artículo 25 soporta enmiendas de los distintos grupos parlamentarios, en concreto del Grupo Parlamentario Socialista, la 1268, y de Izquierda Unida, de la 221 a la 224, a la que ha hecho referencia el senador Cámara. Dichas enmiendas proponen, en su mayoría, distintos incrementos en el sueldo y en los trienios o una distinta composición de las pagas extraordinarias o la supresión como complemento salarial del complemento de productividad, etcétera, para los funcionarios del Estado del ámbito de la Ley 30/1984. Todas estas propuestas no están incluidas en el acuerdo entre la Administración y los sindicatos del 13 de noviembre, aprobado por el Gobierno el día 15 del mismo mes, y que pretende la modernización y mejora de la Administración pública para el período 2003-2004. Para poder materializar este acuerdo; se han propuesto modificaciones a través de las distintas enmiendas que mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, ha presentado al artículo 19 y a otros, por lo que no podemos aceptar estas enmiendas.

Cabe dedicar especial atención a la enmienda 224, de Izquierda Unida, que propone la cotización por contingencia en Formación Profesional de los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Cabe decir al respecto que cada régimen de protección social presenta un sistema de financiación diferente, al igual que dispensa una acción protectora distinta. La financiación de los regímenes especiales de los funcionarios públicos está vinculada a los Presupuestos Generales del Estado, si bien aquéllos están obligados al abono de la cuota de derechos pasivos y de la cotización a las distintas mutualidades de funcionarios: 3,86 y 1,69 por ciento de haber regulador, que corresponde al grupo de pertenencia del funcionario. Tales cotizaciones no condicionan el derecho a la pensión o a su cuantía, y en el Régimen de la Seguridad Social, las prestaciones de naturaleza contributiva se financian a través de las cotizaciones sociales resultantes de aplicar el porcentaje que cada año se establece para la contingencia protegida a base de cotización correspondiente al trabajador. La Formación

Profesional, pues, se encuentra entre las contingencias protegidas, siendo el tipo de cotización el 0,7 por ciento, del que el 0,6 es a cargo de la empresa y el 0,1, del trabajador. Por lo tanto, también se rechazan las enmiendas.

Ya en el artículo 26, retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, al que ha hecho referencia exclusivamente el Grupo Parlamentario Socialista, debo decir que se rechazan sus enmiendas sobre la base de que los argumentos citados están incluidos dentro del acuerdo Administración-sindicatos a 13 de noviembre, dado que también es de aplicación a este personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas.

Respecto al resto de las enmiendas, idénticas en sus contenidos, que afectan al mismo artículo, las rechazamos porque pretenden un incremento de un 33 por ciento de las retribuciones, lo cual provocaría, además, una discriminación respecto a otros colectivos, y me estoy refiriendo concretamente a la enmienda 225, de Izquierda Unida, en la que solicitaba un incremento mayor para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, con el fin de favorecer el que los distintos ciudadanos puedan incorporarse a prestar allí sus servicios. Por tanto, también se rechaza en los términos que los de la enmienda 1269, del Grupo Parlamentario Socialista.

En cuanto a la enmienda número 1270, del Grupo Parlamentario Socialista, que coincide con la número 34 del Bloque Nacionalista Galego, con la número 227 de Izquierda Unida y con la número 882 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, referidas al artículo 35, se rechazan en tanto que dicho artículo regula de forma muy detallada, precisa y con garantías los contratos realizados con cargo a los créditos de inversiones, dado que estas contrataciones de personal laboral se realizan con carácter temporal para la realización de obras y servicios y, además, desde el Parlamento se pueden solicitar más explicaciones sobre las mismas cada vez que lo estimen oportuno los grupos parlamentarios a través de la función de control de las distintas Cámaras.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Primo.

Entramos en turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Aleu.

El señor ALEU I JORNET: Intervengo para hacer referencia a la vuelta al texto del Congreso del punto Cinco del artículo 20.

Usted ha hecho referencia a por qué el punto Uno es básico, y podemos estar de acuerdo, pero no ha hecho ninguna referencia a por qué han añadido un punto Dos o por qué en el texto original el punto Dos no lo era y en la misma enmienda donde se recoge el acuerdo Gobierno-

sindicatos se añade el punto Dos como básico. Entendemos que esto, si no hay otra explicación, continúa siendo una invasión de las competencias de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. No hay ninguna razón por la que tenga que ser básico el punto Dos.

En cuanto al punto uno, sobre el que usted ha dicho que la regulación general de la economía puede dar apoyo, podríamos estar de acuerdo, pero sobre el punto dos no hemos encontrado ninguna razón en su explicación.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Aleu.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió no se hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Arjona.

El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señor presidente.

Insisto en que nuestras propuestas pretenden mejorar la calidad del empleo público, tener una mejor Administración al servicio de la sociedad, y pensamos que la política de retribuciones —lo hemos dicho anteriormente— es muy opaca por parte del Gobierno.

Si vemos que el salario del presidente del Gobierno está en 82.000 euros en los presupuestos, o los de un ministro en 72.000, a medida que va disminuyendo la transparencia van aumentando las retribuciones. ¿Por qué no asumen nuestras enmiendas, que pretenden que las retribuciones de los altos cargos, de los presidentes de empresas públicas, de los presidentes de sociedades estatales, sean transparentes al Parlamento? ¿Por qué se esconde?

La verdad es que se habla, y es cierto, del acuerdo Gobierno-sindicatos, pero hay mucha discusión, mucha pelea para medio punto o para una décima de punto en la mesa de negociación con los sindicatos, para que luego los salarios de los gerentes de las mutuas patronales, por ejemplo, que se financian con cotizaciones sociales aprobadas por este Parlamento, suban una media de un 6,32 por ciento.

Consideramos que nuestras enmiendas podrían servir para aclarar estas cuestiones importantes. Nuestro modelo va dirigido a mejorar la calidad de la Administración y la transparencia, y pensamos que nuestras enmiendas son positivas y van todas en esa dirección y, por supuesto, en la dirección del acuerdo suscrito con los sindicatos. Por eso no se invalidan nuestras enmiendas, sino que pensamos que las hace más necesarias que nunca.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Arjona.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Primo.

La señora PRIMO ALBERT: Gracias, presidente.

Senador Aleu, si estoy diciendo que es importante y que la ley debe ser básica con el fin de dictar las bases y establecer la coordinación de la planificación general de la ac-

tividad económica, es obvio que si prescindimos de la administración autonómica y de la administración local no se puede realizar exactamente y como corresponde a la planificación económica. Posiblemente ésa es la diferencia que existe entre ustedes que lo ven sólo y exclusivamente ligado a determinados aspectos y nosotros que lo vemos en el sentido amplio. Los funcionarios públicos son todos, sean de la Administración local, de la Administración autonómica o sean de la Administración del Estado. Lo vemos así y así es como lo vamos a aplicar. Ésa es nuestra propuesta y ése es nuestro modelo. De todas formas, senador Aleu, tengo que decirle que no estará muy lejos de nuestros planteamientos cuando todos los sindicatos lo han aceptado como tal y se va a llevar a efecto. *(El señor Aleu i Jornet hace signos negativos.)*

Por otra parte, antes no quería hacer referencia al senador que ha representado al Grupo Parlamentario Socialista, entre otras cosas, porque nos ha estado diciendo que le parecía perfecto el acuerdo Administración-sindicatos a que se ha llegado y que era una de las bases que ustedes, a través de sus enmiendas a lo largo de los distintos Presupuestos Generales del Estado, han estado aplicando, y ahora nos dice que han llegado al acuerdo porque va a haber elecciones. Perdona, senador, pero en el año 2000 también hubo elecciones. ¿Es que entonces no hubo acuerdo? ¿Cuál es el problema en este caso? No lo entiendo.

Si el Grupo Parlamentario Popular se dedica a negociar con los sindicatos y llegamos a acuerdos factibles —y no es la primera vez; hemos llegado a trece acuerdos seguidos desde que estamos gobernando—, eso significa que hay elecciones. Y si no llegamos a acuerdos, se nos dice que hay una huelga general. Señoría, desde luego tendrán que aclarar ustedes un poquito más sus planteamientos y sus puntos de vista al respecto, o al menos defínannos qué significa para ustedes negociar y llegar a acuerdos.

Respecto a que no se ha informado a las comunidades autónomas ni al resto de las entidades locales sobre los acuerdos que se iban a tomar y que también afectaban a su personal, usted mismo me está reconociendo el carácter básico que su compañero el senador Aleu no me ha querido reconocer. *(El señor Aleu i Jornet: Del punto Dos, no del Uno.)* Sí están afectados directamente por y para. Y si no lo han comentado directamente con ellos es porque usted mismo está reconociendo su carácter básico y que son de aplicación. Naturalmente que van a ser de aplicación. Pero es que desde el día 13 de noviembre había que dar conocimiento de ello. No se olvide de que el acuerdo Administración-sindicatos se aprobó por el Gobierno el pasado 15 de noviembre.

En el turno de portavoces me ha dicho que para este viaje no se necesitan alforjas, y ha dicho también que sólo se sube un 0,5 por ciento en comparación con el más del 3 por ciento que se les ha subido a otros cuerpos. Señoría, lo importante aquí es que, hoy por hoy, gracias a este acuerdo Administración-sindicatos, y gracias a que se ha incluido ya directamente en los Presupuestos Generales del Estado y va a ser efectivo a partir del 1 de enero de 2003, se ha llegado a un acuerdo. Y los funcionarios públicos, pertenezcan a la Administración a que pertenezcan, van a dejar de

perder dinero, entre otras cosas, porque la economía funciona y porque hoy por hoy, con un Gobierno del Partido Popular, hay dinero para pagarles. Ni más ni menos.

Muchas gracias. *(El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)*

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Primo.

Tiene la palabra el senador Aleu en función del artículo 87 por un minuto.

El señor ALEU I JORNET: Solamente quiero especificar que en el acuerdo Gobierno-sindicatos no se declara básico nada. Pero el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda en la que, aprovechando el acuerdo, declara básico el punto Dos, del que, por cierto, en ningún momento se habla. Por tanto, no me ponga como excusa el acuerdo Gobierno-sindicatos porque ahí no está la declaración de punto básico del apartado Dos del artículo 20. Ése es el tema. Y no me repita que está en el acuerdo Gobierno-sindicatos porque no está.

Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Aleu.

Tiene un minuto, senadora Primo.

La señora PRIMO ALBERT: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero decir simplemente que si los sueldos de todos los funcionarios públicos se van a percibir a través de las dotaciones que se están ejerciendo desde los Presupuestos Generales del Estado y va a afectar a todos y a cada uno de los distintos ámbitos en que existen funcionarios públicos, desde luego no será el Grupo Parlamentario Popular el que evite que esto tenga carácter básico. De todas formas, puesto que eso depende de la planificación general de la actividad económica y está reconocido a través de las distintas sentencias del Tribunal Constitucional, repito que dicha planificación no sería factible si se excluyeran las administraciones local y autonómica.

Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.

Pasamos al Título IV, artículos 36 a 45; Título VIII, artículos 81 y 82 y Sección 07, Clases Pasivas.

En primer lugar enmiendas números 228 a 232 de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.

Para su defensa tiene la palabra el senador Cabrero.

El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor presidente.

A este Título IV, artículos 36 a 45, presentamos cinco enmiendas, que en síntesis pretenden que las pensiones extraordinarias del régimen de clases pasivas del Estado, desde el punto de vista del importe máximo de la percepción, bien por la propia pensión o porque haya concurrencia con otras pensiones, tuvieran una limitación del 200

Título IV,
artículos
36 a 45
Título VIII,
artículos
81 y 82
Sección 07.

por cien sobre lo establecido con carácter general. En cualquier caso, si la cuantía de la pensión o pensiones públicas que se pudiera percibir excediera del doble del máximo establecido con carácter general, como hemos dicho, el importe de cada una de ellas se reducirá en la proporción respectiva a la cuantía de dicho exceso.

Por otro lado, queremos que todas las pensiones públicas tengan la posibilidad de revisión en orden al IPC cuando la inflación se dispare por encima de las previsiones del Gobierno, igual que sucede con las pensiones públicas del régimen contributivo de la Seguridad Social. Además, planteamos que se suprima el artículo 41.Uno, en el que se prevé ese criterio de no revalorización de las pensiones públicas, tal y como nosotros planteamos.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cabrero.

Corresponde la defensa de las enmiendas 35 a 38 y la 42 del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el senador Quintana González.

El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo para darlas por defendidas.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.

Las enmiendas 883 a 888 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés han sido dadas por defendidas.

Corresponde ahora las enmiendas 1673 a 1675 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra el senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Nuestro grupo mantiene tres enmiendas al Título IV. La primera de ellas, la número 1673, se formula al artículo 38. Pretendemos que se incremente en un 4 por ciento las pensiones no contributivas respecto a las establecidas en el año 2002.

La enmienda 1674 se formula al artículo 44 y tiene por objeto incrementar un 4 por ciento las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social, también respecto al año 2002.

Por último, con la enmienda 1675 pretendemos, modificando el artículo 45, dar cumplimiento a lo establecido en materia de pensiones en el acuerdo sobre el desarrollo de la Seguridad Social, priorizando el incremento por encima de la inflación prevista para el 2002 de las pensiones del SOVI. Para ello, se propone un incremento del 4 por ciento en lugar del 2 por ciento previsto en el proyecto.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Cambra.

Corresponde, ahora, la defensa de las enmiendas 1271 a 1276 del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, el senador Romero Calero tiene la palabra.

El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene un bloque de enmiendas en el Título IV.

Las números 1271, 1272, 1273 y 1274, que se formulan respectivamente a los artículos 38, 40.Dos, 40.Tres y 43.Tres, plantean un incremento de las pensiones del 2,8 por ciento. Consideramos que este porcentaje se ajusta más a la realidad del comportamiento del índice de precios al consumo, de la inflación de nuestra economía, y que, por tanto, es más razonable que lo planteado en el texto del dictamen de la ponencia.

La número 1275 se formula al artículo 44.Cuatro del dictamen. Se formula en la misma línea que las enmiendas anteriores, con la salvedad de que en las pensiones de viudedad se plantea un incremento del 10 por ciento. Consideramos que la disponibilidad económica y financiera del sistema en su conjunto permite un tratamiento singularizado de estas pensiones, y por eso se plantea de manera concreta y puntual un incremento de esta naturaleza para las pensiones de viudedad.

Por último, la enmienda 1276 da un tratamiento singular a las pensiones SOVI, que —como bien saben sus señorías— tienden claramente a extinguirse. En este sentido, solicitamos que también se admita una enmienda del Grupo Socialista a la ley de acompañamiento, que debatiremos en las próximas sesiones. A la vista de las disponibilidades económicas y financieras del sistema, y dado que son incompatibles con las pensiones de viudedad, consideramos que es de justicia que las pensiones SOVI puedan verse incrementadas en el 10 por ciento.

Éste es el conjunto de enmiendas que presentamos al Título IV, De las Pensiones Públicas, de los Presupuestos Generales del Estado para 2003.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Romero Calero.

Corresponde ahora la defensa de la enmienda número 1201, del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra la senadora Primo.

La señora PRIMO ALBERT: Gracias, señor presidente. La damos por defendida.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Primo.

Para turno en contra, vuelve a tener la palabra, senadora Primo.

La señora PRIMO ALBERT: Gracias, señor presidente.

En primer lugar anuncio que voy a compartir mi tiempo con la senadora Belén do Campo, que fijará la posición de mi grupo respecto de las enmiendas presentadas al Título VIII.

En cuanto a las enmiendas presentadas al Título IV, la número 1673, del Grupo de Convergència i Unió, propone la modificación del artículo 38 a efectos de que la cuantía de las pensiones no contributivas tenga un incremento del 4 por ciento frente al 2 por ciento propuesto en el proyecto

de ley, es decir, que pase de 3.694,04 euros a ser de 3.766,47 euros, por motivos de solidaridad. Pues bien, cabe señalar que el incremento experimentado desde 1996 a 2002 por las pensiones no contributivas ha sido de un 20,97 por ciento, equivalente al 3,22 por ciento anual acumulativo. En el presupuesto para 2003 el incremento previsto es el mismo que para el resto de las pensiones, es decir, del 2 por ciento, más las posibles desviaciones que se produjesen en el incremento fijado para 2002 y la variación del IPC entre los meses de noviembre de 2001 y noviembre de 2002, por lo que fijar el incremento total de dichas pensiones para el próximo año, lamentablemente, aún no es posible. Por todo ello, rechazamos la enmienda.

Por lo que se refiere a la enmienda número 1271, al artículo 39, del Grupo Parlamentario Socialista, propone elevar el importe de las pensiones no contributivas un 2,8 por ciento. Sin embargo, consideramos que eso no corresponde a este artículo, sino al artículo 38. Por tanto, también la damos por rechazada sobre la base de los argumentos que antes ya he expuesto.

Con la enmienda número 228, del Grupo Mixto, se propone establecer un límite máximo de percepción del 200 por cien en el señalamiento inicial de las pensiones extraordinarias del régimen de Clases Pasivas del Estado originadas por incapacidad o inutilidad física en acto de servicio o como consecuencia del mismo. Con ello se pretende la igualdad de trato con las pensiones derivadas de actos terroristas, que no tienen un límite por estar exentas. Pero en opinión del Grupo Popular eso no se conseguiría, puesto que la causadas por un acto de servicio seguirían sujetas a un límite máximo de percepción, aunque más elevado. Además, se darían otras circunstancias que no se desean, al no incluir las pensiones de favor de familiares causadas en acto de servicio (viudedad, orfandad, o en favor de padres), por lo que se otorgaría un tratamiento distinto a las pensiones derivadas del fallecimiento en acto de servicio respecto del que se aplicaría a la que pudiera corresponder al propio titular en los supuestos de incapacidad o inutilidad. Pero si además estas pensiones concurrieran con otras sin consideración de extraordinarias, estas últimas se beneficiarían de la aplicación de un límite máximo de percepción de cuantía superior al que les correspondería de no existir tal concurrencia, con el consiguiente trato discriminatorio para estas pensiones en caso de que no se produjera la circunstancia de la concurrencia. Nos oponemos, pues, a la enmienda, dado que las pensiones extraordinarias causadas en acto de servicio en el régimen de Clases Pasivas se corresponden con las que por accidente de trabajo o enfermedad profesional reconoce la Seguridad Social —que no se incluyen, por cierto, en esta enmienda—, y darían lugar a un tratamiento distinto en pensiones que derivan de la misma causa según el régimen de la Seguridad Social.

Respecto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 1272 y 1273, las números 229 y 230, de Izquierda Unida, las números 35 y 36, del BNG, y las números 884 y 885 de la Entesa, todas ellas presentadas al artículo 40, hay que resaltar que las dos enmiendas de Izquierda Unida pretenden añadir una cláusula de revisión para todas las pensiones públicas idéntica a la fijada para

las pensiones contributivas de la Seguridad Social. Hay que señalar que el artículo 27 de la Ley de Clases Pasivas del Estado, tras la modificación introducida por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, ya contiene esta cláusula de revisión por la que se garantiza el poder adquisitivo de las pensiones del régimen de clases pasivas del Estado en idénticos términos que los establecidos en el artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social. Tales preceptos, además de regular la revalorización de las pensiones en función del IPC previsto para cada año, establecen con carácter permanente la regularización y posterior actualización de los importes de las pensiones públicas de acuerdo con la variación del IPC real experimentada durante el período comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización, disponiendo, además, de una paga adicional por diferencia para aquellos supuestos en que el citado índice hubiese sido inferior al previsto en cada momento, motivo por el cual se rechazan.

Asimismo rechazamos las enmiendas 35 y 36 del BNG, a las que ya he hecho referencia anteriormente, porque el porcentaje de incremento establecido en las mismas no corresponde al criterio de incremento antes expuesto ni al IPC actual previsto, tal y como se establece en el artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social. Por este mismo motivo se rechazan también las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.

Por lo que respecta al artículo 31, Izquierda Unida ha presentado la enmienda 231, que se rechaza sobre la base del apartado 1.2 del artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social, que prevé las compensaciones económicas necesarias para el supuesto de que la variación real del IPC supere a la prevista, de manera que estas pensiones tengan garantizado al menos el poder adquisitivo.

En cuanto al Capítulo IV, Complementos para mínimos, se ha presentado la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista número 1274, acompañada por la número 886 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés y por la número 37 del Bloque Nacionalista Galego, todas al artículo 43. Con ellas se pretende modificar la tabla de cuantías mínimas de las pensiones de clases pasivas del Estado, incrementando el 2 por ciento establecido al 5,5 por ciento. No obstante, no se justifica el incremento que, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, se considera aleatorio y que llevaría implícito un mayor coste económico, que no se evalúa en esta enmienda, y que es contrario a los criterios de contención del gasto que hemos estado planificando en el debate de hoy.

No obstante, las pensiones de cuantía mínima se revalorizarán en el mismo porcentaje que experimentarán el resto de las pensiones públicas. Con los importes establecidos en este proyecto de ley entendemos que se da cumplimiento satisfactorio, en el marco de la restricción presupuestaria del gasto público, de las garantías legales existentes para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, tal y como recoge el artículo 27 del Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y en el ar-

título 61 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y de Orden Social de 1998, que atiende al carácter permanente de la regularización y posterior actualización de los importes de las pensiones públicas de acuerdo con el IPC real, contemplándose a su vez el abono de una paga adicional para aquellos supuestos en los que el citado índice hubiese sido inferior al previsto en cada momento. Quedan, pues, rechazadas tales enmiendas sobre la base de los argumentos expuestos.

El artículo 44 ha sido enmendado por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* con su enmienda número 1674, que se acompaña de la número 38 del Bloque Nacionalista Galego, 1275 del Grupo Parlamentario Socialista y 887 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés. Todas estas enmiendas pretenden modificar las cuantías de las pensiones mínimas de la Seguridad Social en su modalidad contributiva en distintos porcentajes. Todas ellas se rechazan, puesto que las medidas de mejora de las pensiones más bajas contempladas en el acuerdo para la mejora del desarrollo del sistema de protección social recogen un importante aumento adicional a la revalorización anual prevista, el 2 por ciento, y a la subida por consolidación de la desviación del IPC. Así, por ejemplo —y permítanme ustedes que lo especifique—, la mejora de la base reguladora de la pensión de viudedad, al calcularse ahora con el porcentaje del 48 por ciento de la base reguladora, experimenta una subida del 4,44 por ciento que, con el resto de los incrementos citados anteriormente, puede suponer una subida de más de un 8 por ciento. Asimismo las pensiones de jubilación de perceptores menores de 65 años, con o sin cónyuge a cargo, pensiones mínimas de orfandad o pensiones mínimas de favor a familiares tendrán una subida superior al 5 por ciento. Por otra parte, las pensiones SOVI, a las que antes se hacía referencia, se verán incrementadas en más de un 4 por ciento.

Las enmiendas números 1675 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, 1276 del Grupo Parlamentario Socialista y 888 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, presentadas al artículo 45, quedan rechazadas en función de los argumentos expuestos para las enmiendas correspondientes al artículo 44.

Nada más, y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Primo.

Senadora Do campo, su señoría tiene la palabra.

La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muy brevemente, señor presidente, para rechazar la enmienda número 42, la única enmienda que hay al Título VIII, del senador Quintana, relativa a la reducción de los tipos de cotización por desempleo, remitiéndome ya a los argumentos expresados en la comisión.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Do Campo.

Turno de portavoces. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar este turno? (*Pausa.*)

Título V, artículos 46 a 56, Anexo III y Sección 06, Deuda Pública.

Pasamos al Título V, artículos 46 a 56, Anexo III y Sección 06, Deuda Pública. En primer lugar, enmiendas 233 a 235, de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.

El senador Cabrero tiene la palabra para su defensa.

El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor presidente.

A este título V presentamos tres enmiendas. La 233 pretende que en el artículo 55, la referencia que se hace a los 631 euros se modifique por 276 porque se trata de adecuar la partida presupuestaria al gasto real que desde el año 1995 se viene produciendo y desde ese punto de vista la ayuda oficial al desarrollo se vaya aproximando a la media de la Unión Europea.

La enmienda 234 es de adición al artículo 56. El Fondo de Condonación de Deuda Externa que planteamos se crea con una cuantía de 270 millones de euros al objeto de que en el Estado español se pueda abrir una perspectiva de cooperación y aportación a lo que son operaciones multilaterales en el ámbito de la deuda externa y también así tener en cuenta los planteamientos del referéndum que se hizo en un momento determinado, donde más de un millón de ciudadanos planteó su abolición y así ayudar a esas operaciones de cooperación multilateral. (*El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.*)

En la enmienda 235 consideramos que se debe producir la utilización de la ayuda oficial al desarrollo con arreglo a los requisitos que están establecidos en la Ley de Cooperación para el Desarrollo y el reglamento que corresponde a esa ley, para que no haya en cuanto a la financiación de la cooperación bilateral elementos distorsionadores, con el objetivo que se trata por parte de estos fondos.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Cabrero.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa están dadas por defendidas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Mesa.

El señor MESA CIRIZA: Gracias, señor presidente.

Las dos enmiendas presentadas al Título V, De las operaciones financieras, son las que voy a defender en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la número 1277, que es de modificación al artículo 55, Fondo de Ayuda al Desarrollo, y la número 1278, de adición, por la que se propone la introducción de un nuevo artículo, el 56 bis, con la siguiente redacción: «Fondo de condonación y conversión de deuda externa para inversión en desarrollo. Se crea un fondo destinado a ejecutar, mediante él mismo, las operaciones relacionadas con el tratamiento de la deuda en el Estado español con los países más pobres, con una dotación inicial de 200 millones de euros. El Gobierno infor-

mará semestralmente al Congreso y al Senado de las operaciones realizadas con cargo a dicho fondo.»

Estas dos enmiendas tienen el mismo objetivo que he comentado, que es global a este título: adecuar de alguna manera el gasto real en ayuda al desarrollo, que para mi grupo es prioritario, tratando de reducir la deuda externa, que es la verdadera lacra que tienen los países pobres con el resto del mundo. Estaríamos siempre engañándonos tratando de poner cifras para hacer intento de ayudar, que creo que es más o menos para disimular que echamos la vista a otro lado. Esto es muy importante, todos sabemos esa repercusión y si no somos capaces de ir reduciendo el verdadero lastre que tienen los países en desarrollo, que es su deuda externa, no seremos capaces de darles una salida. Adecuémonos a la realidad y creemos este fondo para ir paulatinamente y en función de las necesidades reduciendo la deuda externa de estos países.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.

Para turno en contra tiene la palabra el senador Soto.

El señor SOTO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

En relación con las enmiendas tanto del Grupo Parlamentario Socialista como del Grupo Parlamentario Mixto, que prácticamente todas ellas tienen el mismo sentido, la reducción de la dotación del Fondo de Ayuda al Desarrollo, las cantidades que se van presupuestando en los últimos años se están ejecutando, tanto para créditos a la exportación como para los compromisos internacionales que tiene el Gobierno español. La verdad es que con cargo a este fondo llevamos desde el año 1996 hasta el año pasado —nada más y nada menos— unas operaciones por un importe de más de 2.598 millones de euros, que es una cantidad importante y además correctamente ejecutada, creo yo.

Por otro lado, el FAD, Fondo de Ayuda al Desarrollo, va a ir reduciéndose necesariamente porque, a medida que se va incrementando la ayuda oficial al desarrollo, la tendencia del fondo es a la baja, no presupuestariamente, sino desde el punto de vista porcentual en relación con esta ayuda oficial al desarrollo. Por tanto, creo que el FAD está bien gestionado; está además en una situación interesante, porque se está ejecutando prácticamente lo que se presupuesta, y por tanto creemos que debemos mantener el texto del Gobierno y rechazar las enmiendas de ambos grupos.

En cuanto a la creación del fondo de condonación y de conversión de deuda externa, aparte de que técnicamente —tal y como están argumentadas las enmiendas de ambos grupos— no procedería, hay que decir que tampoco resulta necesario arbitrar partidas específicas, desde el punto de vista presupuestario, adicionales. En este momento la gestión de la deuda externa con países en desarrollo por parte del Ministerio de Economía está siendo especialmente activa, y sobre todo especialmente práctica; las decisiones se toman en función de la situación concreta de cada país y en cada momento; además, con una correcta coordinación en-

tre todos los departamentos que tienen relación con la cooperación al desarrollo. Es más, el Parlamento, y más concretamente esta Cámara, conoce perfectamente todas las actuaciones de reducción y conversión de deuda externa gestionadas por el Gobierno, de una manera puntual y precisa. Por tanto, al no traducirse en un mayor gasto, sino precisamente en menores ingresos en cuanto a esas devoluciones de préstamos bilaterales que se hacen con países en desarrollo, consideramos que no es necesario crear este fondo y, como ya argumenté en la Comisión, en todo caso habría que saber para qué, cómo y de qué manera habría que crearlo, y no precisamente a través de un crédito concreto, como se especifica en estas enmiendas, sino a través de una ley específica que creo que no está en estos momentos en la mente del legislador ni en la mente tampoco del Gobierno.

En cuanto a los microcréditos, hay una enmienda del señor Cabrero Palomares. El fondo para la concesión de los microcréditos, de acuerdo con la propia regulación que se hizo allá en el año 1998, en la Ley de Medidas, está acordado con la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; es decir, que la ejecución de esos proyectos se dirige al desarrollo social básico, y está especificado en la propia Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Justamente estos microcréditos están siendo especialmente exitosos en Iberoamérica, en relación con determinados proyectos que se están llevando a cabo con cantidades importantes —estamos hablando de una media de más de 10.000 millones al año— y en el plan que va del año 2001 al 2004, Plan Director de Cooperación Española para el Desarrollo, se van a gastar por encima de 40.000 millones de pesetas —y voy a hablar en pesetas para entenderlos—. La verdad es que es uno de los fondos de más éxito y más interesantes de los existentes en el mundo, que está funcionando muy bien, fundamentalmente en las inversiones en toda Iberoamérica. Por ello, consideramos que es bueno dejarlo como está y que siga funcionando bien.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Soto.

¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

Pasamos entonces al Título VI, artículos 57 a 63. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Cabrero Palomares.

El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor presidente.

Doy por defendidas las enmiendas al Título VI.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Cabrero Palomares.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés se ha dado por defendida.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, presidente, voy a ser muy breve.

Tenemos una única enmienda, la número 1.676, muy técnica, y con ella pretendemos modificar el punto 2.1.6 del apartado Uno del artículo 63, que hace referencia al coeficiente C5 de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. Creemos que esta modificación es necesaria porque hay una diferencia más que excesiva en el nivel de las tasas correspondientes a los distintos servicios fijos y, por tanto, hay que llevar a cabo esta revisión del coeficiente C5 para reequilibrar el tratamiento de las distintas tecnologías del mercado fijo e igualar el valor anual de ambas tasas por reservas de ámbito nacional.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Cambra.

Turno en contra. Tiene la palabra el senador Sánchez.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, presidente.

Quiero recordar que este año este Título VI viene más devaluado que en años anteriores al referirse a normas tributarias que en este momento están siendo objeto de su reforma y debate en esta misma Cámara: acabamos de ver hace unas semanas la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en estos momentos estamos con la reforma de la Ley de Haciendas Locales, que veremos estos días en Pleno —precisamente algunas de las enmiendas que se presentan se refieren a esta Ley de Haciendas Locales y tendremos la oportunidad de debatirlas más ampliamente en ese momento—. Las enmiendas de Izquierda Unida se refieren al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y al Impuesto sobre Actividades Económicas, que se suprime para el 93 por ciento de las empresas y autónomos españoles, por lo que ese será el foro para verlas en mayor profundidad.

Como decía el senador Cambra, la enmienda número 1676, de *Convergència i Unió*, propone modificar el coeficiente C5, que es el indicador asociado al valor de mercado en el cálculo de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico. Tal como se menciona en la justificación de la enmienda, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 actualizó los coeficientes para el cálculo de esta tasa con vistas a adecuar la exacción de la tasa con el indudable incremento de valor que tuvo la reserva de dominio público radioeléctrico. No obstante, en el año 2001 el valor de la reserva de dominio público radioeléctrico volvió a experimentar cambios representados en la bajada de su valor, lo que tuvo su repercusión en la bajada de coeficientes y de la cuantía de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico contemplada precisamente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002. Pero en esta Ley de presupuestos, para otorgar seguridad jurídica a los operadores de telecomunicaciones, se aprobó una medida para proporcionar estabilidad en la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico y, por tanto, esta tasa para el año 2003 no hace sino seguir fielmente este mandato legal, lo que, unido a la necesidad de proporcionar seguridad jurídica a los operadores, lleva a la conclusión de no

poder aceptar modificar el cálculo de la tasa prevista en los presupuestos para 2003.

Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Sánchez.

Turno de portavoces. (*Pausa.*) Nadie hace uso del turno de portavoces.

Título VII, artículos 64 a 80, Sección 32, Entes territoriales, y Sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial.

Enmiendas números 238 a 247 y 727 a 731. Tiene la palabra el senador Cabrero Palomares.

El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor presidente.

Paso a defender las enmiendas que hemos presentado al Título VII.

En una de ellas pretendemos que las entregas a cuenta por parte del Estado a los ayuntamientos sea del 85 por ciento, igual que se establece para las comunidades autónomas, lo que permitiría mayor liquidez a la Administración local, que es la que más déficit padece en el ámbito financiero.

También creemos que se debe crear un fondo de solidaridad municipal de 200 millones de euros para garantizar una aportación mínima de los tributos del Estado a todos los ayuntamientos de 22.000 euros, lo cual permitiría incentivar la creación de mancomunidades y también de entes intermunicipales para la prestación de servicios públicos.

Asimismo, se debe producir un incremento de las subvenciones a las entidades locales para financiar los servicios de transporte colectivo urbano, para lo que planteamos que se pase de 49,26 millones de euros a 109,96 millones de euros. Ello iría destinado a procurar la movilidad de los parados y la posibilidad de mejorar el salario indirecto y la renta disponible del colectivo de parados en nuestro país financiados para los ayuntamientos. Se debe incluir una cantidad necesaria para transferir y compensar a los ayuntamientos los perjuicios que genera en ese ámbito recaudatorio la exención del impuesto de bienes inmuebles correspondientes a los centros concertados o, por ejemplo, las bonificaciones que se hacen a las autopistas de peaje, y ello permita una mayor disponibilidad financiera a los propios ayuntamientos.

Se debe también introducir un apartado al artículo 56 sobre el fondo de nivelación de servicios con una cuantía concreta de 250.000 euros, que se distribuirán con arreglo a los criterios que establezca el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Fondo de Cooperación Interterritorial debe pasar a 1.099 millones de euros, también el Fondo de compensación para financiar los gastos de inversión debe pasar a 824 millones de euros y el Fondo complementario a 247 millones de euros. Se trata de incrementar los fondos que van destinados a corregir los desequilibrios territoriales hasta el 0,15 del PIB para llegar hasta el 0,20.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, senador Cabrero Palomares.

Enmiendas de la 39 a la 41 del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa tienen la palabra el señor Cabrero Palomares.

El señor CABRERO PALOMARES: Las doy por defendidas, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, senador.

Las enmiendas de Entesa se han dado por defendidas.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a defender primero las enmiendas presentadas al Título VII que van de la número 1677 a la 1681.

En cuanto a las enmiendas 1677, 1678 y 1679 hacen referencia a la distribución de los recursos entre los distintos entes locales en Cataluña, en concreto la 1677 trata de los recursos para la financiación de los municipios de la extinguida Corporación Metropolitana, y nosotros pretendemos que sean percibidos a través de la Generalitat en aplicación del artículo 48.2 del Estatuto de Catalunya.

La enmienda 1678, por la misma razón y aplicando el mismo artículo del Estatuto, pretende posibilitar a las comarcas su participación y el reparto de los ingresos destinados a corporaciones locales con destino a las diputaciones.

En cuanto a la 1679, también por el mismo artículo, pretendemos que se establezca la competencia a las comunidades autónomas para la distribución de los fondos destinados a financiar las diputaciones de su territorio correspondientes.

En cuanto a la enmienda 1680 queremos regular y que se contemple la compensación a los ayuntamientos por la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que se concede a los concesionarios de autopistas de peaje por el recorrido en sus términos municipales.

Con la enmienda 1681 pretendemos que se traspasen los recursos que corresponden a la liquidación del período 1999-2001 según los sistemas previstos para el quinquenio 1997-2001. Y corresponde a la liquidación de los ingresos derivados de las retenciones soportadas por los contribuyentes residentes en el territorio de las comunidades autónomas que no están obligados a declarar y que no han presentado declaración de devolución de ingresos.

Sin esta liquidación no se cumple globalmente lo previsto en este sistema de financiación de este quinquenio por cuanto se trata de ingresos que proceden del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que no se les ha liquidado la parte correspondiente prevista a las comunidades autónomas por su participación.

Las tres enmiendas que hemos presentado a la sección 32 son la 1744, la 1745 y la 1746. La enmienda 1745 correspondiente al contrato programa con la autoridad del

transporte metropolitano le asigna en este caso la dotación de 111.481,00 en miles de euros. Lo mismo la 1746 correspondiente a las infraestructuras del transporte metropolitano y al traspaso en favor de la Generalitat de Cataluña por importe de 38.709,00 en miles de euros. En cuanto a la enmienda 1744 se trata de adecuar los recursos para la financiación de la policía autonómica derivados del convenio de financiación que existe.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Cambra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Hurtado.

El señor HURTADO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a defender el bloque de enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista al Título VII, artículos 64 a 80, y las secciones 32 y 33, entes territoriales y fondos de compensación interterritorial, y lo haré paralelamente porque hay una interrelación lógica y normal entre ellas, pues algunas suponen una dotación presupuestaria en la citadas secciones.

Así, empezando por el orden de presentación, las enmiendas 1279 y 1280 plantean una modificación en el transporte colectivo urbano y lógicamente también una modificación en la sección 32, mediante la enmienda 1659.

La enmienda 1279 propone la sustitución de 49,26 millones de euros por 90,51 millones de euros, y su objeto es cubrir los déficit de explotación por los servicios de transporte colectivo urbano de aquellos municipios en los que resulta de prestación obligatoria. El crecimiento que ha venido experimentando este crédito es sensiblemente inferior a la evolución de los déficit subvencionados. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que los déficit pueden fijarse aproximadamente en 450 millones de euros, por lo que resulta urgente una revisión al alza de las cantidades consignadas para que se pongan en el mismo nivel que ha tenido en años anteriores.

Y respecto de la segunda enmienda, la 1280, parece lo más razonable que dado que todas las administraciones públicas están haciendo un padrón de habitantes de forma continua, en lugar de que se tenga en cuenta para la citada subvención la referencia poblacional referida al padrón del año anterior, si estamos aprobando los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 pretendemos que se tenga en cuenta el padrón a partir del 1 de enero del año 2003.

La enmienda 1281 se refiere a la compensación de los beneficios fiscales de que disfrutaban las autopistas de peaje en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Ésta es una enmienda que está hecha de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Se propone compensar a los municipios afectados por el coste de las bonificaciones de que disfrutaban las autopistas de peaje en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyas liquidaciones hayan sido anuladas por sentencia judicial o resolución administrativa en acatamiento de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, sentencias de 16 y 17 de octubre del año 2000. En

última instancia, habría que recordar que se trata de una medida que se enmarca en un ámbito competencial que no corresponde a los ayuntamientos y, por lo tanto, el gasto fiscal que genera no debe detrarse de los ingresos municipales.

Al grupo mayoritario yo al menos le haría una reflexión, y es que aunque estemos nosotros defendiendo las enmiendas de los demás grupos sin ninguna convicción de que vayan a ser aprobadas, tienen una oportunidad de llevar a cabo la aprobación de ésta, ya que se está pidiendo absolutamente por todos los grupos y parece lo más razonable, pues no afecta en absoluto a esta administración pública y lo más sensato sería llevar a cabo su aprobación, y sólo es el grupo mayoritario el que viene manteniéndose año tras año en una posición que no acaba de ser entendida.

La 1282 también supone la compensación de la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de que disfrutaban los centros concertados correspondiente al ejercicio 1993. Se trata de llevar a cabo esa compensación según lo que ponía de manifiesto la propia Ley 39/1988, de Haciendas Locales, que quedó en ese año concreto sin la compensación debida a los ayuntamientos que tenían centros de este tipo.

Por otro lado, la 1283 es coincidente en su dotación presupuestaria con la 1660 a la sección 32, dotaciones para gastos institucionales de los municipios con población inferior a 1.000 habitantes.

Ésta es una partida global que tenemos cuantificada en 31,12 millones de euros, y supone exclusivamente una cantidad tan pequeña pero tan necesaria en los ayuntamientos que tienen menos de 1.000 habitantes, de 6.344,5 euros para cada uno de los 4.905 municipios que tienen población, repito, menor de 1.000 habitantes, exclusivamente para que puedan atender el funcionamiento democrático de los grupos municipales e incluso la representación institucional del propio ayuntamiento.

La 1284, se refiere a la compensación por los retrasos en la inscripción catastral y deficiencias en la Dirección General del Catastro. Ésta es una partida para hacer efectiva la compensación equivalente al importe de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que no ha podido ser recaudado por los ayuntamientos por haber prescrito la deuda tributaria como consecuencia de los retrasos de la Administración General del Estado en la gestión del catastro.

La 1285, referida a la compensación efectiva del Impuesto sobre Actividades Económicas, tendrá que hacerse también al unísono en la Ley reguladora de las Haciendas Locales que se encuentra también en trámite parlamentario, pues según las noticias que llegan al Grupo Parlamentario Socialista, el acuerdo al que se llegó en materia de compensación del Impuesto sobre Actividades Económicas con la Federación Española de Municipios y Provincias parece que no está suficientemente bien reflejado en estos presupuestos para que efectivamente no se produzca ninguna pérdida económica por parte de los ayuntamientos en la compensación del mencionado Impuesto sobre Actividades Económicas.

La número 1286 es la relativa a las entregas a cuenta del fondo de suficiencia, teniendo en cuenta que la evolución

de los ingresos de los tributos del Estado calculada por el Gobierno asciende a un índice de crecimiento que es del 1,2677 frente al real que nosotros entendemos que es de 1,3019. Esa compensación sería a cargo del fondo de suficiencia, en un índice de 0,0342.

Al mismo tiempo, la número 1.287 va en el mismo sentido, dirigida a liquidación definitiva del fondo de suficiencia, y la 1.288 para la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el quinquenio 1997-2001. Se trata así de garantizar la cobertura presupuestaria que permita tanto la aplicación de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el recurso contencioso-administrativo 0213/1999, promovido por la Junta de Andalucía contra la falta de liquidación de la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado correspondiente al ejercicio del año 1997, como la aplicación de los acuerdos que se adopten en el seno de la Comisión Mixta de transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica correspondiente al quinquenio 1997-2001.

La enmienda número 1289 propone la aplicación del fondo de garantía del sistema de financiación de las comunidades autónomas para el quinquenio 1997-2001.

Asimismo, las enmiendas números 1291 y 1292, en consonancia con la número 1661, de la Sección 32, proponen la dotación de dos fondos de compensación interterritorial, uno de 1.370.300,3 miles de euros, y otro de 1.027.750,9 miles de euros.

Por último, la enmienda número 1658, a la Sección 32, propone una asignación de 20 millones de euros para la financiación de las obras del ferrocarril metropolitano de Sevilla, a cuenta del futuro convenio. El Grupo Parlamentario Socialista ha planteado esta enmienda en consonancia con otras partidas que figuran para otras ciudades de España en el propio proyecto de ley de presupuestos y, además, teniendo en cuenta que a las ciudades a las que se les aplica tienen las mismas dificultades que Sevilla, de manera que es una obra imprescindible para dar solución a los problemas que se plantean en la ciudad por el crecimiento de la población. La Junta de Andalucía tiene ya redactado un proyecto técnico, a la espera de realizar un convenio con el Gobierno de la nación y el propio Ayuntamiento de Sevilla.

Éstas son las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista al Título VII de los Presupuestos Generales del Estado y a las Secciones 32 y 33, de entes territoriales y fondo de compensación interterritorial.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Hurtado.

El Grupo Parlamentario Popular ha decidido dividir el turno en contra entre los senadores Gil-Ortega y Sánchez Cuadrado.

En primer lugar, tiene la palabra el senador Gil-Ortega.

El señor GIL-ORTEGA RINCÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a intentar dar respuesta a las enmiendas presentadas al Capítulo I del Título VII de forma escueta, y siguiendo la dinámica propuesta de contestar casi exclusivamente a aquellas enmiendas que se han defendido, y no haciéndolo en el caso de aquellas que se han dado por defendidas, puesto que la oposición podrá comprender que la respuesta ya la obtuvieron en el Congreso de los Diputados.

La enmienda número 239, de Izquierda Unida, de adición al artículo 67, la vamos a rechazar ya que la distribución de fondos a favor de los municipios se estableció con dos criterios de financiación mínima: el primero, un criterio general por el que ningún ayuntamiento percibirá una cuantía inferior a la obtenida en 1998; y, el segundo, también a favor de los municipios con población no superior a 5.000 habitantes que, en ningún caso, podrán obtener una participación por habitante inferior al 70 por ciento del déficit medio por habitante de dicho grupo de población.

En relación a la enmienda número 240, también de Izquierda Unida, he de indicar que el crédito presupuestario para este concepto se ha incrementado en el porcentaje del PIB. La medida propuesta iría, desde nuestro punto de vista, en contra de la política presupuestaria actual ya que incrementa la subvención en más de un 100 por cien. Además, señorías, ustedes saben que esta subvención no va encaminada a cubrir en su totalidad el déficit de la prestación de servicios del transporte urbano colectivo, sino a cooperar con él.

La enmienda número 244, también de Izquierda Unida, debe rechazarse ya que la disposición adicional vigésimo primera de la ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que extiende la aplicación del beneficio fiscal a 1993, declara expresamente en su último párrafo que no será de aplicación en ningún caso lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/1998, reguladora de las Haciendas Locales.

En relación con la enmienda número 245, de Izquierda Unida, tampoco la vamos a aceptar ya que no es posible compensar a los ayuntamientos por el importe de las bonificaciones que disfruten en el IBI las empresas que tienen la condición de concesionarias de autopistas que discurren por los términos municipales, cuando las mencionadas concesiones fuesen anteriores al día 1 de enero de 1990.

En relación a las cuatro enmiendas que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado a este primer capítulo, números 1677 a 1680, me va a permitir contestar a las tres primeras en el mismo bloque. Las vamos a rechazar porque se pretende establecer distintos criterios de asignación de la participación de los municipios del área metropolitana de Madrid, excluido Madrid, de los integrantes de la corporación metropolitana de Barcelona, que se establecerán por la propia Generalidad de Cataluña. Nos parece que en un modelo general de financiación, como es éste, se deben aplicar idénticos criterios para situaciones análogas, sin hacer distinción de unos municipios de otros por el solo hecho de pertenecer a comunidades autónomas distintas.

Respecto a la enmienda número 1680, que coincide con la 1281 del Grupo Parlamentario Socialista, al que también contesto, vamos a rechazarlas ya que la propuesta presentada recoge como susceptible de compensación la bonificación del 95 por ciento en la cuota del IBI, de la que son beneficiarias las sociedades concesionarias de autopistas. Estas enmiendas las vamos a rechazar de acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en la que se expresa que únicamente darán lugar a compensación aquellos beneficios fiscales establecidos ex novo a partir de la promulgación de la citada ley, por lo que no procede la creación del fondo solicitado. *(El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.)*

El Grupo Parlamentario Socialista ha defendido una por una prácticamente todas sus enmiendas, que coinciden en su totalidad, excepto en una, con las del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Por tanto, aunque no iba a hacer referencia a ellas porque se han dado por defendidas, las voy a citar para contestar así a los dos grupos al mismo tiempo. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado siete enmiendas números 1279 a 1285, ambas inclusive. La primera de ellas coincide con la número 893 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como con la número 240 de Izquierda Unida. Por tanto, la respuesta que hemos dado también sirve en este caso.

La enmienda número 1280 coincide con la número 894 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y serán rechazadas por considerar incoherente la propuesta, ya que los datos relativos a la prestación del servicio, incluidos los de la población, han de estar referidos al año 2002, no al 2003, porque son los únicos disponibles en el momento de realizar dicho reparto. Ustedes pueden entender que la subvención establecida en la ley de presupuestos del 2003 viene a financiar los servicios prestados en el 2002.

La enmienda número 1281 ha sido contestada junto con la número 1680 de Convergència i Unió. La enmienda número 1282 también se puede entender contestada con la respuesta a la número 244 de Izquierda Unida. La número 1283 es coincidente con la número 898 de Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y propone una dotación de 31,12 millones de euros con el fin de atender a los gastos institucionales y de funcionamiento de los ayuntamientos con menos de mil habitantes. Vamos a rechazar esta enmienda porque este grupo de municipios obtiene una fuente de financiación básica a través de su participación en los tributos del Estado, que se configura como una transferencia corriente e incondicionada.

La enmienda número 1284 también coincide con la número 899 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y con ella se pretende dotar de un crédito especial a los ayuntamientos a fin de compensarlos como consecuencia del cobro del IBI por deficiencia del catastro. La vamos a rechazar porque existen vías de reclamación suficientes mediante la utilización de los procedimientos contemplados en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin necesidad de recurrir a un crédito especial de ese tipo.

La última enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, número 1285, coincide con la 900 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y también la rechazamos porque la Ley de Haciendas Locales ya contempla modificaciones de la misma para compensar el IAE por los ayuntamientos. Es ahí, en ese debate parlamentario donde deben presentarse las enmiendas y, por lo tanto, en este momento no tiene sentido admitir su propuesta.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Gil Ortega.

Tiene la palabra el senador Sánchez Cuadrado.

El señor SÁNCHEZ CUADRADO: Gracias, señor presidente.

Siguiendo la técnica que mi grupo está desarrollando, tengo que decir que me remito a los argumentos dados ya en Comisión, para rechazar todas las enmiendas que se han dado por defendidas en el Pleno.

Por tanto, me voy a referir de una manera más detallada, en primer lugar, a las enmiendas defendidas por el senador Cabrero con relación al fondo de compensación interterritorial y al fondo de nivelación de servicios, al que se refiere el artículo 15 reformado de la LOFCA.

Este grupo entiende que dicho artículo, precisamente por haber sido reformado, es muy claro en cuanto a los servicios a los que se tiene que referir, que son los relativos a sanidad y educación y, por tanto, entendemos que no procede modificar una legislación que ya fue aprobada unánimemente por todas las comunidades autónomas.

Y lo mismo sucede respecto al FCI. No nos parece razonable el aumento que se propone teniendo en cuenta que se ha aplicado perfectamente la Ley. Incluso, como dice el senador, parece que se inclina por el hecho de que haya dinero para la inversión incluso en el fondo complementario. Entendemos que la Ley no lo impide y, por tanto, consideramos que no tienen razón de ser este tipo de enmiendas.

Respondiendo al Senador Cambra, la enmienda de CiU que pretende la liquidación de la cuota líquida resultante del incremento de las comunidades autónomas como consecuencia de la modificación que se llevó a cabo en la Ley 40/1998, del IRPF, entendemos que no procede esta nueva liquidación en cuanto se refiere a aquellas personas que han quedado fuera de la declaración. Efectivamente, al no existir una cuota líquida, es muy difícil computar. Si no existe declaración, no se puede computar. En cuanto a aquellas otras personas que han quedado pendientes de una devolución como consecuencia de la reforma del IRPF, ya se practicó liquidación en los años 1998, 1999 y 2000 y en el año 2003 se va a practicar la relativa al año 2001, de acuerdo con las normas establecidas en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 1998, que fueron aceptadas por las comunidades autónomas. Por tanto, tampoco vemos razón para incluir esta enmienda.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Hurtado ha defendido las enmiendas correspondientes al Capítulo II.

Respecto a la enmienda número 1286, referida al fondo de suficiencia, nuestro grupo no entiende cuáles son los datos que se han utilizado para establecer esta nueva base de cálculo. Consideramos que el cálculo ya realizado sobre dicho fondo es correcto y, por tanto, el resultado que propone la enmienda es erróneo, por lo que la vamos a rechazar.

En cuanto a la enmienda número 1287, que también trata sobre el fondo de suficiencia y que pretende una liquidación, nosotros entendemos que la actual legislación sobre el modelo de financiación autonómica es estable y que, por tanto, no procede ninguna liquidación del fondo de suficiencia al margen de lo establecido en dicha legislación.

Las siguientes enmiendas, las números 1288 y 1289, se refieren concretamente a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Entendemos que no son coherentes con la postura que mantiene el propio Gobierno de la Comunidad, que sigue con el recurso de inconstitucionalidad y, por tanto, no ha aceptado ningún modelo anterior. En definitiva, es muy difícil pedir en el Senado que se practique una liquidación de acuerdo con las normas de un modelo que no se han aceptado por la propia comunidad autónoma y que, incluso, se han recurrido por inconstitucionalidad. No ocurre así respecto de Extremadura, que sí aceptó un modelo para practicar la liquidación y la misma se va a practicar de acuerdo con dicho modelo.

La enmienda número 1290 se refiere a las aportaciones extraordinarias de la disposición adicional segunda de los Estatutos de Andalucía y Extremadura, que fueron aprobadas con carácter excepcional. Pero en el mismo acuerdo de la Comisión de Política Fiscal y Financiera se aprobó también que la definición definitiva de la cuantía y de los criterios de dicha aportación extraordinaria se harían de acuerdo con las normas del artículo 15 de la LOFCA. Y, de acuerdo con dicho artículo, está perfectamente claro y definido cómo se ha de actuar respecto de este fondo de nivelación. Por tanto, entendemos que no procede aceptar su enmienda. Incluso, la disposición adicional segunda de los estatutos hacen ya referencia a lo dispuesto en el artículo 15 de la LOFCA, que ha sido modificado. Por tanto, entendemos que debe mantenerse.

Finalmente, voy a referirme a las enmiendas sobre un incremento respecto del fondo de compensación interterritorial que pretende incorporar el senador Hurtado. Nosotros consideramos que la Ley 22, del año 2001, regula perfectamente este fondo, tanto el de compensación como el complementario y, por lo tanto, las normas con arreglo a las cuales se ha establecido la base de cálculo de este fondo, que es la inversión real del Estado, no procede alterarlas pues no hay ninguna razón para ello. Por lo tanto, vamos a mantener el texto del proyecto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Sánchez Cuadrado.

Pasamos al turno de portavoces. ¿Algún grupo quiere hacer uso de él? (*Pausa.*)

Disposi-
ciones
adicionales
primera
a vigésima
sexta

Pasamos a las disposiciones adicionales primera a vigésima sexta.

En primer lugar, enmiendas 248 a 249, 251 a 282 y 288, de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cabrero Palomares.

El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor presidente.

Presentamos 35 enmiendas a las disposiciones adicionales.

Pretendemos la puesta en marcha de un plan de inversión con 12 millones de euros en todos aquellos hospitales de más de 100 camas que pertenezcan al sistema público de salud. Dicho plan permitirá la puesta en marcha de sistemas de cogeneración en esos hospitales.

Para procurar un fondo de compensación de la servidumbre de las bases militares, en el caso concreto de Rota, pedimos que se destinen 6 millones de euros a los municipios afectados, es decir, al Puerto de Santa María y al municipio de Rota.

Además, queremos que se produzca la transferencia de las competencias del Hospital Militar Gómez Ulla, en Madrid, y del Hospital Vigil de Quiñones, en Sevilla, a los respectivos servicios de salud de las comunidades autónomas de Madrid y de Andalucía.

Creemos que para la aplicación de la adicional segunda de los Estatutos de Autonomía de Andalucía y Extremadura se dote de un fondo, de 306 y 60 millones de euros respectivamente, para el pago de la deuda histórica, como se denomina en Andalucía, por aplicación de la adicional segunda del Estatuto de Autonomía.

Al objeto de impulsar los convenios de colaboración entre el INEM y las corporaciones locales para la puesta en marcha del AEPSA, se debe dotar de un presupuesto total de 310 millones de euros para Andalucía y 70 millones de euros para Extremadura. Y para mejorar la capacidad técnica del AEPSA y la generación de empleo en estas dos comunidades autónomas, se debe establecer un fondo local adicional de 101 millones de euros como asignación complementaria para cubrir la insuficiencia financiera en la prestación de los servicios públicos municipales que tienen carácter de obligatoriedad.

Por otra parte, hay que poner en marcha mecanismos para que los remanentes de créditos presupuestarios de ejercicios anteriores del fondo de nivelación que está previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas se incorporen al fondo que cumple el mismo objetivo en el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, porque ya ha supuesto unos 36.000 millones de pesetas la acumulación por esos remanentes, de los cuales unos 14.000 millones de pesetas serían para la comunidad autónoma de Andalucía.

Se debe poner en marcha la modificación de la normativa para dar viabilidad a los supuestos que hagan efectivas las prestaciones por desempleo para los cargos públicos electos, una vez que culmine su mandato y tengan derecho a prestación por desempleo.

En otra adicional planteamos que se deben poner en marcha fondos suficientes para la actualización y depuración del censo consular, y con ello, del censo de españoles residentes ausentes. Tal y como ha expuesto el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, son motivos presupuestarios los que impiden la actualización y depuración de este censo.

Asimismo, queremos que se impulse la negociación oportuna con las comunidades autónomas para transferir las competencias existentes sobre los hospitales militares a la red sanitaria pública.

En otra de nuestras enmiendas planteamos que se debe procurar la participación local en los fondos europeos. Se ha logrado un acuerdo sobre la participación local en los tributos del Estado para el quinquenio 1999-2003 y, desde ese punto de vista, planteamos que 250 millones de euros de los fondos FEDER vayan destinados a los municipios, 90 millones de euros de los fondos de cohesión y 60 millones de euros del Fondo Social Europeo.

También pretendemos que las pensiones que están por debajo del salario mínimo interprofesional tengan un incremento en el año 2003 superior al IPC previsto y al acuerdo con los sindicatos al objeto de mejorar la capacidad adquisitiva de este tipo de pensiones.

Asimismo, con el fin de conseguir la aportación del 0,7 a la cooperación internacional en la ayuda al desarrollo, entendemos que se debe producir un sorteo especial para la cooperación internacional y ayuda al desarrollo y que, en todo caso, de aquellos premios de la lotería nacional que no se pagan porque se quedan en poder del Estado se destine al menos el 10 por ciento de las cantidades correspondientes a la cooperación internacional y ayuda al desarrollo.

De los presupuestos de inversiones del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Medio Ambiente queremos que el 0,1 por ciento vaya destinado a proyectos que permitan la creación de una red nacional de carriles bici, que es una fuerte reivindicación de una parte importante de la sociedad española.

De igual modo, para poder desarrollar el estatuto especial de la ciudad de Cádiz, se debe dotar un fondo de 9 millones de euros.

Seguimos pensando, igualmente, que hay que poner en marcha y destinar desde el Gobierno el 0,7 del PIB para cooperación al desarrollo.

Asimismo, creemos que el Gobierno debe destinar en el próximo ejercicio el 4 por ciento de ayuda oficial al desarrollo a programas de salud sexual y reproductiva, y así cumplir con el compromiso adquirido en la conferencia sobre población y desarrollo en El Cairo.

Creemos que se debe producir la extensión del derecho de indemnización a las viudas de personas ejecutadas durante el franquismo y, desde ese punto de vista, hacer justicia.

También planteamos un reconocimiento a los ex-presos y represaliados políticos, un reconocimiento moral a todos estos hombres y mujeres que padecieron la represión del régimen franquista en defensa de la libertad y por profesar convicciones absolutamente democráticas.

Instamos también a la exhumación de las fosas comunes de los muertos en la guerra civil. Aproximadamente se calcula que hay unos 30.000 cuerpos no identificados de esa época, entre ellos el famoso poeta Federico García Lorca. Diversas ciudades y comunidades autónomas tienen este tipo de fosas comunes y sería hacer justicia que se dotara de presupuesto suficiente para proceder a la exhumación.

Planteamos otra enmienda al objeto de que la ley 43/1998, de 15 de diciembre, se pueda cumplir y para ello solicitamos que se amplíe a un año más el plazo para que los partidos políticos puedan presentar documentación fehaciente y así restituir y compensar a los partidos políticos de los bienes y de los derechos incautados durante la guerra civil española.

Finalmente, planteamos otra enmienda en el sentido de que se presente en las Cortes Generales una ley de reforma del IRPF que contemple la exención de la totalidad de indemnizaciones satisfechas a las personas que sufrieron privación de libertad en los supuestos previstos en la Ley 46/1977 de amnistía de aquella época.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cabrero.

Corresponden ahora las enmiendas números 43 y 44, también del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el senador Quintana.

Tiene la palabra el senador Cabrero.

El señor CABRERO PALOMARES: Señor presidente, las damos por defendidas.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.

Enmiendas de la senadora De Boneta números 655 a 658. ¿También las da por defendidas, senador Cabrero? (*Asentimiento.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.

Pasamos a las enmiendas números 744 y 745 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Para su defensa tiene la palabra el senador Aurrekoetxea.

El señor AURREKOETXEA BERGARA: Muchas gracias, señor presidente.

Son dos enmiendas que no por recurrentes están menos vigentes. La verdad es que llevamos ya bastante tiempo planteándolas. La disposición adicional décima es inconstitucional aunque éste sea ya el cuarto ejercicio en que figura en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Nosotros seguimos demandando que lo que el Estado quiere hacer en gestión directa a través del INEM quede suprimido en su totalidad. Esto lo argumentamos en nuestra enmienda número 744 con diferentes sentencias del Tribunal Constitucional y con otros preceptos que tienen conexión con él, por ejemplo, la transgresión del artículo 149.1. 7ª de la Constitución.

En la justificación de nuestra enmienda número 745 planteamos que existe el Acuerdo vasco sobre formación profesional continua que está suscrito en aplicación de los artículos 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado en septiembre de 1995. Entendemos que tiene que haber una dotación diferenciada para que este acuerdo pueda pervivir con una financiación suficiente. Es decir, este acuerdo no puede estar al albur de las relaciones que existan entre los distintos partidos políticos.

Todos somos conocedores de que cuando en 1996 se llegó a este acuerdo tenía financiación suficiente, pero a partir de las malas relaciones entre los dos partidos, el que gobernaba el Estado y el que gobernaba en el País Vasco, ese acuerdo no obtuvo la suficiente dotación presupuestaria.

Por tanto, como nosotros entendemos que dicho acuerdo no puede correr ese albur, se debe fijar una financiación suficiente para poder desarrollar lo que en el mismo se establece.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.

Las enmiendas de la Entesa números 909 a 927 y 932 han sido dadas por defendidas.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 1682 a 1688.

Para su defensa tiene la palabra el senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Tenemos siete enmiendas a las disposiciones adicionales. La enmienda número 1682, a la disposición adicional segunda, tiene por objeto adoptar las medidas necesarias para mejorar una determinada ayuda a las familias. Queremos concretamente que se incrementen en un 4 por ciento las prestaciones por hijo a cargo, tanto para hijos mayores como menores de 18 años, prestaciones que estaban congeladas de hecho desde que se actualizó su cuantía en el Real Decreto-ley 1/2000, de 19 de julio. Pretendemos que también se incremente en un 4 por ciento el límite de ingresos que posibilita la percepción de estas ayudas para que de esta forma se amplíe el número de familias que puedan acceder a ellas.

La enmienda número 1683 es de supresión de la disposición adicional décima. Entendemos que habiéndose realizado ya el traspaso de la gestión por el INEM en el ámbito del trabajo, la ocupación y la formación a la mayoría de las comunidades autónomas, habiendo asumido éstas las funciones de gestión y control de todas las políticas activas de ocupación en su territorio, y reservándose únicamente el INEM las políticas pasivas, consideramos que con la transferencia efectuada no hay argumentación jurídica que justifique mantener la reserva presupuestaria que se contempla en esta disposición adicional.

En cuanto a la número 1684, a la disposición adicional vigésima primera, su objeto es la territorialización de los recursos destinados a la formación profesional continua

para que puedan ser gestionados por las comunidades autónomas.

En las cuatro enmiendas siguientes se proponen cuatro disposiciones adicionales nuevas. En la número 1685 proponemos que se provea de dotaciones presupuestarias a las comunidades autónomas al objeto de diseñar políticas sociales de integración de los inmigrantes dando de esta forma cumplimiento a la Ley de inmigración y creando para ello un fondo al que habrá que dotar con carácter ampliable para que puedan ser las comunidades autónomas las que gestionen este tipo de políticas.

La enmienda 1686 hace referencia a los ingresos financieros que se producen por los depósitos y consignaciones judiciales. En este sentido, el Congreso de los Diputados instó al Gobierno, en el debate de política general sobre el estado de la nación de 1998, a reconocer a las comunidades autónomas su capacidad para regular la adjudicación y gestionar los depósitos y consignaciones judiciales en su ámbito. De todo ello se deduce la necesidad de habilitar los créditos necesarios para transferir a las comunidades autónomas los ingresos financieros que los depósitos y consignaciones han devengado desde la fecha de efectividad de los traspasos judiciales.

El objeto de la enmienda 1687 es posibilitar la participación de los centros públicos de investigación de las comunidades autónomas en las convocatorias que se realizan por parte de la Administración general del Estado en actividades de I+D+I.

Por último, la enmienda 1688 tiene por objeto traspasar fondos a la Generalitat para compensar el gasto derivado del aumento de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles. Es el típico ejemplo de la necesidad de transferir fondos a las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en educación, como consecuencia de una medida adoptada por parte de la Administración central.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cambra.

Pasamos a las enmiendas 1295 a 1311 del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, el senador González Príncipe tiene la palabra.

El señor GONZÁLEZ PRÍNCIPE: Muchas gracias, señor presidente.

Seremos breves. Las dieciocho enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista se pueden agrupar de la siguiente manera.

Hay un paquete que tiene que ver con la defensa de las retribuciones de los funcionarios. Realmente, hace algunos años que estamos reclamando, como voz que clama en el desierto, desde que las pagas extras sean completas hasta que se garantice la capacidad adquisitiva de los salarios frente a los derrapajes de la inflación, o que se pongan en marcha políticas de bienestar social con un costo del 1 por ciento de la masa salarial en cada uno de los ministerios.

El otro paquete importante tiene que ver con lo que fueron las transferencias sanitarias, que se hicieron con mu-

cha rapidez a finales del año pasado dejando algunas deudas pendientes, desde el gasto farmacéutico del mes de diciembre hasta los planes directores de los hospitales insuficientemente dotados, las cuotas de colegiación o los complementos de productividad del personal sanitario.

En tercer lugar, cabe destacar aquellas enmiendas cuyo objetivo es facilitar el acceso a la vivienda. Por un lado, se formula una propuesta dirigida a facilitar el acceso a la vivienda a las familias monoparentales y los jóvenes y, por otro, se pretende obligar al Estado a que en un plazo determinado de tiempo ponga a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos aquellos suelos que no son necesarios para las funciones para las que fueron expropiados a fin de que se pueda construir en ellos algún tipo de vivienda de protección oficial.

Por último, este paquete de enmiendas se refieren a otros dos asuntos de especial trascendencia, a nuestro modo de ver. Nos gustaría que se acabase con la discriminación negativa que sufren los agentes de la Policía Nacional y los miembros de la Guardia Civil en cuanto a los niveles salariales. Desgraciadamente, he sido responsable de la Administración local y ahora tengo que tener por la mañana a unos señores de contravigilancia de la Policía Nacional, y no entiendo por qué los policías de las ocho y media cobran el 25 por ciento menos de salario que los señores que me protegen cuando voy a un acto del ayuntamiento. Es muy difícil de explicar que personas que hacen el mismo trabajo tengan una retribución diferente. En este sentido, le proponemos al Gobierno que en un plazo de seis meses nos envíe una propuesta detallada para equiparar o, mejor dicho, superar esa discriminación negativa que están sufriendo los agentes de la Policía Nacional y los miembros de la Guardia Civil.

Termino haciendo una referencia a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Señorías, proponemos un fondo especial para la Argentina, no sólo por razones humanitarias, sino para que no siga cayendo la Bolsa, es decir, para que esos cuatro millones de familias que en España tienen acciones no sigan viendo cómo desciende el Ibex. Así pues, por los intereses económicos de este país, y por los cientos de miles de personas relacionadas con nuestro país y ciudadanos nuestros que están allí, consideramos que Argentina debería ser objeto de un programa especial; y mucho más cuando se están muriendo niños, como desgraciadamente hemos podido ver en los informativos de televisión durante las últimas semanas.

Por último, sólo pedimos al Gobierno que en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo cumpla lo que dice la ley, es decir, que con el proyecto de ley de presupuestos nos presente el informe a que está obligado sobre cómo se ha gastado el presupuesto destinado a dicha ayuda durante el año anterior.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador González Príncipe.

Enmiendas números 1202 a 1206, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa tiene la palabra el senador Vallines.

El señor VALLINES DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Estas enmiendas proponen la adecuación de las partidas previstas en los presupuestos a la variación del Índice de Precios al Consumo de noviembre de 2001 a noviembre de 2002. Esperamos que durante el transcurso del debate de la ley de presupuestos se conozca dicho índice para, como digo, poder llevar a cabo las modificaciones necesarias antes de que el citado debate concluya.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Vallines.

En turno en contra del conjunto de estas enmiendas, tiene otra vez la palabra, senador Vallines.

El señor VALLINES DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

A las disposiciones adicionales se han presentado más de cien enmiendas por parte de todos los grupos —93 de ellas de adición, y las restantes de modificación—, la mayor parte de las cuales ya se han presentado en el Congreso de los Diputados. Estas enmiendas hacen referencia a políticas nuevas o a declaraciones de intenciones, es decir, a la política que llevarían a cabo determinados grupos. Por otro lado, la mayor parte de las medidas que se proponen están sin evaluar. Y pondré como ejemplo una enmienda de Izquierda Unida, que propone que se dote de forma suficiente una partida para que los censos electorales en el extranjero estén bien confeccionados. Ésta es una forma curiosa de presupuestar.

Pero como éste hay muchos otros ejemplos de enmiendas de todos los grupos, que no solamente no evalúan las cantidades, sino que ni siquiera especifican de qué partida se debe deducir la financiación que se solicita. Si estas enmiendas hubieran sido presentadas a cualquier sección hubieran decaído por no estar compensadas, pero en las disposiciones adicionales se permite todo; por ejemplo, destinar el importe de un sorteo de Lotería a fines, aunque sin duda razonables, que no están previstos en los presupuestos lo que significa un menor ingreso en los presupuestos del Estado. Siguiendo con la Lotería, Izquierda Unida propone que la parte de los premios que no se repartan porque no hayan correspondido a nadie y que se ha quedado el Estado se destine a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Eso supondría también una disminución de los ingresos del Estado, porque los premios que no se reparten están calculados estadísticamente.

Es muy fácil presentar enmiendas de esta naturaleza cuando no se tiene la necesidad de evaluar la cuantía de lo presupuestable y ni siquiera especificar con qué cantidad se va a financiar lo que se propone. Por eso, la mayor parte de todas estas enmiendas son más bien propias de la ley de acompañamiento —sin embargo, ha habido algún grupo esta mañana que ha criticado al Gobierno por elaborarla—, o incluso de otras leyes, ya que se refieren a políticas generales que corresponderían a leyes específicas que ya existen, por lo que habría que modificarlas, o a planteamientos nuevos a considerar en nuevas leyes.

No obstante trataré de comentar algunas de las enmiendas presentadas, sobre todo aquéllas en las que han puesto más énfasis algunos de los grupos. Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, que se han dado por defendidas, las voy a dar por rechazadas, tanto más cuanto que la mayor parte de ellas se corresponden con las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, habiendo sido el resto presentadas en el Congreso de los Diputados. Asimismo quedan rechazadas las enmiendas presentadas por la senadora De Boneta y por el Bloque Nacionalista Gallego del Grupo Parlamentario Mixto.

Por lo que respecta al resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, que han sido presentadas por Izquierda Unida y cuyo portavoz ha hecho un repaso exhaustivo de todas ellas, le puedo decir lo siguiente, señoría. Con la enmienda número 264 se pide que se dote una partida presupuestaria suficiente para elaborar el censo de los votos de los emigrantes. El Gobierno considera suficiente la partida existente para llevar a cabo lo que se pretende, y no sólo es suficiente sino que está dotado, en tanto que su enmienda no lo está. La enmienda número 275 propone que se presupueste lo necesario para que haya el número de funcionarios suficiente a fin de que las declaraciones de impacto medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente se elaboren con prontitud, rapidez y eficacia. No hay duda de que hay buena voluntad en ello, pero se trata de una presupuestación bastante arbitraria.

La enmienda número 277 habla de dotar de una cantidad al supuesto estatuto especial de la ciudad de Cádiz, que no existe. Convendría, pues, elaborar primero ese estatuto para así poder dotarle de algún dinero. La enmienda número 257, al igual que la 265 y alguna del Grupo Parlamentario Socialista, se refieren a la transferencia de las competencias sobre determinados hospitales militares a la red sanitaria nacional, concretamente el Gómez Ulla de Madrid y algún otro. Tanto el Gobierno como el Ministerio de Defensa consideran que es preciso mantener las competencias sobre dichos hospitales dentro de una red especial de hospitales militares, y poco podemos discutir sobre ello. Nuestro grupo apoya la opinión del Ministerio de Defensa y del propio Gobierno al respecto.

La enmienda número 280 hace mención al famoso 0,7 por ciento del PIB para su destino al Fondo de Ayuda al Desarrollo. Debemos pensar que dicho objetivo lo es a medio o largo plazo, amén de que éste no es sólo un objetivo de la Administración central del Estado, sino que también lo es de todas las administraciones públicas. Asimismo quiero recordarle que esa partida se ha visto incrementada en los presupuestos de este año en el 8,8 por ciento. No se llega, pues, a ese 0,7 por ciento, pero, como le digo, la Administración central del Estado no puede alcanzar sola ese objetivo, sino que también deben hacerlo otras administraciones públicas. No obstante, insisto, ese incremento del 8,8 por ciento es bastante razonable.

La enmienda 262 habla de conceder el subsidio por desempleo a los concejales electos una vez éstos pierden tal condición. A este respecto debo decirle que está previsto que aquellos concejales que cesen en su cargo vuelvan a la situación en la que se encontraban con anterioridad a su

elección, es decir, si eran empleados autónomos volverán a su condición de autónomos, si estaban empleados por cuenta ajena o eran funcionarios en excedencia volverán a esa misma condición, y si estaban en las listas de desempleo volverán a ellas. No parece, pues, que se pueda aceptar tal planteamiento. Y esto es todo lo que puedo comentar ahora sobre las enmiendas en las que el Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda Unida) ha hecho más hincapié.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 744 y 745, éstas se relacionan con las números 1683 y 1684 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La número 744 se trata ya de una enmienda clásica por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en relación con el Inem y sus programas. Como sus señorías saben, el Grupo Parlamentario Popular ha introducido una enmienda, la número 1200, en la que se suprime la letra b) de las cuatro que componían la Disposición Adicional Décima, pasando la anterior letra c) a ser la actual b), y así sucesivamente. El Gobierno ha entendido que esa podía ser la parte más discutible o en la que se puede hacer más énfasis tanto desde el punto de vista del PNV como de Convergència i Unió en lo que se refiere al Inem.

Al Gobierno le parece razonable la gestión de programas para la mejora de la ocupación de demandantes de empleo en órganos de responsabilidad de la Administración central; respecto a que la gestión de programas de formación y empleo necesite una coordinación unificada dentro del territorio de la nación, al Gobierno también le parece razonable que exista esa reserva de gestión y que se requieran unos planes especiales en el departamento de acciones y mejora de la ocupación de demandantes de empleo en las zonas ultraperiféricas, es conveniente y es constitucional mantener esa reserva de gestión. Éste es el punto de vista del Gobierno, independientemente de la colaboración que se pueda tener con las comunidades autónomas, como es el caso de la formación continua. Ahora sí que hay una sentencia del Tribunal Constitucional en el sentido de que su desarrollo debe ser negociado entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las fuerzas sociales. Hay que adaptarse al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional y ése es el futuro de esos planes de formación continua, que deberán basarse en acuerdos de la Administración central con las comunidades autónomas y las fuerzas sociales. Ése es el camino y, mientras no se llegue a ese acuerdo, y está en la voluntad del Gobierno, parece prudente presupuestar como está presupuestado, como se ha presupuestado en años anteriores, con el fin de tener la partida presupuestaria y poder después aplicarla, según el caso, a la solución o al acuerdo que se llegue.

En relación con una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, también ha hecho énfasis en los fondos y depósitos judiciales, pretendiendo que con dichos fondos se financien las responsabilidades de las comunidades autónomas en cuanto a infraestructuras de tipo judicial, que poco tiene que ver gestión jurisdiccional con estructuras necesarias para la administración de la justicia, poco tiene que ver, son cosas muy

distintas dentro de un mismo carácter. La rentabilidad de esos depósitos judiciales debe quedarse como está, dentro de la administración judicial; otra cosa es que dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera se planteen las demandas de insuficiencia de financiación en esta materia, como ha señalado el representante de Convergència i Unió, o en otras materias, como han presentado otros grupos en relación con la educación. Por ejemplo, el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado la insuficiencia de la financiación autonómica histórica en sanidad y el Grupo de Izquierda Unida también ha dicho algo de insuficiencias históricas.

Para concluir con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, hay una serie de enmiendas que se refiere a las retribuciones de los funcionarios, pero parten de una tesis que nosotros reputamos de equivocada, y es que los funcionarios han perdido poder adquisitivo durante estos años. Nosotros negamos la mayor, creemos que los funcionarios en su conjunto no han perdido poder adquisitivo durante estos años y mucho menos cuando se ha llegado a un acuerdo, y eso avala además nuestra posición, el pasado mes de noviembre con los sindicatos de los funcionarios para las retribuciones en el futuro. Durante estos años puede ser que algún año se haya congelado y algún año haya subido estrictamente el Índice de Precios al Consumo, pero ha habido otras partidas, corrimientos de otros conceptos que han compensado sobradamente, de tal manera que la tesis que sostenemos es que los funcionarios no han perdido poder adquisitivo. Quizá no lo hayan ganado, pero desde luego no lo han perdido y a partir del acuerdo del mes pasado mejorarán en su poder adquisitivo.

Plantean también algunas enmiendas sobre sorteos de loterías, y pasa lo mismo. Es fácil decir que se haga un sorteo de lotería para la vela olímpica, pero habría que disminuir entonces los ingresos del Estado, y, además, estos planteamientos que se producen todos los años en el presupuesto no se hacen de un mes para otro, porque requieren una gestión y una planificación ya que la Lotería Nacional lleva años funcionando.

En cuanto a los fondos FAD para Argentina, ha quedado muy bien la broma de que con la aprobación de esta enmienda subiría la cotización de Endesa, del BSCH e incluso del BBV, pero creemos que los fondos que hay en materia de cooperación y ayuda al desarrollo son suficientes y permiten —y, si no, podrían ampliarse— la atención de las necesidades que pudieran plantearse, tanto en Argentina como en otros terceros países.

Por lo demás, el estudio sobre la diferencia entre las retribuciones de unas policías con otras, parece presumir o confirmar absolutamente esas diferencias. El Gobierno está haciendo un estudio de esta naturaleza y tan pronto como lo tenga lo comunicará a las fuerzas políticas para su conocimiento en las Cámaras que considere convenientes.

En cuanto a la última enmienda, la número 1311, sobre la necesidad de que los solares y bienes inmuebles correspondientes a la Administración general del Estado que queden sin uso les sea comunicado a las comunidades autónomas y ayuntamientos para promoción de viviendas de protección pública, quiero destacar que del cien por cien

de terrenos que en los últimos años se han dedicado por parte de la Administración general del Estado a la promoción de viviendas, el 64 por ciento tienen algún tipo de protección.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Vallines.

¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

Disposiciones Transitorias Primera a Sexta.

Pasamos a las disposiciones transitorias primera a sexta; enmiendas números 250 y 283 a 287, de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares. Para su defensa, tiene la palabra el senador Cabrero.

El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor presidente.

En nuestras enmiendas a las disposiciones transitorias planteamos la necesidad de que el Gobierno presente un proyecto de ley sobre la planificación estratégica de los recursos humanos en el sector público de la Administración general del Estado y ello permita identificar las necesidades de personal en la Administración del Estado y planificar su cobertura mediante la oportuna oferta de empleo público. De esta manera podemos conseguir dos objetivos: por un lado, la mejora de la calidad y la eficacia de los servicios públicos, y, por otro, la creación de empleo. También puede ayudar a reducir la alta tasa de temporalidad que existe en el ámbito del sector público.

Planteamos igualmente la necesidad de que, a través de una nueva enmienda, se presente por parte del Gobierno un plan de choque contra el fraude y la elusión fiscal. Hay que decir que el fraude es una verdadera lacra que dinamita la equidad del sistema impositivo en nuestro país, y con esta fórmula que planteamos habría la posibilidad de incremento de la recaudación, de manera adicional, de unos 3.000 millones de euros. También planteamos que se presente en las Cortes una ley de reforma del Impuesto sobre Sociedades que eleve el tipo general de gravamen hasta el 40 por ciento. De esta manera también se permitiría una recaudación adicional de unos 1.800 millones de euros. E igualmente planteamos que se presente en las Cortes un proyecto de ley sobre la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, reconociendo las circunstancias personales y familiares de los contribuyentes y otras deducciones, en particular por aportaciones a mutualidades y planes de pensiones, en la cuota del tributo; integrando en la base las ganancias y las pérdidas patrimoniales; eliminando la deducción por doble imposición interna; articulando una nueva tarifa con más tramos y tipos más elevados; aumentando el límite para la plena exención de los rendimientos del trabajo, y fortaleciendo el régimen de transparencia fiscal, permita un incremento adicional, para el año 2003 en este caso, de unos 4.800 millones de euros. En definitiva, con esta reforma fiscal que planteamos globalmente se conseguiría una mayor recaudación, de unos 9.600 millones de euros —es decir, 1,6 billones de pesetas—, lo que permitiría la financiación de las propuestas de incremento que estamos planteando en otras enmiendas,

permitiría a la vez la puesta en marcha y el desarrollo de políticas sociales por parte del Gobierno, así como en el ámbito de inversiones para infraestructuras y la mejora de los servicios públicos. Si además —y con ello termino— se permitiera contemplar déficit público en el ámbito de la política macroeconómica del Gobierno desde el punto de vista presupuestario, no hay ninguna duda de que el incremento de ingresos sería sustancial y ello permitiría darle un vuelco total a la política presupuestaria y, por tanto, a la política en general del Gobierno.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cabrero.

Enmienda número 1312 del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el senador Mesa.

El señor MESA CIRIZA: Gracias, señor presidente.

La doy por defendida en los términos en que ha sido presentada.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Vallines.

El señor VALLINES DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Las enmiendas de Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario Mixto, a las disposiciones transitorias son de las que yo hablaba en mi exposición inicial. Por ejemplo, se pide que el Gobierno haga un estudio sobre el personal, pero yo creo que eso es más propio de una proposición no de ley o de una ley, si se quiere, pero no de una ley de presupuestos.

La enmienda número 285 propone un plan contra el fraude. En primer lugar, no hay un fraude generalizado y, en segundo lugar, planes contra el fraude los tiene todos los años de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los revisa y establece prioridades. Por tanto, esta enmienda se descalifica por sí misma.

En cuanto a las enmiendas números 286, 287 y 288, vuelvo a lo que he dicho inicialmente: lo que en ellas se contiene sería más propio de lo que está en tramitación ahora, esto es, un ley que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o una ley que reforma también el Impuesto sobre Sociedades, pero no unas modificaciones parciales. Por ejemplo, ustedes plantean que las sociedades coticen al 40 por ciento, cuando hasta hace muy poco todas estaban al 35 por ciento y el futuro es que vayan cotizando a menos porcentaje, como está sucediendo en todos los países de Europa. Eso es otra política de impuestos, eso es propio de otra ley, no de la ley de presupuestos.

La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista la doy por rechazada en sus propios términos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Vallines.

¿Algún grupo desea intervenir en turno de portavoces?
(Pausa.)

En consecuencia pasamos a la propuesta de introducción de una disposición final nueva. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la número 1689. Para su defensa, el senador Cambra tiene la palabra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, hemos presentado la enmienda número 1689, con la cual, y dentro de la política que venimos promoviendo de revisar aquellas pensiones más bajas y aquellos colectivos más necesitados de las clases pasivas, solicitamos que a través de esta disposición final se arbitren las medidas reglamentarias necesarias para que a lo largo del próximo ejercicio se pueda elevar hasta el 52 por ciento de la base reguladora de las pensiones de viudedad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cambra.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Vallines.

El señor VALLINES DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Tampoco en este caso se financia, tampoco se dota presupuestariamente y, como bien se sabe, en el Acuerdo para el Desarrollo de la Seguridad Social se estableció que se pasara del 45 por ciento al 52. El año pasado ya se subió del 45 al 46 de la base reguladora y la intención, en cumplimiento del Acuerdo citado, es que para años sucesivos se siga incrementando; este año no se ha producido, pero el compromiso sigue. En cualquier caso, el 70 por ciento está incluido, estamos hablando de una masa de cerca del 30 por ciento de los afectados.

En todo caso ratifico que, aunque este año no ha sido posible encajarlo, para el futuro en los próximos ejercicios el compromiso del Gobierno es llegar a ese acuerdo del 52 por ciento en el plazo de 4 años que era lo que se había acordado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Vallines.

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Pasamos al Anexo VII. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que es la número 1316.

Para su defensa, el senador Mesa tiene la palabra.

El señor MESA CIRIZA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente dado lo avanzado de la hora de este debate. Voy a defender la enmienda número 1316 al Anexo VII relativo a remanentes de créditos incorporables en el ejercicio 2003. Con esta enmienda pretendemos añadir un párrafo para que esos remanentes que se recojan puedan incorporarse a los créditos del ejercicio, concretamente los procedentes de créditos comprometidos por operaciones no financieras correspondientes a inversiones de

modernización y sostenimiento de las Fuerzas Armadas. Pretendemos mantener los criterios de presupuestos anteriores, dadas las especiales características de las inversiones para modernización y sostenimiento de las Fuerzas Armadas.

Si me permite, señor presidente, ya que estoy en el uso de la palabra voy a defender también la enmienda 1317 al Anexo VIII, con la que pretendemos en el Grupo I, relativo a los bienes singulares declarados patrimonio de la humanidad a los efectos de aplicación de la disposición adicional décima de esta ley, añadir a continuación de Canarias y del Parque Nacional de Garajonay, Gomera, Conjunto Histórico de San Cristóbal de La Laguna en la isla de Tenerife, puesto que la UNESCO en el año 1999 adoptó la decisión de la inscripción como bien cultural en la lista del Patrimonio de la Humanidad al conjunto histórico de San Cristóbal de La Laguna, como reconocimiento de un tipo de arquitectura representativa de un parcelario urbano colonial anticipo de las arquitecturas urbanas características en el continente americano.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Vallines.

El señor VALLINES DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Debo reconocer que parecen razonables los argumentos, pero tengo que indicar que por algún descontrol interno nuestro carezco de esa información. En todo caso naturalmente mantenemos el texto del Gobierno y, por tanto, rechazamos las enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Pasamos al Anexo VIII que tiene la enmienda 1317 del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido dada por defendida. Me imagino que también se dará por efectuado el turno en contra. (Asentimiento.)

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Para finalizar Anexo IX, en el que hay una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la número 1696.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Hace referencia a una importante instalación científica y de apoyo a la investigación desarrollada en el Vallès que es el Sincrotrón. El Grupo Parlamentario Popular ha introducido en ponencia una enmienda a la Sección 20 dotándole de una cantidad, porque creemos que es una gran instalación científica susceptible de ser incluida en otros programas prioritarios de mecenazgo, y esto es lo que solicitamos con esta enmienda al Anexo IX.

Disposición
Final
nueva

Anexo VII

Anexo VIII

Anexo IX

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Cambra.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Vallines.

El señor VALLINES DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Es evidente que el proyecto se financiará de forma conjunta entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Ge-

neralitat, y por eso el Grupo Popular presentó una enmienda. Por tanto, mantenemos la enmienda del Grupo Popular y rechazamos la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Vallines.

¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las veintitrés horas y treinta y cinco minutos.